

Cámara de Senadores²⁰ del Congreso de la Unión



Año PRIMERO PRIMER Período ORDINARIO

Comisión ES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

16 OCTUBRE 2012.- LA MESA DIRECTIVA ACORDO RECTIFICAR EL TURNO:
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION

6 SEPTIEMBRE Año 20 12.
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Num. 171

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.

SEN. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, A NOMBRE DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD.

*tns.

Fojas 61

12 SEP 2012

*En su oportunidad se turnará a las
Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios
Legislativos, Segunda* 21

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CÁMARA DE SENADORES
H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Senador de la República a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de la Cámara Senadores la presente **Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del artículo 6º; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral II inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho de acceso a la información en México tiene su origen en la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1977, cuando, en el marco de la "reforma política", se adicionó la frase "*el derecho a la información será garantizado por el Estado*"¹. Esta reforma dio lugar a una serie de

¹ Guerra Ford, Oscar M., Los Órganos Garantes de Transparencia, UNAM, México, 2011, p. 3.

interpretaciones con respecto a su titularidad y protección como una garantía política, un derecho social, una garantía individual o como un derecho humano.

De esta manera, se incorporó en la agenda democrática el derecho de acceso a la información pública, el cual se ha constituido como un elemento determinante para la construcción de un sistema democrático en el que las personas pueden conocer el quehacer, las decisiones y los recursos que erogan sus autoridades.

Fue hasta el año 2002 en que surgen leyes de transparencia en los estados de Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Michoacán y Querétaro, y, a su vez, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Estas primeras leyes, al regular el acceso a la información pública, reconocieron el carácter público de la información en posesión de los entes de gobierno y garantizaron su accesibilidad para cualquier persona, al establecer mecanismos e instancias ante las cuales se podía ejercer este derecho de acceso a la información. Estas leyes dieron la pauta para que, de manera paulatina, el resto de los estados emitiera sus respectivas leyes de transparencia.

La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes estatales fue uno de los primeros pasos trascendentales para la construcción de la democracia participativa en México, al poner en manos de las personas información, datos, cifras y documentos que influyen en su toma de decisiones y que les permite potencializar el ejercicio de otros derechos; sin embargo, la falta de homogeneidad en su contenido se convirtió en un gran obstáculo para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información.

Ante tal disparidad normativa, como alternativa de solución, se aprobó la adición de un párrafo segundo al artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establecen los principios y bases que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo el país. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007; este hecho significó un parteaguas en el tema de transparencia y acceso a la información pública en México, puesto que incorporó los aspectos mínimos que deben contener todas las leyes que en la materia se expidan a nivel nacional, entre los que se encuentran: publicidad de la información de los distintos órganos de gobierno de la federación, los estados y el Distrito Federal; la integración y naturaleza de los órganos responsables en materia de

acceso a la información; así como los procedimientos de acceso a la información y los medios de impugnación; el principio de máxima publicidad; restricciones al acceso a la información; rendición de cuentas; gratuidad de la información y protección de datos personales.

A la fecha, la ley federal y las 32 leyes locales han adecuado su contenido para incorporar los principios rectores delineados en el artículo 6° constitucional. No obstante, la diversidad en la interpretación y aplicación de dichos principios mantiene la dispersión y heterogeneidad normativa en la materia.

Lo anterior hace evidente la necesidad de avanzar en la emisión de criterios uniformes en los diversos órdenes de gobierno, que definan los alcances y directrices de los principios rectores de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, partido político, órgano y organismo, fideicomisos y fondos públicos, así como de personas que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Esto hará posible la conformación de un derecho unificado, tutelado e igual para todos, garantizando el mismo deber para cualquier esfera de gobierno o poder público, sin que varíe la normatividad, procedimientos, sujetos obligados y las atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra, a fin de lograr una adecuada armonización para el ejercicio pleno de este derecho en toda la República.

En ese sentido, es indispensable delinear un diseño institucional y procesal que unifique las características de los órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, para evitar la heterogeneidad, aumentar la eficacia institucional y preservar el pacto federal.

En primera instancia, es necesario definir cuáles son los sujetos obligados al mandato previsto en el párrafo segundo del artículo 6° constitucional. La fracción I del artículo referido establece el principio de publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, con lo que el Constituyente rompió la concepción patrimonialista de la información, señalando que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público. Sin embargo, el principio de publicidad no sólo debe aplicar para las instituciones de gobierno, toda vez que la transparencia y rendición de cuentas se extiende a todas aquellas personas que reciben y ejercen recursos públicos, que deben ser objeto de comprobación, así como a

las personas que ejercen actos de autoridad y que tienen incidencia en la esfera jurídica de los titulares de este derecho.

Por lo anterior, se sugiere reformar el artículo 6º, segundo párrafo, fracción I, a fin de plantear que toda la información en posesión de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, es pública al igual que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, así como los órganos denominados autónomos.

Por otra parte, se deben fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y de datos personales. Si bien estos órganos cuentan con autonomía operativa, de gestión y de decisión, conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario unificar sus características a fin de incrementar su eficiencia institucional para garantizar plenamente los derechos que tutelan. Por lo que, en principio, es indispensable dotarlos de autonomía constitucional.

En los últimos años se han incorporado órganos autónomos constitucionales al sistema jurídico mexicano (como el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos), cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Estas instituciones desempeñan funciones estatales, con la consigna de especializarse en determinada materia y atender, de manera eficaz, ágil y transparente, las demandas sociales, sin que con ello se altere el esquema de división de poderes² y sin atender a intereses partidistas o situaciones coyunturales, con estricto apego a la legalidad³. En este sentido, la autonomía representa una "vía para conciliar la democracia de los partidos, de los poderes tradicionales y grupos económicos y sociales, en busca de un equilibrio constitucional"⁴.

En tal contexto, los órganos referidos guardan autonomía e independencia respecto de los Poderes de la Unión, dado que su misión principal radica en atender necesidades

² Ugalde Calderón, Filiberto Valentín, "Órganos Constitucionales Autónomos", *Revista del Instituto de la Judicatura Federal*, Núm. 29, México, 2010, p. 263

³ *Ibidem*, pp. 256-257

⁴ *Ibidem*, 256

torales tanto del Estado como de la sociedad en general. Esto los coloca a la par de los órganos tradicionales, pero con el encargo de atender temas específicos que integran principios derivados de los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano forma parte. Es así que esta reforma constitucional se inscribe dentro del proceso de adecuación normativa que permite dar pleno reconocimiento y cumplimiento a la obligación de incorporar a nuestro sistema normativo los elementos necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que *los Estados de la República no están obligados a establecer, como órganos de poder, únicamente a los señalados en la Ley Suprema (en su artículo 41), puesto que en uso de la libertad soberana de que gozan en su régimen interior pueden, según sus necesidades, crear cuantos órganos consideren indispensables para su desarrollo, así como para atribuirles facultades y consignar las limitaciones pertinentes, siempre y cuando no contravengan las estipulaciones del Pacto Federal.*⁵

De acuerdo con las tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación⁶, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son:

1. Estar establecidos y configurados de manera expresa en la Constitución.
2. Mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación.
3. Contar con autonomía e independencia funcional y financiera.
4. Atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Al respecto, Jaime Cárdenas señala que este tipo de órganos "son creados inmediatamente y fundamentalmente en la constitución y que no se adscriben a los

⁵ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES. PUEDEN ESTABLECERSE EN LOS RÉGIMENES LOCALES. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Febrero de 2008; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 13/2008; Página: 1870

⁶ ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J. 20/2007; Página: 1647.

poderes tradicionales del Estado”⁷. Miguel Carbonell refiere que “se puede decir que los órganos constitucionales autónomos a) son creados de forma directa por el texto constitucional; b) cuentan con una esfera de atribuciones constitucionalmente determinada, lo cual constituye una garantía institucional que hace que tal esfera no esté disponible para el legislador ordinario (...); c) llevan a cabo funciones esenciales dentro de los estados modernos y d) si bien no se encuentran orgánicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a ningún otro órgano o poder, sus resoluciones –a menos que se traté de órganos límite, como lo puede ser un tribunal constitucional- son revisables según lo establezca la constitución de cada país (...)”⁸.

Por todo lo anterior, consideramos que los órganos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales deben ser incorporados de manera expresa en la Constitución Federal, así como en las constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para dotarlos de autonomía constitucional, con lo que se les legitimaría plenamente y se constituirían como órganos imparciales, que no respondan a consignas directas o indirectas de otras autoridades, dado que no dependerían de ninguna de ellas, garantizando así una actuación profesional y objetiva, siempre apegada a la legalidad, y favoreciendo la vida democrática del país, por tratarse de órganos especializados que cuentan con el conocimiento necesario para valorar adecuadamente los casos que se presenten.

Cabe destacar que distintas entidades federativas han dado un paso adicional en el tema de transparencia y acceso a la información, al fortalecer sus órganos garantes desde su constitución local.

Para dotarlos de autonomía constitucional se sugiere precisar en la fracción IV del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión se sustanciarán ante órganos especializados e imparciales, con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, los cuales deberán ser incorporados de manera explícita en la Constitución Federal, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

⁷ Cárdenas Gracia, Jaime, *Una constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional*, UNAM, México, 1996, p. 244.

⁸ Carbonell, Miguel, *Elementos de Derecho Constitucional*, Fontamara, México, 2008, p. 105.

La autonomía constitucional a los órganos garantes los facultará para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, exclusivamente respecto de disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

En el contexto de las propuestas de reforma planteada en los párrafos precedentes, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 6º constitucional, en el cual el Congreso de la Unión instituya expresamente un organismo denominado Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos.

Con relación a los estados de la República, se debe adicionar una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establezca la obligación de que las constituciones de las entidades federativas deberán prever la existencia de órganos autónomos garantes del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Por lo que hace al Distrito Federal, se propone adicionar al artículo 122, punto C, una BASE SEXTA en la que se establezca la inclusión de un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, emitido por el Congreso de la Unión.

Es importante destacar que la incorporación de los órganos garantes en las constituciones y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal no implica la desaparición de los órganos existentes, por el contrario, busca su fortalecimiento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituiría al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos como órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales a nivel federal; por lo tanto, es necesario advertir que el actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos está constituido como un organismo descentralizado no sectorizado de la Administración Pública Federal, de modo que su competencia se restringe al ámbito del Ejecutivo Federal, lo que se configura como su principal debilidad. Esto, en la práctica, reduce el principio de imparcialidad para obtener información pública.

No se debe perder de vista que para los Poderes Legislativo y Judicial, así como para los organismos constitucionales autónomos, se determinó que cada uno debe contar con una instancia interna responsable de aplicar la ley, resolver los recursos, y las demás facultades que le otorga la propia normatividad, por lo cual juegan un doble papel en la controversias que se suscitan con los particulares, al constituirse como juez y parte en los procedimientos que conoce. Esta situación incide en las decisiones de dichas instancias, dado que están subordinadas a los titulares de los poderes y los órganos autónomos, lo que dista de lo señalado en el mandato constitucional, al no constituirse como órganos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

Debido a lo anterior, es necesario el rediseño del órgano garante federal para que cuente con autonomía constitucional, independiente del Ejecutivo Federal, que tenga competencia sobre los poderes federales y demás órganos autónomos, exceptuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, teniendo en cuenta que los órganos garantes se crean como mecanismos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no son emitidos por acontecimientos mediáticos, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.

Al dotar de autonomía constitucional al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos se cumple a cabalidad el mandato constitucional previsto en el artículo 1º de nuestra Constitución, conforme al cual las *"...autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley"*; toda vez que, con ello, se promueve el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

Para la creación del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, se propone que el Congreso de la Unión adicione al artículo 6º constitucional el siguiente diseño institucional:

1. El Consejo contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios; y se regirá por la ley federal

que emita el Congreso de la Unión, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública.

2. El Consejo será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación), así como de los órganos autónomos, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal.
3. El Consejo resolverá los procedimientos que se interpongan en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier sujeto obligado federal que violenten el derecho de acceso a la información pública, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha excepción se plantea considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Supremo y dada su función como máximo intérprete de la Constitución; por lo tanto, debe reconocerse que no es posible generar un esquema que dé lugar a la revisión de sus determinaciones. En esas condiciones, es el único órgano cuyas resoluciones en materia de acceso a la información y datos personales no deben estar sujetas a la revisión del Consejo. Por lo que se constituye en la única instancia especializada que a su interior continuará resolviendo los recursos de revisión que le sean presentados, con apego a las disposiciones previstas en la ley general en la materia que se emita.

4. Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e inatacables para los sujetos obligados y sólo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información y de datos personales al verse agraviados por la decisión que se tome en el recurso de revisión, toda vez que, en nuestro diseño constitucional, la tutela de los derechos fundamentales se encuentra garantizada a través de mecanismos jurisdiccionales, de manera que el artículo 103 de la Constitución establece que corresponde a los tribunales federales (a través del amparo) resolver las controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su

protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano.

En consecuencia, se elimina la posibilidad de que los sujetos obligados promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación o cualquier otra instancia, con lo que se evita la dilación del procedimiento, por lo que deben dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo al resolver recursos de revisión.

5. El Consejo será competente para conocer las inconformidades que presenten los particulares en contra de las resoluciones emitidas por los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, y tendrá la facultad de emitir una nueva resolución vinculatoria para los órganos garantes, en la que se pronunciará sobre el fondo del asunto.
6. La obligación de la Cámara de Diputados de garantizar que el Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de sus actividades. Esto tiene especial relevancia, toda vez que la Enciclopedia Jurídica, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la "independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de la ausencia de controles burocráticos, sino también con la existencia de cierta autonomía financiera o garantía económica a favor del órgano constitucional; de otra forma la independencia orgánica podría verse fácilmente vulnerada a través de la asfixia en el suministro de recursos económicos".
7. El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete consejeros ciudadanos que serán designados de manera escalonada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma y términos que determine la ley federal.

Esta integración garantizará que las resoluciones o decisiones colegiadas que se adopten sean emitidas con el mayor apego a la ley, la máxima publicidad, imparcialidad y apegados a los principios que rigen su actuar, puesto que la diversidad de opinión y pensamiento permitirá que la interpretación y aplicación de la ley cumpla con el principio *pro homine* consagrado en el artículo 1º constitucional. Asimismo, se elimina la posibilidad de un empate al someter a votación sus decisiones. Además, las nuevas responsabilidades y funciones que

se encomendarán al órgano garante federal, como segunda instancia en el ejercicio del derecho de acceso a la información, hacen necesario incrementar el número de consejeros para una mejor distribución de las cargas de trabajo.

8. Para la designación de los consejeros se permitirá que los comisionados del actual órgano garante federal participen en el proceso de selección, sin mayores requisitos de los que debieron cubrir para su designación actual. Esto en atención a la garantía de irretroactividad.
9. En la designación de los consejeros ciudadanos se favorecerá la equidad de género.
10. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección.

El periodo a que se hace referencia encuentra sustento en la actividad que desarrolla el propio Instituto, pues es uno de los pilares del marco jurídico nacional, al garantizar el derecho de acceder a la información en poder de los sujetos obligados. Ello conlleva a hacer efectiva la especialización y el profesionalismo de las personas que ocuparán el cargo, lo cual fortalecerá, en todo caso, la labor encomendada al Consejo.

11. Los procedimientos de designación de los consejeros ciudadanos se determinará en la ley federal que emita el Congreso de la Unión, y sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución.
12. El Pleno del Consejo será presidido por uno de los siete consejeros ciudadanos, quien será designado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses y podrá ser reelecto por una sola vez.
13. Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
14. El Consejo, a través de su presidente, presentará anualmente al Congreso de la Unión un informe de actividades. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley federal.

15. Las violaciones al derecho de acceso a la información y datos personales en posesión de cualquier sujeto obligado serán sancionadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado.

Por otra parte, los recursos financieros, materiales y humanos del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deberán ser transferidos al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, creado en los términos de esta reforma. Los trabajadores de ninguna manera resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Asimismo, se propone adicionar el inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución, en el cual se determine que el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos podrá interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales consagrados en los artículos 6° y 16 de la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Cabe hacer mención que, en el mismo sentido, los órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales equivalentes en los estados de la República deberán tener facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por lo que hace a la responsabilidad en que puedan incurrir los consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, éstos podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés público, como es el caso concreto de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas emanen.

La propuesta que se presenta implica que se confiera una nueva facultad a la Cámara de Senadores para elegir a los consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, por lo que se debe reformar la fracción XII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa de reforma al artículo 6° constitucional también comprende la inclusión de un tercer párrafo que se refiere a la creación de una ley general en materia de acceso a la información pública, cuyo objetivo sería homogenizar el contenido de la normatividad que rige el acceso a la información pública en el país. En esta ley general se armonizará la interpretación y alcance de los principios y bases establecidos en el párrafo segundo del citado artículo de la Constitución, lo que permitirá transitar sobre un piso firme en todo el país, al tratarse de un derecho igual para todos.

En dicho instrumento se determinará un diseño institucional que permitirá garantizar a las personas su derecho de acceso a la información pública y elevar las expectativas de la gestión pública, promoviendo la corresponsabilidad de los actos públicos a través de la participación ciudadana. Lo anterior, al establecer parámetros iguales para todos los niveles de gobierno.

La creación de esta ley general en la materia representa una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia.

Con este marco general, se busca:

1. Homologar:

- a. Los mecanismos de acceso a la información.
- b. Los medios de impugnación.
- c. El plazo de cumplimiento de las resoluciones.
- d. La temporalidad de la reserva de información.
- e. Los supuestos de restricción a la información pública (causales de reserva y confidencialidad).

- f. El catálogo de información pública de oficio que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los sujetos obligados.
2. Establecer obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados.
3. Delinear obligaciones generales que deben cumplimentar los sujetos obligados como son:
 - a. La evaluación del cumplimiento a las leyes de acceso a la información pública de la federación, los estados y el Distrito Federal.
 - b. La capacitación de servidores públicos.
 - c. La promoción del derecho de acceso a la información entre los habitantes del país.
 - d. Las acciones de vinculación con la sociedad.
4. Establecer políticas de incentivos, entre otros aspectos.

Por lo anterior, se propone facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de acceso a la información pública, por lo tanto, será necesario adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional.

En este sentido, el Congreso de la Unión contará con un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Decreto de reforma aprobado, conforme al artículo Segundo Transitorio que se propone.

Finalmente, por lo que hace a los datos personales en posesión de los distintos sujetos obligados del ámbito federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, se considera que sean los mismos órganos garantes del derecho de acceso a la información los competentes para conocer de la protección de este derecho. Tal prerrogativa quedará sujeta a lo previsto en la ley general en materia de protección de datos personales, a la cual se ajustarán las leyes que emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, a fin de que no exista disparidad en su regulación e interpretación, toda vez que se trata de un mismo derecho.

Para el ejercicio de los derechos relativos a la protección de datos personales en posesión de particulares, se deberá crear un organismo especializado que conozca del tema.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prever que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de éstos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fijen la ley general en materia de protección de datos personales y las leyes que emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, las cuales establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

Tal reforma confiere una nueva facultad al Congreso de la Unión, que es la emisión de una ley general en materia de protección de datos personales, por lo que resulta necesario adicionar una fracción XXIX-S al artículo 73 constitucional. De conformidad con el artículo Segundo Transitorio, el Congreso contará con un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Decreto, para publicar la ley general en materia de protección de datos personales.

Por otro lado, se deberán emitir o modificar las leyes federal, estatales y del Distrito Federal, para ajustar su contenido a lo previsto en la ley general en materia de protección de datos personales.

En el caso de los partidos políticos, la mayoría de las leyes de las entidades federativas los considera sujetos obligados directos⁹, dado que los particulares pueden solicitar información pública de manera directa a los propios institutos políticos. A nivel federal y en nueve estados de la República¹⁰, la información de los partidos se puede conseguir a través de los órganos electorales, por lo cual, se consideran sujetos obligados indirectos. Por último, en seis estados¹¹ no se puede acceder a la información que obra en los archivos de los partidos; únicamente se puede conocer la documentación que

⁹ Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

¹⁰ Aguascalientes, Baja California, Campeche, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Nuevo León y Sonora.

¹¹ Chiapas, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

entregan a los órganos electorales, los cuales tienen la obligación de hacerla pública, dado que pasan a formar parte de sus archivos institucionales.

Ante tal escenario, es importante homogeneizar su condición de sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.

Además, los partidos políticos representan la mayor parte de las tendencias ideológicas de la sociedad mexicana, lo que coadyuva a la construcción de una democracia participativa que permite la consolidación de un Estado democrático, representativo y federal, en términos del artículo 40 de la Constitución.

Por lo anterior, se propone incluirlos de manera expresa como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6° constitucional.

Por otro lado, la inclusión de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos en la fracción I del artículo 6° constitucional, tiene la finalidad de garantizar la transparencia del ejercicio de estos recursos. Por lo tanto, las leyes en la materia deberán prever los procedimientos y mecanismos para acceder a la información pública en posesión de estas personas.

La relevancia de transparentar la actuación de quienes realizan actos de autoridad, radica en el impacto que tienen sus decisiones en la esfera jurídica de los particulares.

Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales estaría transitando a una nueva etapa que facilita la relación entre los titulares de ambos derechos y las autoridades de los distintos órganos de gobierno.

En síntesis, la iniciativa de reforma supone una política plenamente comprometida con la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Por lo antes expuesto y fundado, se propone reformar y adicionar los artículos 6°, 16, 29, 73, 76, 105, 110, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y por ello se somete a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del artículo 6°; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral II inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6o. ...

...

I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo *de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal*, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II a III. ...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante *órganos* especializados e imparciales, y con autonomía operativa, *presupuestaria*, de gestión y de decisión *por lo que la Constitución Federal, las de los Estados y el Estatuto de*

Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de dichos órganos.

V. a VII. ...

El Congreso de la Unión establecerá un órgano que se denominará Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, que contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Este órgano se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

El Consejo será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales; emitir recomendaciones y apercibimientos; y para resolver los procedimientos que se interpongan en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, que violenten el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Consejo estará facultado para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados señalados en la fracción I de este artículo.

Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e inatacables para la autoridad, entidad, órgano y organismo de los

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los órganos garantes referidos en la fracción IV de este artículo. Sólo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales.

La Cámara de Diputados garantizará que el Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de sus actividades.

El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete consejeros ciudadanos, que serán designados por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma, términos y procedimiento que determine la ley federal, favoreciéndose la equidad de género y el relevo escalonado de sus integrantes. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

El Consejo será presidido por uno de los siete consejeros, el cual será designado por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses y podrá ser reelecto por una sola vez.

Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán tener ningún otro empleo cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Consejo, a través de su presidente, presentará un informe anual de actividades al Congreso de la Unión. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley federal.

Las violaciones a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que tenga conocimiento el Consejo en el ejercicio de sus funciones, serán sancionadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan y de los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado.

Artículo 16. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos **que fijan la ley general, la ley federal y las leyes de los estados y el Distrito Federal, las cuales establecerán los supuestos** de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 29...

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; ***el derecho de acceso a la información; los derechos de protección de datos personales***; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

...

...

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a XXIX-Q...

XXIX-R. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de acceso a la información pública.

XXIX-S. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de protección de datos personales.

XXX....

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. a XI. ...

XII. Designar a los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I....

II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

a) a g) ...

h) El Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales consagrados en los artículos 6° y 16 de esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, los órganos garantes de acceso a la información pública y de protección de datos personales equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...

...

...

III.

...

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General

43

de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, ***los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos***, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

...

...

...

...

...

Título Quinto

De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 116. ...

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

I a VII. ...

...

VIII. Las constituciones y leyes de los estados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, en el ámbito de su competencia, garantizarán la creación de órganos de acceso a la información pública y protección de datos personales con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión,

personalidad jurídica y patrimonio propio en términos del artículo 6º de esta Constitución.

Las legislaciones que sobre la materia emitan las entidades federativas deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 6º, segundo párrafo de la presente Constitución y en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. ...

B. ...

C. ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

...

V. ...

a) a o) ...

p) Nombrar a los Comisionados Ciudadanos del órgano garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales del Distrito Federal, conforme al procedimiento previsto en la ley;

q) Expedir las leyes que garanticen el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal, las cuales deberán

ajustarse a lo previsto en las leyes generales de acceso a la información pública y protección de datos personales que emita el Congreso de la Unión.

r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...

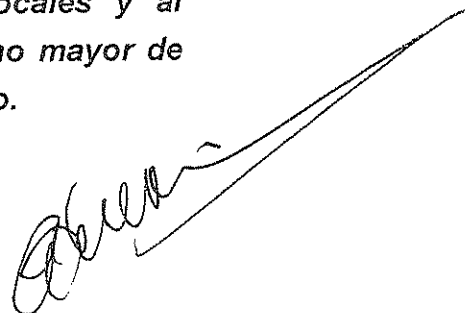
BASE SEXTA.- Existirá un órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, que tendrá autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el Distrito Federal. Este órgano se regirá por la ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá adecuar las leyes generales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

TERCERO. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.



CUARTO. *La Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales o, en su caso, realizar las modificaciones necesarias a sus actuales leyes, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de las leyes generales a que hacen referencia los artículos 6° y 16 de esta Constitución.*

QUINTO. *El Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos iniciará funciones a partir de la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información.*

SEXTO. *La designación de los consejeros ciudadanos del órgano garante federal, deberá tener lugar dentro de los sesenta días naturales a la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información. En este proceso, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos podrán participar en la convocatoria para la designación de consejeros ciudadanos.*

SÉPTIMO (opción 1). *Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.*

SÉPTIMO (opción 2). *Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.*

47

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se transferirán al órgano creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

DÉCIMO. El Congreso de la Unión creará un organismo para la difusión, protección y vigilancia de los derechos de protección, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de particulares.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil doce.

ATENTAMENTE.



SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ

11 SEP 2012

Se remite a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales y de Estudios
Legislativos, Segunda

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2012

Senador Ernesto Cordero Arroyo
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente

Me dirijo a usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores la siguiente fe de erratas sobre el Transitorio Séptimo de la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, presentada por el **Senador Alejandro Encinas Rodríguez** en la sesión del pasado 6 de septiembre, para efecto de que sea informada a las comisiones de turno correspondientes:

Dice:

SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros

29
48
para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.

Debe decir:

SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

Atentamente



Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez



ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA



30

50

México, Distrito Federal, a 10 de septiembre de 2012

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
P R E S E N T E .

Me dirijo a usted para solicitarle sea considerada en el apartado de Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores la siguiente fe de erratas sobre el Transitorio Séptimo de la **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**, presentada por el **Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez** en la sesión del pasado 6 de septiembre, para efecto de que sea informada a las comisiones de turno correspondientes:

Dice:

SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el



ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA



periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.

Debe decir:

SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

ATENTAMENTE.

SENADOR ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

82



Año PRIMERO PRIMER Período ORDINARIO

Comisión ES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, PRIMERA.

13 SEPTIEMBRE Año 20 12.

Num. 235

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTICULOS 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA.

GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI Y PVEM.

*tns.

Fojas 80



13 SEP 2012

*Se turnó a las Comisiones Unidas
de Puntos Constitucionales, de
Anticorrupción y Participación Ciudadana,
y de Estudios Legislativos, Primera.
83*

4
**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE
PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA.**

Las senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción I; 163 y 164 del Reglamento del Senado de la República, presentamos a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de Decreto con arreglo a la siguiente:

Exposición de motivos

I. Introducción

El derecho de acceso a la información gubernamental y la transparencia son elementos fundamentales para hacer realidad la rendición de cuentas de los gobernantes.

Por rendición de cuentas entendemos "la obligación de los funcionarios de responder por lo que hacen y la que atañe al poder de los ciudadanos para sancionar los resultados de la gestión en caso de que hayan violado sus deberes públicos."¹ De manera más amplia, se ha dicho que "la noción de rendición de

¹ Aguilar Rivera, José Antonio. *Transparencia y democracia: claves para un concierto*. IFAI, México, 2008, pág. 29 (Cuadernos de Transparencia # 10).



81

cuentas tiene dos dimensiones básicas. Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público...Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos...."²

En este sentido, sostenemos que "no basta el compromiso ético de los funcionarios con la rendición de cuentas, sino que es necesaria la construcción de reglas del juego que auspicien y garanticen el proceso de apertura de la información y la garantía de que, efectivamente, se cumplan. Pero también es indispensable, del otro lado, que los ciudadanos no solamente obtengan el derecho de acceder a la información, sino que además la utilicen cada vez más para fortalecer las vías de participación y el control democrático del poder."³

Al ser el insumo indispensable para la rendición de cuentas, el derecho de acceso a la información y la transparencia tienen una doble función. Otorgan información a los ciudadanos y a su vez desincentivan la realización de actos inapropiados por parte de los servidores públicos. Por lo demás, a través de la transparencia y el acceso a la información pública, se facilita la evaluación y revisión —y posterior corrección, cuando resulte necesario— de aquellos programas o políticas públicas ineficaces.

Es importante destacar, como se ha señalado desde la academia y la sociedad civil, que la información es un componente básico de la rendición de cuentas, aunque no la agota. En efecto, sin información no hay rendición de

² Schedler, Andreas. *¿Qué es la rendición de cuentas?* IFAI, México, 2004, pág. 12 (cuadernos de Transparencia # 3)

³ Merino, Mauricio. "Introducción", en Merino, Mauricio (Coord.). *Transparencia: libros, autores e ideas*. IFAI/CIDE, México, 2005.



cuentas posible, pero la información por sí sola no implica una cabal rendición de cuentas pues no conlleva la sanción correspondiente⁴.

De esta forma, estamos convencidos, al igual que el Presidente electo de la República, que:

Una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de cuentas veraces y oportunos por parte de todo el sistema político. Sin ellos, difícilmente podemos brindar a nuestro régimen democrático condiciones de mayor confianza, modernidad, eficiencia y eficacia en su actuar frente a los ciudadanos.

Una sociedad mejor informada, con fácil acceso a publicaciones y resultados de los distintos órdenes y poderes de gobierno, con mecanismos para dialogar, evaluar e incidir en la gestión pública, apoyará y participará con mayor interés en las propuestas que enriquezcan el andamiaje democrático y social del país. Esto se puede lograr fortaleciendo la transparencia, la fiscalización y la evaluación rigurosa del ejercicio público, mismo que contribuyen a la efectiva rendición de cuentas del sistema político a la ciudadanía.

Un Estado, para ser eficaz, también necesita generar y facilitar el acceso a la información de calidad. Ello porque es un insumo fundamental para el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación de los resultados de las políticas públicas.⁵

En esta lógica se inscribe la propuesta de los los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores, para dotar de autonomía y modernizar el funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

⁴ Merino, Mauricio, Sergio López Ayllón y Guillermo Cejudo (coords.). *La estructura de la rendición de cuentas en México*. UNAM-CIDE, México, 2010, *passim*.

⁵ Peña Nieto, Enrique. *México, la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados*. México, Editorial Grijalbo, 2011, pág. 53.



86

II. Antecedentes

En la segunda mitad del siglo XX, tuvo lugar un movimiento sin precedentes en favor de la transparencia, la armonización, el acceso a la información, la rendición de cuentas y los gobiernos abiertos en todo el mundo.

En México, encontramos los primeros antecedentes en el manejo de información a través de la Dirección General de Estadística que funcionó desde 1882. La necesidad de avanzar en mecanismos para conocer la información pública del ejercicio de gobierno y la armonización de la misma, se hizo patente en la Primera Convención Hacendaria de 1924, desarrollandose en las décadas siguientes derivando en la creación de la Dirección General de Geografía en 1968, el Fondo de Información y Documentación para la Industria (Infotec) en 1974 y el Insitituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en 1983.

El Derecho de Acceso a la Información en México tiene su origen en 1977, con la reforma al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada dentro del proceso de reforma política. En dicho precepto se incluyó lo siguiente: "*el derecho a la información será garantizado por el Estado.*"

Posteriormente, tuvo lugar la reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales (que garantizan el principio de Rectoría del Estado y la creación de un Sistema Nacional de Planeación Democrática); la creación de la Secretaría de la Contraloría de la Federación, se profundizó con los Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADES) y las Contralorías Sociales.



87

El 11 de junio de 2002, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Como resultado se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Entre los años 2002 a 2007, las entidades federativas expidieron leyes equivalentes.

Así, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se establecieron las bases de publicidad y apertura de la información gubernamental a nivel federal; ello implicó que se generaran profundas transformaciones en el ámbito de la Administración Pública.

Con dicha Ley y con el nacimiento del IFAI, se dio un importante paso para el fortalecimiento de la democracia en México; se puso en manos de los ciudadanos prácticamente toda la información, documentos y datos en manos de Administración Pública Federal, con lo que se les facilita el ejercicio de otros derechos y se reconfigura la forma en que se relacionan con las autoridades.

A partir de su publicación, se ha ido avanzando en la ampliación y perfeccionamiento de la transparencia y el acceso a la información pública.

El 20 de julio de 2007 se publicó una reforma que adicionó un segundo párrafo con siete fracciones el artículo 6º constitucional. Se estableció el principio general de publicidad de la información gubernamental, el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de las autoridades. Esta reforma sentó las bases para una nueva política de transparencia gubernamental del Estado mexicano orientada a facilitar la rendición de cuentas de todas las autoridades en los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Se trató de lo que con acierto se ha llamado la "transparencia de

segunda generación" o la "segunda generación de reformas en materia de transparencia".

Dos años después, el 1 de julio de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 16 Constitucional que elevó a garantía constitucional el derecho a la protección de datos personales, el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos. En relación con esta reforma, también se adicionó el 30 de abril de 2009 la fracción XXIX-O del artículo 73 de la Carta Magna para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.

III. Justificación para dotar de autonomía al IFAI

En los últimos años, se ha avanzado considerablemente en materia de transparencia y acceso a la información pública. Sin embargo, los senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México consideramos que resulta fundamental fortalecer el ejercicio de estos derechos, dando pasos adicionales, como muestra de nuestro compromiso con una forma abierta y moderna de ejercer el poder público.

En consecuencia con nuestra postura modernizadora y de profundas convicciones democráticas, sostenemos que es prioritario dotar de plena autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Se trata de fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del IFAI para consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en todo país. De esa forma gana el IFAI, pero ganan sobre todo los ciudadanos, cuyo derecho fundamental de acceso a la información se verá

mejor resguardado. Y ganan los servidores públicos honestos, a los cuales la transparencia les permite hacer mejor su trabajo, bajo la mirada de cualquier persona.

Con el paso reformador que estamos proponiendo, queremos hacer irreversible su desempeño como órgano autónomo, ampliar su mandato para todos los poderes, organismos y entidades federales, y también asegurar su plena desvinculación orgánica con la administración pública para asegurar su efectiva vigilancia y la completa garantía de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los entes gubernamentales. Se trata sin duda de la vía más segura para garantizar el mandato constitucional de máxima publicidad.

La autonomía del IFAI se justifica en la medida que ella constituye un mecanismo para fortalecer los derechos de los ciudadanos pues el acceso a la información gubernamental se da en dos sentidos: el primero, que permite que la información pública fluya hacia abajo para que los gobernados tengan conocimiento de las acciones de sus representantes y las autoridades que los rigen, y así puedan evaluar y supervisar tales acciones como un mecanismo de control y rendición de cuentas; y el segundo que, precisamente, fluye hacia arriba, hacia los gobernantes, quienes a su vez, deberán profesionalizarse en sus funciones y rendir cuentas a los ciudadanos de una manera cada vez más natural y transparente.

Al respecto, el ilustre constitucionalista Jorge Carpizo ha sostenido que "convertir a los institutos de acceso a la información en órganos constitucionales autónomos con facultades suficientes para que cumplan con sus funciones (...) ayudaría en la lucha contra la corrupción, la impunidad, la secrecía de los asuntos



públicos, el desconocimiento por parte de la sociedad del manejo de la res pública, a la vez que fortalecería la transparencia de las cuestiones públicas.”⁶ Estamos convencidos de la gran verdad que encierran estas profundas palabras, escritas por uno de los más insignes constitucionalistas que ha dado la historia de nuestra nación.

Asimismo, el ejercicio del acceso a la información implica fortalecer al IFAI para asegurar que la información que se genera y suministra por todo el gobierno federal resulte efectivamente útil y significativa a la sociedad y redunde en una mayor capacidad de acción y de proposición por parte de todos los mexicanos. Los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información tienen la función de consolidar una cultura de la transparencia; su autonomía debe favorecer la apertura de los sistemas de gobierno y el contrapeso de poderes, característica de los países democráticos.

La autonomía constitucional del IFAI implica, en concreto, varias ventajas. Al ubicarse fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales, significa que el Instituto no se adscribe orgánicamente a ninguno de esos poderes: no forman parte de la administración pública (en ninguna de sus variables), ni del Poder Legislativo, ni tampoco del Judicial. Esta independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de la ausencia de controles burocráticos, sino también con la existencia de una cierta autonomía financiera o garantía económica a favor del órgano constitucional.

⁶ Carpizo, Jorge. “¿Se necesita una nueva Constitución en México? Algunas reflexiones y seis propuestas” en *Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional*, no. 24, enero-junio 2011, pp. 164-5.



91

Al no estar incorporado orgánicamente dentro de alguno de los tres poderes tradicionales, tiene una "paridad de rango" con los demás órganos y poderes, de tal forma que no se encuentra subordinado a ellos.

En este sentido, existe un precedente importante presentado por nuestro Grupo Parlamentario en el Senado en la LXI Legislatura. El 13 de septiembre de 2011, los Senadores Manlio Fabio Beltrones y Raúl Mejía González, a nombre de todo el Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa para reformar los artículos 6º y 105 constitucionales.

En esa iniciativa se argumentó que otorgar al IFAI un auténtico carácter de órgano de Estado era una condición necesaria para consolidar nuestra tradición democrática. Se dijo, asimismo que, atendiendo a la función que desempeña el IFAI era indispensable darle una autonomía plena de manera que no fuera más un órgano de la Administración Pública Federal. También se consideró que para consolidar la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos era necesario "hacer más público lo público en pro de la certidumbre de los ciudadanos quienes son los que ejercen el derecho" y "promover la transparencia proactiva entre los sujetos obligados con el propósito de que sean ellos mismos quienes pongan a disposición de los ciudadanos la información sobre los procesos y decisiones sustantivas, sin que forzosamente haya de por medio una solicitud de información" A esos dos propósitos contribuiría la autonomía del Instituto para hacer "factible cumplir mejor con ese propósito, fortaleciéndolo para enfrentar presiones y vencer resistencias en su tarea de transparentar al máximo la información pública". Finalmente se dijo que:

"...el hecho de cambiar la condición del IFAI de un órgano de la administración pública a la de un órgano constitucional autónomo

reside en que dejará de fungir como auxiliar de ésta, ampliando su margen de actuación en el desempeño de sus funciones en el ámbito federal hacia los tres Poderes de la Unión y los entes públicos federales; tendrá también la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad y; además, se apuntalarían los avances que jurídica y materialmente se han conseguido en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales”.

Nos interesa, a partir de la referencia que se acaba de anotar, poner de manifiesto que el objetivo de dotar de autonomía constitucional al IFAI se encuentra dentro de los propósitos del PRI anteriores al resultado electoral del año 2012. La congruencia de nuestro partido obliga a reconocer el trabajo que ya se ha hecho al interior de nuestra formación, en el entendido de que queremos seguir avanzando para demostrar que los legisladores del PRI, del PVEM y el próximo gobierno de la República tienen un firme compromiso para cumplir con sus promesas de campaña y estar a la altura de las demandas de los ciudadanos, claramente expresadas a lo largo de la campaña electoral.

IV. Derecho comparado

En las últimas dos décadas, hemos presenciado un movimiento sin precedentes en favor de la transparencia y los gobiernos abiertos en países de todos los continentes. De acuerdo con un estudio de Roger Vleugels, en octubre de 2011, 88 naciones alrededor del mundo contaban con una ley de acceso a la información y actualmente existen proyectos en vías de aprobación en distintas latitudes.

El derecho a la información es un derecho fundamental que ha ganado carta de naturalización a nivel internacional. En particular, se contempla en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 19); en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 19), y en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos de 1969 (artículos 10 y 13).

Posteriormente, en los años 80 y con la llegada de la tercer ola democrática, las nuevas constituciones incluyeron garantías específicas sobre el derecho a la información, a menudo acompañadas de leyes que regulan la vertiente de acceso a la información clarificando el contenido y alcance del derecho a saber de los ciudadanos.

El cambio hacia la apertura no necesariamente se dio primero en las viejas democracias, baste como ejemplo el caso del Reino Unido, el cual logró implementar su ley de libertad de información solo hasta 2005, después que México. Por su parte, los organismos internacionales como el Consejo de Europa y la Organización de Estados Americanos han elaborado guías y leyes modelo para promover mayor apertura y acceso a la información.

El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo, han implementado Políticas Internas de Acceso a la Información para legitimar su toma de decisiones, al tiempo que promueven en sus países miembros la adopción de marcos normativos *ad-hoc* como parte de los esfuerzos encaminados a incrementar la transparencia y reducir la corrupción.



74

Recientemente ha surgido un movimiento internacional por la creación de la Alianza por el Gobierno Abierto de la cual México forma parte. Dicho movimiento da un nuevo sentido y aliento hacia la transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos activos, echando mano de las nuevas tecnologías e involucrando a la sociedad civil.

La mera existencia de una ley de acceso a la información no siempre significa que el derecho estará garantizado. Lo anterior depende en gran medida, de los principios que orienten la regulación así como de un elemento fundamental: un diseño institucional adecuado para lograr eficiencia en la atención de las solicitudes presentadas. En ese sentido, muchos países -incluso organismos internacionales- han optado por instancias revisoras de la aplicación de sus políticas de transparencia⁷. La experiencia ha demostrado que estos organismos especializados e independientes son fundamentales para asegurar la aplicación de la norma frente a las resistencias que genera en las burocracias el ejercicio efectivo de este derecho.

Los países han adoptado diversos modelos de organismos garantes de acuerdo con el tipo de tradición jurídica y aparatos gubernamentales, por lo que existe gran variedad en su conformación y atribuciones. En particular, en Norteamérica contrasta la regulación canadiense, donde la autoridad responsable es unipersonal pero cuenta con un alto nivel de independencia e instrumentos sólidos para llevar a cabo sus funciones, mientras que en los Estados Unidos de América no existe una autoridad específica en la materia, sino que los tribunales judiciales ordinarios son los encargados de resolver tales cuestiones.

⁷ Tal es el caso de la Política de Acceso a la Información del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual establece la creación de un Panel de Revisión de las decisiones del Comité de Acceso a la Información, de modo que en segunda instancia un grupo de 3 expertos reconocidos a nivel internacional y con independencia, analice si la política se aplicó correctamente y si procede una mayor apertura.

Respecto a América Latina, si bien se han hecho esfuerzos para aprobar leyes de acceso a la información acompañados de órganos especializados como lo es el Consejo para la Transparencia de Chile, este no se ha generalizado, ya que en países como Perú y Panamá aún no se cuenta con autoridades garantes. El modelo mexicano, que establece un órgano garante colegiado, especializado y autónomo, es frecuentemente reconocido como un modelo a seguir.

V. Contenido de la reforma

A) El diseño general

Los legisladores que integramos los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que los ciudadanos exigen una forma de gobierno más eficaz y transparente, por ello nos comprometemos a profundizar en la transparencia y dotar al IFAI de competencia sobre el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las entidades federativas. Esta iniciativa retoma ese propósito, en el marco del respeto al Estado federal y la división de poderes.

1. Constituir un organismo garante con autonomía constitucional

Actualmente el IFAI es el órgano garante para la Administración Pública Federal en materia de acceso a la información y protección de datos personales, y en una autoridad federal tratándose de protección de datos personales en posesión de particulares.

Esta iniciativa propone que el IFAI quede constituido como el único organismo garante especializado, imparcial y autónomo en materia de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridades, entidad, órgano u organismo federal. Su mandato será



entonces la promoción, protección y cabal garantía de estos derechos en todos los Poderes Federales y en los organismos con autonomía constitucional.

Es importante destacar que el alcance de la competencia del organismo garante se desprende de la naturaleza del derecho de acceso a la información pública según ha sido definida en diversos instrumentos internacionales. Tal es el caso, por ejemplo, de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública que, al establecer el alcance de esa legislación modelo, señala que:

"3. La presente ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del Gobierno (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en todos los niveles de la estructura gubernamental interna (central o federal, regional, provincial o municipal); se aplica también a los órganos, organismos o entidades independientes o autónomos de propiedad del Gobierno o controlados por el mismo, bien actuando por facultades otorgadas por la Constitución o por otras leyes, y se aplica asimismo a las organizaciones privadas que reciben fondos o beneficios públicos sustanciales (directa o indirectamente) o que desempeñan funciones y servicios públicos, pero solamente con respecto a los fondos o beneficios públicos recibidos o a las funciones y servicios públicos desempeñados. Todos estos órganos deberán tener su información disponible de acuerdo con lo previsto en la presente Ley".⁸

En consecuencia con lo anterior, la naturaleza jurídica idónea para desempeñar una tarea que vincula a todos los Poderes del Estado es la de un organismo con autonomía constitucional. Ello porque una entidad dependiente de cualquiera de los poderes tradicionales del Estado vería limitada su capacidad de actuación frente a ellos. Por ello corresponderá a ese organismo resolver de los procedimientos de revisión que se interpongan contra las resoluciones que emitan cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal.

⁸ Aprobada en la cuarta sesión plenaria de la OEA, celebrada el 8 de junio de 2010.



Así, la reforma amplía la competencia del IFAI para resolver los recursos de revisión que, en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se presenten contra actos del Poder Ejecutivo, la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos con autonomía constitucional (Banco de México, Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía), los tribunales administrativos y cualquier otra entidad federal.

Desde esta perspectiva, la autonomía se constituye no sólo como garantía del derecho humano de acceso a la información, sino también de la institucionalidad del Estado mexicano. La labor del organismo garante no compromete a los poderes tradicionales y mucho menos permite prestarse a interpretaciones de índole política o partidista, sino que establece un marco institucional en que todos los Poderes del Estado y sus organismos con autonomía constitucional se sujetan a la misma disciplina y mecanismos de garantías para un derecho fundamental central para consolidar, fortalecer y ampliar la democracia mexicana y avanzar en una mejor rendición de cuentas.

El IFAI no restaría las competencias de los poderes judicial y legislativo, así como de los órganos constitucionales autónomos, ya que únicamente tendría la facultad de revisar las decisiones que sus respectivos comités de acceso a la información tomen en el sentido de acceder o no a un documento, sin afectar las competencias materiales que correspondan a cada uno.

2. Fideicomisos públicos y partidos políticos

Una discusión relevante en la agenda pública es el lugar que guarda el ejercicio del derecho de acceso a la información frente a los fideicomisos públicos y los partidos políticos.

Al respecto conviene recordar que desde la reforma constitucional de 2007 fue la intención del Constituyente Permanente que el término "entidad" incluyera todas aquellas del sector paraestatal, tales como organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y muy particularmente los fideicomisos públicos.⁹ Hoy no hay duda de que la información sobre los fideicomisos públicos tiene carácter público sin importar su naturaleza, es decir, fideicomisos considerados como entidades paraestatales o bien los fideicomisos públicos que no se constituyen como entidades paraestatales. En ambos casos aunque los mecanismos para acceder a ella son distintos su información es pública y no está protegida por el secreto fiduciario. Esta situación ha sido confirmada ya por diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También conviene recordar que en esa reforma se analizó la situación de los partidos políticos respecto de los cuales se dijo:

"Una lectura cuidadosa del texto de la reforma, del dictamen de la Colegisladora, así como de los antecedentes que en la materia existen, tanto legislativos como los que en la materia ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del

⁹ Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la Función Pública con proyecto de Decreto que reforma el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2207-II del martes 6 de marzo de 2007

17

99

derecho al acceso a la información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se expida”¹⁰

3. Exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ahora bien, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su calidad de tribunal constitucional y órgano límite del Estado mexicano es el responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución, se ha considerado necesario excluirla de la competencia del IFAI tanto por respeto a su función Constitucional, como por el hecho que en última instancia le corresponde a esta institución resolver toda controversia que pudiera suscitarse en la materia. Sin embargo, para salvaguardar el ejercicio que de este derecho pudieran hacer los ciudadanos frente a nuestro máximo tribunal, se ha considerado pertinente establecer que los casos en revisión ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación sean resueltos por un Comité integrado por tres ministros, tal y como ahora sucede.

En su calidad de Tribunal Constitucional y órgano límite del Estado mexicano es el responsable último de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, razón por la cual debe preservarse intacta su función jurisdiccional.

¹⁰ Véase el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en la Gaceta del Senado número 101, año 2007.

4. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información gubernamental y Protección de Datos.

Pero la reforma va mucho más que otorgarle autonomía constitucional al organismo garante y ampliar su competencia a todos los Poderes Federales y organismos con autonomía constitucional. Es una reforma integral que atiende al ejercicio de un derecho fundamental en todo el país y que busca profundizar en la transparencia en el conjunto del Estado mexicano. Por lograrlo se proponen los siguientes elementos.

En primer lugar, para crear el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, esta iniciativa propone otorgar autonomía constitucional a todos los organismos especializados que ya existen en los Estados de la República y el Distrito Federal. Este es un paso trascendental que, mediante una reforma a los artículo 116 y 122 constitucionales, permite asegurar que en cada Estado y en el Distrito Federal exista un organismo garante, especializado, colegiado e imparcial, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, responsable de velar por el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de las autoridades.

En segundo lugar, y también bajo la premisa de fortalecer al Sistema Nacional para que tenga bases, estándares y procedimientos armonizados en todo el país y que no genere diferencias en el contenido, garantías y condiciones de ejercicio de derechos fundamentales, la iniciativa propone dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una ley general en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Esta Ley, congruente con el sistema federal, deberá establecer los estándares mínimos y los procedimientos en la



101

materia, para asegurar que en todo el país la protección de estos derechos y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta ley dará certeza de los requisitos para la integración de los órganos garantes, criterios de clasificación y reserva de información, procedimientos, plazos, etcétera.

Corresponderá también a esta Ley dar estructura al Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Gubernamentales, que permitirá la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno en la materia y generará sin duda mejores condiciones para fortalecer el ejercicio de los derechos y la rendición de cuentas.

Corresponderá a las legislaturas de cada Estado y del Distrito Federal, atendiendo a sus circunstancias y condiciones específicas, adaptar o aún mejorar los mínimos establecidos en la Ley General y con ello contribuir a un derecho que cumpla con las condiciones de progresividad y gradualidad necesarias para responder a la complejidad que tiene nuestro país. De esta forma se puede garantizar el doble objetivo de tener bases compartidas sobre la comprensión, características y requisitos de ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información (profundizando en la ruta señalada por la importante reforma al artículo 6º de julio de 2007), pero a la vez respetando el sistema federal que nos hemos dado como nación y que obliga a reconocer ámbitos de regulación propios en cada entidad federativa.



107

En tercer lugar, y para coherencia, congruencia y unidad de los principios, bases y procedimientos aplicables en materia del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país, así como velar por la especialidad, imparcialidad y autonomía de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal, se ha considerado conveniente establecer la posibilidad de que los particulares puedan someter a la revisión del organismo garante federal las decisiones de éstos cuando no les favorezcan. Este recurso abre una vía expedita a los particulares para asegurar la vigencia de sus derechos, en consonancia con los principios establecidos en el artículo 1º de la Constitución, y permite asegurar un sistema coherente para la garantía de dos derechos fundamentales de central importancia en la vida de los mexicanos, y evitar estándares diferentes de protección en el país.

Importa destacar que el IFAI actuará como órgano de última instancia sólo respecto de los poderes, autoridades y entidades públicas, pues los particulares siempre podrán recurrir -vía amparo- sus decisiones ante los tribunales federales, en congruencia con el diseño constitucional de tutela y protección de los derechos fundamentales. A este respecto conviene recordar en particular el contenido de la fracción I del artículo 103 de nuestra Carta Magna, el cual otorga a los Tribunales de la Federación la facultad de resolver toda controversia que se suscite "Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte".



Conviene reiterar que este recurso ante el organismo garante federal no inhibe la posibilidad que tienen los particulares de optar por la protección jurisdiccional de su derecho a través de un juicio de amparo, que sin embargo suele ser más costoso y lleva más tiempo su resolución. El recurso ante el IFAI permite entonces un mecanismo de revisión expedito y sin las formalidades indispensables que conlleva un juicio de amparo. Por otro lado, este recurso se abre sólo para los particulares, pues las decisiones de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal seguirán siendo definitivas e inatacables para las autoridades, quienes son los sujetos obligados de los derechos.

5. Recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Ahora bien, toda la construcción de la iniciativa se basa en asegurar que las decisiones del organismo garante federal sean definitivas e inatacables para las autoridades. Esto implica que este organismo se constituye como un órgano límite para todas las autoridades y Poderes del Estado mexicano en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Es un paso de enorme importancia e implica una especial responsabilidad para este organismo, pero al mismo tiempo es una consecuencia lógica que se sigue del principio constitucional de publicidad de la información gubernamental y de la obligación de las autoridades de permitir el acceso a los documentos gubernamentales.

Sin embargo, la experiencia constitucional muestra contundentemente que, salvo en el caso de los tribunales constitucionales que se constituyen como órganos límites, toda facultad debe tener un contrapeso que permita resolver, de manera excepcional, casos que puedan implicar condiciones especialmente delicadas que afecten puedan afectar interés nacional. Por ello esta iniciativa propone establecer un recurso especial y excepcional que se sustanciará ante la



Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este recurso podrá iniciarse cuando el organismo garante determine divulgar una información que, a juicio de las autoridades responsables, pueda representar una amenaza directa y trascendente a la seguridad nacional. En el caso de que este conflicto se presentara, y con el propósito de contar con un mecanismo expedito que permita resolver una diferencia a este respecto, la ley deberá establecer un procedimiento que permita que éste sea resuelto de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá hacer un juicio sobre si la materia controvertida en efecto cabe dentro del concepto de seguridad nacional, así como señalar en su resolución el alcance de la afectación y, en su caso, las modalidades de reserva de la información en cuestión.

Por su naturaleza, este recurso tiene un carácter extraordinario por lo que la legitimidad para interponerlo debe estar limitada. Por ello, se propone que sólo lo pueda interponer el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Senadores y los Presidentes de los organismos con autonomía constitucional. En el caso de la Administración Pública Federal, el único legitimado para interponerlo sería el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

Todos los elementos antes señalados garantizan condiciones que mejoran significativamente el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como de una manera más amplia la transparencia. Se constituye un auténtico sistema de transparencia en el país en beneficio de todos los mexicanos y que fortalecerá en el conjunto la rendición de cuentas de todos los órganos y niveles de gobierno del Estado mexicano.

B) Principios que rigen al organismo garante federal

Para orientar la acción del organismo garante encargado de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y permitir su evaluación objetiva, la iniciativa propone que se rija por los siguientes principios:

1. **Certeza:** entendida como seguridad y certidumbre jurídicas, tanto para los ciudadanos como para las propias autoridades y los servidores públicos;
2. **Legalidad:** como un mandato expreso hacia las autoridades obligadas y al organismo garante, para someterse estrictamente al mandato de la ley y ser coherentes con lo establecido en el artículo 16 constitucional;
3. **Autonomía:** es un eje rector en la actividad del organismo garante, entendido como la libertad y la no sujeción a instancia, interés o persona alguna al momento de tomar decisiones. Refuerza la autonomía de dicha institución y es un complemento a todo el esquema de protección institucional y de los propios comisionados, como el sistema de remuneración, estabilidad en el cargo e inamovilidad, fuero, etcétera;
4. **Imparcialidad:** implica que los servidores públicos del organismo garante deben ceñirse, de forma estricta, a la ley y no dejarse llevar o inclinarse a favor de los intereses de los sujetos a los que afectan sus decisiones;
5. **Eficacia:** lo concebimos como una obligación del organismo garante de hacer su trabajo correctamente, utilizar los recursos públicos de forma adecuada y evitar cualquier derroche, y particularmente asegurar que sus procedimientos sean expeditos, es decir que resuelvan en plazos breves los asuntos que se les presenten, sin dilaciones o complejidades que menoscaben el ejercicio del derecho de acceso a la información.;



106

6. **Objetividad:** se refiere a dejar de lado las ideas, concepciones o prejuicios del servidor público, y hacer frente al asunto o caso del que se trate atendiendo a los hechos, los razonamientos de las partes y a los elementos de prueba aportados; y
7. **Máxima publicidad:** lo entendemos como una forma de orientar la interpretación y aplicación de la norma, pero también como una regla en las actuaciones de las dependencias públicas obligadas y del organismo garante. En este sentido, en el caso de que existan dudas entre la publicidad o reserva de la información, deberá favorecerse inequívocamente la publicidad de la misma. La máxima publicidad será el canon interpretativo por el que, en materia de acceso a la información pública, deberá guiarse el órgano garante al que se le está dotando de autonomía constitucional.

C. Diseño institucional

En cuanto al diseño institucional, la iniciativa propone que el organismo garante federal incremente en dos el número de Comisionados para llegar a siete. Esto asegura que el Pleno resuelva de manera expedita y con alto rigor y calidad los asuntos que se le presenten, a la luz de las nuevas funciones y cargas de trabajo.

Se propone que los Comisionados sean nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encontrara en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. A diferencia del procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se presentarían ternas sino un solo candidato. Esta característica obliga al titular del Ejecutivo a elegir a candidatos idóneos para la responsabilidad que sumen, y bajo las condiciones que en su

momento establecerá la ley, y a justificar su selección. Por lo demás, puesto que se trata de una materia altamente especializada, la designación por medio de candidatos únicos facilita un procedimiento expedito de designación.

En caso de que el Senado de la República objetase la propuesta del Ejecutivo, este podrá hacer una segunda propuesta. Si esta volviera ser rechazada, y para evitar la parálisis o mal funcionamiento del organismo garante, se faculta el titular del Ejecutivo para designar directamente al nuevo comisionado, quien deberá necesariamente ser una persona distinta a las previamente rechazadas.

Los comisionados durarán en su encargo siete años sin posibilidad de reelección, y deberán dedicarse de manera exclusiva a sus funciones, salvo el desempeño de funciones docentes, científicas o de beneficencia. Estas garantías tienen como propósito salvaguardar la independencia y autonomía de los comisionados. La ley deberá precisar los requisitos que deberán cumplir los comisionados para asegurar un conocimiento experto, especializado y comprometido con los valores propios a la transparencia, la publicidad de la información gubernamental, la protección de la vida privada y, de manera amplia, la rendición de cuentas del Estado mexicano.

De acuerdo con lo anterior resulta necesario hacer los cambios consecuentes a los artículos 76, y 89 constitucionales, relativos a las facultades del Senado y del Ejecutivo Federal, respectivamente.

Dada la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos en el Estado constitucional democrático, es importante garantizar que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, pero también reglas para establecer su responsabilidad en caso de violaciones a sus



108

deberes. En virtud de lo anterior se propone reformar los artículos 110 y 111 de nuestra Constitución, ya que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones.

D. Acciones de inconstitucionalidad

En tanto órgano especializado garante de derechos fundamentales, se ha considerado pertinente otorgar al IFAI la posibilidad de iniciar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública o el derecho a la protección de datos personales. Por la misma razón, se consideró pertinente otorgar esta facultad a los organismos garantes equivalentes en los Estados y el Distrito Federal, obviamente limitada a las leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa, según corresponda.

Es cierto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones estatales en la materia, incluyendo la del Distrito Federal, tienen ya esta facultad, aunque de manera amplia pues comprende vulneraciones a cualquier derecho humano consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Sin embargo, la especialidad de las materias competencia de los organismos garante en materia de acceso a la información y protección de datos personales y su conocimiento experto son argumentos para considerar que conviene otorgarles esta facultad con el propósito de asegurar que no existan tendencias regresivas en esta materia, y con ello asegurar el cabal cumplimiento del principio de progresividad establecido en el artículo primero constitucional. Asimismo, esta facultad asegura los propósitos de



la autonomía constitucional, pues de no concedérsele a los organismos garantes quedarían sujetos a otros organismos para demandar la efectividad de su mandato.

E. Rendición de cuentas

Resulta importante construir mecanismos que permitan que el organismo garante federal rinda cuentas de su labor. Por ello, la iniciativa propone establecer la obligación de que el órgano constitucionalmente autónomo, a través de su presidente, presente anualmente ante el Senado de la República un informe de actividades que permita, por un lado, valorar su labor, y por otro, exponer al Senado la situación que guardan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el país y alertar con ello a los Poderes de la Unión y a la sociedad mexicana de las posibles violaciones en que las diferentes autoridades pudieran incurrir en la materia.

F. Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado mexicano

Desde el punto de vista sustantivo, se ha argumentado por la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los propios órganos garantes la existencia de dos problemas. Por un lado la fragmentación que existe entre los órganos del Estado mexicano responsables de la rendición de cuentas, y por otro la necesidad de contar mejores mecanismos de rendición de cuentas. Para atender a estas preocupaciones la iniciativa propone dos importantes modificaciones constitucionales.

La primera atañe a la coordinación que deberá tener el organismo garante, y de manera más amplia todos los órganos que integran el sistema nacional de transparencia y acceso a la información, con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,



28

110

todas instituciones cabezas, respectivamente, del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Nacional de Archivos y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Estos mecanismos de coordinación, deben permitir una mejor articulación de las políticas y acciones que cada organismo realiza en sus respectivas esferas de competencia y con ello coadyuvar a una mejor rendición de cuentas en el Estado Mexicano.

En cuanto a la sustancia, se propone modificar la fracción V del artículo 6º constitucional para asegurar que los sujetos obligados por el derecho a la información publiquen indicadores que permitan rendir cuenta a los ciudadanos del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados que ha obtenido. Con esta modificación se supera el contenido limitado del concepto de "indicadores de gestión", para avanzar en una política de transparencia que permita que todas las autoridades y en general quienes ejercen recursos públicos en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano den cuenta puntual, cabal y verídicamente de la manera en que cumplen sus funciones sustantivas. No se trata entonces sólo de decir cómo gastan los recursos públicos, sino qué resultados obtienen y qué bienes públicos generan.

G. Régimen transitorio

Una reforma con el alcance y la profundidad que propone esta iniciativa tiene importantes consecuencias y por ello conviene establecer un régimen transitorio que de cauce legal y operativo para alcanzar de manera expedita sus objetivos.



///

En efecto, la reforma, de ser aprobada por el Constituyente Permanente, requiere para su implementación una actividad legislativa muy importante. Se requiere que el Congreso de la Unión expida, en primer lugar, una Ley General que desarrolle los contenidos del Artículo 6° constitucional reformado. En función del contenido de esta Ley, se requerirán modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. También será necesario establecer una Ley Orgánica del nuevo organismo garante, y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La redefinición del régimen competencial de datos personales requerirá sin duda otros cambios legislativos, tanto para el régimen de datos personales gubernamentales como de aquéllos en posesión de los particulares. Todo esto representa un reto enorme para el Congreso que, sin duda, honrará este deber pero requiere de un plazo razonable que, se propone sea de un año, para permitirle completar adecuadamente su labor.

La reforma también supone la actividad de los poderes reformadores de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También en este caso se propone fijar el plazo de un año para que completen esta tarea.

La especialización necesaria, el conocimiento acumulado y la imparcialidad con la que se han conducido son los argumentos centrales que permiten afirmar que conviene que los actuales comisionados del IFAI prosigan en su encargo hasta concluir el mandato por el que fueron designados. También resulta importante que la nueva configuración del organismo garante se integre rápidamente, por ello se propone que esta se complete dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Ello asegura una adecuada transición al nuevo régimen.

Esta iniciativa propone que los comisionados del órgano garante tengan un perfil acorde con las responsabilidades que se le están otorgando. Como es bien sabido, actualmente el IFAI resuelve los recursos que interponen los particulares contra las negativas de información de las dependencias federales. Dichas resoluciones revisten todas las características de las que emite una autoridad administrativa jurisdiccional. Ahora bien, con las nuevas atribuciones que se le pretende otorgar relativas a revisar en última instancia las resoluciones que a su vez emitan los órganos garantes de las entidades federativas, el nuevo órgano de transparencia se estaría asemejando a una instancia jurisdiccional revisora. Por lo mismo, la actividad sustantiva de esta nueva instancia consiste y seguirá consistiendo en la aplicación de la legislación a casos concretos en disputa, lo que hace indispensable que quienes tengan la responsabilidad de ocupar los cargos de comisionados, tengan el perfil idóneo para ello.

Finalmente, se incorporan disposiciones para asegurar el escalonamiento en la renovación del órgano garante, buscando dar certeza en los periodos de conclusión e inicio del mandato.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a su consideración el siguiente proyecto de



DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6°, 73, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero.- Se reforma y adiciona el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o.

A. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

(...)

I. a III. (...)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos **que se sustanciarán ante los organismos especializados que establece esta Constitución.**

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre **el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.**

VI. a VII. (...)

B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en



114

los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.

En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la Ley.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los Presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional.

El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación

siguiendo el proceso establecido en el párrafo siguiente y lo dispuesto en la Ley.

En caso de que la Cámara de Senadores objetare la propuesta, el Presidente de la República designará nuevamente, dentro de los siguientes treinta días. Si este segundo nombramiento fuera también objetado, el Presidente de la República designará directamente a otra persona en un plazo improrrogable de treinta días.

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar ayuda al organismo garante y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.



Artículo segundo.- Se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. (...)

(...)

XXIX-R. Para expedir una Ley General reglamentaria del artículo 6° de esta Constitución que establezca las bases y los procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

(...)

Artículo tercero.- Se adiciona una fracción XII, recorriéndose en su orden la subsecuente, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 76. (...)

I. a XI (...)

XII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo cuarto.- Se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden la subsecuente, al artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:



Artículo 78.- (...)

(...)

I a VII. (...)

VIII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo quinto.- Se reforma la fracción XIX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89. (...)

I. a XVIII. (...)

XIX. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.

(...)

Artículo sexto.- Se adiciona un inciso h) a la fracción II y una fracción IV al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105.- (...)

I. (...)

II. (...)



(...)

a) a g) (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III. (...)

IV. Del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.

Artículo séptimo.- Se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, **los comisionados del organismo garante establecido en el**



artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo octavo.- Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional** por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)



(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo noveno.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. (...)

I a VII (...)

VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

Artículo décimo. Se adiciona un inciso ñ), recorriéndose en su orden los subsecuentes, a la fracción V, de la Base Primera del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 122. (...)

C. (...)

BASE PRIMERA.- (...)

I. a IV. (...)

V. (...)

a) a n) (...)



ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo gubernamental. En el Distrito Federal habrá un organismo especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Distrito Federal. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.- (...)

Transitorios

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los demás



ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Ejecutivo Federal especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de noviembre de 2017.
- b) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.



123

Quinto.- Las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su normatividad a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

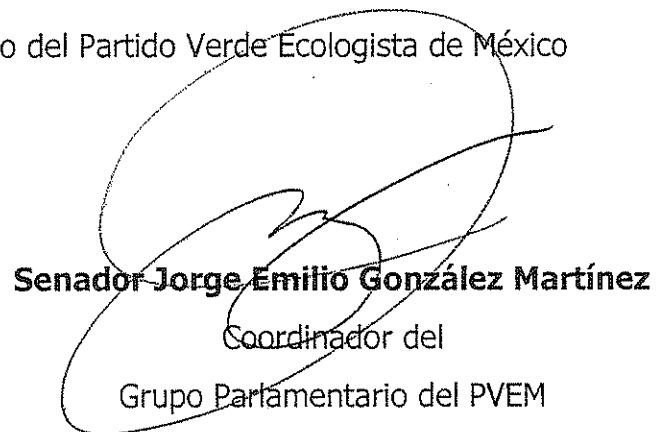
Senado de la República, a los trece días del mes de septiembre de dos mil doce.

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico de México




Senador Emilio Gamboa Patrón
Coordinador del
Grupo Parlamentario del PRI



Senador Jorge Emilio González Martínez
Coordinador del
Grupo Parlamentario del PVEM



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.



**Sen. Roberto Armando Albores
Gleason**



**Sen. Blanca María del Socorro
Alcalá Ruiz**



**Sen. Ivonne Liliana Álvarez
García**



Sen. Daniel Amador Gaxiola

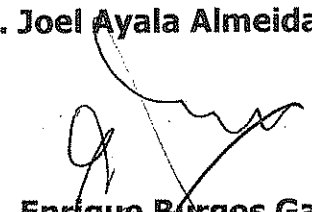


**Sen. Angélica del Rosario
Araujo Lara**

Sen. Joel Ayala Almeida



Sen. Ricardo Barroso Agramont



Sen. Enrique Burgos García



Sen. Jesús Casillas Romero



Sen. Manuel Cavazos Lerma



Sen. Raúl Cervantes Andrade

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Sen. Manuel Humberto Cota Jiménez

Sen. María Cristina Díaz Salazar

Sen. Omar Fayad Meneses

Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre

Sen. Hilda Esthela Flores Escalera

Sen. Margarita Flores Sánchez

Sen. Diva Hadamira Gastelum Bajo

Sen. Ernesto Gandara Camou

Sen. Arely Gómez González



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.


Sen. Félix Arturo González Canto


Sen. Isaías González Cuevas


Sen. Marcela Guerra Castillo


Sen. Ismael Hernández Deras


Sen. Lisbeth Hernández Lecona


Sen. Juana Leticia Herrera Ale


Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo


Sen. Aarón Irizar López


Sen. René Juárez Cisneros


Sen. Patricio Martínez García



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza

Sen. Armando Neyra Chávez

Sen. José Ascención Orihuela Bárcenas

Sen. Graciela Ortiz González

Claudia Pavlovich Arellano
Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano

Sen. Eviel Pérez Magaña

Sen. David Penchyna Grub

Sen. María del Rocío Pineda Gochi

Sen. Raúl Aaron Pozos Lanz

Sen. Mely Romero Celis



46
128

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105,
110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE
PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES
DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA
REPÚBLICA.



Sen. Carlos Romero Deschamps



**Sen. Oscar Román Rosas
González**



Sen. Gerardo Sánchez García



Sen. Teófilo Torres Corzo



**Sen. José Francisco Yunes
Zorrilla**



Sen. Miguel Romo Medina



Sen. María Lucero Saldaña Pérez



Sen. Alejandro Tello Cristerna



Sen. Héctor Yunes Landa



Sen. Arturo Zamora Jiménez



129 47

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA



Sen. María Elena Barrera Tapia



Sen. Pablo Escudero Morales



Sen. Juan Gerardo Flores
Ramírez



Sen. Humberto Domingo
Mayans Canabal



Sen. Luis Armando Melgar Bravo

Sen. Carlos Alberto Puente Salas



Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora



Sen. Ninfa Salinas Sada

165

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión



Año PRIMERO PRIMER Período ORDINARIO

ComisiónES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES: Y DE.
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINION DE LA COMISION DE
ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.

4 OCTUBRE Año 20 12

Num. 421

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTICULOS 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
SENADORA LAURA ANGELICA ROJAS HERNANDEZ, FERNANDO TORRES
GRACIANO, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA Y MARTIN OROZCO SANDOVAL,
PAN.

*tns.

Fojas 129

04 OCT 2012

Se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primer y Segundo de la Comisión de

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Anticorrupción y Participación Ciudadana

16/5/

24

Los suscritos Senadores, Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Cámara Senadores la presente **Iniciativa con proyecto de decreto que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, con el fin principal de constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializados e imparciales en su actuación, depositarios de la autoridad en la materia, e institucionalizarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales; así como para sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio de estos derechos por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad el Estado constitucional no puede pensarse sin el establecimiento de las condiciones formales y materiales que hagan efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, así como tampoco puede concebirse una sociedad democrática abierta sin la exigencia de la transparencia de los actos públicos.¹

Así, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana reconoce entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, junto con la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa, a la transparencia de las actividades gubernamentales.

La transparencia es ahora una exigencia democrática republicana, es "una condición necesaria para que el imperio de la ley y la rendición de cuentas sea una realidad". De ahí que ella misma sostenga: "no hay poder legítimo y democrático si su ejercicio no se rige por el código de la transparencia".²

Desde esta perspectiva el secreto como política de Estado es incompatible con un sistema constitucional y democrático.

Un régimen de transparencia y el derecho de acceso a la información pública permiten garantizar la posibilidad de un control democrático indirecto, un "control social" de las

¹ Cfr. Olimpo Nava Gomar, Salvador, en "Transparencia y Acceso a la Información en materia político-electoral (de autoridades y partidos políticos).

² Peschard, Jacqueline, Transparencia y partidos políticos, Cuadernos de transparencia, No. 8. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, México, 2007, p. 12.

acciones de los poderes públicos y de los demás sujetos obligados a entregar información.

Es como diría Alonso Lujambio *"estamos ante un nuevo control ciudadano sobre el poder, que puede ejercerse de modo directo, sin la mediación de los órganos de representación política, y que está llamado a incrementar la calidad de nuestra joven democracia mexicana."*³

Señalaba el mismo Lujambio a la luz de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que *"mucha agua ha corrido ya bajo su puente: se han abierto los fondos públicos depositados en fideicomisos, se ha echado luz en el secreto bancario; se ha revelado información relevante sobre las responsabilidades del rescate del sistema financiero nacional; gracias a la aplicación de la ley, diversos infractores a las normas y reglamentos federales han sido identificados por el público; se han transparentado operaciones millonarias de las grandes empresas públicas, se han conocido las significativas transferencias que dependencias y entidades realizan a los sindicatos y un largo etcétera."*⁴

Asimismo indicaba que lo importante era subrayar que *"hasta antes de la Ley de Transparencia, todas esas cosas y muchas más eran secretas, imposibles de saber y, por tanto, los ciudadanos mexicanos estaban prácticamente inhabilitados para, conociendo, actuar, debatir, denunciar, controvertir o modificar. Lo que propicia la Ley de Transparencia es justamente eso: que las personas vean lo que ocurre en la esfera pública, que le abran canales de comunicación e información, que las personas se hagan elementos para poder actuar."* E indicaba que la Ley de Transparencia *"fue hecha para la sociedad, para ampliar derechos y disolver privilegios."*⁵

En efecto, la transparencia es una forma permanente de rendición de cuentas. Una circunstancia favorable para que cualquier ciudadano ejerza su facultad de control indirecto del poder y, en este sentido, la transparencia es una herramienta disuasiva, preventiva y un remedio indispensable. Siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en este aspecto⁶:

"[E]l actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso."

³ Salazar Ugarte, Pedro, (Coordinador), El Derecho de Acceso a la Información en la Constitución Mexicana: razones, significados y consecuencias, UNAM-IFAI, México 2008, consultar prologo.

⁴ Hernández Baqueiro, Alberto, (Coordinador), Transparencia, rendición de cuentas y construcción de confianza en la sociedad y el Estado Mexicano, IFAI, México 2006, pág. 5.

⁵ *Ibid.*

⁶ Cfr. Olimpo Nava Gomar, Salvador, *Ibid.* pag.4

Lo anterior permite afirmar que la transparencia y el acceso a información pública son herramientas de control en el Estado constitucional a manos de la ciudadanía en general, expectativas legítimas de todo régimen democrático y exigencias específicas de toda sociedad abierta y plural.⁷

Los actos gubernamentales secretos, el ocultamiento o simulación de la información y su difusión, son notas distintivas de un ejercicio del poder público incompatible con los compromisos de apertura, transparencia y publicidad del Estado constitucional democrático.

Ya lo señalaba Norberto Bobbio (al referirse al futuro de la democracia):

“De verdad sería una grave derrota a la democracia, nacida con la promesa de la transparencia del poder, que el Gobierno pudiera verlo todo sin ser visto. No hay duda de que la mayor tentación del poder en todos los tiempos ha sido esconderse para poder ser lo más parecido a Dios, que es invisible, pero que todo lo ve - Y SE PREGUNTA- ¿Estamos seguros de que la democracia, nacida para derrotar esta tentación, ha logrado su propósito?”

Por lo tanto la transparencia y el derecho de acceso a la información pública gubernamental se convierten así, en un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público.

En este contexto, la democracia representativa o participativa implica un sistema abierto de información que permita garantizar decisiones informadas.

Porque el gobernado tiene por un lado el derecho a saber y cuestionar, y el gobernante la obligación de explicar y dar las razones de sus actos, de rendir cuentas.

Por eso se afirma “que cuando la información de Estado se hace pública no sólo se transparenta la acción gubernamental sino que la función estatal se democratiza”.⁸

Ahora bien, la regulación en materia de acceso a la información pública ha observado avances importantes; sin embargo, la evolución que ha tenido ha dado origen a una regulación diversa y heterogénea en la materia, tanto en los procedimientos como en la conformación de los órganos garantes.

El actual marco jurídico en el país en materia de acceso a la información pública presenta en varios de sus aspectos asimetría, e incluso confusión al momento del ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ello es indispensable la consolidación de criterios uniformes en los diversos órdenes de gobierno, a fin de lograr una adecuada armonización para el ejercicio pleno del derecho, estableciendo un piso llano en todo México.

⁷ *Ibíd.* pag. 5

⁸ Exposición de motivos de la Iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es conveniente edificar el diseño institucional y procesal de tal manera que haga posible un derecho unificado, tutelado e igual para todos, y exista el mismo deber para cualquier esfera de gobierno o poder público.

Se trata de construir las condiciones constitucionales y legales para contar con una normatividad que permita aumentar la eficacia institucional, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de tal prerrogativa.

La búsqueda por consolidar criterios uniformes o lograr una adecuada armonización normativa debe partir de un auténtico y real federalismo, pero eficiente y eficaz en cuanto a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de protección de datos personales, al considerar que los órganos de transparencia cumplen hoy día con una función dual, el de ser garantes de ambos derechos.

Por todo ello, y ante la importancia que tiene la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información para la consolidación de una democracia como un sistema de vida, es que la presente iniciativa propone fortalecer a los órganos de transparencia federal y locales, así como sentar las bases para contar con un marco legal armónico, uniforme y homogéneo en todo el país respecto de los procedimientos y los principios en el ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

En ese sentido, es que se *propone de manera esencial* lo siguiente:

- 1) Otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades federativas.

Esta propuesta a su vez comprende un diseño puntual sobre las características básicas o fundamentales que deben reunir dichos órganos autónomos a fin de asegurar los principios o criterios de los que deben estar revestidos dichos órganos, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal total que se les ha encomendado.

- 2) Disponer un concepto amplio de las autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.
- 3) Definir la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública, en el ámbito de su competencia. Dicha atribución necesariamente implicara disponer como un aspecto relevante a su vez:
 - La facultad del órgano garante para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables, lo cual deberá realizar sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General; es decir, debe interpretar conforme a la Constitución y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y debe realizar la interpretación más favorable para el titular del derecho.

- 5
168
- 4) Establecer la competencia de los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.
 - 5) Disponer que las resoluciones de los órganos garantes serán definitivas, inatacables y obligatorias para los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados.
 - 6) Dotar de facultad a los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para interponer acciones de inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.
 - 7) Garantizar un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de las funciones de los órganos garantes de transparencia.
 - 8) Crear un mecanismo opcional de defensa administrativo en favor de los particulares, contra las resoluciones de los órganos garantes locales en las que se les haya negado su derecho de acceso a la información.
 - 9) Dotar al Congreso de la Unión para que expida una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
 - 10) Dotar al Congreso de la Unión para que expida una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución General, y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
 - 11) Homologación de las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, similares a las que se plantean para el órgano autónomo federal
 - 12) Establecer bases, principios y armonización en materia de archivos, y dotar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General de Archivos, a fin de lograr la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos, y por otra la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

A continuación se exponen los argumentos que sustentan dichas propuestas.

1. LA AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DE LOS ORGANOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Si bien el párrafo segundo del artículo 6° de la Constitución General, ha establecido que los órganos garantes de transparencia y acceso a la información, deben ser especializados e imparciales, y deben contar con autonomía operativa, de gestión y de decisión, resulta importante en esta etapa evolutiva en la materia, dar un paso más firme en la consolidación institucional de estos órganos, a través de que en la propia Constitución General, las Constituciones de los Estados y el Estatuto Orgánico del Distrito Federal se haga explícita, y puntual la autonomía constitucional de dicho órganos garantes. Lo anterior con el fin de sentar las bases constitucionales sobre la naturaleza jurídica de estos órganos garantes tanto del orden federal como local, y no dejar en la interpretación, como ha sido hasta hoy, que en algunos casos, la autonomía se traduzca desde la desconcentración, descentralización, o bien por Ley o por Constitución Local.

Resulta necesario delinear o armonizar un diseño institucional y procesal que unifique las características de los órganos garantes de la federación, los estados y del Distrito Federal de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, para evitar la heterogeneidad, aumentar la eficacia institucional y preservar el pacto federal, pues es claro que el fortalecimiento de los órganos garantes de transparencia resulta indispensable para proteger el ejercicio de esta prerrogativa.

La armonización de los órganos de transparencia del orden federal y local a de darse para constituir instituciones autónomas, especializadas e imparciales en su actuación, características que resultan esenciales para consolidarlos como auténticos garantes del derecho de acceso a la información, lo que se traduce, a su vez, en beneficios para los gobernados, al contar con instituciones fuertes y confiables.

Todo lo anterior implica la necesidad de otorgar autonomía constitucional al órgano garante federal y a los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, con un diseño normativo desde la Constitución General.

Además, debe reconocerse la falta de uniformidad de las disposiciones normativas en la materia, y en algunas de las veces la disparidad en las capacidades institucionales de los órganos encargados de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, lo que hace exigente realizar propuestas para perfeccionar el diseño normativo institucional y dotar a estas instituciones u órganos garantes del orden federal y local de instrumentos legales sólidos y para materializar su autonomía constitucional, a fin de brindar certeza jurídica a la actuación de los órganos de transparencia de todo el país.

El reconocimiento de estos órganos garantes, como organismos constitucionales autónomos representa varias ventajas dentro del entramado estructural y funcional del Estado democrático y de derecho, que hemos de seguir consolidando.

En primer lugar, los órganos u organismos garantes de transparencia y acceso a la información autónomos deben contar *con autonomía plena* de los tres poderes clásicos, de otra forma estaría siempre latente el riesgo de manipular o presionar la libertad o independencia necesaria para el despliegue de sus atribuciones. Luego entonces, debe asegurarse que el órgano garante de derechos fundamentales, cuente con las garantías necesarias de actuación e independencia, y pueda desplegar debidamente su radió de acción, y de esta manera alcance los fines para los que fueron creados.

7
170

En este sentido cabe lo expuesto por Guzmán Tamayo *"un ciudadano no puede confiar en órganos de transparencia que sospecha o presume están subordinados a los entes o poderes públicos a los que se supone vigila o supervisa que deban entregar o dar acceso a la información pública en su poder. Debe eliminarse cualquier suspicacia al respecto, para que al ser confiable el órgano garante, la sociedad se acerque y no se aleje."*

Debe quedar claro que el debate sobre la naturaleza de estos órganos garantes no es menor, y que la plena autonomía es requisito indispensable y necesario dentro de un auténtico diseño por una política nacional de rendición de cuentas. Incluso la doctrina y los propios criterios judiciales han señalado que hay por ejemplo una diferencia sustancial entre un organismo u órgano constitucional autónomo y un descentralizado.

En ese sentido se ha llegado a señalar que un organismo u órgano constitucional autónomo no puede depender jerárquicamente del poder Ejecutivo ni, mucho menos, funcionalmente de algún otro poder.

Se ha afirmado que de acuerdo a su naturaleza jurídica, no es posible que los actos que emita el organismo autónomo, depositario y autoridad en la materia respectiva, sean revisados por la administración pública federal. Lo contrario significaría homologar a dicho organismo a un órgano dependiente de la administración pública (ya sea descentralizada o no) sobre el que se tiene el poder de nombramiento, poder de vigilancia, poder de revisión, poder de mando, poder disciplinario y poder para la resolución de conflictos de competencia.

Se ha sostenido incluso, que un organismo descentralizado no actúa de forma libre y exenta de control por parte del Ejecutivo, toda vez que el funcionamiento de los organismos descentralizados, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal éstos desempeñan, están garantizadas y controladas a favor de los gobernados y de la administración pública, dado que la toma de decisiones de esa clase de entidades se identifica con las finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo.

Aun y cuando los organismos descentralizados son autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada de una manera indirecta, existiendo remplazo de la "relación de jerarquía" por un "control administrativo".

De ahí que se sostenga, que una subordinación del órgano autónomo constitucional a la administración pública sería incompatible con la naturaleza del órgano.

Además la creación de organismos descentralizados se logra a través de leyes, sin necesidad de reformar la Carta Magna.

Los anteriores argumentos, incluso encuentran por ejemplo eco en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación:

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO SON AUTÓNOMOS, ESTÁN SUBORDINADOS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE MANERA INDIRECTA. Si bien los organismos públicos descentralizados tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una estructura separada del aparato central del Estado, ello no

171

significa que su actuación esté libre y exenta de control, toda vez que su funcionamiento y las facultades de autoridad que desempeñan están garantizados y controlados a favor de los gobernados y de la administración pública, pues las unidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo o actividades estatales que les han sido conferidas; de manera que aun cuando aquellos organismos son autónomos, continúan subordinados a la administración pública federal de una manera indirecta, aspecto que marca la diferencia entre la administración centralizada y la paraestatal, pues mientras que en la primera la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo Federal es directa e inmediata, en la segunda, especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata.

Acción de inconstitucionalidad 16/2003. Procurador General de la República. 8 de junio de 2004. Unanimidad de nueve votos. Ausentes Margarita Beatriz Luna Ramos y Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Agustín Tello Espíndola. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiuno de septiembre en curso, aprobó, con el número 97/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de septiembre de dos mil cuatro.
P./J. 97/2004 de jurisprudencia.

Por ello, debe impulsarse un diseño institucional que otorgue a los órganos garantes de transparencia y acceso a la información de plena autonomía, que se dote de independencia a todos los órganos garantes del país de cualquiera de los otros poderes públicos, por el bien del órgano garante, pero sobre todo para asegurar el derecho de los gobernados para acceder a la información pública en posesión de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley, y atender esta función estatal de manera eficaz en beneficio de la sociedad.

Ahora bien, respecto de la naturaleza y características de los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho lo siguiente:

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los

poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

Tesis de Jurisprudencia, P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página 1647, Novena Época, Registro No. 172456

Del anterior criterio jurisdiccional se puede afirmar de los organismos constitucionales autónomos lo siguiente:

- Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder.
- Como *evolución de la teoría tradicional de la división de poderes* dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
- Debe considerarse como *una distribución de funciones o competencias*, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.
- Se establecen en los textos constitucionales, *dotándolos de garantías de actuación e independencia* en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados.
- Para que *ejerzan una función propia del Estado* que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.
- La creación de este tipo de organismos *no altera o destruye la teoría tradicional* de la división de poderes.
- Pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, *no significa que no formen parte del Estado mexicano*.
- Pues su misión principal radica en *atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad* en general.

173

- Conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la *par de los órganos tradicionales*.

Luego entonces, las características esenciales de los organismos constitucionales autónomos, según criterio judicial, serían las siguientes:

- ❖ Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;
- ❖ Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;
- ❖ Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y
- ❖ Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Conforme a las argumentaciones anteriores, es que se ha afirmado que los organismos constitucionales son aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Ley Suprema.

Que no están adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado (Legislativo, Ejecutivo y judicial). Que son organismos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por los intereses inmediatos del momento, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.

Que por lo tanto, la existencia de los organismos constitucionales autónomos, devienen como una forma de distribución de la función estatal. Que se inscriben como mecanismo de equilibrio o racionalización en el ejercicio del poder público.

Es así que se puede afirmar que los organismos constitucionales autónomos representan una evolución en la teoría clásica de la división de poderes, porque se entiende que puede haber órganos ajenos a los poderes tradicionales sin que se infrinjan los principios democráticos o constitucionales.

En ese contexto, es necesario recordar que el principio de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo (de los reyes). En resumen, la teoría de la división de poderes o distribución de funciones, tiene como centro de gravitación: el evitar la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes (en este caso del ejecutivo, legislativo o judicial).

Un supuesto constitucional básico del control del poder, es la *división de poderes*. La teoría de la división de poderes como se sabe tiene sus orígenes en Aristóteles y es en el siglo XVIII, cuando se publicó la obra de Charles de Secondat, Barón de Montesquieu, titulada *El espíritu de las leyes*, cuando alcanza su expresión. Del texto de Montesquieu, se deriva que *su inspiración fue la comprensión de la necesidad de evitar que los gobernantes abusaran de sus facultades en el intento de incrementar su poder: en perjuicio de la libertad humana. Por eso afirmó que "Para que no se pueda abusar del poder, se necesita que, por disposición de las cosas, el poder detenga al poder."*

Es así que el control se constituye como el conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, la forma en que se asegura la vigencia de

11
174

la libertad y los derechos fundamentales de la persona humana. En consecuencia, para el buen funcionamiento de un Estado, es indispensable que el poder sea controlado. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia o el exceso de alguno de los poderes clásicos: De aquí el origen de los *organismos constitucionales autónomos*.

Por lo tanto los organismos constitucionales autónomos se inscriben como parte del control en el ejercicio del poder público. Sobre estos organismos autónomos, como lo ha señalado la doctrina deben atender a determinados principios, como son:

- *Inmediatez*. Es decir, deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.
- *Esencialidad*. Son necesarios para el Estado democrático de derecho contemporáneo.
- *Participan en la dirección política del Estado*. Participan en la dirección política del Estado, y emanan de actos ejecutivos, legislativos o jurisdiccionales contribuyendo a la toma de decisiones del Estado.
- *Tienen paridad de rango con los otros órganos de Estado*. Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.
- *Gozan de autonomía orgánica y funcional*, y en general presupuestaria.
- *Apolititud*: son organismos técnicos y no políticos.
- *Inmunidad*: sus titulares solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o voluntaria.
- *Están sujetos a esquemas de transparencia*. Los actos y decisiones de los organismos autónomos, salvo los casos comprensibles del secreto en las investigaciones del Ministerio Público, podrán ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información, incluyendo obviamente los órganos del Estado.
- *Gozan de intangibilidad*, es decir deben ser organismos permanentes, o por lo menos para cuya derogación se podría exigir un procedimiento de reforma constitucional mucho más reforzado que el proceso de reforma constitucional ordinario.
- *Funcionamiento interno apegado al Estado de derecho*. Es decir, sería imprescindible que en las responsabilidades administrativas de funcionarios de los respectivos organismos, éstos cuenten con todas las garantías constitucionales y procesales.

En resumen, los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en base a los principios referidos; y para su buen funcionamiento no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.

Es así, que la propuesta va en el camino de que los órganos de transparencia de la Federación, de todos los Estados y el Distrito Federal se constituyan —particularmente

donde todavía no lo son- en organismos constitucionales autónomos, mediante el establecimiento de las garantías mínimas a estos para asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibrio constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal total que se les ha encomendado.

Lo anterior sin dejar de reconocer, que distintas entidades federativas han dado un paso adicional en el tema de transparencia y acceso a la información, al fortalecer sus órganos garantes desde su constitución local, siendo ello sin duda un referente que anima la presentación de esta iniciativa.

Ahora bien, en cuanto al organismo garante federal no puede desconocerse su naturaleza jurídica sui generis, que lo asemeja en mucho a un organismo constitucional autónomo. Pero además, nadie puede regatearle su credibilidad institucional y la confianza social de la que goza hoy en día. En los hechos el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos Personales (IFAI) es un referente nacional e internacional ha seguido en cuanto a su actuación en pro del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales. Sus resoluciones y criterios de actuación han reflejado la independencia en sus juicios, y hasta a hoy no ha habido asomos de injerencias o presiones que hayan llevado a dicho organismo a una subordinación a alguno de los poderes públicos. Sin embargo, como ya se dijo en esta etapa de evolución normativa es necesario consolidar dicho organismo garante federal como un organismo constitucional autónomo.

De entrada, cabe decir que el actual diseño del organismo federal está *"en un punto intermedio"*. El actual organismo garante federal, cuenta hoy con algunos mecanismos de independencia, como son:

- *La responsabilidad compartida en el nombramiento o designación de los comisionados (propuesta del ejecutivo y no objeción del senado).* La Ley Federal de Acceso a la información Pública Gubernamental, prevé que el Instituto Federal estará integrado por cinco comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación. En todo caso, la instancia legislativa tendrá treinta días para resolver, vencido este plazo sin que se emita resolución al respecto, se entenderá como no objetado el nombramiento del Ejecutivo Federal.
- *Un periodo determinado para desempeñar el cargo de Comisionado.* El marco actual prevé que los Comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
- *Mecanismo especial para su remoción.* La Ley vigente dispone que los comisionados sólo podrán ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y esta Ley, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal.

- Se ha dotado de tres autonomías: operativa, de decisión y presupuestaria. Se dispone en La Ley federal de la materia, que el Instituto es un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información; resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades.
- Se han establecido requisitos específicos para ser comisionado, para asegurar la idoneidad o experiencia de estos, y por otro lado evitar un perfil partidizado. En la Ley respectiva se ha previsto que para ser Comisionado se requiere: I. Ser ciudadano mexicano; II. No haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso; III. Tener cuando menos, treinta y cinco años de edad el día de su designación; IV. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con la materia de esta Ley, y V. No haber sido Secretario de Estado, Jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal o Local, dirigente de un partido o asociación política, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, durante el año previo al día de su nombramiento.

Como se puede observar, sólo se aproxima, porque el IFAI no lo es. Pues no se cumple por ejemplo con la característica de *inmediatez*; es decir, no está establecido y configurado directamente en la constitución. Tampoco mantiene *Paridad de Rango*; es decir no mantienen con los otros órganos del estado relaciones de coordinación entre pares, pues es un descentralizado, lo que hace que esté subordinado formalmente a uno de los poderes.

En este sentido, la preocupación o inquietud fundamental, es el alcance del ámbito competencial que hoy abarca el órgano garante federal de transparencia y acceso a la información pública, en el ámbito federal.

El radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de la administración pública federal. El Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

No interviene como órgano especializado en la materia frente actos u omisiones del poder Legislativo (Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y Comisión Permanente) ni del poder Judicial, tampoco sobre los órganos autónomos reconocidos como son la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral. La Ley ha establecido que estos son sujetos obligados, pero los faculta para emitir vía acuerdo o reglamentos, lo necesario para sujetarse a los criterios de la ley, y los faculta para constituir sus propios órganos de transparencia, que conocen y resuelven las impugnaciones en la materia, sin que tenga participación de ello el Instituto Federal.

Digámosle así, estos poderes públicos son juez y parte, y son en sí mismo su propio pequeño IFAI. Esa es la realidad, y creo que el punto central en la búsqueda por la autonomía constitucional del órgano garante federal. Ya que solo puede tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal si y solo si: se le da el carácter de órgano

constitucional autónomo, ya que por supuesto no lo puede ser como órgano descentralizado.⁹

Por lo tanto, no es dable tener en el orden federal –como tampoco en el ámbito local– un derecho de acceso a la información fragmentado o dividido en partes. Es indispensable evitar disparidad en la regulación, se debe consolidar una homologación en los criterios de vigilancia, evitando el riesgo de no asegurar debidamente el ejercicio de este derecho, en perjuicio de los gobernados.

El gobernado –como dice Guzmán Tamayo– no tiene porqué sufrir el viacrucis en su demanda por información en poder de los poderes públicos federales, ni carecer de un órgano garante imparcial, independiente y especializado, que le asegure su derecho de acceso a la información, por el contrario debe contar con un defensor de su derecho, de manera gratuita, pronta y expedita, frente al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y demás poderes públicos o sujetos obligados federales.

Debe cohesionarse un derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante federal, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales.

Por lo tanto es oportuna la sentencia que afirma que no podemos tener en la práctica un derecho de acceso a la información pública fragmentado, dividido en partes, lo que no permite hablar de indicadores cualitativos en la materia sobre la labor que desempeñan los órganos de transparencia de los demás sujetos obligados, distintos a la administración pública federal.

Es indispensable “evitar multiplicidad reguladora” del derecho de acceso a la información, por el contrario se debe consolidar una homologación en los criterios o lineamientos de vigilancia en el cumplimiento de la ley: como es el uso del SISI, criterios en la clasificación de la información, sobre el manejo de solicitudes, el desahogo en los recursos de revisión, entre otros aspectos más. Pero que permitan la homologación en el ejercicio y en la protección de este derecho en el orden federal.

El actual esquema federal conduce a una disparidad en el ejercicio del derecho de acceso. Ya que mientras en la actuación de la administración pública en materia de acceso a la información se cuenta con el IFAI como órgano garante especializado, hasta hoy reconocido y confiable; en el caso de los otros poderes no se cuenta con el mismo esquema, lo que a provocado que no se asegure debidamente esta garantía.

Por lo tanto resulta necesario cohesionar el derecho de acceso a la información con una visión integral, para que sea un mismo órgano garante, como máxima autoridad en la materia, quién vigile el ejercicio del derecho, tanto en los tres poderes clásicos, como de los demás órganos constitucionales autónomos y otros órganos autónomos no constitucionales.¹⁰

⁹ Cfr. Guzmán Tamayo, Federico, Ponencia “Por la autonomía constitucional del IFAI y de los órganos locales de transparencia: sin simulación, ni centralización, sino basada en una visión federalista eficiente y eficaz”, en el Primer Congreso jurídico, de la COMAIP, celebrado en Oaxaca, los días 9 y 10 de agosto en curso.

¹⁰ *Ibíd.*

En efecto, la naturaleza autónoma constitucional del Instituto Federal traería consigo múltiples beneficios, entre los que destaca: la seguridad jurídica y la certeza institucional, la credibilidad y confianza ciudadana; bajo los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, especialización y profesionalismo respecto de todos los poderes, órganos, entidades, personas o sujetos obligados por la ley del orden federal.

A mayor abundamiento, la propuesta por la autonomía constitucional ha sido un planteamiento constante realizado por el sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado *"Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012"*, plantea entre otros aspectos el de *"Fortalecer a los órganos garantes de transparencia —el IFAI y los órganos garantes de los estados. Mediante la autonomía constitucional."* Asimismo propone *"El mejoramiento de sus capacidades institucionales y las salvaguardas indispensables para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos"*.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuya instancia de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, señalo en su comunicado denominado *"Consensos para la Transparencia en México"*, entre otros aspectos la necesidad de *"dotar a los órganos garantes de autonomía constitucional, tanto al Órgano federal como a los de todas las entidades federativas"*.

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre. Por lo que en este sentido se propone una reforma a la fracción IV del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los procedimientos de los recursos de revisión deberán ser sustanciados precisamente por los órganos u organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal que se prevean en dicha Constitución.

Asimismo se propone adicionar un párrafo para establecer que la protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

La idea de sostener la actual denominación, a pesar de transitar en su consolidación como órgano constitucional autónomo, parte de la convicción de reconocer su credibilidad y reconocimiento institucional, no es una reforma que parte de su descredito, sino de la necesidad de su perfeccionamiento, de mejorar la eficacia del ejercicio del derecho al ampliar el radio de acción o el ámbito competencial de dicho Instituto.

Por otra parte, cabe acotar que en virtud de que el artículo 6° Constitucional es el precepto donde se estatuye propiamente el derecho de acceso a la información, es que la referencia del organismo federal como órgano garante solo es en cuanto a esta materia. Siendo el caso que en lo que hace a los datos personales se propone que sea en el artículo 16 donde se disponga a este mismo organismo como garante de la protección de

los datos personales del orden federal, pues este precepto es precisamente el que reconoce el derecho de datos personales como un derecho autónomo del de acceso a la información y cualquier otro derecho.

Esta propuesta se hace para dejar claro que el derecho de acceso a la información es distinto y distinguible del derecho de protección de datos personales. Pero a su vez reconocer la dualidad que los organismos garantes del orden federal como local tienen como autoridad máxima en ambas materias. Se estima que resulta inadecuado aludir en el artículo 6º que el organismo garante federal que se propone estatuir también lo será de los datos personales, ya que se estima que ello sería un inoportuno diseño normativo, pues como ya se dijo el artículo que establece el derecho de protección de datos como derecho autónomo e independiente, y no como un límite del derecho de acceso a la información lo es el artículo 16 constitucional. Sin dejar de advertir que una propuesta técnica que se llegó a reflexionar como alternativa era la de constituir a dicho organismo garante federal en el artículo 41 o 102 de la Constitución General, sin embargo después de varias reflexiones se arribó que lo oportuno era el diseño que hoy se plantea en esta iniciativa.

No deja de advertirse, que en la presente iniciativa se hace referencia a la denominación de "organismo" en lugar de "órgano", por estimar que este es el concepto más adecuado jurídicamente para aludir a un autónomo constitucional, para dejar claro su independencia frente a los poderes clásicos; y si bien se puede decir que es un órgano frente a la estructura del Estado, lo cierto es que es un organismo ante los poderes públicos clásicos y demás organismos constitucionales autónomos ya reconocidos en la Constitución General. Incluso la denominación de "organismo" sería congruente con la que se emplea para el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el IFE. Finalmente, también sería coincidente con lo que se expuso en la reforma anterior en materia de acceso al artículo 6º Constitucional, en cuyo dictamen se expuso:

"Es importante precisar que la iniciativa utiliza los conceptos de órgano u organismo. Esto no fue casual: responde a una distinción técnicamente importante. Los organismos son entes públicos que administran asuntos específicos y que cuentan con determinados grados de autonomía e independencia. El organismo, además de ser un principio de organización, constituye un reparto de competencias públicas, integrándose una persona de derecho público, con personalidad jurídica, recursos propios y a la cual se le han delegado poderes de decisión; como ejemplo, tenemos a los denominados organismos constitucionales, así como a los organismos descentralizados, constituidos en el ámbito de la administración pública. Por el otro lado, el órgano materializa un reparto de atribuciones dentro de la misma persona pública, no ya la creación de un ente diverso y ajeno ella, pero que se le dota de facultades para su actuación y decisión, asimismo imparcial."

Por lo tanto, la constitución como autónomo constitucional, implica un reparto de competencias públicas y la creación de una persona de derecho público, personalidad jurídica, patrimonio propio y poder de decisión, por lo tanto resulta adecuado la denominación de "organismos".

Acotado ello, la autonomía constitucional que se plantea ha de implicar -como ya se dijo- el dotar de garantías eficaces al organismo garante en materia de acceso a la información del orden federal, para que pueda desarrollar o desplegar debidamente la tarea estatal encomendada. Por lo tanto dentro del diseño normativo que se plantea en esta iniciativa

para constituir al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como organismo constitucional autónomo en el artículo 6º Constitucional, es que se proponen los aspectos siguientes:

- **AUTONOMÍA EN SU FUNCIONAMIENTO E INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES.** Se plantea que dicho organismo constitucional autónomo –en lo sucesivo también Instituto o Instituto Federal- este dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación;

Cuando se alude a que dicho organismo garante deba gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, implica una garantía constitucional en favor de los gobernados y del propio organismo garante, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o, incluso, de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural, tal y como lo ha sostenido nuestro máximo Tribunal.

Por lo tanto la propuesta busca dejar claro la facultad del organismo garante para resolver con libertad los asuntos de su competencia, sin interferencia de otros poderes u otros organismos públicos autónomos, salvo los medios de control que establezca la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones aplicables.

- **EL ORGANISMO GARANTE COMO DEPOSITARIO DE LA AUTORIDAD EN LA MATERIA.** El Instituto será el depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como autoridad, también se encargará de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.
- **COMPETENCIA SOBRE TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ORDEN FEDERAL (CON EXCEPCION DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA).** Se propone que el organismo garante sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública (obviamente también de la protección de datos personales) en posesión los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará ampliamente más adelante.
- **SE EXCEPTUA A LA SUPREMA CORTE DE LA COMPETENCIA DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL AUTONOMO.** Se prevé que la única

18
181

excepción en la competencia del organismo garante federal, sea la Suprema Corte de Justicia, en virtud de ser ésta la última instancia jurídica y la máxima intérprete de la Constitución.

En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos Poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad.

La Suprema Corte es el órgano competente del conocer las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, así como de atraer aquellos asuntos de amparo que estime. Por lo tanto, es el órgano judicial máximo de control de constitucionalidad.

En esa virtud, y toda vez que imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones. Por lo que en ese sentido, resulta justificable excluir de la competencia del organismo garante federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la calidad que ésta tiene como tribunal constitucional y órgano límite del Estado mexicano o instancia última para resolver toda controversia que pudiera suscitarse en la materia, al ser el responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución.

Lo anterior de ninguna manera implica que la Suprema Corte de Justicia este ajena como sujeto obligado en materia de acceso a la información, ya que en la presente iniciativa se propone también una reforma a la fracción I, del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General para establecer que *"Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad"*. Incluyéndose en dicho alcance a todos los órganos del poder Judicial, entre ellos a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyéndola así como un sujeto obligado más en el acceso a la información, por lo que será en las disposiciones aplicables donde se determinará la forma de hacer efectivo el derecho de acceso a la información en posesión de la Corte.

- **GARANTIAS O CARACTERISTICAS DE LA AUTONOMIA.** Se propone que para el desempeño de sus funciones dicho organismo garante cuente con *autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria*, a fin de completar el círculo de su autonomía, junto con la propuesta de que será independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

Es así que la *autonomía técnica* estaría relacionada con la manera en que el órgano ejerce sus atribuciones, es decir, con sus métodos y procedimientos, y la naturaleza y profundidad de sus decisiones. Implica poder decidir sin interferencias, sobre la planeación y desarrollo de sus funciones constitucionales.

La *autonomía de gestión* entrañaría las facultades suficientes para decidir sobre la forma en que se administran los recursos, financieros, humanos y materiales del órgano; igualmente para decidir sobre su organización interna y su funcionamiento. Acotar lo anterior, mediante una ley orgánica o disposiciones legales que establezcan la manera en como debe organizarse, pudiese disminuirse sensiblemente dicha autonomía.

La *autonomía jurídica*, implicaría la capacidad de dictar normas para su autorregulación, para normar en el ámbito administrativo las disposiciones legales que se desprendan de sus funciones constitucionales, y llevar a cabo todas las acciones legales para que se cumplan con sus determinaciones.

Por lo que hace a la *autonomía presupuestal* –propuesta que se abordara de manera más puntual más adelante– implica de suyo asegurar los recursos económicos suficientes al órgano garante para que pueda cumplir con su encargo, y en todo caso dicha autonomía implica varios alcances entre ellos la facultad para elaborar y aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a las instancias competentes para su incorporación al Presupuesto de Egresos, ejercer dicho presupuesto, autorizar las adecuaciones a los mismos, determinar los ajustes correspondientes en caso de disminución de ingresos, entre otros. Pero observando las disposiciones legales aplicables, los criterios generales de política económica, así como los principios de eficiencia, eficacia y transparencia, estando sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes.

Lo anterior, sin dejar de advertir que cuando se aduce que además serán independiente en sus decisiones y funcionamiento, en sí mismo se está reconociendo que gozan de autonomía de decisión y autonomía de funcionamiento.

- **EL INSTITUTO COMO ORGANISMO RESOLUTOR EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO.** El organismo constitucional autónomo será competente para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados por la Ley -con excepción de la Suprema Corte-, en el ámbito de la competencia federal.
- **FACULTAD DE INTERPRETACION EN EL ORDEN ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL ORGANISMO GARANTE.** Se propone dejar explícito que el Instituto Federal podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1º de la Constitución General.

En ese sentido, cabe resaltar que nuestro marco constitucional federal, y en consecuencia todo el orden jurídico mexicano, a partir de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, adoptó precisamente el concepto de derechos humanos, en tanto prerrogativa que tutela la dignidad, libertad y vida privada de las personas, o el otorgamiento de prerrogativas por la pertenencia a un grupo determinado, y por ello entonces, se está en presencia de un nuevo paradigma en cuanto a la protección del Estado de bienes jurídicos fundamentales de la persona.

Sin duda que la reforma constitucional en materia de derechos humanos -más la resolución de la Suprema Corte dictada en el caso Rosendo Radilla (expediente varios 912/2010, engrose publicado el 4 de octubre del año 2011 en el Diario Oficial de la Federación), constituyeron el camino para facilitar que en el orden interno todas las autoridades del Estado Mexicano cumplan con las obligaciones que en materia de respeto y protección de los derechos humanos, se han asumido ante la comunidad internacional.

Lo anterior, sin duda tiene una gran relevancia en las funciones que tienen encomendadas los organismo garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales tanto del orden federal como local, en tanto que fija la manera en que éstos deberán razonar sus resoluciones, a la luz de las reformas constitucionales ya citadas, así como de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado mexicano, siempre en aras de beneficiar a los particulares.

Luego entonces, se puede reiterar que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se insertaron diversas novedades importantes, las cuales vinieron a cambiar de manera profunda la forma de concebir, interpretar y aplicar dichos derechos en nuestro país. Así, entre las novedades se tienen las siguientes:

- En el artículo primero constitucional se recoge la figura de la "interpretación conforme", al cual ya se hizo referencia, pero que en resumen implica que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales.
- Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación "*pro personae*", al cual también ya se hizo referencia, pero cuyo alcance implica que a la interpretación que se haga de una norma jurídica deberá optarse por aquella que proteja de mejor manera al titular del derecho humano.
- En el párrafo tercero del artículo primero, se establece la obligación del Estado mexicano (en todos sus órdenes de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano "reconocido" por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.

Luego entonces, el organismo constitucional autónomo garante que se plantea, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano de acceso a la información pública y de protección de datos personales, debe por lo menos efectuar la interpretación al amparo de los principios y características descritas, y conforme a los últimos criterios fijados por nuestro máximo tribunal en materia de control de constitucionalidad. Ante ello, y a la luz de los avances en materia de derechos humanos, se arriba a la consideración de que el órgano constitucional autónomo garante, en aras de proteger, garantizar y cumplir con la tutela del derecho humano referente al acceso a la información pública o protección de datos personales, podría en forma oficiosa, de acuerdo a su naturaleza, efectuar por lo menos la interpretación mas favorable de las normas que regulen el ejercicio del derecho humano, e incluso se abre la perspectiva para llevar a cabo un control difuso de la constitucionalidad y convencionalidad de las disposiciones que restringen el disfrute de un derecho humano, ya como órgano constitucional autónomo, garante de los derechos humanos de su competencia.

Por lo que resulta comprensible y viable la propuesta que se plantea en cuanto a reconocer en el texto constitucional la facultad de interpretación en sede administrativa de este organismo, sobre todo porque también se estaría planteando para los órganos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, a fin de evitar que en algunos casos se prive de esta facultad tan importante que deben tener estos órganos resolutores garantes de derechos fundamentales.

- PRINCIPIOS EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION EN LA MATERIA. Se plantea que en el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

Si bien el alcance de dichos principios es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

- La *certeza* implica que las acciones que desempeñe el organismo garante o Instituto estarán dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables.
- La *legalidad* conlleva que en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones que tiene encomendadas, el Instituto debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamenta. Dicho principio generalmente se suele explicar con la conocida máxima de que *"las autoridades solamente pueden hacer aquello para lo que están facultadas por el orden jurídico"*, es decir, que deben actuar siempre con base a una norma jurídica. En principio opuesto es el que se aplica a los particulares *"Todo lo que no esta prohibido está permitido"*.
- La *independencia* es la garantía y atributos de que disponen los órganos y autoridades que conforman la Institución para que sus procesos de deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y

respondan única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total independencia respecto a cualquier poder establecido.

- La *imparcialidad* tiene como alcance que en el desarrollo de sus actividades, todos los integrantes del Instituto deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.
 - El *profesionalismo* conlleva que los servidores públicos han de prepararse y actualizarse, ejecutando con diligencia las actividades necesarias para alcanzar, de manera progresiva, el desarrollo y la madurez en el cumplimiento de los compromisos, deberes y responsabilidades adquiridos, e insertarse dentro de un servicio profesional de carrera para ahondar en la especialización institucional.
 - La *celeridad* conlleva que en materia de transparencia y acceso a la información pública los mecanismos y procedimientos al respecto sean expeditos, es decir, sin dilaciones indebidas. Se trata que los órganos competentes resuelvan los asuntos que se les plantean lo más pronto y rápido posible. Lo anterior bajo la máxima que dice "*justicia que llega tarde deja de ser justicia*".
 - La *transparencia* conlleva a hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la rendición de cuentas, así como de la difusión de información sobre las tareas que tiene encomendadas y de la aplicación de los recursos públicos entregados.
 - La *máxima publicidad* implica el privilegiar el interés público así como la difusión de información pública, útil, oportuna y de interés, relativa al ejercicio de las atribuciones u obligaciones de los sujetos obligados a los que debe vigilar y controlar.
 - La *objetividad* implica la exigencia de un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.
- **ORGANO SUPERIOR DE DECISION COLEGIADO.** Se planea que el Consejo General sea el órgano superior de dirección y administración del Instituto, integrado de manera colegiada por siete comisionados.

Se propone *aumentar de cinco a siete el número de comisionados*, tomando en consideración que ya constituido como organismo constitucional autónomo dicho Instituto Federal se verá ampliado en su radio de acción o competencia respecto al número de sujetos obligados; además de que también se estaría ampliando la gama de atribuciones como lo es la presentación de acciones de constitucionalidad y de manera particular sus atribuciones en la nueva relación que se plantea con los órganos garantes de las entidades federativas y ante el

mecanismo de defensa en favor de los particulares, para que el nuevo organismo autónomo garante federal conozca de los recursos que se presenten contra las resoluciones de los órganos garante locales. Así, sin duda exigirá un diseño orgánico normativo del nuevo órgano garante federal, lo que inicia desde luego con su propio órgano superior de decisión y administración.

- **EQUIDAD DE GÉNERO EN LA INTEGRACION DEL ORGANISMO GARANTE.** Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano garante, y en búsqueda de la nivelación en paridad del papel de la mujer en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera particular en los órganos directivos.
- **DURACION DEL CARGO DE LOS COMISIONADOS POR UN PERIODO DETERMINADO.** Se propone que los comisionados duren en su cargo *nueve años*, y sin que puedan ser reelectos. Esto con el fin de asegurar los principios de independencia y estabilidad que requieren los integrantes del órgano máximo de decisión para desempeñar sus tareas de manera imparcial.

Se estima que el periodo de nueve años se constituye como una propuesta equilibrada para alcanzar los principios referidos, más aun cuando se está planteando la no reelección e impedimentos para que los comisionados se desempeñen en otros cargos o empleos. Lo que se busca con dicho periodo, es que la inestabilidad laboral al corto plazo no merme la independencia o la libertad de juicio en la actuación de los integrantes del órgano máximo de decisión, es así, que nueve años es un periodo prudente que da al integrante serenidad en el ejercicio del encargo.

- **RENOVACION ESCALONADA DE LOS COMISIONADOS.** Se plantea que los Comisionados sean renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Ello con el propósito de aprovechar la experiencia adquirida y para dar continuidad a las políticas y los programas institucionales de mediano y largo plazo.

A fin de asegurar la renovación escalonada, se propone prever que, de darse la falta absoluta de algún comisionado o del comisionado Presidente, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante.

- **REMOCION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ESPECIAL.** Se prevé que los Comisionados solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de la Constitución General de la República, lo que implica que cuenten con las garantías o prerrogativas de inmunidad constitucional, tal y como se prevé para otros funcionarios con altas responsabilidades, tanto de la Federación como de los estados. Esto, con el fin de evitar amenazas, injerencias o presiones indebidas en sus funciones, y ahondar en el principio de estabilidad del que deben gozar dichos órganos.

Lo que se busca es garantizar el principio de inmunidad y de que los titulares del órgano máximo de decisión del organismo garante solo pueden ser removidos por el señalamiento de responsabilidades, y no por una cuestión unipersonal o

187

voluntariosa, es que se debe prever un procedimiento específico para la remoción de los comisionados.

Congruente con la reforma en el artículo 6º que plantea la iniciativa a este respecto, se perfecciona y complementa con la propuesta de reforma al artículo 111 de la Constitución General, previendo que para proceder penalmente contra los comisionados del organismo garante federal por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Siendo el caso como se sabe que dicho procedimiento obviamente se sustanciará y resolverá en términos de la legislación aplicable.

- **PROCEDIMIENTO DE DESIGNACION DE LOS COMISIONADOS MEDIANTE UNA MAYORIA LEGISLATIVA REFORZADA, SIN INTERVENCION DEL TITULAR DEL EJECUTIVO.** Se propone que los Comisionados sean designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los Grupo Parlamentarios.

Cabe recordar que actualmente la designación de los Comisionados del IFAI la hace el Presidente de la República mediante un mínimo esquema de participación del Poder Legislativo, que a través del Senado simplemente no objeta la decisión presidencial y con ello, al término del plazo fijado, la designación cobra sus efectos porque no hubo objeción senatorial, lo que no quiere decir que el senado haya hecho suya la decisión del Poder Ejecutivo, simplemente que no la objetó.

Se estima que el esquema actual del nombramiento de los titulares o comisionados descrito, se podría decir que probablemente resulte consecuente con la naturaleza jurídica del IFAI, que es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, aunque no sectorizado a ninguna de las Secretarías de Estado. El IFAI actualmente es un órgano que forma parte de la Administración Pública Federal (sector paraestatal) que encabeza, y de modo indelegable e intransferible, el Presidente de la República; es un mandato unipersonal. El IFAI es actualmente un órgano garante del Ejecutivo Federal para la apertura informativa, la protección de datos del sector público federal y, la nueva competencia que se le ha asignado, la de fungir como órgano máximo de la tutela de los datos personales en posesión de particulares.

Si bien dicho esquema de designación podría resultar en cierta medida comprensible actualmente por la naturaleza jurídica del IFAI, y de su radio de acción o competencia, lo cierto es que dicho mecanismo de nombramiento no sería oportuno, ni adecuado, ni guardaría proporción con la trascendencia que se le daría al órgano garante federal, en su transformación como órgano constitucional autónomo, y como depositario de la autoridad en la materia dentro del régimen interior del Estado, responsable de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los demás órganos a los que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de la autoridad en el ámbito federal. Propuesta esta que se abordará

ampliamente más adelante. Así como autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, todo ello en el ámbito de la competencia de la Federación.

Por lo tanto, se estima que el mecanismo de nombramiento adecuado para la conformación del organismo garante federal, en su nueva naturaleza como constitucional autónomo, debe ser la designación por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta que realicen los grupos parlamentarios. Dejando así que la designación sea hecha por el órgano legislativo únicamente sin la intervención del titular del Ejecutivo.

La presente iniciativa plantea que la designación se haga por una mayoría calificada. Es decir la decisión del órgano legislativo para la designación de los comisionados reclama o exige una mayoría reforzada; es decir de las dos terceras partes de los legisladores presentes. Esquema que busca garantizar que los comisionados gocen de un amplísimo respaldo legislativo como plataforma de partida a su gestión y, a la vez, testimonia una plural decisión legislativa que permite liberar a los designados de alguna tendencia o pertenencia partidista.

Se trata que la designación sea resultado de un sano consenso parlamentario o de equilibrio legislativo entre las distintas fuerzas políticas o bien de varias de ellas; y que la decisión no quede en una sola fuerza, o cuyo nombramiento descansa en una voluntad partidista, con el riesgo de que en el designado aflore o se permee un compromiso partidista frente a dicha designación unilateral, con la posibilidad latente de arrastrar a su paso cualquier propuesta que se centre en los méritos y en las virtudes de los candidatos.

Por lo tanto, un antídoto eficaz para evitar o prevenir ello es la exigencia de una mayoría calificada en la designación de los Comisionados, que implica la adhesión de los votos de legisladores de distintas bancadas, y sea una determinación plural y de amplio consenso, lo que dotaría de una mayor legitimidad a la persona designada.

- **CONSULTA Y AUSCULTACION PÚBLICA EN LA DESIGNACION.** Se propone que la designación se hará previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley federal, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. Siendo que la ley determinará las reglas y procedimientos para ello.

Esta idea parte de que la designación no se haga tras bambalinas legislativas ni a puerta cerrada, sino a la luz pública. Y si bien no deja de reconocerse, que la crítica puede llegar hacer que la experiencia puede arribar en convertir ello en una pasarela inútil, o la espectacularidad de las comparecencias, en las que puede

ocurrir una trato inequitativo a los aspirantes, y otros bemoles más, lo cierto es que es preferible que la designación se haga a través de la mirada observadora de la sociedad, que en lo obscuro o a espaldas del escrutinio social.

- **TOMA DE PROTESTA DE LOS COMISIONADOS.** Se sugiere prever que los comisionados designados al órgano máximo de dirección rendirán protesta ante el Pleno del Senado o la Comisión Permanente, según corresponda, en los términos de la legislación correspondiente.
- **ELECCION DEL PRESIDENTE DEL ORGANISMO POR LOS PROPIOS COMISIONADOS.** Se propone que la designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de reelección por un periodo igual.
- **REQUISITOS DE IDONEIDAD AL CARGO DE COMISIONADO.** Se propone que para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Lo anterior, bajo la base de que la especialización del órgano garante exige como premisa que quienes integran el órgano máximo de decisión sean personas con capacidad y experiencia en la materia, pero también es condición necesaria para cumplir con el criterio de apoliticidad, bajo el entendido de que estos órganos son técnicos no políticos. Bajo ese mismo criterio, es oportuno establecer las condiciones que aseguren que los integrantes del órgano de decisión actúen ajenos a cualquier subordinación, complacencia o favoritismo en favor de algún partido político.

La propuesta que se hace parte de la convicción de establecer también condiciones suficientes que permitan presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de la cual hubieran compartido un fin político común. Por lo tanto la propuesta lo que busca es contribuir a la vigencia efectiva de los principios de independencia, autonomía e imparcialidad del órgano garante.

Además, el planteamiento se hace a la luz de que estos mismos requisitos sean la base para el caso de los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los órganos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/2005, que se encuentra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, julio de dos mil cinco, página 796, Novena Época, que señala lo siguiente:

"TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN. LOS ARTICULOS 90, FRACCIONES VI Y X, 91, 111, FRACCIONES VI Y X, 120, FRACCIONES VI Y X, Y 281, FRACCIONES VII Y XI, DEL CODIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y SECRETARIOS TECNICOS DEL CONSEJO ELECTORAL, DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES, ASI COMO MAGISTRADOS NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y AUTONOMIA PREVISTOS EN EL ARTICULO 116, FRACCION IV, DE LA CONSTITUCION FEDERAL. De los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales son principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; sin embargo, no existe precepto constitucional que imponga a las Legislaturas Locales la obligación de establecer requisitos para seleccionar a las personas que ocuparán un cargo dentro de los órganos encargados de la función electoral, de manera que para que las citadas legislaturas cumplan y se ajusten a los mencionados principios rectores es suficiente con que los adopten en su sistema electoral. En ese sentido, el hecho de que los artículos del Código Electoral establezcan como requisito para ser consejero ciudadano o secretario técnico del Consejo Electoral Estatal, de los Consejos Distritales y Municipales, o Magistrado del Tribunal Electoral Local, no haber sido candidato a cargo de elección popular o dirigente en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político durante los tres años previos a la elección, no viola los principios de independencia, autonomía e imparcialidad que deben regir el ejercicio de la actividad electoral por parte de las autoridades electorales, porque en todo caso ese plazo es el que el legislador local consideró suficiente para presumir que los aspirantes se encuentran desvinculados con la institución dentro de la cual hubieran compartido un fin político común".

- REGIMEN DE IMPEDIMENTOS PARA LOS COMISIONADOS. Se plantea que los Comisionados y el Comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas.

Este régimen, con el fin de que los comisionados actúen de manera independiente e imparcial con respecto a los sujetos obligados.

28
191

Congruente con lo anterior, se propone también que quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

- EVITAR CONFLICTO DE INTERES EN LA ACTUACION. Se prevé que en la Ley Federal se establecerá los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún conflicto de interés o impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.
- RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANO DE DIRECCION. Se propone que las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Ello con el fin de que su actuar se encuentre debidamente supervisado, verificado e inspeccionado.

- RENDICION DE CUENTAS A TRAVÉS DE UN INFORME ANUAL. Se prevé que el Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El propósito es evaluar el desempeño del órgano autónomo en las atribuciones encomendadas, así como conocer el adecuado ejercicio de los recursos asignados.

Además, como ya se dijo uno de los características de los órganos garantes es el de estar sujetos a esquemas de transparencia, es decir, los actos y decisiones de los órganos autónomos, salvo los casos justificables de excepción, deben ser conocidos por cualquier ciudadano, y cualquiera deberá tener acceso a la información sobre la actuación de estos.

- GARANTIA DE REMUNERACION ADECUADA DE LOS COMISIONADOS. Se propone prever una disposición que dote de garantías a los operadores del órgano máximo de decisión, para ello se propone disponer que los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Como se prevé tal redacción para el caso de los Ministros de la Corte del Poder Judicial de la Federación.

Esta propuesta, tiene por objeto de que los integrantes del órgano máximo de decisión no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. Más aun por la alta función que se le está encomendando al organismo garante, y para la cual se le otorga independencia en sus decisiones para actuar con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, por lo que es más que evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a dicho

192 29

organismo autónomo le son por supuesto aplicables a los integrantes del órgano máximo de dirección y administración, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada por el ejercicio de su encargo.

Sirve de ilustración a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/2007, que está publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, página 740, Novena Época, cuya sinopsis es:

"ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL ARTICULO 111, FRACCION III, INCISO D), DEL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN, QUE PREVE QUE LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEL INSTITUTO ELECTORAL ESTATAL GOZARAN DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES DE LA REMUNERACION QUE DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS LES CORRESPONDA Y QUE ENTRE PROCESOS, RECIBIRAN UNICAMENTE DIETAS DE ASISTENCIA A LA SESION, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA, AUTONOMIA E IMPARCIALIDAD. Si se toma en cuenta que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones se rigen bajo los mismos principios que las autoridades jurisdiccionales en la materia, esto es, en el goce de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en ambos casos la finalidad del órgano reformador de la Constitución Federal es que las autoridades electorales (tanto administrativas como jurisdiccionales), dada la alta función que les fue encomendada, emitan sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable, resulta evidente que los conceptos de autonomía e independencia desarrollados en torno a los Poderes Judiciales Locales son aplicables a los integrantes de los organismos estatales encargados de la organización de las elecciones, en específico, el relativo al derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable que no podrá disminuirse durante su encargo, con el objeto de que no se vean expuestos a influencias extrañas que afecten su imparcialidad, en perjuicio de la sociedad. En congruencia con lo anterior y toda vez que los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán ejercen de manera permanente las funciones que les fueron encomendadas tanto en los procesos electorales como durante el periodo interprocesal, se concluye que el artículo 111, fracción III, inciso d), del Código Electoral del Estado de Michoacán, al prever que dichos consejeros gozarán '... durante los procesos electorales...' de la remuneración que de acuerdo al presupuesto de egresos les corresponda y que '... entre procesos, recibirán únicamente dietas de asistencia a la sesión...', transgrede los principios rectores de independencia, autonomía e imparcialidad contenidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución Federal, en virtud de que durante el tiempo que ocupen el cargo tienen derecho a todas las prerrogativas derivadas de su designación."

- **SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA PARA LA ESPECIALIZACION.** Al respecto se plantea en primer lugar que dicho organismo "sea profesional en su actuación"; en segundo prever como uno de los principios de actuación el de profesionalismo, y tercero se propone disponer que el organismo garante deberá contar con el personal calificado necesario para prestar el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Lo anterior si se toma en cuenta que al atribuirle al organismo garante, especialidad en la materia, implica que, éste deba conocer exclusivamente del derecho de acceso a la información (y por su dualidad de órganos garantes, también del derecho de datos personales), lo que a su vez se traduce en la necesidad de contar con el personal profesional necesario, lo que solo se logra mediante mecanismos de selección en el ingreso, permanencia, capacitación, promoción, evaluación, etc., fases estas que son parte de un servicio de carrera.

- **UN CONSEJO CONSULTIVO DENTRO DEL INSTITUTO.** Dicho consejo será un órgano de asesoría, seguimiento y evaluación de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle el Instituto Federal en el ejercicio de sus funciones. En todo caso será la Ley la que determinará sus atribuciones e integración. Lo anterior, conscientes de que la democracia va más allá de los votos, y porque la participación y evaluación social crean condiciones para el mejor funcionamiento de la institución.
- **SISTEMA DE COOPERACION EN LA MATERIA.** Se propone que el Instituto Federal pueda conformar con los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho de acceso a la información.

Esta propuesta parte del reconocimiento del que hoy goza por ejemplo la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), cuyos Estatutos la reconocen como el espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por el IFAI y los órganos u organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, cuyas finalidades están entre otras precisamente el impulso nacional del principio de máxima publicidad; la transparencia de la información; la apertura gubernamental; el intercambio de experiencias, razonamientos jurídicos y criterios de clasificación; y, propiciar, fomentar e impulsar la cultura de la transparencia y protección de datos personales entre la sociedad mexicana. Lo anterior, ya es un hecho que solo necesita ser elevado al rango de norma; además este tipo de espacios de cooperación ya se ha venido experimentado en otros materias como el caso de la Conferencia de Procuradores, Secretarios de Seguridad Pública o Tribunales de Justicia, por citar algunos.

Asimismo se plante que el Instituto pueda celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

- 31
1991
- **GARANTÍA DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL.** Se propone que Instituto Federal, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Que para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

2. CONCEPTO AMPLIO DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS O SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Como ya se dijo el actual radio de acción del Instituto Federal es sobre las dependencias y entidades de la administración pública federal. Hoy el Instituto Federal conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero solo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

Como se acoto no interviene como organismo especializado en la materia frente actos u omisiones sobre los poderes públicos tradicionales, tampoco sobre los órganos constitucionales autónomos. Siendo precisamente, que uno de los ejes centrales que animan la presente iniciativa por la autonomía constitucional del órgano garante federal, el que este pueda tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal.

La idea de constituir un defensor en la materia, como organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, parte de la condición necesaria para poder ampliar su radio de acción frente a todos los poderes, entes u organismos públicos federales. Por lo tanto la competencia no es en favor de un órgano descentralizado, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica, que le asegure al gobernado su derecho de acceso a la información, sin importar el poder u órgano federal que hubiera violentado el derecho.

Por lo tanto se plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, así como la que esta en posesión de los tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los que la Constitución les otorga autonomía.

Pero no solamente se propone que su radio de acción sea sobre los poderes, tribunales, universidades públicas y demás órganos autónomos, sino también sobre otros entes, entidades o personas a saber:

- Fideicomisos y fondos públicos,
- Partidos Políticos

- Sobre cualquier persona física o moral (jurídica colectiva), organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos
- Sobre cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En efecto, se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien o aquellos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma automática o lógica se actualizan como sujetos obligados – indirectos- en materia de acceso a la información pública.

Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquellas personas físicas o morales (jurídicas colectivas) que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, se propone que el acceso se realice a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello los propios sujetos obligados directos respectivos.

Respecto de la propuestas anteriores, resulta oportuno aludir al *Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México*, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto de Investigaciones de la UNAM, en donde en el rubro de Sujetos Obligados propone (en este caso respecto del ámbito federal) que sean considerados como sujetos obligados a el Poder Ejecutivo del Estado; la Administración Pública, incluyendo a los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal, y los fideicomisos públicos; el Poder Legislativo y su Órganos de Fiscalización cualquiera que sea su denominación; el Poder Judicial; los tribunales administrativos; los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas (en los términos que disponga la legislación electoral) [a través del Instituto Electoral del Estado]; las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo; y el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral (Artículo 201).

A este respecto, dicho *Código de Buenas Prácticas*¹¹, en el rubro de Sujetos Obligados señalo lo siguiente:

“El capítulo segundo desarrolla el concepto de “autoridad, entidad, órgano u organismo” contenido en el artículo 6º constitucional. Para este propósito, precisa quiénes son los sujetos obligados. Respecto de ellos, conviene señalar dos aspectos que generaron una importante controversia durante la elaboración del CBP: el primero, la inclusión de los partidos políticos y el segundo la condición de algunos particulares, tales como los sindicatos y otras personas privadas, que realizan funciones públicas.

La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados fue un tema ampliamente discutido durante la reforma constitucional. El dictamen de la

¹¹ Véase López Ayllón, Sergio (Coord.). *Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México*. UNAM/CIDE/IFAI, México, 2007, pag.25 a 26:

196

Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. La razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son "entidades de interés público". No obstante lo anterior, once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Las primeras propuestas del CBP proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los consideraban sujetos obligados directos. Una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados¹¹, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Es en este último sentido en que se redactó el texto del CBP, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Una consideración adicional es si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local. Esta es una cuestión que el CBP deja abierta y se presentan ambas opciones. Cabe señalar al respecto que algunas autoridades electorales han sugerido que conviene que el acceso a la información de los partidos políticos se realice a través de ellas, pues tienen mejores herramientas, conocimiento y mecanismos de supervisión para garantizar el debido acceso a la información pública de los partidos y asociaciones políticas. Otros consideran por el contrario que es primordial que los ciudadanos puedan solicitar información de manera directa a los partidos políticos pues estos poseen información más actualizada que aquella que es proporcionada a las autoridades electorales.

Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comentarios de las reuniones regionales sobre la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. Debe hacerse notar, sin

embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa, sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.”

Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad

En relación con la información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que supervise estas actividades (Artículo 203). Siendo que lo importante a destacar es que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea considerada como información pública.

Luego entonces, conforme al Código de Buenas Prácticas la regulación debe permitir otorgar acceso a la información de los sindicatos (con excepción de las cuotas sindicales), las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.

Sin embargo, como en el mismo Código se acota respecto de éstos el acceso se hará a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares, siendo que la razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.

Así, cabe considerar que la obligación de rendir cuentas y de permitir el acceso a la información —respecto de la entrega de recursos públicos— corresponde al sujeto obligado por la Ley que los desembolsa; es decir, a las autoridades responsables.¹²

Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que “por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados.

También, se expone que a fin de regular el derecho de acceso a la información pública que pudieran poseer los particulares se atendió a la ampliación del concepto de autoridad que para efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio, más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una administración pública cada día más compleja, la distinción del carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE,

¹² López Ayllón, Sergio. “Los sujetos del derecho de acceso a la información” en Carbonell, Miguel (Coord.). *Hacia una democracia de contenidos: la reforma constitucional en materia de transparencia IIJ-* UNAM/InfoDF/IFAI, México 2007, pág. 35-36.

EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO. Es importante precisar que el acceso a la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales". Esta disposición constitucional deja justificado claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.

Como se sabe previo a la reforma constitucional al artículo 6°, las leyes de las entidades federativas presentaban importantes variaciones en cuanto a los sujetos obligados. Por ejemplo, únicamente once entidades federativas incluían a los partidos políticos como sujetos obligados directos, siete más los contemplaban como sujetos obligados indirectos, en nueve casos se incluyeron por interpretación y en cinco casos fueron excluidos. Asimismo, veintitrés leyes locales de transparencia consideraban que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos son también sujetos obligados del derecho de acceso a la información.¹³

En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.

Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, "este es el caso de los notarios públicos, de los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo"¹⁴. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.¹⁵

Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal, toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercito o ejecuto un acto de autoridad, no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.

Sindicatos

El camino por abrir información sobre los sindicatos ha sido una tarea ardua en la que hay que seguir avanzando. Así por ejemplo cabe recordar los casos en los que frente a

¹³ *Ibid.*, pág. 25.

¹⁴ *Ibid.*, pág. 35.

¹⁵ *Ibid.*, pág. 27.

solicitudes de información se llegara a negar la misma, como es el caso de información sobre el registro de asociaciones en relación actas, estatutos, padrones y tomas de notas del sindicato, donde el sujeto obligado (Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Secretaría del Trabajo y Previsión Social), se argumentará que el afiliado tenía que solicitarla directamente al sindicato, y siempre y cuando acreditara ser agremiado, que si al agremiado se le niega la información por el sindicato debe entonces acudir ante la Junta de Conciliación a demandar por tratarse de un conflicto intergremial, que la información es de tipo reservada y confidencial por lo que requiere previo consentimiento del secretario general, que se trata de información que contiene datos personalísimos de los afiliados tales como sus domicilios, que brindar la información violaría la esfera jurídica del sindicato en razón de sus finalidades, que los sindicatos no pueden ser equiparados a sujetos obligados por la Ley, que los contratos colectivos están sujetos a un procedimiento administrativo que no ha causado estado y por lo tanto es información reservada, que los datos sobre contratos colectivos solo se otorgaran a la persona que demuestre ser trabajador en activo o que habiendo sido despedido requiera de información del contrato para elaborar su demanda, y estos y otros argumentos más para negar dicha información.

Pero vendría las determinaciones del IFAI para avanzar de manera significativa en el acceso a la información sobre sindicatos, al señalar que los documentos relacionados con el registro, toma de nota, estatutos, actas y padrones no pueden ser considerada como información clasificada, que es información de acceso público, ya que contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del Estado de Derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, y en todo caso resguardarse los domicilios de los afiliados; además de que no es requisito desahogar un procedimiento previo ante la Junta, porque el acceso a la información es público, ni tampoco es requisito acreditar el carácter de afiliado, ni interés jurídico para la entrega de la información en virtud de la calidad publica de esta.

Lo anterior, solo para ejemplificar, el por qué es necesario explicitar a los sindicatos como obligados en materia de acceso a la información pública, más aún en los casos en que reciben recursos públicos de todos los mexicanos.

Ahora bien, los criterios del IFAI han servido para avanzar en el proceso por transparentar el universo laboral, siendo oportuno lo expuesto por Giménez Cacho "existe la expectativa fundada de que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades del trabajo para resolver los registros de sindicatos y dirigentes bajo criterios de subordinación política o ideológica. La transparencia hará también posible exponer a la luz pública la amplitud de simulación de los sindicatos fantasma, que no tienen afiliados. Sirve así a los trabajadores que aspiren a contar con sindicatos que los representen. Exhibirá también el vicio degradante y fraudulento de los contratos de protección y será útil para las empresarios que muchas veces de mala gana, aceptan tanta la extorsión de falsos líderes y las sugerencias de asesores sin escrúpulos que lucran con la ilegalidad".¹⁶

Pero esto es solo el inicio o la primera ronda de este proceso por la transparencia laboral y sindical, es un tema sin duda inacabado. Ahora bien, y más allá de la rendición de cuentas que deben rendir los sindicatos y sus dirigentes a sus agremiados o afiliados, el

¹⁶ Giménez Cacho, Luis Emilio, Transparencia y derechos laborales, Cuaderno de Transparencia 12, IFAI, México, 2008, p. 45.

planteamiento es dejar claro la responsabilidad o deberes que estos tienen en el acceso a la información pública sobre los recursos públicos que reciben del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.

Efectivamente, si por virtud de un contrato colectivo, la autoridad, entidad, organismo u órgano público entrega recursos públicos a un sindicato, tal información es de carácter público, máxime cuando se trate de un sindicato que opera con recursos públicos, como es el caso de aquellos formados por trabajadores al servicio del Estado.

Es así hay que decirlo “los recursos públicos –federales- entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos son de acceso público”¹⁷. Con excepción de las cuotas sindicales en las que ya el Poder Judicial ha señalado que ni la retención ni la entrega de cuotas sindicales con actos de autoridad ni corresponden a recursos públicos, toda vez que pagado el sueldo del trabajador es un *recurso privado* al que el patrón le descuenta una cuota para entregarla íntegramente al Sindicato.¹⁸

Por lo que no es procedente que al cobijo de la libertad o autonomía sindical se niegue la información sobre la aplicación de dichos recursos. No es aceptable poner como escudo la autonomía sindical para obstaculizar el acceso a la información pública, ya que todo ente, privado o gremial, que recibe recursos públicos, se ve obligado a rendir cuentas.

Si bien, la autonomía sindical, tiene como propósito que éstos se organicen, administren, funcionen libremente y puedan cumplir con su cometido en defensa de sus agremiados, lo cierto es que ello no debe significar incompatibilidad con el acceso a la información, por lo que el manejo de los recursos económicos que se les entrega a los sindicatos por parte del Estado no debe ponerse a duda o suspicacia alguna la transparencia respecto de dicha información y la rendición de cuentas, ya que es obligación de someterse al escrutinio público para informar y dar explicación sobre la aplicación de los recursos públicos que le ha sido entregados.

Por lo tanto, es necesario cerrar la puerta a cualquier interpretación indebida que al respecto se pueda dar –como ya ha acontecido- y evitar la opacidad a este respecto, haciendo explícito que los sindicatos son sujetos obligados cuando se ubican en las circunstancias referidas, más allá de que el acceso a dicha información deba darse a través de la autoridad o dependencia que realice la entrega de recursos públicos.

Por otra parte, en la presente iniciativa se planea respecto de aquellas personas físicas o morales que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, a fin de asegurar el acceso a la información de carácter público, la obligación de éstas a proporcionar a la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o por virtud de los actos de autoridad que desplieguen. Esto se debe entender como una fórmula que viene a reforzar una obligación que estaba exclusivamente sobre las espaldas de los entes obligados, y en eso radica la veta que se abre para beneficio de la causa de la transparencia de la gestión pública y de la propia cosa pública. Se de una obligación complementaria para fortalecer el deber de satisfacer el derecho de acceso a la

¹⁷ Criterio de resolución 013-10 del IFAI.

¹⁸ Cfr. Silva Méndez, Jorge Luis, La rendición de cuentas de los sindicatos en México: hacia una solución administrativa, judicial o legislativa, UNAM, México, 2011, p. 206 a 207.

información y la rendición de cuentas, y de que los particulares expliquen que se hizo con los recursos públicos que recibieron o de los actos de autoridad que llevaron a cabo, pero como ya se dijo los sujetos obligados directos de asegurar dicho acceso al público lo serán las autoridades o sujetos obligados directos, ya que los particulares beneficiarios de recursos públicos o de realizar acto de autoridad lo hicieron por determinación o decisión de las propias autoridades, entes u organismos públicos. La rendición de cuentas sigue pesando sobre éstos que determinaron entregar fondos públicos o asignar funciones propias de la autoridad.

Luego entonces, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera explícita o expresa en la fracción I del artículo 6º Constitucional a las personas que se actualicen en los supuestos narrados con antelación y dejar claro su calidad de sujetos obligados en materia de acceso a la información pública.

Partidos Políticos.

A este respecto también resulta ilustrativo lo expresado en el Código de Buenas Prácticas referido, en donde se reconoce que la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados ha sido un tema ampliamente discutido durante la reforma constitucional. Señala que el dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlas, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. Indica que la razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son "entidades de interés público".

No obstante lo anterior señala que -en ese entonces- once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Se manifiesta que las primeras propuestas del Código de Buenas Prácticas proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los consideraban sujetos obligados directos. Señala que de una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Que fue en este último sentido en que se redactó el texto del Código, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Sin dejar de advertir que en el Código referido se hace una consideración adicional en cuanto si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local, sin embargo, se señala que esta es una cuestión que el Código deja abierta y se presentan ambas opciones.

Acotado ello, es que para los iniciadores de esta iniciativa resulta oportuno traer a colación lo que en el Dictamen del Senado se argumentó en la reforma del 29 de julio de 2007 al artículo 6 de la Constitución General, siendo que entre otros aspectos se afirmó lo siguiente "Una lectura cuidadosa del texto de la reforma, del dictamen de la Colegisladora, así como de los antecedentes que en la materia existen, tanto legislativos como los que

en la materia ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se expida. En otras palabras, los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no pueden ejercer del mismo modo y bajo las mismas condiciones las obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos del derecho de acceso a la información". Asimismo señalo que "los partidos políticos son instituciones integrantes del régimen constitucional, por lo que al lado de sus prerrogativas, que garantizan su participación representativa, están igualmente investidos de obligaciones y responsabilidades que aseguran su presencia democrática. De allí que la información que les reclame la ciudadanía, en orden a la transparencia con la que deben conducirse las instituciones republicanas, debe estar disponible en todo tiempo, considerando desde luego que no constituya una intromisión injustificada en la vida interna de los partidos y sin que se ponga en riesgo la información estratégica de su acción política y electoral".

Por lo tanto, para los efectos de esta iniciativa lo importante es homogeneizar la condición de los partidos como sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.

Por ello, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera expresa a los partidos políticos para que se actualicen en los supuestos referidos como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6º Constitucional. Es decir dejar claro que los partidos políticos si son sujetos obligados a rendir cuentas a través de los mecanismos de acceso a la información y transparencia, más aún cuando debe tomarse en cuenta que la legislación mexicana ha dispuesto un sistema de financiamiento partidista preferentemente publico o con recursos públicos sobre los privados, en cuyo caso no debe existir duda sobre un ejercicio de acceso a esa información.

Acotado ello, se está en posibilidades para que el legislador ya sea el del orden federal o de las entidades federativas determinen que los partidos políticos sean sujetos directamente obligados en materia de acceso a la información, y no solamente indirectos.

De lo que se trata es que los partidos políticos tengan la obligación de garantizar a las personas el acceso a la información que posean; administren o generen, en los términos que prevea la Ley, pero también el de llevar a cabo obligaciones de transparencia o de transparencia proactiva, es decir, que sin que medie solicitud, deban poner a disposición del público por medio de internet información básica, esencial o de interés, como es sobre sus Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna; estructura orgánica y funciones; integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección; directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica; descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su

plantilla laboral; contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución; informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores; convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de Frente que suscriban; entre otra información relevante más.

Esta propuesta de dejar claro que los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia permite cerrar o complementar el círculo con el planteamiento de que el poder Legislativo como sujeto obligado, ya quedaría sujeto a la jurisdicción del órgano garante autónomo federal. Es decir, se asegura que los partidos políticos sean por un lado sujetos obligados como entidades de interés públicos y por otro también lo sean como grupos parlamentarios –agrupación de una misma filiación partidista– al formar parte del poder Legislativo, ya sea dentro de la Cámara de Diputados o la de Senadores. En efecto, siendo sujeto obligado el órgano legislativo, se puede acceder a la información que posea sus unidades administrativas, entidades, organismos u órganos, entidades o equivalentes, como podría ser la de los propios grupos parlamentarios. Siendo el órgano garante federal el responsable de asegurar que ante una negativa pueda conocer de las impugnaciones por las que se pueda negar información sobre éstos grupos parlamentarios, que en el fondo se constituyen como sujetos obligados indirectos en el acceso a la información. Con ello se establece un piso más uniforme y parejo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, dentro del sistema democrático que nos hemos dado como Nación.

Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas

De conformidad con la fracción I del párrafo segundo del artículo 6 Constitucional, para muchos nos queda claro y no es discutible que se incluyó a las universidades públicas autónomas en la expresión “organismo federal, estatal y municipal”. Así la fracción respectiva dispone que “*Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes...*”

¹⁹Sin embargo, como bien lo ha señalado Dorangélica De la Rocha Almazán, que “Desafortunadamente, muchas universidades se escudan en la autonomía con la que fueron dotadas para no conceder acceso a la información que generan, como parte de un sistema educativo público. El pretender el conocimiento de sus datos, en muchas ocasiones, confundido con la trasgresión de su autonomía. Cosa más que errónea”. Y asevera “Es verdad que las universidades públicas gozan de cierta autonomía funcional, algunas constitucionales y otra legales –organismos descentralizados de Estado–, pero

¹⁹ De la Rocha Almazán, Dorangélica, *Transparencia, Rendición de Cuentas, y Derecho de Acceso a la información en las Universidades Públicas de México*, en la compilación del Libro *La Transparencia en las Universidades Públicas de México*, De la Rocha Almazán, Dorangélica y Guerra Ford, Oscar, (Coordinadores, Infodf, México, 2009, pág. 104.

esto no quiere decir que escapen del imperio o sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente creadas para su observancia. Dígase pues, que las universidades también deben obedecer, en su caso, al mandato que dispone las leyes de acceso a la información en México”.

Por ello afirma que no dar acceso a la información que poseen es una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática se colocan como entes de opacidad y con desconfianza social. Por lo que se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que sería contrario a un régimen democrático, y sería más grave si esto sucede en el ámbito universitario, donde se supone debe prevalecer la libertades de expresión, la formación de voces críticas, la apertura y el conocimiento, entre este el de la transparencia²⁰.

O como también lo ha señalado José Carbonell *“muchas instituciones de educación superior se esconden detrás de la autonomía con la que fueron dotadas, para evitar la implementación de sistemas de acceso a la información y transparencia. En muchos casos, la pretensión de acceder a su información es concebida de forma errónea —en estas instituciones—, como una transgresión o intento de vulnerar su autonomía”.* Por ello afirma *“Que algunas universidades públicas sean autónomas no debe ser entendido como que quedan exentas de la obligación de rendir cuentas y de los deberes más elementales de transparencia. Su autonomía no debe significar extraterritorialidad ni ningún absurdo parecido, como para que no impere el Estado de Derecho en su interior”.*²¹

Por lo que la presente propuesta, va en el camino de despegar dudas a este respecto, para aquellos que tengan dudas legítimas o bien resistencias voluntarias o se sientan incómodos con el acceso a la información en su poder, y que la autonomía universitaria no sea un pretexto, escudo para la opacidad.

Debe quedar claro, que el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de las universidades públicas es fundamental para el desarrollo nacional. Implica pasar de la percepción, por parte de los estudiantes, de ser beneficiarios de una concesión del Estado o de las autoridades, hacia la concepción de ser usuarios sujetos tanto a obligaciones como a derechos. En este caso, para poder exigir, entre otras cosas, ciertos niveles de calidad del bien público del que se están beneficiando.

Las universidades públicas son entidades que reciben recursos del erario, es decir, de todos los mexicanos como contribuyentes. En consecuencia, deben estar sujetas y por lo tanto adoptar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan rendir cuentas a la sociedad: dar a conocer qué hacen, cómo lo hacen, a qué costo, entre otros, ya sea que se trate de instituciones de carácter federal o local, según sea el caso.²²

Es importante volver a advertir tal y como lo ha señalado Jorge Carpizo McGregor que el manejo de recursos económicos no debe prestarse a duda o suspicacia algunas y por

²⁰ *Ibid.*, pág. 114.

²¹ Comentario al Artículo 21, Carbonell, Miguel, (Coordinador), Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Comentada, Infodf, México, 2012, pág. 200.

²² *Ibid.*, pág. 199 a 200.

ende en el caso de las universidades, en este aspecto, deben ser una caja de cristal.²³ Además, *"en una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes manejan recursos públicos"*.²⁴

Como se sabe de conformidad con el artículo 3º Constitucional las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. En ese sentido, se ha dicho que la autonomía implica que las instituciones educativas de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades; asimismo que la autonomía se otorga a las universidades para que puedan cumplir sus funciones sin injerencias externas y ajenas que les dificultarían el cumplimiento de aquellas conforme a los principios de excelencia académica y proyección social, para que la educación que se imparta e encuentre libre de todo dogmatismo o ideología. Por su parte, el derecho a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional, es una de las bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los individuos deben estar bien informados, con veracidad y objetividad.²⁵

Por lo tanto, *"no es posible que pueda existir contradicción, jerarquía o conflicto entre los derechos constitucionales de autonomía universitaria y el acceso a documentación pública en dichas universidades. En caso de aparente contradicción resulta necesario armonizar esos derechos constitucionales tan valioso y trascendentes uno del otro"*.²⁶ Luego entonces, cumplir con el derecho a la información y el acceso a la documentación publica por parte de las universidades públicas autónomas, es una obligación constitucional y legal para éstas, pero además es una responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y dar ejemplo de transparencia, como un principio básico de las democracias. Las universidades son parte esencial de la conciencia crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia.²⁷ Por ello el *"derecho constitucional de la autonomía universitaria es cien por ciento compatible con el de la transparencia y el acceso a la información pública. Los dos son especialmente valiosos. Los dos cumplen una función social. Lo único que hay que lograr -lo reitera- es su armonización"*.²⁸

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el *Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México* dispone que deben ser sujetos obligados y, por tanto, estar incluidos dentro de las leyes de la materia, los "Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas". Incluso, dicho Código de Buenas Prácticas propone que se establezcan obligaciones específicas o adicionales (de oficio o transparencia) cuando se trata de Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas (Artículos 201 y 312, respectivamente). Por lo que la propuesta planteada, resulta oportuna, más aun permitirá definir un piso parejo en cualquiera de los órdenes de gobierno a este respecto.

²³ Cfr. Carpizo Macgregor, Jorge, *Transparencia, Acceso a la Información y Universidad Pública Autónoma*, en la compilación del Libro *La Transparencia en las Universidades Pública de México*, op. cit., pág. 23.

²⁴ *Ibíd.*, pág. 25.

²⁵ *Ibíd.*, pág. 19 a 20.

²⁶ *Ibíd.*, pág. 31 a 32.

²⁷ *Ibíd.*, pág. 33.

²⁸ *Ibíd.*, pág. 40.

Por todo lo anterior, la propuesta que se plantea respecto a los sujetos obligados en la presente iniciativa es congruente con lo expuesto. Ya que busca por un lado prever de la manera más amplia posible quienes pueden ser considerados como entes o sujetos obligados en materia de transparencia, y por otro, que respecto de los que correspondan al orden federal el nuevo órgano constitucional autónomo de la Federación sea el órgano competente especializado respecto de la información en posesión de los mismos. Lo que ahonda sin duda, en un derecho de acceso a la información fortalecido y una política de rendición de cuentas más amplias e integrales en beneficio de la sociedad.

Finalmente, se advierte que la iniciativa incorpora el concepto mismo de sujeto obligado, bajo la base que es un concepto ya acuñado en materia de acceso a la información, y por dejar claro las implicaciones que el propio concepto tiene y refrendarles a los poderes tradicionales, órganos autónomos, entidades, entes, fideicomisos, entre otros, su deber u "obligación" para contribuir hacer efectivo el derecho de acceso a la información en su poder.

3. INCLUIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD E INATACABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS GARANTES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS, SIN RELATIVISMOS.

Como es sabido en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una "instancia no especializada".

Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte de las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este respecto, sino de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia, o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan.

Cabe recordar que el poder Judicial de la Federación, al respecto ha señalado que la Ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Así, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo los sujetos obligados en términos de la Ley deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos –como la interposición de un juicio de nulidad– o

de facto –como la simple negativa de entregar información– para eludir dicho cumplimiento. Como ilustración de lo anterior, cabe transcribir tal criterio:

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.

Amparo en revisión 168/2011. *****. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos mil doce. Doy fe.

Es así, que conforme a la Ley Federal, hoy día se reconoce la definitividad de sus resoluciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, se insiste que con el fin de evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio resulta oportuno dejarlo expresamente establecido en nuestra Ley Suprema.

Más aún, si se toma en cuenta como dice Ricardo Raphael de la Madrid que sería un retroceso que las resoluciones del órgano garante de acceso a la información sean revisables o impugnables ante el Contencioso Administrativo, ya que como afirma “Los Tribunales Contenciosos nacen para salvaguardar los derechos de los gobernados, no de los órganos administrativos. Los órganos administrativos no tienen derecho, sino

atribuciones. ¡Ahora resulta que pobrecitos de los órganos administrativos no tienen instrumentos de defensa frente a los gobernados-“.

En ese sentido, debe dejarse claro que en todo caso el control de legalidad debe ser ejercido por los gobernados, ya que se trata de un derecho fundamental que corresponde alegar a su titular, por lo que los medios de defensa en estos casos debe ser un instrumento a favor de los gobernados no de las dependencias o sujetos obligados.

Además, permitir que las resoluciones sean impugnadas por los sujetos obligados violentaría varios principios. Así por ejemplo el principio de gratuidad, ya que el particular tendría que acudir a los juzgados y contratar un profesionista, al que tendría que pagar para su defensa; el principio de desigualdad —como génesis del de igualdad—, ya que el particular contendría en un proceso litigioso desventajoso frente a los órganos de Estado que cuenta con recursos materiales y humanos, el principio de sencillez y rapidez, ya que se retarda el acceso a la información provocado ello por la autoridad no en defensa del titular del derecho; el principio de especialización, ya que podría conocer una instancia no especializada; y el principio de máxima publicidad, ya que si el organismo garante al resolver esta frente a la duda razonable debe privilegiar la apertura de la información, es decir se inclina en favor del gobernado, y no de las autoridades, por lo tanto cuestionar esa duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a dichos principio. De ahí de la necesidad de la expresión del principio de definitividad en la Ley Suprema.

4. DOTAR DE LEGITIMIDAD A LOS ÓRGANOS GARANTES PARA INTERPONER ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Como se sabe el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad esta tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional.

La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada inconstitucional, lo que no conlleva a su derogación, ni que el texto de la disposición inconstitucional sea eliminado, sino que únicamente éste pierda su fuerza de aplicación.

Por ello, se ha previsto que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a efectos de hacerlas públicas.

Otro elemento que le añade importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Tales alcances de la acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, revelan su importancia y relevancia dentro del Estado Constitucional y de Derecho. Siendo que una de las características que le agrega importancia es que es un medio de control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no sólo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a garantías individuales.

Es precisamente esta característica la que le añade una mayor relevancia o importancia a la acción de inconstitucionalidad, al situarla como instrumento de defensa de los derechos fundamentales, ya que dota a determinados órganos del Estado de una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes federales o locales que violan sus derechos fundamentales.

Siendo que dentro de esos derechos fundamentales está el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Por lo tanto, resulta del todo razonable el de dar legitimidad procesal a los órganos garantes de dichos derechos para que tengan la facultad de promover acción de inconstitucionalidad. Más aún cuando se esta proponiendo constituirlos como organismos constitucionales autónomos, ubicándolos así como instrumentos de equilibrio constitucional dentro de la estructura del Estado, lo que conlleva de manera lógica que asuman un papel sólido y activo para demandar ante la autoridad jurisdiccional la plena observancia de estos derechos humanos fundamentales, frente aquella ley inconstitucional que se estima restringe o menoscaba el ejercicio de los mismos.

Además, al ser autoridad en la materia especializada, les permite llevar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo respecto de que las leyes se ciñan al pleno contenido y alcance del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, y asegurar al gobernado el ejercicio pleno de sus derechos, aun antes de que la ley inconstitucional se aplique en su esfera jurídica.

Por ello, es que en la presente iniciativa se propone una reforma al artículo 105 de la Constitución General, para establecer la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente:

- El *organismo garante federal* contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
- Los *organismos garantes equivalentes en los estados* de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.
- El *organismo garante del Distrito Federal*, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

47
510

5. POR EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE ACCESO A LA INFORMACION.

Se parte de la convicción de que es necesario garantizar los recursos económicos razonables y necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto. Nadie puede garantizar que el próximo Ejecutivo le otorgue al Instituto los recursos económicos necesarios para su debido funcionamiento, y se dice debido, porque se le puede autorizar un presupuesto que solo lo mantenga a flote y lo orrille a entregar malos resultados, lo cual puede llevar a desacreditarlo y ponerlo así en la guillotina para su desaparición, provocando con ello que el ciudadano pierda y el gobierno gane en la opacidad.²⁹

En este sentido es pertinente lo dicho por el hoy comisionado Zaldivar "La cuestión presupuestal es un elementos fundamental para que camine el tema o no. Y Como decía el doctor Escobedo, hay estados que tienen un buen diseño institucional y aun así no funcionan, ¿por qué?, bueno, porque no los dotan de los recursos suficientes para su operación. Por lo tanto esta política pública como cualquier otra, requiere de un presupuesto acorde a las necesidades reales; pues en los estados que cuentan con una ley y un órgano garante pero no tienen presupuesto o este es insuficiente, se puede decir sin temor a equivocarse que se esta frente a un acto de simulación."³⁰

Como bien dice el doctor Sergio Aguayo, *"el presupuesto es la política en su estado químicamente puro, es decir, no hay mejor forma de medir las prioridades que ir a los presupuestos"*.³¹

Se puede afirmar, que *"no puede haber autonomía constitucional donde no está garantizada la autonomía presupuestal"*.³²

Cabe aclarar que dicha "autonomía presupuestal" *tampoco implica un descarrilamiento o gasto irresponsable*, ya que por un lado será el Congreso Local el que estudiara y aprobará su monto, el órgano de fiscalización del mismo podrá realizar su revisión a través de la cuenta pública. Por lo que el ejercicio del presupuesto del órgano garante federal (como locales) debe ser en base a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, racionalidad, austeridad, control y rendición de cuentas sujetándose a la normatividad, la evaluación y control de los órganos competentes.

Por lo tanto se propone en la presente iniciativa que Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Se prevé que el proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

²⁹ Cfr. Trinidad Zaldivar, Ángel, La Transparencia y el Acceso a la Información como Política Pública y su Impacto en la Sociedad y el Gobierno, Ed. Miguel Ángel Porrúa-Cámara de Diputados, México, 2006, pág. 105.

³⁰ *Ibíd.*, pág. 124.

³¹ *Ibíd.*, pág. 125.

³² Guzmán Tamayo, Federico, *Ibíd.*

48
211

6. MECANISMO DE DEFENSA ADMINISTRATIVO OPCIONAL, EXPEDITO, SENCILLO Y GRATUITO EN FAVOR DE LOS PARTICULARES.

Se propone que el Instituto Federal como organismo constitucional autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular.

Se prevé proponer que la Ley Federal determinará la forma y términos en que deberá promoverse la impugnación ante el Instituto Federal.

Se plantea que no será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo, en términos de la legislación aplicable. Es decir, se trata de que este mecanismo de defensa sea una opción para el particular y no una obligación o condición necesaria para acudir al juicio de amparo, ello porque el particular pueda estimar más conveniente y oportuno que de una vez le resuelva la autoridad judicial; porque ante el conocimiento de criterios o precedentes del órgano federal en asuntos similares se anticipa que será desfavorable acudir ante dicha instancia o bien porque a su juicio siente más credibilidad y confianza acudir a la autoridad judicial.

Asimismo, se propone explicitar que la resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del órgano garante local, y será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo o personas o sujeto obligado correspondiente del orden local, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero se propone dejar resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los organismos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.

Esta propuesta, como dice Federico Guzmán Tamayo para ser entendida implica evitar la tentación de pensar que unos pierden y otros ganan, que uno es asumido en un papel de subordinación y otro de superioridad, es decir que las entidades quedan minimizadas frente a la autoridad federal. Más bien debe entenderse como un proceso por la eficacia en el ejercicio de derecho y como una estrategia del Estado mexicano, en la que se conjuga la federación y las entidades federativas en busca de asegurar y promover el derecho humano fundamental de acceso a la información, y de protección de datos personales.

Ahora bien, debe dejarse claro que este mecanismo de defensa en favor de los particulares si y solo si es factible si hay armonización en las características de los órganos garantes del derecho de acceso a la información tanto federal como local, para convertirlos en órganos constitucionales autónomos, para potencializar la eficacia institucional en la protección de este derecho fundamental.

No se trata de darle competencia a un órgano federal sobre asuntos de competencia federal, estatal, del Distrito Federal o municipal en materia de acceso a la información pública siendo un órgano descentralizado. Ello debe darse a un organismo con una naturaleza jurídica distinta, ha de darse a un ente de equilibrio constitucional, es decir, ha

de ser un organismo constitucional autónomo, imparcial, especializado e independiente, condición necesaria para asumir dicha competencia. Por lo tanto la competencia no es en favor del IFAI actual, sino de un órgano con nueva y renovada naturaleza jurídica.

Superado ello, resulta oportuno que el nuevo organismo constitucional autónomo federal tenga competencia sobre asuntos domésticos, locales o de las entidades federativas. Pero dicha competencia solo habrá de darse dentro de un federalismo saludable, eficiente y eficaz, y en ese sentido tal y como se propone lo factible y oportuno es el de dotar al nuevo organismo federal constitucional autónomo de la facultad para conocer o revisar las resoluciones de los organismos de transparencia de las entidades federativas, cuando la resolución que se impugna hubiere negado el acceso a la información al particular.

Lo que se propone es un mecanismo de defensa expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir en segunda instancia administrativa alguna controversia en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Debe dejarse claro –como dice el mismo Guzmán– que la premisa fundamental es la de crear un instrumento de defensa administrativo en favor del particular o gobernado, de que este cuente con un mecanismo mas en su favor, como instrumento de defensa administrativo previo al juicio de amparo, y siempre opcional. Es decir, que quede resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones de los órganos de transparencia local, ya sea interponiendo la impugnación ante el nuevo órgano constitucional autónomo federal o bien el de poder optar por la vía del juicio de amparo. Ello con el fin de eliminar la preocupación para algunos de que tal instancia parecería contradecir la idea de procedimientos expeditos, sencillos y no judicializado, lo cual de ninguna manera es así.

Además, de señalar que dicho mecanismo de defensa asegura los principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en el ejercicio de este derecho. Se asegura la especialización por que la impugnación en segunda instancia sería realizada ante un órgano autónomo, imparcial y especializado. El órgano revisor en segunda instancia sería un órgano administrativo no judicial, lo que hace que esa segunda instancia no se judicialice para el particular, al tratarse de funciones materialmente jurisdiccionales pero formalmente administrativas.

Se asegura la sencillez, expeditos y gratuidad ya que se trataría de una impugnación que podría interponerse por el sistema electrónico tal y como se hace para los recursos de revisión que hoy se conocen y sustancian, lo que implica que no será escrito, ni será necesario contar con un abogado o licenciado en derecho para su interposición, aplicándose las reglas de la suplencia de la queja para el particular.

En efecto, dicha instancia o mecanismo de defensa adicional, permitirá no orillar desde un inicio al gobernado acudir al juicio de amparo, que como se sabe es un mecanismo de defensa judicializado, que exige reglas técnicas más estrictas para su interposición y procedencia, además de la necesidad de contar con un especialista o abogado para ello, que podría implicar costos económicos para el particular, aunado a las exigencias físicas y traslado para conocer del mismo al tratarse de un juicio de corte escrito, así como la dilación para resolver por parte de la autoridad jurisdiccional, pues como se sabe los plazos resultan más amplios en comparación con los plazos que se pueden establecer para que el nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal pueda resolver. Incluso se podría prever en la legislación reglamentaria respectiva un plazo corto para

que el nuevo órgano federal dicte una resolución definitiva, por ejemplo de 20 días hábiles.

Este mecanismo de defensa permitiría disipar la desconfianza, el descrédito o bien la falta de maduración o consolidación institucional que pueda existir en algunos órganos garantes de transparencia local, al saberse no solo observados sino revisados en su actuación por un órgano especializado, mediante un medio de defensa sencillo, expedito y no judicializado.

Este mecanismo de defensa sería un instrumento de eficacia institucional —es más si se quiere decir así— de prevención general, pues los órganos de transparencia local se verían incentivados a emitir resoluciones más y mejor fundadas y motivadas, sostenibles ante la instancia de reconsideración o segunda instancia de revisión.

Este mecanismo de defensa permitiría establecer criterios de interpretación por parte del órgano federal en su calidad de revisor, lo que a su vez se podría traducir en una armonización en las resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del órgano federal sería un referente a tomar en cuenta por los institutos de las entidades federativas al momento de resolver.

La apuesta de este mecanismo de defensa, parte de la convicción de que la transparencia y derecho de acceso a la información pública son un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público; pues para que funcione la democracia es indispensable un sistema abierto de información, para que los gobernados tomen decisiones informadas.

Luego entonces, si queremos que este mecanismos de control social funcione, debemos dar a sus titulares los instrumentos necesarios de defensa que haga efectivo su ejercicio.

Finalmente, dicho mecanismo de defensa, se inscribe dentro de los cánones de la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva instituidas en el artículo 17 constitucional, ya que no propiciara un retraso en la resolución de los recursos respectivos; no impedirá que los conflictos se resuelvan en su integridad; no induce a que quien resuelva lo haga en determinado sentido; no establece el cobro de importe alguno por que se emita la resolución definitiva; ni, por último, establece alguna condición insuperable alguna para acudir a los tribunales jurisdiccionales.

Sirven de apoyo a la anterior conclusión las siguientes jurisprudencias de las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de

establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 42/2007, Página: 124).

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página: 209).

214 52

7. FACULTAD DE ATRACCION DEL ORGANISMO GARANTE FEDERAL RESPECTO DE RESOLUCIONES DE LOS ORGANISMOS GARANTES LOCALES.

Congruente con la propuesta anterior, se plantea disponer que el organismo garante autónomo de acceso a la información pública del orden federal, de oficio o a petición fundada del órgano garante equivalente del estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En todo caso, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal para dictar sus resoluciones.

En todo caso, se precisa que la resolución que el órgano federal emita por virtud de la facultad de atracción será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo local o personas o sujeto obligado correspondiente, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero obviamente, al igual que la propuesta anterior, se precisa el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los órganos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.

Esta propuesta junto con la del mecanismo de defensa administrativo que se plantea en favor de los particulares en esta iniciativa, lo que busca es diseñar una nueva relación entre los organismos garantes del orden federal y locales, dentro de un federalismo eficaz y eficiente en la materia. No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución que estos órganos u organismos locales, sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que conozcan, substancien y resuelvan los órganos garantes o sobre estos mismos medios de impugnación que presentes los particulares pero que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.

Finalmente, cabe decir que sobre los alcances de interés y trascendencia el órgano judicial ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, pero además ello deberá ser materia de regulación en la legislación respectiva. Sin dejar de advertirse, que ya hay experiencia y avances sobre la facultad de atracción en otras materias, cuyo referente puede ser tomado en cuenta en favor de la propuesta que se plantea.

8. POR UNA LEY GENERAL QUE ARMONICE Y ASEGURE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION EN TODO EL PAIS, Y POR UNA LEY GENERAL DEL DERECHO DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

No se puede negar que la reforma al artículo 6 Constitucional vino a contribuir a avances importantes en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Cabe recordar que el espíritu y alcance central de dicha reforma del 20 de julio de 2007, fue el de *consolidar criterios uniformes* en materia de acceso a la información pública, mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que el ejercicio de ese derecho debería de tener en piso mexicano.

Efectivamente la reforma constitucional referida buscó que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública *fuera parejo* en todo el país, que su ejercicio entre una entidad federativa y otra no fueran *dispar* e incluso *contradictorio*, en algunos lados con

mayor apertura y en otros con mayor restricción. Se trato o se busco, de emparejar el piso en todo el país en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

No obstante dichos avances, resulta necesario dar un nuevo impulso que permita desplegar una vez más de manera más efectiva este derecho, y seguir en la línea por emparejar o armonizar el ejercicio de este derecho en todo el territorio nacional, y evitar que su ejercicio pueda llegar a ser dispar entre una y otra entidad u orden de gobierno.

Hay que reconocer, que la diversidad legislativa ha llevado en algunos de los casos a que se detonen diferencias en el ejercicio del derecho de acceso a la información; por ejemplo, en los plazos y procedimientos para la entrega de la información; en el procedimiento de los medios de impugnación o recursos de revisión que conocen los órganos de transparencia; en las causas de clasificación de reserva; en la información que debe aparecer en los portales de transparencia de los sujetos obligados; o bien en la facultad para sancionar, dado que algunas legislaciones prevén la posibilidad de que el órgano garante imponga sanciones o medidas de apremio al ente público, incluso para sustanciar y conocer sobre responsabilidades administrativas, mientras que en otras no existen dichas facultades. Asimismo, algunas legislaciones se contemplan dentro de las leyes de transparencia la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, en tanto que otras ya cuentan hasta con un ordenamiento propio en la materia. Todo esto refleja disparidad o falta de armonización legislativa a nivel nacional en el acceso a la información, y también de la protección de datos personales.

Por ello es necesario diseñar un marco general que permita que sea un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier instancia de gobierno. No puede permitirse que para un mexicano el mismo derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país.³³

Debe contarse con un marco legal que permita un derecho unificado, tutelado e igual para todos en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo un deber igual para cualquier orden de gobierno, sin que varíe la normatividad general, procedimientos, sujetos obligados y las atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra. Siendo claro que la idea de evitar la asimetría normativa parte de la convicción de no minimizar, anular o empobrecer el ejercicio de este derecho por cuestiones de ámbito territorial.

Se requiere una mejor normativa para desvanecer la incertidumbre cuando se ejerce este derecho en una entidad y en otra y más al tratarse de un derecho fundamental, o como lo ha expresara nuestro máximo Tribunal de una garantía individual y un derecho social.

Se trata de contar con una Ley marco que permita armonizar o alienar de manera más clara y puntual los criterios y principios a los cuales están sujetos la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios respecto del derecho acceso a la información.

Para lograr ello, y con el fin de hacerlo desde una visión federalista será necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases

³³ Cfr. Guzmán Tamayo, Federico, Ponencia "A favor de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que garantice un piso parejo en el territorio nacional del ejercicio de este derecho fundamental", en el Primer Congreso jurídico, de la COMAIP, celebrado en Oaxaca, los días 9 y 10 de agosto de 2012.

previstas en el párrafo segundo del artículo 6° de la Constitución General y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Lo armonización sería precisamente en cuanto a los mecanismos para presentar las solicitudes, en los procedimientos de revisión, en las obligaciones de transparencia, las causas de restricción de la información, las sanciones a la autoridad por violación al derecho de acceso a la información pública.

Se trata por ejemplo que si el plazo de dar respuesta es de diez días en una entidad lo sea también en las otras, que si los informes de cuenta pública o la cancelación de créditos fiscales son de acceso público en el orden federal también lo sea en orden local; que si en el portal electrónico de una delegación política debe publicarse el nombre de la obra, el monto, tipo de adjudicación, convocatoria, dictamen, empresa ganadora y contrato ello también se publique en el portal de cualquier municipio. De eso se trata este diseño constitucional.

En ese sentido, se propone adicionar al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXIX-R y una fracción XXIX-S, para establecer que el Congreso de la Unión será competente

“XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6° de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.”

Se trata de una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, y respetuoso de la autonomía de los estados y la propia que tiene el propio Distrito Federal aun como asiento de los poderes federales, ya que la aplicación de las normas contenidas en la ley general estaría a cargo de sus propios organismos autónomos de transparencia, dentro de su ámbito de competencia; es decir, se permite que cada ámbito estatal o local aplique la ley general en su propio terreno.

Esta propuesta parte de un federalismo de atribuciones compartidas, por un lado la regulación y por el otro su ejecución. Ya que se estaría dotando al Congreso de la Unión para emitir la norma marco o general, pero serían los propios organismos de transparencia del ámbito de los estados y del Distrito Federal los que estarían a cargo de su ejecución, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.

Dicha Ley sería el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas las entidades federativas. Sin perjuicio estimo que se complemente dicho marco general en las disposiciones locales, pero conforme a dicha normativa general. Esto es, las normas locales se verían obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la información

conforme a lo establecido en la Ley General, sin demérito de perfeccionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias realidades.³⁴

Se trata de contar con un marco legal que desenvuelvan, desglose o regule los principios, criterios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva, y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes del acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.

Es decir, una ley general para lograr una homologación en los mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de revisión, indicadores de gestión u obligaciones de transparencia comunes y específicas, las causas de restricción del derecho de acceso a la información y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Por otro lado, una ley general en cuanto a la homologación en los principios, los mecanismos del ejercicio de los derechos, los procedimientos de revisión, medidas de seguridad, y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Con dichas leyes marco generales, se lograría por ejemplo:

- Homologación de plazos para: dar respuesta a las solicitudes, de la prórroga para dar respuesta, para resolver los recursos de revisión, prórroga para resolver, plazo para cumplir las resoluciones.
- Uniformidad en los supuestos de clasificación, mediante el establecimiento de las causas o hipótesis de reserva o confidencialidad, a fin de evitar disparidad al respecto.
- Piso parejo sobre el tiempo o la temporalidad en los casos de restricción de la información mediante su reserva.
- Homologación respecto de la información pública de oficio u obligaciones de transparencia que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los Sujetos Obligados.
- Armonización para incluir obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados (poder judicial, legislativo, ejecutivo, instituto electoral, comisión de derechos humanos, órgano de transparencia, universidades públicas o instituciones análogas, por citar algunos, ello de cada orden de gobierno.
- Evaluaciones con criterios y metodologías estandarizados.
- Armonización de los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales.
- Estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición) dentro de la protección de datos personales, y

³⁴ *Ibíd.*

- Uniformidad en el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para el debido acatamiento de éstas, entre otros aspectos normativos más.

A mayor abundamiento, la propuesta para contar con una ley general en materia de acceso a la información ha sido un planteamiento que se ha venido campeando por algún sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado *"Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012"*, plantea entre otros aspectos el de *"Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que conforme a los principios ya establecidos en el Artículo Sexto Constitucional, garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas"*.

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), señalo en su comunicado denominado "Consensos para la Transparencia en México", entre otros aspectos la necesidad de "Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad".

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre como la que se propone a esta Asamblea. Esta propuesta de una Ley General, junto con el impulso por constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializadas e imparciales en su actuación, y depositarios de la autoridad en la materia, para hacerlos auténticos garantes del derecho de acceso a la información, y verdaderamente independientes de los poderes que están obligados a vigilar y supervisar, permitiría contar por un lado con instituciones fuertes y confiables y por otro con un marco legal armónico y parejo en los procedimientos y los principios en su ejercicio, todo ello en favor de los mexicanos, sin importar la entidad donde vivan.

Se trata como diría Juan Francisco Escobedo Delgado: *"no debe tratarse de ese federalismo que puede servir de coartada para simular que se está avanzando en el campo de la transparencia y del derecho a la información, bajo la idea de que se es soberano y nadie debe intervenir"*. Y menos como lo dice el mismo Escobedo por tres razones esenciales: 1) porque se trata de un derecho humano, 2) porque debe ser una política y una política de Estado, y 3) porque debe darse la recuperación del carácter público del poder público.³⁵

³⁵ Cfr. Versión estenográfica de la Segunda Semana Nacional de Transparencia del Instituto Federal de Acceso a la Información, celebrada en el Auditorio del Museo Tecnológico de la CFE, de la Ciudad de México, el 29 de Junio de 2005. Conferencia impartida por Juan Francisco Escobedo Delgado, en la Mesa 6 denominada *"La transparencia en estados y municipios: ¿conviene una ley general?"*.

9. HOMOLOGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Como ya se ha expuesto, el fortalecimiento de las instituciones garantes del acceso a la información pública y protección de datos personales, no solamente deben darse en el orden federal sino también en el local, porque el federalismo es eficiencia y es eficacia en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, se plantea la homologación de criterios o principios uniformes básicos, esenciales o fundamentales en el diseño normativo constitucional de dichos órganos como constitucionales autónomos, tanto del orden federal, como de los estados y del Distrito Federal.

El planteamiento, es que dichos criterios sean la base para el caso de órgano federal pero también para los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los organismos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

En efecto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante que algunas decisiones de carácter orgánico –como la que se propone– sean previstas en la Constitución, que se requiere que sean ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería difícil cumplir con determinadas finalidades y funciones constitucionalmente relevantes, como en el caso acontece, de dotar a todos los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, para que el piso por instituciones solidas sea parejo en todo el país. De lo que se trata es de blindar de eficacia institucional a estos órganos garantes.

Se trata de que el Poder Constituyente o el Poder de Reforma prevea un diseño institucional, cuya particular y específica configuración orgánica, resulte idónea y susceptible de alcanzar las finalidades de eficacia institucional que se han expresado, a fin de que el Constituyente Local y el legislador secundario observe y atiende conforme con dicho fin.

En otras palabras, se trata de un esquema institucional desde la Constitución para exigir de los poderes constituidos, directamente, no sólo la realización de determinadas funciones, sino la creación de órganos con determinadas características.

Por regla general, la distribución y configuración orgánica de los organismos públicos previstos desde la Norma Suprema resulta relevante, en la medida en que el establecimiento de una estructura distinta por parte de los órdenes jurídicos federales, locales y/o municipales sería inadecuada para cumplir con las finalidades y/o funciones que tales organismos están llamados a cumplir.

El tema relativo a la creación de organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas –donde todavía no lo son– es una cuestión principalmente de carácter orgánico, que en ocasiones presenta una íntima relación con la adecuada protección de los derechos fundamentales.

En efecto, ya nuestro máximo Tribunal ha compartido los argumentos anteriores y ha reconocido que los derechos fundamentales implican no sólo deberes de abstención

220 58

(obligaciones de no hacer) para los poderes públicos, sino también deberes positivos de promoción (obligaciones de hacer) para su efectiva salvaguarda.³⁶

En ese sentido, resulta justificable la propuesta para establecer o disponer las características básicas o esenciales que deben reunir los órganos garantes locales de los estados y del Distrito Federal, a fin de que los mismos resulten en su diseño normativo idóneos y necesarios para la tutela efectiva del derecho a la información, más allá del orden de gobierno o la entidad correspondiente.

Lo que se plantea es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quede establecido un mandato de ordenación específico y vinculante para todos los órdenes jurídicos locales, en el sentido de establecer un órgano garante, de control y vigilancia de acceso a la información y de protección de datos personales lo más uniformes posibles en su naturaleza jurídica, y asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibrio constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal total que se les ha encomendado.

Luego entonces, se propone prever de mejor manera las características específicas y esenciales de los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades contrarias a las de un órgano constitucional como el que se busca diseñar; por el contrario, el mandato constitucional será la de perfeccionar y crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Y si bien la vigente fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone precisamente el establecimiento de órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión, responsables de sustanciar los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, y tal precepto lo que busco fue uniformar o armonizar en la medida de lo posible la naturaleza de los órganos garantes en todos los órdenes de gobierno y de los propios entes o órganos públicos, lo cierto es que la disparidad entre unos y otros es un hecho conocido.

Con esta propuesta, se busca que dentro del Federalismo que nos hemos dado y con pleno respeto de la libertad regulatoria o ámbito normativo de los estados a este respecto, lo hagan garantizando las características o principios esenciales que la Constitución Federal haya establecido en favor de estos órganos garantes, como órganos constitucionales autónomos. Sin que, la Constitución Local o las leyes puedan ir más allá del margen de configuración que la Ley Suprema ha previsto para estos órganos garantes.

³⁶ SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas 77/2008 y 78/2008, promovidas las dos primeras por el Procurador General de la República y la última por el Partido del Trabajo, en contra del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y otras autoridades, y votos particular del Ministro Genaro David Góngora Pimentel y de minoría de este último y del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de noviembre de 2008.

22/ 59

Más aún ello es exigente, ante la evidencia histórica que al respecto se ha suscitado en cuanto a las pretensiones por desnaturalizar a estos órganos garantes, aun a pesar de la distribución orgánica prevista actualmente en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución General, como fue el caso de la Constitución del Estado de Querétaro que propuso fusionar dos órganos en uno mismo, es decir fusionar las comisiones de derechos humanos y de acceso a la información en el Estado de Querétaro. No obstante ello no tuvo éxito pues el Máximo Tribunal determinó que tal diseño contravenía de manera expresa, el texto constitucional contenido en el artículo 6o., en virtud de que el órgano que se crea por virtud del artículo 33 de la Constitución del Estado, no es un órgano especializado en materia de acceso a la información pública.

Por lo tanto se propone reformar el artículo 116 y 122 de la Constitución General, a fin de que en las Constituciones y leyes de los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito Federal, se prevea lo siguiente:

- Que establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los demás órganos que su Constitución o el Estatuto de Gobierno les otorgue autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.
- Que dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.
- Facultad de los organismos garantes para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos de su competencia, en todo caso ello lo harán conforme a lo previsto en el artículo 1º de esta Constitución.
- Que las resoluciones del organismo garante de los estados o del Distrito Federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

- 60
722
- Que el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los órganos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.
 - Que el órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local o el Estatuto de Gobierno.
 - Que se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.
 - Que las personas encargadas de la conducción del organismo garante local, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución o Estatuto de Gobierno.
 - Que los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución Local, el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General.
 - Que la Ley que emitan las Legislaturas Locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.
 - Que los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado o a la Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.
 - Que la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales o la Asamblea del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

61
223

10. ESTABLECER BASES, PRINCIPIOS Y ARMONIZACION EN MATERIA DE ARCHIVOS, ASI COMO DOTAR AL CONGRESO DE LA UNION DE LA FACULTAD PARA EXPEDIR UNA LEY GENERAL DE ARCHIVOS.

En la presente iniciativa se plantea una propuesta de reforma en materia de archivos, partiendo de que dicho tema si bien debe ser visto a la luz del acceso a la información, también debe de ser valorado con un propósito más superior, que es el de preservar la memoria histórica de la Nación. Por ello la propuesta que se hace a este respecto es vista en ambas dimensiones y no solamente una; es decir, la memoria y la transparencia.

La necesidad de establecer normas estandarizadas que regulen la producción, organización y conservación de los documentos en nuestro país, debe ser visto a la luz de dos dimensiones; la primera, porque son un testimonio de la vida cotidiana y trascendente de la sociedad, preservando la memoria histórica de la nación; y la segunda, como un medio para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información.

Así, en principio, se parte del hecho de que los testimonios documentales originaron el nacimiento de la historia. Sólo a partir de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de la humanidad.

La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el Internet.

Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios federales, de las entidades federativas, municipales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado.

Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y social. De ahí la importancia de establecer criterios homogéneos que nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y acceso permita conocer y explorar nuestra identidad nacional; la razón de lo que somos actualmente y nuestro potencial como sociedad.

La vida del Estado es objeto de renovación constante y el instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos que están en posesión de los poderes públicos, al alcance de quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos deben marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a la par de los cambios históricos que vive el país.

Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera institucional y eficaz; como lo es la exigencia de estandarizar las normas, criterios y procesos de organización y administración de los archivos, y más, ante el hecho

6:
204
innegable de que los documentos públicos, son la materia prima que garantiza el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, elemento consustancial de un Estado democrático.

Sin duda existe una relación estrecha entre archivos y democracia, puesto que los archivos generan dos ingredientes fundamentales para la democracia: memoria y transparencia. La memoria, y la transparencia, que se construyen a través de archivos bien conservados y ordenados, son claves a la democracia, puesto que son necesarios para que los ciudadanos puedan hacer una elección razonada y juiciosa de sus gobernantes y de los programas de gobierno que se les proponen. Los archivos proporcionan las herramientas imprescindibles para que los ciudadanos puedan acceder a la verdad, conocer el desempeño de sus gobernantes, obligar a una verdadera rendición de cuentas, y mediante su voto, premiar o castigar la conducta de quienes les gobiernan³⁷

En efecto, no es concebible la existencia de dicha prerrogativa constitucional, si de manera correlativa, no se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho de acceso a la información, si no existe información. La materia prima del derecho de acceso a la información, lo es la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, debe registrar y comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de sus atribuciones.

Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la conservación de sus archivos documentales.

La necesidad de contar con archivos actualizados como elemento fundamental para dar vigencia a nuestro sistema democrático a través del derecho de acceso a la información, se desprende de la primera parte de la fracción V del artículo 6° de la Constitución Federal, que exige como un medio para dar cumplimiento a dichas finalidades, el que los órganos públicos preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Si bien como lo refiere las consideraciones del dictamen de la Comisiones Unidas de la Función Pública y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional al artículo 6° en materia de acceso a la información, *"... resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. . ."* y por ello, el elemento fundamental para dar vigencia a dicha prerrogativa constitucional, lo son los archivos administrativos de gestión y concentración, y no así el histórico que requiere un tratamiento y acceso a su información específico, esto no conlleva a que no se conciba la necesidad de establecer las bases de una política nacional en materia de desarrollo archivístico, mediante la homologación de los procesos, criterios y principios de organización y administración de los archivos; dado que como se ha mencionado, no se trata sólo de apuntalar nuestro sistema democrático mediante la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, sino igualmente se conciben como los depositarios de nuestra memoria nacional, el reflejo de lo que hemos hecho y dejado de hacer.

³⁷ Aurora Gómez Galvarriato Freer, Directora General del Archivo General de la Nación 4ª Reunión de Archivos del Gobierno Federal Aguascalientes, noviembre 2009 Memorias "Archivos y Transparencia en México"

Hasta hace algunos meses³⁸, únicamente 22 entidades federativas contaban con su respectiva Ley de Archivos o de Documentación, o del Sistema estatal de archivos; lo que refleja la necesidad de establecer disposiciones observables por todas las entidades federativas, incluidos los municipios, en los que se establezcan los aspectos esenciales en la administración y conservación de la memoria histórica de la nación, así como de la materia prima que dota de eficacia el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país.

Si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro vida institucional, requerimos contar con criterios y mecanismos de registro y custodia de los archivos, que cancele la posibilidad de que los funcionarios públicos sin importar el orden jurídico al que pertenezca, hagan un uso discrecional de éstos, que venza la aún existente tentación de patrimonialismo documental, y los obligue a entregar al final de su encargo, la documentación que generaron.

Por ello, en el contexto de esta iniciativa, se incita al órgano que de forma provisional se constituye para modificar nuestras decisiones políticas fundamentales, conocido por parte de la doctrina como Poder Reformador de la Constitución; a efecto de que se establezcan en el texto constitucional dos cosas, primero, un deber de asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios comúnmente reconocidos en la materia como son: conservación, procedencia, integridad y disponibilidad.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

- La *conservación*, implica adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los archivos.
- La *procedencia*, conlleva a conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;
- La *integridad*, implica garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida; y
- La *disponibilidad*, conlleva a adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo.

Es importante destacar que la actual fracción V del artículo 6º Constitucional únicamente se refiere a los archivos de gestión, no así a los históricos, a cuyo acceso no deben ceñirse las leyes de acceso a la información.

³⁸ Conferencia impartida por la C. Ma. del Pilar Pacheco Zamudio, de Dirección de Investigación y Normatividad Archivística del Archivo General de la Nación, respecto de LA LEY FEDERAL DE ARCHIVOS Y SU RELACIÓN CON LA LEGISLACIÓN ESTATAL

Por lo que se propone prever en dicha fracción que *“Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad”*.

Con abstracción de lo anterior, en cuanto a técnica legislativa, se estima que lo correcto separar el contenido de la fracción V y que esta únicamente prevea la materia de archivos, y en consecuencia trasladar a la fracción VI el enunciado de las obligaciones de transparencia, y recorrer a la sexta y séptima.

En cuanto al contenido de la fracción V propuesto, este se integra en dos partes. La primera, las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados, y la segunda, los principios a que deben ceñirse éstos.

El segundo aspecto sin duda complementario y en cuya sinergia descansará el éxito del primero, consiste en incorporar con pleno respeto a nuestra forma de Estado Federal, una cláusula de autorización en nuestra norma máxima, que permita que el Congreso de la Unión expida una ley general al respecto, cuyo fin es establecer disposiciones que normen los aspectos esenciales de la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y organización de los archivos, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las instituciones.

Mediante la integración de una Ley General de Archivos, se facilitará el uso de la información, y se contribuirá a al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, desembocando en una mejor rendición de cuentas; pero mejor aún, se constituirá sin duda un andamiaje que permita dar bases firmes y uniformes a la preservación de nuestra memoria histórica, tanto en la federación, como en las entidades federativas y los municipios.

En este sentido, debe estimularse la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos.

Igualmente con dicha medida se fortalecería la relación entre los acervos y las instituciones a partir de un marco jurídico que regula su funcionamiento, que cubra los vacíos legales ante leyes inexistentes o disparidad en los procedimientos en los diversos órdenes de gobierno, y a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que generan y resguardan.

La estandarización de los procesos de administración de documentos en nuestro país, evitarían la improvisación, facilitarían el intercambio de información, agilizarían los servicios de información y crearían mecanismos de medición de la eficiencia de los procesos.

Con esta medida, no se restaría importancia alguna al archivo General de la Nación o menoscabaría su naturaleza jurídica, sino por el contrario, se fortalecería su posición como organismo rector de la actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la administración de los archivos administrativos e históricos, bajo un nuevo diseño legislativo que amplifique y potencie el Sistema Nacional de Archivos contenido en la

65
202

actual la Ley Federal de Archivos, y que no regule solamente a los órganos del Poder Ejecutivo Federal y deje a la expedición de disposiciones generales de los demás entes públicos federales, la observancia de las disposiciones genéricas en la materia; dicho esquema que si bien es similar a la primera generación de leyes de acceso a la información en nuestro país, debe incorporarse ya a un sistema horizontal y vertical del cumplimiento de sus obligaciones.

De la misma manera fortalecería el vínculo entre todos los actores del Sistema Nacional de Archivos, definiendo claramente participaciones y competencias.

La expedición de una ley que defina con base en experiencias nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas de clasificación y conservación de los archivos en los órdenes federal, de las entidades federativas, municipales, y los ámbitos universitarios, eclesiásticos y privados, nutrirá y unificar las disposiciones del Sistema Nacional de Archivos.

Por lo que en este sentido, es que se propone adicionar una fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión será competente *"para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos."*

Acotando, que la propuesta al artículo 73 se trata de una redacción que comprende dos partes, la primera, que la ley tendrá como objetivo homogeneizar (igualar) la organización y administración de los archivos, al respecto la Ley Federal de Archivos contiene dos capítulos que se refiere uno, a la organización, y el otro, a la administración. El de la organización consiste en distribuir las competencias intraorgánicas, es decir, al interior de los Sujetos Obligados. La administración comprende el seguimiento de las diversas etapas de los archivos, desde su registro hasta su baja definitiva.

La segunda parte de la redacción se refiere a la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

Finalmente en este rubro, resulta oportuno precisar que existen diversos tipos de archivos, como son públicos, privados y privados de interés. Por lo que se omite incorporar la expresión de públicos a propósito, con el fin de que la Ley pudiese normar igualmente en su caso, el acceso a archivos privados o la declaratoria de archivos privados de interés público.

11. REGIMEN TRANSITORIO.

A fin de concretar el contenido y alcance del decreto que se somete a la consideración de esta Soberanía, se proponen varias disposiciones transitorias, y en ese sentido se plantea lo siguiente:

- **VIGENCIA DE LA REFORMA.** Se propone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

228 66

- PERMANENCIA DE SU ENCARGO DE LOS ACTUALES COMISIONADOS. Se propone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.
- PLAZO EN LA DESIGNACION DE LOS DOS NUEVOS COMISIONADOS DEL NUEVO ORGANO FEDERAL. Que la designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante federal, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.
- PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA EMITIR LA LEYES GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. El Congreso de la Unión deberá expedir dichas leyes en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
- PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA ADECUAR LA LEGISLACION FEDERAL El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la leyes en las materias y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.
- PLAZOS PARA LOS ORGANOS LEGISLATIVOS LOCALES PARA ADECUAR SU LEGISLACION, EN UN PRIMER MOMENTO AL PRESENTE DECRETO Y EN SEGUNDO MOMENTO A LA LEYES GENERALES. Se prevé que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Asimismo, dichos órganos legislativos deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

- APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE EN TANTO SE ADECUA LA NUEVA NORMATIVIDAD. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.
- SUSTANCIACION DE RECURSOS EN TRÁMITE. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y

229 6

posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

- **TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DE PERSONAL CON QUE CUENTA EL IFAI COMO ORGANO DESCONCENTRADO AL NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTONOMO.** Se prevé que a la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.
- **REGLAS PARA ASEGURAR LA AUTONOMIA PRESUPUESTAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO.** Se plantea que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

- **CREACION DE UN FONDO EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA.** Se propone que la Federación cree un Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en términos de las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Es decir se trata de un fondo etiquetado; es decir, que no podrá destinarse los recursos del mismo para gasto corriente u operativo de los organismos garantes. Siendo el caso que en la legislación aplicable, se deberán preverán las reglas respecto a la entrega, manejo y vigilancia de dicho fondo.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULO 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV, V y VII del segundo párrafo del artículo 6º; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción VII del artículo 78; la fracción XIX del artículo 89; el tercer párrafo del artículo 105; el primer y segundo párrafo del artículo 110, y el primer y quinto párrafo del artículo 111; Se adicionan, un segundo párrafo a la fracción I; una fracción V, recorriéndose la V, VI y VII para quedar como VI, VII y VIII respectivamente; y veintitrés párrafos al artículo 6º, las fracciones XXIX-R, XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; una fracción XII recorriéndose la fracción XII vigente para quedar como fracción XIII del artículo 76; una fracción VIII al segundo párrafo, recorriéndose la fracción VIII vigente para quedar como fracción IX del artículo 78; un inciso h) al segundo párrafo del artículo 105; una fracción VIII al segundo párrafo del artículo 116 y una Base Sexta al artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6o. (...)

(...)

I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.

II. (...)

III. (...)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante federal y los organismos autónomos locales.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal previstos en esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad

VI. Los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan esta Constitución y la legislación aplicable.

La protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, depositario de la autoridad en la materia y responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto tendrá las facultades que establezcan esta Constitución y la Ley federal. En todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia. El Instituto interpretará las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

El Instituto conocerá y resolverá las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. La Ley Federal determinará la forma y términos en que deberán promoverse las impugnaciones ante el Instituto Federal. No será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo. La resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del organismo garante local, y será vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, organismo local, personas o sujeto obligado correspondiente, quien deberá cumplirla en sus términos.

Las resoluciones del organismo garante federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados federales o locales, según corresponda. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia.

El Instituto, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal para dictar sus resoluciones.

La Ley Federal determinará las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos, pero en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia. El servicio profesional de acceso a la información pública, será la base del funcionamiento del Instituto.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se integrará y funcionara en los términos que disponga la ley federal.

El Instituto contará con el personal humano y los recursos financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos del Estado. Asimismo elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y administración y se integrará por siete comisionados. Los comisionados durarán en su cargo nueve años, y no podrán ser reelectos; y serán renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. La ley federal establecerá la forma, términos y procedimiento correspondientes.

Será elegido de entre los Comisionados al que ha de fungir como comisionado Presidente, quien tendrá la representación legal del organismo, quien podrá delegarla en términos de la Ley. La designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.

Para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Los comisionados y el comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. Quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

Las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

El Instituto podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho a la información pública.

El Instituto podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.

La ley federal en materia de transparencia y acceso a la información en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de esta Constitución.

Artículo 16. (...)

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El derecho a la protección de los datos personales se garantizará a través de los organismos públicos autónomos, especializados e imparciales de la Federación, estados y Distrito Federal, previstos en los artículos 6, 116 y 122 de esta Constitución y que se prevén a su vez como garantes en materia de acceso a la información. Lo serán en cuanto a los datos personales en posesión de los poderes, órganos, entes, entidades, personas o sujetos obligados referidos en las citadas disposiciones.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 73. (...)

I. a XXIX-Q. (...)

XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6° de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo

párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. (...)

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos previstos en la misma y en la Ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (...)

(...)

I. a VII. (...)

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos en la misma y en la Ley, y

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 105. (...)

I. (...)

II. (...)

(...)

a) a g) (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos garantes

equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)

III. (...)

(...)

(...)

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(...)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional**, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional** por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(...)

(...)

(...)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía** se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 116. (...)

(...)

I a VII (...)

VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos, y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. Los organismos garantes podrán interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante estatal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el órgano garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los organismos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emitan las Legislaturas regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

Los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

Artículo 122. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A. (...)

B. (...)

C. (...)

BASE PRIMERA. (...)

I. a IV. (...)
(...)

V. (...)

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (...)

BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y leyes del Distrito Federal se establecerá un organismo especializado, imparcial y colegiado, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisión y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.

Dichos organismo garante tendrán las facultades que establezca la Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. El organismo garante podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración del órgano garante deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán

80

ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga el Estatuto de Gobierno. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regulara la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

El organismo garante elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Tercero. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de acceso a la información pública, la ley general de protección de datos personales, y la ley general de archivos a que se refieren este Decreto en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Sexto. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

Séptimo. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los

presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

Décimo. La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

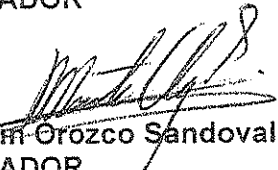
Décimo Primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.


Los abajo firmantes Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

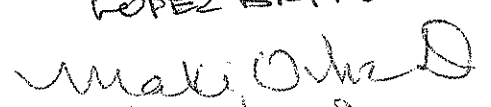

Laura Angélica Rojas Hernández
SENADORA


Fernando Torres Graciano
SENADOR

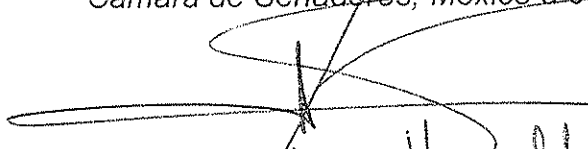

Víctor Hermosillo y Celada
SENADOR



Martín Orozco Sandoval
SENADOR

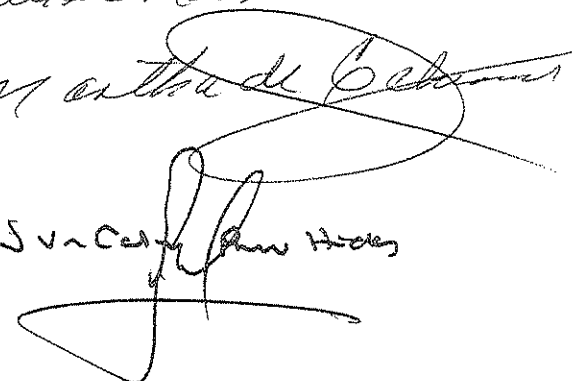

SEN. FRANCISCO SALVADOR
LOPEZ BRITO



Maki Ortiz Domínguez


Cámara de Senadores, México a 03 de octubre del 2012.

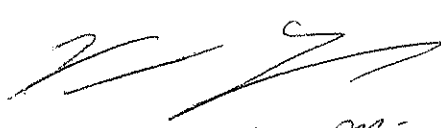

Jorge Cavalle


Luisa Ma. Calderín


Susana


Rosa A. Díaz Lizaso


Mariana Gómez del Campo


Fernando



PRD 10/2012
Primera Lectura

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

SEGUNDA LECTURA.- LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES ENTREGARON UN DOCUMENTO CON PROPUESTA DE CORRECCIONES DE ESTILO AL PROYECTO DE DECRETO.- LA ASAMBLEA AUTORIZÓ LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN CON LA APLICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.- PARA PRESENTAR EL DICTAMEN INTERVINIERON LOS SENADORES: RAÚL CERVANTES ANDRADE, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.- PABLO ESCUDERO MORALES, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CRISTINA DÍAZ SALAZAR, A NOMBRE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.- PARA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL INTERVINIERON LOS SENADORES: MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT; ALEJANDRO ENCINAS, QUE EL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT, RESERVÓ EL ARTÍCULO 6, APARTADO A, FRACCIÓN PRIMERA Y EL MISMO ARTÍCULO EN SU APARTADO B, OCTAVO PÁRRAFO.- EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.- EL SEN. MANUEL BARTLETT, PT, PRESENTÓ SUS PROPUESTAS AL ARTÍCULO 6, QUE NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.- SE APROBÓ EL ARTÍCULO EN SUS TÉRMINOS.- APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

HONORABLE ASAMBLEA

PRD; LAURA ROJAS, PAN; DAVID PENCHYNA, PRJ; BENJAMÍN ROBLES, PRD; JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, PAN; ARMANDO RÍOS PÉTER, PRD; JAVIER CORRAL, PAN, Y ARTURO ZAMORA, PRI.- LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE EL SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT, RESERVÓ EL ARTÍCULO 6, APARTADO A, FRACCIÓN PRIMERA Y EL MISMO ARTÍCULO EN SU APARTADO B, OCTAVO PÁRRAFO.- EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS.- EL SEN. MANUEL BARTLETT, PT, PRESENTÓ SUS PROPUESTAS AL ARTÍCULO 6, QUE NO SE ADMITIERON A DISCUSIÓN.- SE APROBÓ EL ARTÍCULO EN SUS TÉRMINOS.- APROBADO EL PROYECTO DE DECRETO SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, les fueron turnadas para su estudio y dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto en materia de transparencia que se describen en la parte de antecedentes, presentadas por los Senadores Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arely Gómez González, a nombre de los integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; Laura Angélica Rojas, a nombre propio de en representación de los Senadores Hernández, Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el dictamen que se ha formulado, al tenor de los apartados que enseguida se detallan.

ANTECEDENTES

1. Con fecha 06 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del Senado, la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del artículo 6º; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral 1 inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.
3. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
4. Con fecha 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.
5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.
6. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva acordó rectificar el turno, de dicha iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
7. Con fecha 04 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio en representación de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo Y Celada Y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8. En esa misma fecha, la Mesa Directiva acordó que se turnara la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su estudio y dictamen.
9. Con fecha 27 de septiembre de 2012, el Pleno del Senado de la República aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura.
10. Las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, se instalaron formalmente dentro de los plazos a que hace referencia el artículo 127 del Reglamento del Senado.
11. Con fecha 09 de octubre de 2012, la Comisión de Puntos Constitucionales, durante la celebración de la primera reunión ordinaria, acordó dictaminar en conjunto las tres iniciativas en materia de transparencia descritas en el presente apartado, así como conformar un grupo de trabajo integrado por todos los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión, para preparar el anteproyecto de dictamen en materia de transparencia y someterlo a consideración de las Comisiones Unidas para su análisis, discusión y, en su caso aprobación.
12. Con fechas 16 y 30 de octubre de 2012, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana celebraron reuniones de trabajo conjuntas para analizar el primer borrador del proyecto de dictamen elaborado por el Grupo de trabajo plural y para escuchar las opiniones de los Comisionados y Comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), respectivamente.
13. Durante el 16 y 30 de octubre de 2012, se recibieron en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Anticorrupción y Participación Ciudadana, diversas opiniones y comentarios a las iniciativas en materia de transparencia y acceso a la información, por parte de diversas dependencias de la Administración Pública Federal, asociaciones y organismos de la sociedad civil y el propio IFAI.

14. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva, comunicó la rectificación de turno de las iniciativas en materia de transparencia descritas con anterioridad, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
15. Con fecha 30 de octubre de 2012, se realizó reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, a la que asistieron como invitados los Consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en Pleno, encabezados por su Presidenta, Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, con el propósito de intercambiar puntos de vista en torno a las propuestas contenidas en las iniciativas en materia de transparencia descritas con anterioridad, objeto del presente Dictamen.
16. Con fecha 6 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, con representantes de organizaciones de la sociedad civil, a la que asistieron:
 - a) Lilia Saúl, Coordinadora Nacional de México, Infórmate;
 - b) Eugenio Monterrey, Presidente de COMAIP;
 - c) Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Article 19;
 - d) Edna Jaime, representante de México Evalúa;
 - e) Alejandro González Arreola, Director de Gestión y Cooperación Social, A.C. y Coordinador del Colectivo por la Transparencia.

En la misma reunión de trabajo se aprobó el ***Acuerdo para la Transparencia del proceso de Dictamen de las iniciativas en materia de Transparencia***, a partir de lo cual se publicó en las



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

páginas oficiales del Senado de la República de las Dictaminadoras, la siguiente información:

- a) Las iniciativas en materia de transparencia descritas en el apartado de antecedentes.
 - b) Los comparativos elaborados para analizar las diversas iniciativas en estudio y dictamen.
 - c) Los análisis conceptuales elaborados para determinar las convergencias y divergencias de las iniciativas en estudio y dictamen.
 - d) Las opiniones presentadas por las Senadoras y Senadores integrantes de los diversos grupos parlamentarios sobre las iniciativas en materia de transparencia.
 - e) Los comentarios y opiniones remitidos a las Comisiones dictaminadoras por parte de las diversas dependencias de la Administración Pública, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, entre otras.
 - f) Las minutas o actas de las reuniones de trabajo de las Comisiones Unidas en las que se escuche a actores interesados en opinar en torno a las iniciativas en estudio, así como en las que se analice, discuta, debatan las iniciativas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
 - g) El proyecto de dictamen final aprobado por las Comisiones Dictaminadoras para su análisis y discusión en el Pleno del Senado de la República.
17. Con fecha 27 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, a la que asistieron Consejeros del Instituto Federal Electoral, Académicos e Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Por parte del Instituto Federal Electoral:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- a) Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral;
- b) Dra. María Marván Laborde, Consejera del Instituto Federal Electoral, Presidenta del Órgano Garante de Transparencia del IFE.
- c) Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero del Instituto Federal Electoral.
- d) Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Consejero del Instituto Federal Electoral.

Por parte de los académicos e investigadores:

- a) Mtro. Enrique Carpizo, Subdirector de la Coordinación de Análisis Jurídico y Políticas Públicas de la oficina del Abogado General de la UNAM.
- b) Dr. Edgar Corzo Sosa, Investigador "A" de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil:

- a) Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de FUNDAR;
- b) Dr. Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
- c) Lic. Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica.
- d) Lic. Paulina Gutiérrez, del CIESAS.

- 18.** Con fecha 19 de diciembre de 2012, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, se discutió y aprobó el presente proyecto de Dictamen.



788

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

- 1) En el apartado de descripción del “contenido de las iniciativas”, se analiza de cada una de las iniciativas en materia de transparencia descritas en el apartado de antecedentes, la exposición de motivos y del proyecto de decreto, mediante comparativos del texto vigente y las propuestas de reforma o adiciones.
- 2) En el apartado de “análisis conceptual y temático de las coincidencias y divergencias de las tres iniciativas materia del dictamen”, se realiza un comparativo conceptual entre las tres iniciativas descritas a fin de encontrar los puntos de coincidencia y divergencia de los diferentes temas contenidos en cada una de las propuestas.
- 3) En el apartado relativo al “trabajo en comisiones”, se describen las acciones realizadas por las Dictaminadoras para analizar las iniciativas en estudio y dictamen, así como el proceso de consulta en el que participaron las organizaciones de la sociedad civil, académicos, investigadores, dependencias de la Administración Pública Federal, organismos especializado y todos los interesados en participar en el proceso de consulta realizado por las Comisiones Unidas Dictaminadoras.
- 4) En el apartado de “consideraciones jurídicas de las Comisiones Unidas”, se expresan los razonamientos jurídicos realizados por las Dictaminadoras en torno a las propuestas contenidas en cada una de las iniciativas y las justificaciones correspondientes para la aprobación del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- 5) En el apartado de “contenido de la Ley General”, las Comisiones Dictaminadoras describen, los elementos normativos que a su juicio, deberá contener la Ley General que en su oportunidad expida el Congreso de la Unión, con el propósito de establecer los criterios mínimos que deberán atender las Legislaturas Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cada una de las entidades federativas, al momento de expedir la Ley en la materia, a fin de establecer los estándares y lineamientos mínimos que deberán atender para el acceso a la información pública y protección de datos



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

personales, en armonía con las nuevas disposiciones Constitucionales contenidas en el presente Decreto que, en su oportunidad, apruebe el Constituyente Permanente.

- 6) En el apartado de "proyecto de decreto de las Comisiones Unidas", se propone el Decreto en el que se reflejan los acuerdos alcanzados entre los diversos Grupos Parlamentarios para reformar y/o adicionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A continuación, pasamos al desarrollo de la metodología descrita con anterioridad.

**1.- DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS, DE LA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DEL PROYECTO DE DECRETO,
MEDIANTE COMPARATIVOS DEL TEXTO VIGENTE Y LAS
PROPUESTAS DE REFORMA O ADICIONES.**

Toda vez que se trata de tres iniciativas en materia de transparencia, presentadas por la mayoría de los Grupos Parlamentarios representados en el Senado de la República, contenidas en el presente dictamen, las dictaminadoras acordamos analizar su contenido una por una, conforme al orden de presentación ante el Pleno.

- a) De la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del artículo 6°; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral 1 inciso g y se recorren los subsecuentes del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Alejandro Encinas



7280

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta iniciativa propone en la exposición de motivos:

1. Definir cuáles son los sujetos obligados al mandato previsto en el párrafo segundo del artículo 6° constitucional. La fracción I del artículo referido establece el principio de publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, con lo que el Constituyente rompió la concepción patrimonialista de la información, señalando que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público. Sin embargo, el principio de publicidad no sólo debe aplicar para las instituciones de gobierno, toda vez que la transparencia y rendición de cuentas se extiende a todas aquellas personas que reciben y ejercen recursos públicos, que deben ser objeto de comprobación, así como a las personas que ejercen actos de autoridad y que tienen incidencia en la esfera jurídica de los titulares de este derecho.
2. Reformar el artículo 6°, segundo párrafo, fracción I, a fin de plantear que toda la información en posesión de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, es pública al igual que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del ámbito federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, así como los órganos denominados autónomos.
3. Fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y de datos personales. Si bien estos órganos cuentan con autonomía operativa, de gestión y de decisión, conforme a lo previsto en la fracción IV del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario unificar sus características a fin de incrementar su eficiencia institucional para garantizar plenamente los derechos que tutelan. Por lo que, en principio, es indispensable dotarlos de autonomía constitucional.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

4. Que los órganos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales deben ser incorporados de manera expresa en la Constitución Federal, así como en las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para dotarlos de autonomía constitucional, con lo que se les legitimaría plenamente y se constituirían como órganos imparciales, que no respondan a consignas directas o indirectas de otras autoridades, dado que no dependerían de ninguna de ellas, garantizando así una actuación profesional y objetiva, siempre apegada a la legalidad, y favoreciendo la vida democrática del país, por tratarse de órganos especializados que cuentan con el conocimiento necesario para valorar adecuadamente los casos que se presenten.
5. Para dotarlos de autonomía constitucional se sugiere precisar en la fracción IV del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión se sustanciarán ante órganos especializados e imparciales, con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, los cuales deberán ser incorporados de manera explícita en la Constitución Federal, las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
6. La autonomía constitucional a los órganos garantes los facultará para interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, exclusivamente respecto de disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.
7. Propone adicionar un tercer párrafo al artículo 6º constitucional, en el cual el Congreso de la Unión instituya expresamente un organismo denominado Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos.
8. Con relación a los Estados de la República, se debe adicionar una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establezca la obligación de que las Constituciones de las Entidades Federativas deberán prever la

existencia de órganos autónomos garantes del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

9. Por lo que hace al Distrito Federal, se propone adicionar al artículo 122, punto C, una BASE SEXTA en la que se establezca la inclusión de un órgano autónomo garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, emitido por el Congreso de la Unión.
10. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituiría al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos como órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales a nivel federal; por lo tanto, es necesario advertir que el actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos está constituido como un organismo descentralizado no sectorizado de la Administración Pública Federal, de modo que su competencia se restringe al ámbito del Ejecutivo Federal, lo que se configura como su principal debilidad. Esto, en la práctica, reduce el principio de imparcialidad para obtener información pública.
11. Que es necesario el rediseño del órgano garante federal para que cuente con autonomía constitucional, independiente del Ejecutivo Federal, que tenga competencia sobre los poderes federales y demás órganos autónomos, exceptuando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, teniendo en cuenta que los órganos garantes se crean como mecanismos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no son emitidos por acontecimientos mediáticos, sino que preservan la organización y el funcionamiento constitucional.
12. Al dotar de autonomía constitucional al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos se cumple a cabalidad el mandato constitucional previsto en el artículo 1º de nuestra Constitución Federal, conforme al cual las "...autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”; toda vez que, con ello, se promueve el respeto, la protección y la garantía de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

13. Para la creación del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, se propone que el Congreso de la Unión adicione al artículo 6º constitucional el siguiente diseño institucional:

- i. El Consejo contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios; y se regirá por la ley federal que emita el Congreso de la Unión, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública.
- ii. El Consejo será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial (excepto la Suprema Corte de Justicia de la Nación), así como de los órganos autónomos, los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal.
- iii. El Consejo resolverá los procedimientos que se interpongan en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier sujeto obligado federal que violenten el derecho de acceso a la información pública, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dicha excepción se plantea considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Tribunal Supremo y dada su función como máximo intérprete de la Constitución; por lo tanto, debe reconocerse que no es posible generar un esquema que dé lugar a la revisión de sus determinaciones. En esas condiciones, es el único órgano cuyas resoluciones en materia de acceso a la

información y datos personales no deben estar sujetas a la revisión del Consejo. Por lo que se constituye en la única instancia especializada que a su interior continuará resolviendo los recursos de revisión que le sean presentados, con apego a las disposiciones previstas en la ley general en la materia que se emita.

- iv. Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e inatacables para los sujetos obligados y sólo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información y de datos personales al verse agraviados por la decisión que se tome en el recurso de revisión, toda vez que, en nuestro diseño constitucional, la tutela de los derechos fundamentales se encuentra garantizada a través de mecanismos jurisdiccionales, de manera que el artículo 103 de la Constitución establece que corresponde a los tribunales federales (a través del amparo) resolver las controversias por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que sea parte el Estado mexicano.

En consecuencia, se elimina la posibilidad de que los sujetos obligados promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación o cualquier otra instancia, con lo que se evita la dilación del procedimiento, por lo que deben dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo al resolver recursos de revisión.

- v. El Consejo será competente para conocer las inconformidades que presenten los particulares en contra de las resoluciones emitidas por los órganos garantes de transparencia de las entidades federativas, y tendrá la facultad de emitir una nueva resolución vinculatoria para los órganos garantes, en la que se pronunciará sobre el fondo del asunto.
- vi. La obligación de la Cámara de Diputados de garantizar que el Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

cumplimiento de sus actividades. Esto tiene especial relevancia, toda vez que la Enciclopedia Jurídica, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que la "independencia orgánica se manifiesta no solamente a través de la ausencia de controles burocráticos, sino también con la existencia de cierta autonomía financiera o garantía económica a favor del órgano constitucional; de otra forma la independencia orgánica podría verse fácilmente vulnerada a través de la asfixia en el suministro de recursos económicos".

- vii. El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete consejeros ciudadanos que serán designados de manera escalonada por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma y términos que determine la ley federal.

Esta integración garantizará que las resoluciones o decisiones colegiadas que se adopten sean emitidas con el mayor apego a la ley, la máxima publicidad, imparcialidad y apegados a los principios que rigen su actuar, puesto que la diversidad de opinión y pensamiento permitirá que la interpretación y aplicación de la ley cumpla con el principio *pro homine* consagrado en el artículo 1º constitucional. Asimismo, se elimina la posibilidad de un empate al someter a votación sus decisiones. Además, las nuevas responsabilidades y funciones que se encomendarán al órgano garante federal, como segunda instancia en el ejercicio del derecho de acceso a la información, hacen necesario incrementar el número de consejeros para una mejor distribución de las cargas de trabajo.

- viii. Para la designación de los consejeros se permitirá que los comisionados del actual órgano garante federal participen en el proceso de selección, sin mayores requisitos de los que debieron cubrir para su designación actual. Esto en atención a la garantía de irretroactividad.
- ix. En la designación de los consejeros ciudadanos se favorecerá la equidad de género.



296

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- x. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección.
El periodo a que se hace referencia encuentra sustento en la actividad que desarrolla el propio Instituto, pues es uno de los pilares del marco jurídico nacional, al garantizar el derecho de acceder a la información en poder de los sujetos obligados. Ello conlleva a hacer efectiva la especialización y el profesionalismo de las personas que ocuparán el cargo, lo cual fortalecerá, en todo caso, la labor encomendada al Consejo.
- xi. Los procedimientos de designación de los consejeros ciudadanos se determinará en la ley federal que emita el Congreso de la Unión, y sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución.
- xii. El Pleno del Consejo será presidido por uno de los siete consejeros ciudadanos, quien será designado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses y podrá ser reelecto por una sola vez.
- xiii. Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
- xiv. El Consejo, a través de su presidente, presentará anualmente al Congreso de la Unión un informe de actividades. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley federal.
- xv. Las violaciones al derecho de acceso a la información y datos personales en posesión de cualquier sujeto obligado serán sancionadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan, así como los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

14. Que los recursos financieros, materiales y humanos del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos deberán ser transferidos al Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, creado en los términos de esta reforma. Los trabajadores de ninguna manera resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.
15. Se propone adicionar el inciso h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución, en el cual se determine que el Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos podrá interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales consagrados en los artículos 6° y 16 de la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
16. Que en el mismo sentido, los órganos garantes de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales equivalentes en los Estados de la República deberán tener facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
17. Por lo que hace a la responsabilidad en que puedan incurrir los consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos en el ejercicio de su cargo, éstos podrán ser sujetos de juicio político de conformidad con el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sus acciones u omisiones redunden en perjuicio del interés público, como es el caso concreto de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, a las leyes federales y las que de ellas emanen.
18. La propuesta que se presenta implica que se confiera una nueva facultad a la Cámara de Senadores para elegir a los

consejeros ciudadanos del Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, por lo que se debe reformar la fracción XII del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

19. La iniciativa de reforma al artículo 6° constitucional también comprende la inclusión de un tercer párrafo que se refiere a la creación de una ley general en materia de acceso a la información pública, cuyo objetivo sería homogenizar el contenido de la normatividad que rige el acceso a la información pública en el país. En esta ley general se armonizará la interpretación y alcance de los principios y bases establecidos en el párrafo segundo del citado artículo de la Constitución, lo que permitirá transitar sobre un piso firme en todo el país, al tratarse de un derecho igual para todos.
20. En dicho instrumento se determinará un diseño institucional que permitirá garantizar a las personas su derecho de acceso a la información pública y elevar las expectativas de la gestión pública, promoviendo la corresponsabilidad de los actos públicos a través de la participación ciudadana. Lo anterior, al establecer parámetros iguales para todos los niveles de gobierno.
21. La creación de esta ley general en la materia representa una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia.

Con este marco general, se busca:

- I. Homologar:
 - a) Los mecanismos de acceso a la información.
 - b) Los medios de impugnación.
 - c) El plazo de cumplimiento de las resoluciones.
 - d) La temporalidad de la reserva de información.
 - e) Los supuestos de restricción a la información pública (causales de reserva y confidencialidad).



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- f) El catálogo de información pública de oficio que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los sujetos obligados.
- II. Establecer obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados.
- III. Delinear obligaciones generales que deben cumplimentar los sujetos obligados como son:
- a) La evaluación del cumplimiento a las leyes de acceso a la información pública de la Federación, los Estados y el Distrito Federal.
 - b) La capacitación de servidores públicos.
 - c) La promoción del derecho de acceso a la información entre los habitantes del país.
 - d) Las acciones de vinculación con la sociedad.
- IV. Establecer políticas de incentivos, entre otros aspectos.
22. Por lo anterior, se propone facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de acceso a la información pública, por lo tanto, será necesario adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional.
23. En este sentido, el Congreso de la Unión contará con un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Decreto de reforma aprobado, conforme al artículo Segundo Transitorio que se propone.
24. Finalmente, por lo que hace a los datos personales en posesión de los distintos sujetos obligados del ámbito federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, se considera que sean los mismos órganos garantes del derecho de acceso a la información los competentes para conocer de la protección de este derecho. Tal prerrogativa quedará sujeta a lo previsto en la ley general en materia de protección de datos personales, a la cual se ajustarán las leyes que emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, a fin de



270

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

que no exista disparidad en su regulación e interpretación, toda vez que se trata de un mismo derecho.

25. Para el ejercicio de los derechos relativos a la protección de datos personales en posesión de particulares, se deberá crear un organismo especializado que conozca del tema.
26. Por lo anterior, se propone reformar el artículo 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para prever que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de éstos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fijen la ley general en materia de protección de datos personales y las leyes que emitan la federación, los estados y el Distrito Federal, las cuales establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
27. Tal reforma confiere una nueva facultad al Congreso de la Unión, que es la emisión de una ley general en materia de protección de datos personales, por lo que resulta necesario adicionar una fracción XXIX-S al artículo 73 constitucional. De conformidad con el artículo Segundo Transitorio, el Congreso contará con un plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del Decreto, para publicar la ley general en materia de protección de datos personales.
28. Por otro lado, se deberán emitir o modificar las leyes federal, estatales y del Distrito Federal, para ajustar su contenido a lo previsto en la ley general en materia de protección de datos personales.
29. En el caso de los partidos políticos, la mayoría de las leyes de las entidades federativas los considera sujetos obligados directos [1], dado que los particulares pueden solicitar información pública de manera directa a los propios institutos políticos. A nivel federal y en nueve estados de la República [2], la información de los partidos se puede conseguir a través de los órganos electorales, por lo cual, se consideran sujetos obligados indirectos. Por último, en seis estados [3] no se puede acceder a la información que obra en los archivos de



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

los partidos; únicamente se puede conocer la documentación que entregan a los órganos electorales, los cuales tienen la obligación de hacerla pública, dado que pasan a formar parte de sus archivos institucionales.

30. Ante tal escenario, es importante homogeneizar su condición de sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.
31. Además, los partidos políticos representan la mayor parte de las tendencias ideológicas de la sociedad mexicana, lo que coadyuva a la construcción de una democracia participativa que permite la consolidación de un Estado democrático, representativo y federal, en términos del artículo 40 de la Constitución.
32. Por lo anterior, se propone incluirlos de manera expresa como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6° constitucional.
33. Por otro lado, la inclusión de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos en la fracción I del artículo 6° constitucional, tiene la finalidad de garantizar la transparencia del ejercicio de estos recursos. Por lo tanto, las leyes en la materia deberán prever los procedimientos y mecanismos para acceder a la información pública en posesión de estas personas.

La relevancia de transparentar la actuación de quienes realizan actos de autoridad, radica en el impacto que tienen sus decisiones en la esfera jurídica de los particulares.


Así, con la modificación constitucional que propone este dictamen, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales estaría transitando a una nueva etapa que facilita la relación entre los titulares de ambos derechos y las autoridades de los distintos órganos de gobierno.

272

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

34. En síntesis, la iniciativa de reforma supone una política plenamente comprometida con la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.

Con el propósito de facilitar su análisis y estudio, las dictaminadoras realizaron un cuadro comparativo del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el texto del decreto con las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio para quedar como sigue:

VIGENTE	PROPUESTA
<p>Artículo 6o. ...</p> <p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p> <p> II a III. ...</p>	<p>Artículo 6o....</p> <p>I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p> <p>II a III. ...</p>
<p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.</p> <p>V a VII. ...</p>	<p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, por lo que la Constitución Federal, las de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de dichos órganos.</p> <p>V.a VII. ...</p>
No existe correlativo	VIII. El Congreso de la Unión establecerá un

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

órgano que se denominará Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, que contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Este órgano se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

El Consejo será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales; emitir recomendaciones y apercibimientos; y para resolver los procedimientos que se interpongan en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, que violenten el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Consejo estará facultado para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados señalados en la fracción I de este artículo.

Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e inatacables para la autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los órganos garantes referidos en la fracción IV de este artículo. Sólo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales.

La Cámara de Diputados garantizará que el Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de sus actividades.

El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete consejeros ciudadanos, que serán designados por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma, términos y procedimiento que determine la ley federal, favoreciéndose la equidad de género y el relevo escalonado de sus integrantes. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

El Consejo será presidido por uno de los siete consejeros, el cual será designado por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses y podrá ser reelecto por una sola vez.

Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán tener ningún otro empleo cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El Consejo, a través de su presidente, presentará un informe anual de actividades al Congreso de la Unión. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley federal.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<i>Las violaciones a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que tenga conocimiento el Consejo en el ejercicio de sus funciones, serán sancionadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan y de los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado.</i>
<p>Artículo 16. ...</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 16. ...</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fijen la ley general, la ley federal y las leyes de los estados y el Distrito Federal, las cuales establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 29. ...</p> <p>En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la</p>	<p>Artículo 29. ...</p> <p>En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; el derecho de acceso a la información; los derechos de protección de datos personales; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.</p>



276

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

protección de tales derechos.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I a XXIX-Q... No existe correlativo	Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I a XXIX-Q... XXIX-R. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de acceso a la información pública. XXIX-S. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de protección de datos personales. XXX....
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I.a XI. ... XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.	Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I.a XI. ... XII. Designar a los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
Artículo 105: La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) a g) ... No existe correlativo	Artículo 105: La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: a) a g) ... h) El Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<i>celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales consagrados en los artículos 6° y 16 de esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, los órganos garantes de acceso a la información pública y de protección de datos personales equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</i>
<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>
Título Quinto	Título Quinto



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>De los Estados de la Federación y del Distrito Federal</p> <p>Artículo 116. ...</p> <p>Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I a VII. ...</p> <p>...</p> <p>N° existe correlativo</p>	<p>De los Estados de la Federación y del Distrito Federal</p> <p>Artículo 116. ...</p> <p>Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: I a VII. ...</p> <p>...</p> <p><i>VIII. Las constituciones y leyes de los estados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, en el ámbito de su competencia, garantizarán la creación de órganos de acceso a la información pública y protección de datos personales con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propio en términos del artículo 6° de esta Constitución. Las legislaciones que sobre la materia emitan las entidades federativas deberán ajustarse a lo previsto en el artículo 6°, segundo párrafo de la presente Constitución y en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</i></p>
<p>Artículo 122:</p> <p>...</p> <p>A...</p> <p>B....</p> <p>C....</p> <p>BASE PRIMERA. ...</p> <p>I. a IV. ...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 122:</p> <p>...</p> <p>A...</p> <p>B....</p> <p>C....</p> <p>BASE PRIMERA. ...</p> <p>I. a IV. ...</p> <p>...</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>V.... a) a o) ... No existe correlativo</p>	<p>V.... a) a o) ... p) <i>Nombrar a los Comisionados Ciudadanos del órgano garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales del Distrito Federal, conforme al procedimiento previsto en la ley;</i> q) <i>Expedir las leyes que garanticen el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal, las cuales deberán ajustarse a lo previsto en las leyes generales de acceso a la información pública y protección de datos personales que emita el Congreso de la Unión.</i> r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p>
<p>BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... No existe correlativo</p>	<p>BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ... <i>BASE SEXTA.- Existirá un órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, que tendrá autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el Distrito Federal. Este órgano se regirá por la ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</i></p>
	<p>TRANSITORIOS</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las leyes generales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

TERCERO. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

CUARTO. La Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales o, en su caso, realizar las modificaciones necesarias a sus actuales leyes, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de las leyes generales a que hacen referencia los artículos 6° y 16 de esta Constitución.

QUINTO. El Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos iniciará funciones a partir de la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información.

SEXTO. La designación de los consejeros ciudadanos del órgano garante federal, deberá tener lugar dentro de los sesenta días naturales a la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información. En este proceso, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos podrán participar en la convocatoria para la designación de consejeros ciudadanos.

SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.

SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.

OCTAVO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se transferirán al órgano creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

DÉCIMO. El Congreso de la Unión creará un organismo para la difusión, protección y vigilancia de los derechos de protección, acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de particulares.



2016

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

PROPUESTA	FE DE ERRATAS
<p>Transitorio Séptimo</p> <p>Dice:</p> <p>SÉPTIMO (opción 1). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.</p> <p>SÉPTIMO (opción 2). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años, dos consejeros para un periodo de cinco años y dos consejeros para un periodo de siete años.</p> <p>SÉPTIMO (opción 3). Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos concluirán su encargo para el periodo que fueron elegidos como consejeros del nuevo órgano garante federal y únicamente se designarán a dos consejeros para completar la integración de los siete integrantes del Consejo.</p>	<p>Transitorio Séptimo</p> <p>Debe decir:</p> <p>SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- b) De la iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, presentada por la Senadora Arely Gómez González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

Esta iniciativa propone:

1. Dotar de autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Esta iniciativa propone que el IFAI, quede constituido como el único organismo garante, especializado, imparcial y autónomo en materia de los derechos de acceso a la información y protección a datos personales en posesión de cualquier autoridades, entidad, órgano u organismo federal, su mandato será entonces la promoción, protección y cabal garantía de estos derechos en todos los poderes federales y en los organismos con autonomía constitucional.

La reforma amplía la competencia del IFAI para resolver los recursos de revisión que en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se presenten contra actos del Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los organismos con autonomía constitucional (Banco de México, Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), los tribunales administrativos y cualquier otra entidad federal.

2. Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Esta iniciativa propone otorgar autonomía constitucional a todos los organismos especializados que ya existen en los Estados de la República y el Distrito Federal. Este es un paso trascendental que mediante una reforma a los artículos 116 y 122 constitucionales, permite asegurar que en cada Estado y en el Distrito Federal exista un órgano garante, especializado, colegiado e imparcial, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir, sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, responsable de velar por el pleno ejercicio del derecho a la información y la protección de datos personales en posesión de las autoridades.

La iniciativa propone dotar de facultades al Congreso de la Unión, para expedir una ley general en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Esta ley, congruente con el sistema federal, deberá establecer los estándares mínimos y los procedimientos en la materia, para asegurar que en todo el país la protección de estos derechos y las políticas de transparencia, obedezcan a condiciones mínimas, compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Esta ley dará certeza de los requisitos para la integración de los órganos garantes, criterios de clasificación y reserva de información, procedimientos, plazos, etcétera.

Corresponderá a las legislaturas de cada Estado y del Distrito Federal, atendiendo a sus circunstancias y condiciones específicas, adaptar o mejorar los mínimos establecidos en la Ley General y con ello contribuir a un derecho que cumpla con las condiciones de progresividad y gradualidad necesarias para responder a la complejidad que tiene nuestro país. De esta forma se puede garantizar el doble objetivo de tener bases compartidas sobre la comprensión, características y requisitos de ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información (profundizando en la ruta



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

señalada por la importante reforma al artículo 6° de julio de 2007), pero a la vez respetando el sistema federal que nos hemos dado como nación, y que obliga a reconocer ámbitos de regulación propios en cada entidad federativa.

Propone las bases para la coherencia, congruencia y unidad de los principios, bases y procedimientos aplicables en materia del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en todo el país, así como velar por la especialidad, imparcialidad y autonomía de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal, asimismo considera conveniente establecer la posibilidad de que los particulares puedan someter a la revisión del organismo garante federal las decisiones de éstos cuando no les favorezcan. Este recurso abre una vía expedita a los particulares para asegurar la vigencia de sus derechos, en consonancia con los principios establecidos en el artículo 1o de la Constitución, y permite asegurar un sistema coherente para la garantía de dos derechos fundamentales de central importancia en la vida de los mexicanos, y evitar estándares diferentes de protección en el país.

Se propone también que el IFAI actúe como órgano de última instancia sólo respecto de los poderes, autoridades y entidades públicas, pues los particulares siempre podrán recurrir -vía amparo- sus decisiones ante los tribunales federales, en congruencia con el diseño constitucional de tutela y protección de los derechos fundamentales. A este respecto conviene recordar, en particular, el contenido de la fracción 1 del artículo 103 de nuestra Carta Marga, el cual otorga a los Tribunales de la Federación la facultad de resolver toda controversia que se suscite "Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte".

En la exposición de motivos se destaca que este recurso ante el organismo garante federal no inhiba la posibilidad que tienen los particulares de optar por la protección jurisdiccional de su derecho a través de un juicio de amparo, que a la sazón, suele ser más costoso y lleva más tiempo su resolución. El recurso ante el IFAI permitiría entonces un mecanismo de revisión expedito y sin las formalidades indispensables que conlleva un juicio de amparo. Por otro lado, este recurso se abre sólo para los particulares, pues las decisiones de los órganos garantes estatales y del Distrito Federal seguirán siendo definitivas e inatacables para las autoridades, quienes son los sujetos obligados de cumplimentar y garantizar los derechos en comento.

3. Recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Esta iniciativa propone establecer un recurso especial y excepcional que se sustancie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este recurso podrá iniciarse cuando el organismo garante determine divulgar cierta información que a juicio de las autoridades responsables, ello pueda representar una amenaza directa y trascendente a la seguridad nacional o a la estabilidad económica. En el caso de que este conflicto se presentara, y con el propósito de contar con un mecanismo expedito que permita resolver una diferencia a este respecto, la ley deberá establecer un procedimiento que permita que éste sea resuelto de manera definitiva por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal deberá hacer un juicio sobre si la materia controvertida en efecto cabe dentro del concepto de seguridad nacional, así como señalar en su resolución el alcance de la afectación y, en su caso, las modalidades de reserva de la información en cuestión.

Por su naturaleza, este recurso tiene un carácter extraordinario por lo que la legitimidad para interponerlo debe estar limitada. Por ello, se propone que sólo lo pueda interponer el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Cámara de Senadores y los



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Presidentes de los organismos con autonomía constitucional. En el caso de la Administración Pública Federal, el único legitimado para interponerlo sería el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.

4. Principios que rigen al organismo garante federal

Para orientar la acción del organismo garante encargado de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y permitir su evaluación objetiva, la iniciativa propone que se rijan por los siguientes principios:

- a) Certeza: entendida como seguridad y certidumbre jurídicas, tanto para los ciudadanos como para las propias autoridades y los servidores públicos;
- b) Legalidad: como un mandato expreso hacia las autoridades obligadas y al organismo garante, para someterse estrictamente al mandato de la ley y ser coherentes con lo establecido en el artículo 16 constitucional;
- c) Autonomía: es un eje rector en la actividad del organismo garante, entendido como la libertad y la no sujeción a instancia, interés o persona alguna al momento de tomar decisiones. Refuerza la autonomía de dicha institución y es un complemento a todo el esquema de protección institucional y de los propios comisionados, como el sistema de remuneración, estabilidad en el cargo e inamovilidad, fuero, etcétera;
- d) Imparcialidad: implica que los servidores públicos del organismo garante deben ceñirse, de forma estricta a la ley, y no dejarse llevar o inclinarse a favor de los intereses de los sujetos a los que afectan sus decisiones;
- e) Eficacia: se concibe como una obligación del organismo garante de hacer su trabajo correctamente, utilizar los recursos públicos de forma adecuada y evitar cualquier derroche, y particularmente asegurar que sus procedimientos sean expeditos, es decir que resuelvan en plazos en que no menoscaben el ejercicio del derecho de acceso a la información.

- f) Objetividad: se refiere a dejar de lado las ideas, concepciones o prejuicios del servidor público, y hacer frente al asunto o caso del que se trate atendiendo a los hechos, los razonamientos de las partes y a los elementos de prueba aportados; y
- g) Máxima publicidad: se entiende como una forma de orientar la interpretación y aplicación de la norma, pero también como una regla en las actuaciones de las dependencias públicas obligadas y del organismo garante. En este sentido, en el caso de que existan dudas entre la publicidad o reserva de la información, deberá favorecerse inequívocamente la publicidad de la misma. La máxima publicidad será el canon interpretativo por el que, en materia de acceso a la información pública, deberá guiarse el órgano garante al que se le está dotando de autonomía constitucional.

5. Diseño institucional

La iniciativa propone que el organismo garante federal incremente en dos el número de Comisionados para llegar a siete. Esto asegura que el Pleno resuelva de manera expedita y con alto rigor y calidad los asuntos que se le presenten, a la luz de las nuevas funciones y cargas de trabajo.

Se propone que los comisionados sean nombrados por el Ejecutivo Federal, y que la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encontrara en receso, por la Comisión Permanente, con la misma votación. A diferencia del procedimiento para designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se presentarían ternas sino un solo candidato. Esta característica obliga al titular del Ejecutivo Federal, a elegir a candidatos idóneos para la responsabilidad que asumen, y bajo las condiciones que en su momento establecerá la ley, así como a justificar su selección. Además, puesto que se trata de una materia altamente especializada, la designación por medio de candidatos únicos facilita un procedimiento expedito de designación.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Se propone que en caso de que el Senado de la República objetase la propuesta del Ejecutivo, éste podrá hacer una segunda propuesta. Si ésta volviera a ser rechazada, para evitar la parálisis o mal funcionamiento del organismo garante, se faculta al titular del Ejecutivo Federal para designar directamente al nuevo comisionado, quien deberá necesariamente ser una persona distinta a las previamente rechazadas.

Propone que los comisionados duren en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y deberán dedicarse de manera exclusiva a sus funciones, salvo el desempeño de actividades docentes, científicas o de beneficencia. Estas garantías tienen como propósito salvaguardar la independencia y autonomía de los comisionados. La ley deberá precisar los requisitos que deberán cumplir los comisionados para asegurar un conocimiento experto, especializado y comprometido con los valores propios a la transparencia, la publicidad de la información gubernamental, la protección de la vida privada y, de manera amplia, la rendición de cuentas del Estado mexicano.

De acuerdo con lo anterior, se proponen reformas a los artículos 76, y 89 constitucionales, relativos a las facultades del Senado y del Ejecutivo Federal, respectivamente.

Así pues, de acuerdo con la iniciativa, la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos en el Estado constitucional democrático, se considera que es importante determinar que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, pero también reglas para establecer su responsabilidad en caso de violaciones a sus deberes. En virtud de lo anterior se propone reformar los artículos 110 y 111 de la Constitución Federal, ya que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones.

6. Acciones de inconstitucionalidad

La iniciativa propone que el órgano especializado garante de derechos fundamentales, es decir, el IFAI tenga facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública o el derecho a la protección de datos personales. Asimismo, se plantea otorgar esta facultad a los organismos garantes equivalentes en los Estados y el Distrito Federal, pero limitada a las leyes expedidas por las legislaturas locales y la Asamblea Legislativa, según corresponda.

La propia iniciativa especifica que si bien es cierto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones estatales en la materia, incluyendo la del Distrito Federal, tienen ya esta facultad, aunque de manera amplia pues comprende vulneraciones a cualquier derecho humano consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que México sea parte. Sin embargo, la especialidad de las materias que comprenden la competencia de los organismos garantes en materia de acceso a la información y protección de datos personales y su conocimiento especializado son argumentos para considerar que conviene otorgarles esta facultad con el propósito de asegurar que no existan tendencias regresivas en esta materia, y con ello asegurar el cabal cumplimiento del principio de progresividad establecido en el artículo 1º constitucional. Asimismo, esta facultad asegura los propósitos de la autonomía constitucional, pues de no concedérsele a los organismos garantes quedarían sujetos a otros organismos para demandar la efectividad de su mandato.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

7. Rendición de cuentas

La iniciativa propone establecer la obligación de que el órgano constitucionalmente autónomo, a través de su presidente, presente anualmente ante el Senado de la República un informe de actividades que permita, por un lado, valorar su labor, y por otro, exponer al Senado la situación que guardan los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el país y alertar con ello a los Poderes de la Unión y a la sociedad mexicana de las posibles violaciones en que las diferentes autoridades pudieran incurrir en la materia.

8. Fortalecimiento de la rendición de cuentas del Estado Mexicano

Se propone modificar la fracción V del artículo 6° constitucional para asegurar que los sujetos obligados por el derecho a la información publiquen indicadores que permitan rendir cuenta a los ciudadanos del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados que ha obtenido. Con esta modificación se supera el contenido limitado del concepto de "indicadores de gestión", para avanzar en una política de transparencia que permita que todas las autoridades y, en general, quienes ejercen recursos públicos en todos los órdenes de gobierno del Estado mexicano, den cuenta puntual, cabal y verídicamente de la manera en que cumplen sus funciones sustantivas. No se trata entonces sólo de decir cómo gastan los recursos públicos, sino qué resultados obtienen y qué bienes públicos generan.

Para lograr lo anterior, la iniciativa propone regular la coordinación que deberá tener el organismo garante, y de manera más amplia, todos los órganos que integran el sistema nacional de transparencia y acceso a la información, con la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, todas instituciones cabezas, respectivamente, del Sistema Nacional de Fiscalización, del Sistema Nacional de Archivos

y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Estos mecanismos de coordinación, deben permitir una mejor articulación de las políticas y acciones que cada organismo realiza en sus respectivas esferas de competencia y con ello coadyuvar a una mejor rendición de cuentas en el Estado Mexicano.

9. Régimen transitorio

Las implicaciones que conllevan las reformas propuestas, deben ser previstas con cautela, por lo que la iniciativa prevé establecer un régimen transitorio que dé el cauce legal y operativo necesario para alcanzar de manera expedita sus objetivos.

En este sentido, se requiere que el Congreso de la Unión expida, en primer lugar, una Ley General del contenido de esta Ley, así como se requerirán modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. También se prevé necesario establecer una Ley Orgánica del nuevo organismo garante, y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La redefinición del régimen competencial de datos personales requerirá, sin duda, otros cambios legislativos, tanto para el régimen de datos personales gubernamentales como de aquéllos en posesión de los particulares. Lo anterior se propone sea emitido por el Congreso de la Unión en un plazo de un año.

La reforma también supone la actividad de los poderes reformadores de las entidades federativas y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También en este caso se propone fijar el plazo de un año para que completen esta tarea.

La iniciativa en comento considera que los actuales comisionados cuentan con la especialización necesaria y el conocimiento acumulado, además de que ha sido probada su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, razones por las cuales plantea como



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

conviene que los actuales comisionados del IFAI prosigan en su encargo hasta concluir el mandato por el que fueron designados. En este orden de ideas, plantea que resulta importante que la nueva configuración del organismo garante se integre rápidamente, por lo que propone que ésta se complete dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma. Ello aseguraría una adecuada transición al nuevo régimen.

Esta iniciativa propone que los comisionados del órgano garante tengan un perfil acorde con las responsabilidades que se le están otorgando. Como es bien sabido, actualmente el IFAI resuelve los recursos que interponen los particulares contra las negativas de información de las dependencias federales. Dichas resoluciones revisten todas las características de aquéllas que emite una autoridad administrativa jurisdiccional. En este sentido, con las nuevas atribuciones que se le pretende otorgar, relativas a revisar en última instancia las resoluciones que a su vez emitan los órganos garantes de las entidades federativas, el nuevo órgano de transparencia se estaría asemejando a una instancia jurisdiccional revisora. Por lo mismo, la actividad sustantiva de esta nueva instancia consiste y seguirá consistiendo en la aplicación de la legislación a casos concretos en disputa, lo que hace, en opinión de los suscriptores de la iniciativa, indispensable que quienes tengan la responsabilidad de ocupar los cargos de comisionados, tengan el perfil idóneo para ello.

Finalmente, se incorporan disposiciones para asegurar el escalonamiento en la renovación del órgano garante, buscando dar certeza en los periodos de conclusión e inicio del mandato.

En el mismo sentido, del análisis de la iniciativa anterior, con el propósito de facilitar su estudio, las dictaminadoras realizaron un cuadro comparativo del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el texto del decreto con las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio para quedar como sigue:

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

VIGENTE	PROPUESTA
<p>Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>(...)</p> <p>I. a III. (...)</p> <p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.</p> <p>V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>VI. a VII. (...).</p> <p>No existe correlativo</p>	<p>Artículo 6o.</p> <p>A. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>(...)</p> <p>I. a III. (...)</p> <p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que sustanciarán ante los organismos especializados que establece esta Constitución.</p> <p>V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.</p> <p>VI. a VII. (...).</p> <p>B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en los términos que la Ley establezca. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.</p> <p>En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia,</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la Ley.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los Presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o los titulares de los órganos constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional.

El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación siguiendo el proceso establecido en el párrafo siguiente y lo dispuesto en la Ley.



273

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En caso de que la Cámara de Senadores objetare la propuesta, el Presidente de la República designará nuevamente, dentro de los siguientes treinta días. Si este segundo nombramiento fuera también objetado, el Presidente de la República designará directamente a otra persona en un plazo improrrogable de treinta días.

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley. La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar ayuda al organismo garante y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.

Artículo 73. (...)

Artículo 73. (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>(...)</p> <p>No existe correlativo.</p>	<p>(...)</p> <p>XXIX-R. Para expedir una Ley General reglamentaria del artículo 6° de esta Constitución que establezca las bases y los procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 76. (...)</p> <p>I. a XI (...)</p> <p>XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.</p> <p>No existe correlativo</p>	<p>Artículo 76. (...)</p> <p>I. a XI (...)</p> <p>XII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y</p> <p>XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.</p>
<p>Artículo 78. (...)(...)</p> <p>I a VII. (...)</p> <p>VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p> <p>No existe correlativo</p>	<p>Artículo 78. (...)(...)</p> <p>I a VII. (...)</p> <p>VIII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos esta en esta Constitución y en la Ley;</p> <p>IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p>
<p>Artículo 89. (...)</p> <p>I. a XVIII. (...)</p>	<p>Artículo 89. (...)</p> <p>I. a XVIII. (...)</p>



312
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>XIX. Se deroga.</p> <p>(...)</p>	<p>XIX. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 105.- (...)</p> <p>I (...)</p> <p>II (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>No existe correlativo.</p> <p>III. (...)</p> <p>No existe correlativo.</p>	<p>Artículo 105.- (...)</p> <p>I (...)</p> <p>II. (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>III. (...)</p> <p>IV. Del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.</p>
<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho,</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>...</p>	<p>los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 111. (...) I a VII (...)</p>	<p>Artículo 111. (...) I a VII (...)</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

No existe correlativo	VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo gubernamental. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.
Artículo 122 (...) a) a c) (...) BASE PRIMERA (...) I. a IV. (...) V. (...) a) a n) (...) ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.	Artículo 122 (...) a) a c) (...) BASE PRIMERA (...) I. a IV. (...) V. (...) a) a n) (...) ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo gubernamental. En el Distrito Federal habrá un organismo especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Distrito Federal. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna; o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.- (...)

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.- (...)

TRANSITORIOS

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Federal Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Ejecutivo Federal especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1o de noviembre de 2017.
- b) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

Quinto.- Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su normatividad a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- c).- De la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio en representación de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo Y Celada Y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta iniciativa propone:

1. Otorgar autonomía constitucional a todos los órganos garantes de la transparencia, tanto al federal como a los de las entidades federativas.

Esta propuesta a su vez comprende un diseño puntual sobre las características básicas o fundamentales que deben reunir dichos órganos autónomos a fin de asegurar los principios o criterios de los que deben estar revestidos dichos órganos, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal total que se les ha encomendado.

En resumen, los organismos constitucionales autónomos son generalmente entidades técnicas de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales, que se organizan y funcionan en base a los principios referidos; y para su buen funcionamiento, no sólo deben ser independientes de los poderes clásicos, sino de los partidos políticos o de otros grupos o factores reales de poder.

Es así, que la propuesta va en el camino de que los órganos de transparencia de la Federación, de todos los Estados y el Distrito



329

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Federal se constituyan –particularmente donde todavía no lo son- en organismos constitucionales autónomos, mediante el establecimiento de las garantías mínimas a estos para asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibrio constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal toral que se les ha encomendado.

2. Disponer un concepto amplio de las autoridades obligadas o sujetos obligados en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

En la exposición de motivos se señala que el actual radio de acción del IFAI es sobre las dependencias y entidades de la administración pública federal. Hoy el IFAI conoce sobre negativas u omisiones de información, vía el recurso de revisión, pero sólo de la administración pública federal. Pero no conoce ni es garante sobre la actuación en materia de acceso a la información de los otros poderes públicos.

En consecuencia, no interviene como organismo especializado en la materia frente actos u omisiones sobre los poderes públicos tradicionales, tampoco sobre los órganos constitucionales autónomos. Siendo precisamente, que uno de los ejes centrales que animan la presente iniciativa por la autonomía constitucional del órgano garante federal, el que éste pueda tener competencia sobre los demás poderes públicos, y ser órgano garante en el acceso a la información en todo el ámbito federal.

Se plantea que el nuevo organismo garante constitucional autónomo como depositario de la autoridad en la materia, sea responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial -con excepción de la Suprema Corte



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de Justicia de la Nación-, así como la que está en posesión de los tribunales administrativos, laborales y agrarios, Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas y demás órganos a los que la Constitución les otorga autonomía.

Pero no solamente se propone que su radio de acción sea sobre los poderes, tribunales, universidades públicas y demás órganos autónomos, sino también sobre otros entes, entidades o personas, a saber:

- Fideicomisos y fondos públicos.
- Partidos Políticos.
- Sobre cualquier persona física o moral (jurídica colectiva), organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra análoga que reciba recursos públicos.
- Sobre cualquier persona física o moral que realice actos de autoridad en el ámbito federal.

Se está proponiendo que los particulares que actúen como autoridad o la auxilien, o aquéllos que ejerzan gasto público, quedan -por esos simples hechos o circunstancias- de forma automática o lógica como sujetos obligados -indirectos- en materia de acceso a la información pública.

Sin dejar de advertir, que respecto a la información pública de aquéllas personas físicas o morales (jurídicas-colectivas) que reciban recursos públicos, o realicen actos de autoridad, se propone que el acceso se realice a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos, o sea el que supervise la actuación de esos particulares; es decir, en este caso, se está proponiendo que las personas físicas o morales referidas sean sujetos obligados indirectos en el acceso a la información pública, siendo el vehículo para ello los propios sujetos obligados directos respectivos.



255

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Respecto de la propuestas anteriores, resulta oportuno aludir al Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y al Instituto de Investigaciones de la UNAM, en dónde en el rubro de Sujetos Obligados propone (en este caso respecto del ámbito federal) que sean considerados como sujetos obligados al Poder Ejecutivo del Estado; la Administración Pública, incluyendo a los organismos desconcentrados y descentralizados, a las empresas de participación estatal, y los fideicomisos públicos; el Poder Legislativo y su Órganos de Fiscalización, cualquiera que sea su denominación; el Poder Judicial; los tribunales administrativos; los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas; los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas (en los términos que disponga la legislación electoral [a través del Instituto Electoral del Estado]); las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás autoridades en materia de trabajo; y el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral.

A este respecto, dicho Código de Buenas Prácticas, en el rubro de Sujetos Obligados señaló lo siguiente:

“El capítulo segundo desarrolla el concepto de “autoridad, entidad, órgano u organismo” contenido en el artículo 6º constitucional. Para este propósito, precisa quiénes son los sujetos obligados. Respecto de ellos, conviene señalar dos aspectos que generaron una importante controversia durante la elaboración del CBP: el primero, la inclusión de los partidos políticos y el segundo la condición de algunos particulares, tales como los sindicatos y otras personas privadas, que realizan funciones públicas.

La inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados fue un tema ampliamente discutido durante la reforma constitucional. El dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. La razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son "entidades de interés público". No obstante lo anterior, once leyes de acceso a la información de las entidades federativas los consideran como sujetos obligados directos, siete los hacen sujetos obligados a través del instituto electoral estatal, y en otros nueve casos son sujetos obligados por derivación e interpretación.

Las primeras propuestas del CBP proponían que los partidos políticos, como lo sugería el dictamen del Senado, fueran sujetos obligados indirectos. Sin embargo, durante las reuniones de consulta, se hizo notar enfáticamente que esto constituiría un importante retroceso, pues muchas leyes estatales ya los consideraban sujetos obligados directos. Una lectura cuidadosa del texto constitucional, confirmada por diversos expertos consultados 11, llevó a la consideración de que en tanto no existe una prohibición expresa en la Constitución y que los partidos políticos realizan, por mandato constitucional, una función pública, resultaba posible que los legisladores los consideraran como sujetos obligados directos. Es en este último sentido en que se redactó el texto del CBP, para incluirlos expresamente como sujetos obligados directos.

Una consideración adicional es si el acceso a los partidos políticos se debe ejercer directamente ante ellos, o bien hacerse a través del instituto electoral local. Esta es una cuestión que el CBP deja abierta y se presentan ambas opciones. Cabe señalar al respecto que algunas autoridades electorales han sugerido que conviene que el acceso a la información de los partidos políticos se realice a través de ellas, pues tienen mejores herramientas, conocimiento y mecanismos de supervisión para garantizar el debido acceso a la información pública de los partidos y asociaciones políticas. Otros consideran por el contrario que es primordial que los ciudadanos puedan solicitar información de manera directa a los partidos políticos

pues estos poseen información más actualizada que aquella que es proporcionada a las autoridades electorales.

Otra cuestión ampliamente debatida fue la inclusión, como sujetos obligados, de personas privadas. Cabe recordar que 23 leyes estatales establecen que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o realizan funciones públicas son sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información. La experiencia muestra que esta práctica presenta importantes problemas jurídicos y prácticos. No obstante lo anterior, es cierto que existe una cantidad importante de información relevante que se encuentra en posesión de particulares y de organizaciones privadas. En atención a los múltiples comentarios de las reuniones regionales sobre la importancia de garantizar el acceso a esta información, el CBP propone, retomando a la jurisprudencia de los tribunales federales, que cuando un particular realiza actos de autoridad, la información que genere será considerada como información pública. Este artículo permite otorgar así acceso a la información de los sindicatos, las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades. Debe hacerse notar, sin embargo, que se propone que el acceso no se dará de manera directa, sino a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares. La razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas."

Particulares que reciben recursos públicos o ejercen actos de autoridad:

En relación con la información de particulares el citado Código de Buenas Prácticas, plantea que los particulares que ejercen actos de autoridad estarán obligados a entregar la información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que supervise estas actividades. Siendo que lo importante a destacar es que cuando un



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

particular realiza actos de autoridad, la información que genere sea considerada como información pública.

Luego entonces, conforme al Código de Buenas Prácticas la regulación debe permitir otorgar acceso a la información de los sindicatos (con excepción de las cuotas sindicales), las asociaciones empresariales o los concesionarios de un servicio público respecto de los actos que realicen en calidad de autoridades.

Sin embargo, como en el mismo Código se acota respecto de éstos el acceso se hará a través de la autoridad que supervise la actuación de esos particulares, siendo que la razón de esta disposición atiende a razones prácticas y a evitar cargas regulatorias excesivas o incumplibles para las personas privadas.

Así, cabe considerar que la obligación de rendir cuentas y de permitir el acceso a la información —respecto de la entrega de recursos públicos— corresponde al sujeto obligado por la Ley que los desembolsa; es decir, a las autoridades responsables.

Además, en el Código de Buenas Prácticas, se expone que “por acto de autoridad debe entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, un acto unilateral, coercitivo y con imperio que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados.

También, se expone que a fin de regular el derecho de acceso a la información pública que pudieran poseer los particulares se atendió a la ampliación del concepto de autoridad que para efectos del amparo ha sostenido el Poder Judicial de la Federación: son autoridad aquellos individuos que ejerzan actos unilaterales y usen la fuerza pública para alterar la esfera jurídica de los gobernados. Es decir, la autoridad se distingue por el hecho de que realiza actos con imperio, más que por los sujetos que ejecutan el acto. Ahora bien, ante una administración pública cada día más compleja, la distinción del

375

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

carácter de cada uno de los actos realizados por entes públicos o que los mismos delegan incluso a particulares se hace más difícil. Así, por ejemplo, casos como PEMEX o Seguro Social en ciertos esquemas actúa con imperio y por tanto es una autoridad y en otros no. Véase por ejemplo la tesis CONFEDERACIÓN DEPORTIVA MEXICANA, ASOCIACIÓN CIVIL. TIENE LA CALIDAD DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SUS ACTOS SE FUNDEN EN LA LEY GENERAL DEL DEPORTE, EN RELACIÓN CON SU ESTATUTO. Es importante precisar que el acceso a la información de estos particulares, en su caso, se limita a aquella información relacionada con sus funciones equiparables a actos de autoridad y no al conjunto de sus actividades.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe recordar, que la fracción VI del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales”. Esta disposición constitucional deja justificado claramente buena parte de la propuesta que se plantea en la presente iniciativa.

Como se sabe, previo a la reforma constitucional al artículo 6°, las leyes de las entidades federativas presentaban importantes variaciones en cuanto a los sujetos obligados. Por ejemplo, únicamente once entidades federativas incluían a los partidos políticos como sujetos obligados directos, siete más los contemplaban como sujetos obligados indirectos, en nueve casos se incluyeron por interpretación y en cinco casos fueron excluidos. Asimismo, veintitrés leyes locales de transparencia consideraban que las personas físicas y morales que reciben recursos públicos son también sujetos obligados del derecho de acceso a la información.

En efecto, hay que reconocer que existen algunas personas de carácter privado, ya sean físicas o morales, que ejercen funciones públicas, ya sea por delegación o por un mandato legal.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Como atinadamente apunta Sergio López Ayllón, “este es el caso de los notarios públicos, de los concesionarios de bienes o servicios públicos, de los colegios de profesionistas o cámaras comerciales o industriales y aun de los sindicatos. La pregunta es si éstos son sujetos obligados del derecho de acceso a la información y, si esto es así, cuáles son los mecanismos para ejercerlo”. Más aún, el problema se plantea respecto de las personas privadas que, cada vez con mayor frecuencia, desarrollan funciones públicas o ejercen por delegación o mandato legal funciones de autoridad, sin constituirse propiamente como entidades públicas. La calidad de sujetos pasivos del derecho de acceso a la información de estas personas plantea cuestiones complejas, en particular respecto a los procedimientos para hacer efectivo el derecho.

Dejando claro, que no por recibir recursos del erario o por ejercer una parte del gasto estatal, toda actividad de estas personas se convierte en materia de acceso público, sino únicamente de aquellas en lo que se aplicó el recurso público o bien se ejercito o ejecuto un acto de autoridad, no así respecto de otras distintas a estos supuestos, no pudiendo entender que todas las actividades serán consideradas como parte del acceso a la información, sino solo en los casos ya descritos, lo anterior con el fin de no afectar la privacidad e intimidad de las personas.

Sindicatos

El camino por abrir información sobre los sindicatos ha sido una tarea ardua en la que hay que seguir avanzando. Así por ejemplo, cabe recordar los casos en los que frente a solicitudes de información se llegara a negar la misma, como es el caso de información sobre el registro de asociaciones en relación actas, estatutos, padrones y tomas de notas del sindicato, donde el sujeto obligado (Junta de Conciliación y Arbitraje y/o Secretaria del Trabajo y Previsión Social), se argumentará que el afiliado tenía que solicitarla directamente al



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

sindicato, y siempre y cuando acreditara ser agremiado, que si al agremiado se le niega la información por el sindicato debe entonces acudir ante la Junta de Conciliación a demandar por tratarse de un conflicto intergremial, que la información es de tipo reservada y confidencial por lo que requiere previo consentimiento del secretario general, que se trata de información que contiene datos personalísimos de los afiliados tales como sus domicilios, que brindar la información violaría la esfera jurídica del sindicato en razón de sus finalidades, que los sindicatos no pueden ser equiparados a sujetos obligados por la Ley, que los contratos colectivos están sujetos a un procedimiento administrativo que no ha causado estado y por lo tanto es información reservada, que los datos sobre contratos colectivos solo se otorgaran a la persona que demuestre ser trabajador en activo o que habiendo sido despedido requiera de información del contrato para elaborar su demanda, y estos y otros argumentos más para negar dicha información.

Pero vendrían las determinaciones del IFAI para avanzar de manera significativa en el acceso a la información sobre sindicatos, al señalar que los documentos relacionados con el registro, toma de nota, estatutos, actas y padrones no pueden ser considerada como información clasificada, que es información de acceso público, ya que contribuye a la democratización mexicana en la vigencia del Estado de Derecho, por lo que debe favorecerse el principio de publicidad, y en todo caso resguardarse los domicilios de los afiliados; además de que no es requisito desahogar un procedimiento previo ante la Junta, porque el acceso a la información es público, ni tampoco es requisito acreditar el carácter de afiliado, ni interés jurídico para la entrega de la información en virtud de la calidad publica de esta.

Lo anterior, solo para ejemplificar, el por qué es necesario explicitar a los sindicatos como obligados en materia de acceso a la información pública, más aún en los casos en que reciben recursos públicos de todos los mexicanos.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Ahora bien, los criterios del IFAI han servido para avanzar en el proceso por transparentar el universo laboral, siendo oportuno lo expuesto por Giménez Cacho "existe la expectativa fundada de que se reduzcan los márgenes de discrecionalidad de las autoridades del trabajo para resolver los registros de sindicatos y dirigentes bajo criterios de subordinación política o ideológica. La transparencia hará también posible exponer a la luz pública la amplitud de simulación de los sindicatos fantasma, que no tienen afiliados. Sirve así a los trabajadores que aspiren a contar con sindicatos que los representen. Exhibirá también el vicio degradante y fraudulento de los contratos de protección y será útil para las empresarios que muchas veces de mala gana, aceptan tanta la extorsión de falsos líderes y las sugerencias de asesores sin escrúpulos que lucran con la ilegalidad".

Pero esto es solo el inicio o la primera ronda de este proceso por la transparencia laboral y sindical, es un tema sin duda inacabado. Ahora bien, y más allá de la rendición de cuentas que deben rendir los sindicatos y sus dirigentes a sus agremiados o afiliados, el planteamiento es dejar claro la responsabilidad o deberes que estos tienen en el acceso a la información pública sobre los recursos públicos que reciben del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.

Efectivamente, si por virtud de un contrato colectivo, la autoridad, entidad, organismo u órgano público entrega recursos públicos a un sindicato, tal información es de carácter público, máxime cuando se trate de un sindicato que opera con recursos públicos, como es el caso de aquellos formados por trabajadores al servicio del Estado.

Es así hay que decirlo "los recursos públicos –federales- entregados a sindicatos con base en las obligaciones contraídas en los contratos colectivos son de acceso público". Con excepción de las cuotas sindicales en las que ya el Poder Judicial ha señalado que ni la retención ni la entrega de cuotas sindicales con actos de autoridad ni corresponden a recursos públicos, toda vez que pagado el sueldo del



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

trabajador es un recurso privado al que el patrón le descuenta una cuota para entregarla íntegramente al Sindicato.

Por lo que no es procedente que al cobijo de la libertad o autonomía sindical se niegue la información sobre la aplicación de dichos recursos. No es aceptable poner como escudo la autonomía sindical para obstaculizar el acceso a la información pública, ya que todo ente, privado o gremial, que recibe recursos públicos, se ve obligado a rendir cuentas.

Si bien, la autonomía sindical, tiene como propósito que éstos se organicen, administren, funcionen libremente y puedan cumplir con su cometido en defensa de sus agremiados, lo cierto es que ello no debe significar incompatibilidad con el acceso a la información, por lo que el manejo de los recursos económicos que se les entrega a los sindicatos por parte del Estado no debe ponerse a duda o suspicacia alguna la transparencia respecto de dicha información y la rendición de cuentas, ya que es obligación de someterse al escrutinio público para informar y dar explicación sobre la aplicación de los recursos públicos que le ha sido entregados.

Por lo tanto, es necesario cerrar la puerta a cualquier interpretación indebida que al respecto se pueda dar —como ya ha acontecido— y evitar la opacidad a este respecto, haciendo explícito que los sindicatos son sujetos obligados cuando se ubican en las circunstancias referidas, más allá de que el acceso a dicha información deba darse a través de la autoridad o dependencia que realizó la entrega de recursos públicos.

Por otra parte, en la presente iniciativa se planea respecto de aquellas personas físicas o morales que reciba recursos públicos o realicen actos de autoridad, a fin de asegurar el acceso a la información de carácter público, la obligación de éstas a proporcionar a la autoridad, ente, órgano u organismo público que hubiere entregado los montos respectivos o que sea el responsable de



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

supervisar la actuación de esos particulares, la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o por virtud de los actos de autoridad que desplieguen. Esto se debe entender como una fórmula que viene a reforzar una obligación que estaba exclusivamente sobre las espaldas de los entes obligados, y en eso radica la veta que se abre para beneficio de la causa de la transparencia de la gestión pública y de la propia cosa pública. Se dé una obligación complementaria para fortalecer el deber de satisfacer el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas, y de que los particulares expliquen que se hizo con los recursos públicos que recibieron o de los actos de autoridad que llevaron a cabo, pero como ya se dijo los sujetos obligados directos de asegurar dicho acceso al público lo serán los autoridades o sujetos obligados directos, ya que los particulares beneficiarios de recursos públicos o de realizar acto de autoridad lo hicieron por determinación o decisión de las propias autoridades, entes u organismos públicos. La rendición de cuentas sigue pesando sobre éstos que determinaron entregar fondos públicos o asignar funciones propias de la autoridad.

Luego entonces, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera explícita o expresa en la fracción I del artículo 6º Constitucional a las personas que se actualicen en los supuestos narrados con antelación y dejar claro su calidad de sujetos obligados en materia de acceso a la información pública.

Partidos Políticos.

A este respecto también resulta ilustrativo lo expresado en el Código de Buenas Prácticas referido, en donde se reconoce que la inclusión de los partidos políticos como sujetos obligados ha sido un tema ampliamente discutido durante la reforma constitucional. Señala que el dictamen de la Cámara de Diputados parece excluirlos, mientras que el del Senado los considera como sujetos obligados indirectos. Indica que la razón de lo anterior es que, de acuerdo con la Constitución, los partidos políticos son "entidades de interés público".



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permiten precisar que si bien por razones de técnica legislativa, y debido a su naturaleza y su especificidad como organismos de la sociedad, no se ha considerado conveniente que los partidos políticos sean sujetos obligados directos del derecho de acceso a la información, ello no obsta para que a través del sujeto obligado en la materia, que son el Instituto Federal Electoral y los Institutos Electorales locales, según sea el caso, los ciudadanos puedan tener acceso a la información de los partidos políticos, en los términos que precise la legislación secundaria que al respecto se expida. En otras palabras, los partidos políticos, al no ser autoridad pública, no pueden ejercer del mismo modo y bajo las mismas condiciones las obligaciones de acceso a la información y transparencia, pero deben cumplirla bajo sus propias modalidades porque son sujetos indirectos del derecho de acceso a la información". Asimismo señalo que "los partidos políticos son instituciones integrantes del régimen constitucional, por lo que al lado de sus prerrogativas, que garantizan su participación representativa, están igualmente investidos de obligaciones y responsabilidades que aseguran su presencia democrática. De allí que la información que les reclame la ciudadanía, en orden a la transparencia con la que deben conducirse las instituciones republicanas, debe estar disponible en todo tiempo, considerando desde luego que no constituya una intromisión injustificada en la vida interna de los partidos y sin que se ponga en riesgo la información estratégica de su acción política y electoral".

Por lo tanto, para los efectos de esta iniciativa lo importante es homogeneizar la condición de los partidos como sujetos obligados ante las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con objeto de homologar sus obligaciones de transparencia y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en estas instituciones que reciben recursos públicos y son consideradas entidades de interés público por el papel que juegan en el desarrollo democrático en el país.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por ello, la iniciativa es oportuna al proponer incluir de manera expresa a los partidos políticos para que se actualicen en los supuestos referidos como sujetos obligados en la fracción I del artículo 6º Constitucional. Es decir dejar claro que los partidos políticos si son sujetos obligados a rendir cuentas a través de los mecanismos de acceso a la información y transparencia, más aún cuando debe tomarse en cuenta que la legislación mexicana ha dispuesto un sistema de financiamiento partidista preferentemente publico o con recursos públicos sobre los privados, en cuyo caso no debe existir duda sobre un ejercicio de acceso a esa información.

Acotado ello, se está en posibilidades para que el legislador ya sea el del orden federal o de las entidades federativas determinen que los partidos políticos sean sujetos directamente obligados en materia de acceso a la información, y no solamente indirectos.

De lo que se trata es que los partidos políticos tengan la obligación de garantizar a las personas el acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos que prevea la Ley, pero también el de llevar a cabo obligaciones de transparencia o de transparencia proactiva, es decir, que sin que medie solicitud, deban poner a disposición del público por medio de internet información básica, esencial o de interés, como es sobre sus Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna; estructura orgánica y funciones; integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección; directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica; descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su plantilla laboral; contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución; informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; resultados



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores; convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de Frente que suscriban; entre otra información relevante más.

Esta propuesta de dejar claro que los partidos políticos son sujetos obligados en materia de transparencia permite cerrar o complementar el círculo con el planteamiento de que el poder Legislativo como sujeto obligado, ya quedaría sujeto a la jurisdicción del órgano garante autónomo federal. Es decir, se asegura que los partidos políticos sean por un lado sujetos obligados como entidades de interés públicos y por otro también lo sean como grupos parlamentarios —agrupación de una misma filiación partidista— al formar parte del poder Legislativo, ya sea dentro de la Cámara de Diputados o la de Senadores. En efecto, siendo sujeto obligado el órgano legislativo, se puede acceder a la información que posea sus unidades administrativas, entidades, organismos u órganos, entidades o equivalentes, como podría ser la de los propios grupos parlamentarios. Siendo el órgano garante federal el responsable de asegurar que ante una negativa pueda conocer de las impugnaciones por las que se pueda negar información sobre éstos grupos parlamentarios, que en el fondo se constituyen como sujetos obligados indirectos en el acceso a la información. Con ello se establece un piso más uniforme y parejo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas que tienen los partidos políticos, dentro del sistema democrático que nos hemos dado como Nación.

Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas

De conformidad con la fracción I del párrafo segundo del artículo 6 Constitucional, para muchos nos queda claro y no es discutible que

se incluyó a las universidades públicas autónomas en la expresión “organismo federal, estatal y municipal”. Así la fracción respectiva dispone que “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes...”

Sin embargo, como bien lo ha señalado Dorangélica De la Rocha Almazán, que “Desafortunadamente, muchas universidades se escudan en la autonomía con la que fueron dotadas para no conceder acceso a la información que generan, como parte de un sistema educativo público. El pretender el conocimiento de sus datos, en muchas ocasiones, confundido con la trasgresión de su autonomía. Cosa más que errónea”. Y asevera “Es verdad que las universidades públicas gozan de cierta autonomía funcional, algunas constitucionales y otra legales –organismos descentralizados de Estado-, pero esto no quiere decir que escapen del imperio o sujeción de normas de carácter legal, formal y materialmente creadas para su observancia. Dígase pues, que las universidades también deben obedecer, en su caso, al mandato que dispone las leyes de acceso a la información en México”.

Por ello afirma que no dar acceso a la información que poseen es una decisión políticamente equivocada, porque en forma automática se colocan como entes de opacidad y con desconfianza social. Por lo que se debe fortalecer la autonomía de las instituciones, pero desde el punto de vista de la transparencia y la rendición de cuentas, ya que sería contrario a un régimen democrático, y sería más grave si esto sucede en el ámbito universitario, donde se supone debe prevalecer la libertades de expresión, la formación de voces críticas, la apertura y el conocimiento, entre este el de la transparencia.

O como también lo ha señalado José Carbonell “muchas instituciones de educación superior se esconden detrás de la autonomía con la que fueron dotadas, para evitar la implementación de sistemas de



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

acceso a la información y transparencia. En muchos casos, la pretensión de acceder a su información es concebida de forma errónea —en estas instituciones—, como una transgresión o intento de vulnerar su autonomía”. Por ello afirma “Que algunas universidades públicas sean autónomas no debe ser entendido como que quedan exentas de la obligación de rendir cuentas y de los deberes más elementales de transparencia. Su autonomía no debe significar extraterritorialidad ni ningún absurdo parecido, como para que no impere el Estado de Derecho en su interior”.

Por lo que la presente propuesta, va en el camino de despegar dudas a este respecto, para aquellos que tengan dudas legítimas o bien resistencias voluntarias o se sientan incómodos con el acceso a la información en su poder, y que la autonomía universitaria no sea un pretexto, escudo para la opacidad.

Debe quedar claro, que el acceso a la información y la rendición de cuentas por parte de las universidades públicas es fundamental para el desarrollo nacional. Implica pasar de la percepción, por parte de los estudiantes, de ser beneficiarios de una concesión del Estado o de las autoridades, hacia la concepción de ser usuarios sujetos tanto a obligaciones como a derechos. En este caso, para poder exigir, entre otras cosas, ciertos niveles de calidad del bien público del que se están beneficiando.

Las universidades públicas son entidades que reciben recursos del erario, es decir, de todos los mexicanos como contribuyentes. En consecuencia, deben estar sujetas y por lo tanto adoptar mecanismos de transparencia y acceso a la información que permitan rendir cuentas a la sociedad: dar a conocer qué hacen, cómo lo hacen, a qué costo, entre otros, ya sea que se trate de instituciones de carácter federal o local, según sea el caso.

Es importante volver a advertir tal y como lo ha señalado Jorge Carpizo McGregor que el manejo de recursos económicos no debe



542

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

prestarse a duda o suspicacia algunas y por ende en el caso de las universidades, en este aspecto, deben ser una caja de cristal. Además, “en una democracia nadie puede ser irresponsable, menos quienes manejan recursos públicos”.

Como se sabe de conformidad con el artículo 3º Constitucional las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. En ese sentido, se ha dicho que la autonomía implica que las instituciones educativas de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente, y sean sustento de las libertades; asimismo que la autonomía se otorga a las universidades para que puedan cumplir sus funciones sin injerencias externas y ajenas que les dificultarían el cumplimiento de aquellas conforme a los principios de excelencia académica y proyección social, para que la educación que se imparta e encuentre libre de todo dogmatismo o ideología. Por su parte, el derecho a la información consagrado en el artículo 6º Constitucional, es una de las bases del sistema democrático, que la sociedad como tal y los individuos deben estar bien informados, con veracidad y objetividad.

Por lo tanto, “no es posible que pueda existir contradicción, jerarquía o conflicto entre los derechos constitucionales de autonomía universitaria y el acceso a documentación pública en dichas universidades. En caso de aparente contradicción resulta necesario armonizar esos derechos constitucionales tan valioso y trascendentes uno del otro”. Luego entonces, cumplir con el derecho a la información y el acceso a la documentación pública por parte de las universidades públicas autónomas, es una obligación constitucional y legal para éstas, pero además es una responsabilidad ética, porque las universidades públicas deben ser y dar ejemplo de transparencia, como un principio básico de las democracias. Las universidades son parte esencial de la conciencia crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia. Por ello el “derecho constitucional de la autonomía



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

universitaria es cien por ciento compatible con el de la transparencia y el acceso a la información pública. Los dos son especialmente valiosos. Los dos cumplen una función social. Lo único que hay que lograr -lo reitera- es su armonización”.

A mayor abundamiento de lo anterior, cabe señalar que el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México dispone que deben ser sujetos obligados y, por tanto, estar incluidos dentro de las leyes de la materia, los “Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas”. Incluso, dicho Código de Buenas Prácticas propone que se establezcan obligaciones específicas o adicionales (de oficio o transparencia) cuando se trata de Universidades e Instituciones de Educación Superior Públicas (Artículos 201 y 312, respectivamente). Por lo que la propuesta planteada, resulta oportuna, más aun permitirá definir un piso parejo en cualquiera de los órdenes de gobierno a este respecto.

Por todo lo anterior, la propuesta que se plantea respecto a los sujetos obligados en la presente iniciativa es congruente con lo expuesto. Ya que busca por un lado prever de la manera más amplia posible quienes pueden ser considerados como entes o sujetos obligados en materia de transparencia, y por otro, que respecto de los que correspondan al orden federal el nuevo órgano constitucional autónomo de la Federación sea el órgano competente especializado respecto de la información en posesión de los mismos. Lo que ahonda sin duda, en un derecho de acceso a la información fortalecido y una política de rendición de cuentas más amplias e integrales en beneficio de la sociedad.

Finalmente, se advierte que la iniciativa incorpora el concepto mismo de sujeto obligado, bajo la base que es un concepto ya acuñado en materia de acceso a la información, y para dejar claro las implicaciones que el propio concepto tiene y refrendarles a los

poderes tradicionales, órganos autónomos, entidades, entes, fideicomisos, entre otros, su deber u "obligación" para contribuir hacer efectivo el derecho de acceso a la información en su poder.

3. Incluir el principio de definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes para los sujetos obligados, sin relativismos.

Como es sabido, en algunas entidades federativas se ha constituido un entramado normativo donde se ha pretendido o a hecho revisables las resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información, al sugerir o plantear que éstas puedan ser impugnables por las autoridades o sujetos obligados, y que tal impugnación pueda ser revisables por el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o instancia equivalente. Siendo que tal revisión sea hecha por una "instancia no especializada".

Por lo tanto, para evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio en las leyes federales o locales en la materia, resulta oportuno dejar expresamente establecido el principio de definitividad de las resoluciones de los órganos garantes por parte de las autoridades, sin relatividades o tibiezas a este respecto, sino de manera contundente y amplia. Dicha definitividad debe quedar claro es para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, pues es claro que queda en favor de los particulares para impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia, o previamente por las vías que al efecto se determinen y procedan.

Cabe recordar que el poder Judicial de la Federación, al respecto ha señalado que la Ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. Así, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el Instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo los sujetos obligados en términos de la Ley deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos –como la interposición de un juicio de nulidad– o de facto –como la simple negativa de entregar información– para eludir dicho cumplimiento. Como ilustración de lo anterior, cabe transcribir tal criterio:

TESIS AISLADA XIV/2012 (10ª).

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento.

*Amparo en revisión 168/2011. *****. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.*

LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES,
SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis
aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto
tribunal, en sesión privada de ocho de febrero de dos mil
doce. México, Distrito Federal, nueve de febrero de dos
mil doce. Doy fe.

Es así, que conforme a la Ley Federal, hoy día se reconoce la definitividad de sus resoluciones para los sujetos obligados. Por lo tanto, se insiste que con el fin de evitar la tentación de incluir disposiciones contrarias a dicho principio resulta oportuno dejarlo expresamente establecido en nuestra Ley Suprema.

Más aún, si se toma en cuenta como dice Ricardo Raphael de la Madrid que sería un retroceso que las resoluciones del órgano garante de acceso a la información sean revisables o impugnables



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

ante el Contencioso Administrativo, ya que como afirma los Tribunales Contenciosos nacen para salvaguardar los derechos de los gobernados, no de los órganos administrativos. Los órganos administrativos no tienen derecho, sino atribuciones. Ahora resulta que pobrecitos de los órganos administrativos no tienen instrumentos de defensa frente a los gobernados.

En ese sentido, debe dejarse claro que en todo caso el control de legalidad debe ser ejercido por los gobernados, ya que se trata de un derecho fundamental que corresponde alegar a su titular, por lo que los medios de defensa en estos casos debe ser un instrumento a favor de los gobernados no de las dependencias o sujetos obligados.

Además, permitir que las resoluciones sean impugnadas por los sujetos obligados violentaría varios principios. Así por ejemplo el principio de gratuidad, ya que el particular tendría que acudir a los juzgados y contratar un profesionista, al que tendría que pagar para su defensa; el principio de desigualdad —como génesis del de igualdad—, ya que el particular contendría en un proceso litigioso desventajoso frente a los órganos de Estado que cuenta con recursos materiales y humanos, el principio de sencillez y rapidez, ya que se retarda el acceso a la información provocado ello por la autoridad no en defensa del titular del derecho; el principio de especialización, ya que podría conocer una instancia no especializada; y el principio de máxima publicidad, ya que si el organismo garante al resolver esta frente a la duda razonable debe privilegiar la apertura de la información, es decir se inclina en favor del gobernado, y no de las autoridades, por lo tanto cuestionar esa duda razonable por los sujetos obligados puede ser contrario a dichos principio. De ahí de la necesidad de la expresión del principio de definitividad en la Ley Suprema.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

4. Dotar de facultad a los órganos garantes de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal para interponer acciones de inconstitucionalidad en sus respectivos ámbitos de competencia.

Como se sabe, el juicio de amparo, la controversia constitucional, y la acción de inconstitucionalidad son medios de control constitucional del régimen jurídico mexicano.

Respecto de la acción de inconstitucionalidad, ésta tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional.

La acción de inconstitucionalidad da lugar a la invalidez de la disposición declarada inconstitucional, lo que no conlleva a su derogación, ni que el texto de la disposición inconstitucional sea eliminado, sino que únicamente éste pierda su fuerza de aplicación.

Por ello, se ha previsto que las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a efectos de hacerlas públicas.

Otro elemento que le añade importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverlas tienen el carácter de jurisprudencia. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la tesis de jurisprudencia 2/2004, cuyo rubro es el siguiente: "Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación".



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tales alcances de la acción de inconstitucionalidad como medio de control constitucional, revelan su importancia y relevancia dentro del Estado Constitucional y de Derecho. Siendo que una de las características que le agrega importancia es que es un medio de control constitucional al alcance de órganos del Estado, sin limitar su procedencia a invasión de esferas de competencia como es el caso de la controversia constitucional. En estos términos, la acción de inconstitucionalidad podrá ocuparse no sólo de violaciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino que la acción de inconstitucionalidad podrá también ocuparse de violaciones a garantías individuales.

Es precisamente esta característica la que le añade una mayor relevancia o importancia a la acción de inconstitucionalidad, al situarla como instrumento de defensa de los derechos fundamentales, ya que dota a determinados órganos del Estado de una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes federales o locales que violan sus derechos fundamentales.

Siendo que dentro de esos derechos fundamentales está el de acceso a la información y el de protección de datos personales. Por lo tanto, resulta del todo razonable el de dar legitimidad procesal a los órganos garantes de dichos derechos para que tengan la facultad de promover acción de inconstitucionalidad. Más aún cuando se está proponiendo constituirlos como organismos constitucionales autónomos, ubicándolos así como instrumentos de equilibrio constitucional dentro de la estructura del Estado, lo que conlleva de manera lógica que asuman un papel sólido y activo para demandar ante la autoridad jurisdiccional la plena observancia de estos derechos humanos fundamentales, frente aquella ley inconstitucional que se estima restringe o menoscaba el ejercicio de los mismos.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Además, al ser autoridad en la materia especializada, les permite llevar un análisis, estudio y seguimiento serio y objetivo respecto de que las leyes se ciñan al pleno contenido y alcance del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, y asegurar al gobernado el ejercicio pleno de sus derechos, aun antes de que la ley inconstitucional se aplique en su esfera jurídica.

Por ello, es que en la presente iniciativa se propone una reforma al artículo 105 de la Constitución General, para establecer la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad de la forma siguiente:

- El organismo garante federal contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte.
- Los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales.
- El organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

5. Por el fortalecimiento de la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información.

Se propone en la presente iniciativa que Instituto elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. Se prevé que el proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

6. Mecanismo de defensa administrativo opcional, expedito, sencillo y gratuito en favor de los particulares.

Se propone que el Instituto Federal como organismo constitucional autónomo, también sea competente para conocer y resolver sobre las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular.

Se prevé proponer que la Ley Federal determinará la forma y términos en que deberá promoverse la impugnación ante el Instituto Federal.

Se plantea que no será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo, en términos de la legislación aplicable. Es decir, se trata de que este mecanismo de defensa sea una opción para el particular y no una obligación o condición necesaria para acudir al juicio de amparo, ello porque el particular pueda estimar más conveniente y oportuno que de una vez le resuelva la autoridad judicial; porque ante el conocimiento de criterios o precedentes del órgano federal en asuntos similares se anticipa que será desfavorable acudir ante dicha instancia o bien porque a su juicio siente más credibilidad y confianza acudir a la autoridad judicial.

Asimismo, se propone explicitar que la resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del órgano garante local, y será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo o personas o sujeto obligado correspondiente del orden local, por lo que éste deberá cumplirla en

sus términos. Pero se propone dejar resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los organismos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.

Debe dejarse claro –como dice el mismo Guzmán– que la premisa fundamental es la de crear un instrumento de defensa administrativo en favor del particular o gobernado, de que este cuente con un mecanismo más en su favor, como instrumento de defensa administrativo previo al juicio de amparo, y siempre opcional. Es decir, que quede resguardado el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones de los órganos de transparencia local, ya sea interponiendo la impugnación ante el nuevo órgano constitucional autónomo federal o bien el de poder optar por la vía del juicio de amparo. Ello con el fin de eliminar la preocupación para algunos de que tal instancia parecería contradecir la idea de procedimientos expeditos, sencillos y no judicializado, lo cual de ninguna manera es así.

Además, de señalar que dicho mecanismo de defensa asegura los principios de gratuidad, sencillez, rapidez y especialización en el ejercicio de este derecho. Se asegura la especialización por que la impugnación en segunda instancia sería realizada ante un órgano autónomo, imparcial y especializado. El órgano revisor en segunda instancia sería un órgano administrativo no judicial, lo que hace que esa segunda instancia no se judicialice para el particular, al tratarse de funciones materialmente jurisdiccionales pero formalmente administrativas.

Se asegura la sencillez, expeditos y gratuidad ya que se trataría de una impugnación que podría interponerse por el sistema electrónico tal y como se hace para los recursos de revisión que hoy se conocen y sustancian, lo que implica que no será escrito, ni será necesario



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

contar con un abogado o licenciado en derecho para su interposición, aplicándose las reglas de la suplencia de la queja para el particular.

En efecto, dicha instancia o mecanismo de defensa adicional, permitirá no orillar desde un inicio al gobernado acudir al juicio de amparo, que como se sabe es un mecanismo de defensa judicializado, que exige reglas técnicas más estrictas para su interposición y procedencia, además de la necesidad de contar con un especialista o abogado para ello, que podría implicar costos económicos para el particular, aunado a las exigencias físicas y traslado para conocer del mismo al tratarse de un juicio de corte escrito, así como la dilación para resolver por parte de la autoridad jurisdiccional, pues como se sabe los plazos resultan más amplios en comparación con los plazos que se pueden establecer para que el nuevo órgano constitucional autónomo del orden federal pueda resolver. Incluso se podría prever en la legislación reglamentaria respectiva un plazo corto para que el nuevo órgano federal dicte una resolución definitiva, por ejemplo de 20 días hábiles.

Este mecanismo de defensa permitiría disipar la desconfianza, el descredito o bien la falta de maduración o consolidación institucional que pueda existir en algunos órganos garantes de transparencia local, al saberse no solo observados sino revisados en su actuación por un órgano especializado, mediante un medio de defensa sencillo, expedito y no judicializado.

Este mecanismo de defensa sería un instrumento de eficacia institucional —es más si se quiere decir así— de prevención general, pues los órganos de transparencia local se verían incentivados a emitir resoluciones más y mejor fundadas y motivadas, sostenibles ante la instancia de reconsideración o segunda instancia de revisión.

Este mecanismo de defensa permitiría establecer criterios de interpretación por parte del órgano federal en su calidad de revisor, lo que a su vez se podría traducir en una armonización en las



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

resoluciones de los órganos garantes locales, ya que el criterio del órgano federal sería un referente a tomar en cuenta por los institutos de las entidades federativas al momento de resolver.

La apuesta de este mecanismo de defensa, parte de la convicción de que la transparencia y derecho de acceso a la información pública son un mecanismo de control social en el ejercicio del poder público; pues para que funcione la democracia es indispensable un sistema abierto de información, para que los gobernados tomen decisiones informadas.

Luego entonces, si queremos que este mecanismos de control social funcione, debemos dar a sus titulares los instrumentos necesarios de defensa que haga efectivo su ejercicio.

Finalmente, dicho mecanismo de defensa, se inscribe dentro de los cánones de la garantía de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva instituidas en el artículo 17 constitucional, ya que no propiciara un retraso en la resolución de los recursos respectivos; no impedirá que los conflictos se resuelvan en su integridad; no induce a que quien resuelva lo haga en determinado sentido; no establece el cobro de importe alguno por que se emita la resolución definitiva; ni, por último, establece alguna condición insuperable alguna para acudir a los tribunales jurisdiccionales.

Sirven de apoyo a la anterior conclusión las siguientes jurisprudencias de las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, significa que el poder público —en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial— no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.” (Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: 1a./J. 42/2007, Página: 124).



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

“ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.” (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, Octubre de 2007, Tesis: 2a./J. 192/2007, página: 209).

7. Facultad de atracción del organismo garante federal respecto de resoluciones de los organismos garantes locales.

Congruente con la propuesta anterior, se plantea disponer que el organismo garante autónomo de acceso a la información pública del orden federal, de oficio o a petición fundada del órgano garante equivalente del estado o del Distrito Federal, pueda conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En todo caso, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal para dictar sus resoluciones.

En todo caso, se precisa que la resolución que el órgano federal emita por virtud de la facultad de atracción será vinculatoria, definitiva e inatacable para la autoridad, entidad, órgano, organismo local o personas o sujeto obligado correspondiente, por lo que éste deberá cumplirla en sus términos. Pero obviamente, al igual que la propuesta anterior, se precisa el derecho de los particulares a impugnar las resoluciones que el Instituto Federal emitiera como instancia revisora de los órganos garantes locales, mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales, en términos de la legislación de la materia.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Esta propuesta junto con la del mecanismo de defensa administrativo que se plantea en favor de los particulares en esta iniciativa, lo que busca es diseñar una nueva relación entre los organismos garantes del orden federal y locales, dentro de un federalismo eficaz y eficiente en la materia. No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución que estos órganos u organismos locales, sino únicamente sobre las resoluciones de los recursos de revisión que conozcan, substancien y resuelvan los órganos garantes o sobre estos mismos medios de impugnación que presentes los particulares pero que se estima que por su interés o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal.

Finalmente, cabe decir que sobre los alcances de interés y trascendencia el órgano judicial ya se ha pronunciado en diversas ocasiones, pero además ello deberá ser materia de regulación en la legislación respectiva. Sin dejar de advertirse, que ya hay experiencia y avances sobre la facultad de atracción en otras materias, cuyo referente puede ser tomado en cuenta en favor de la propuesta que se plantea.

8. **Por una Ley General que armonice y asegure el derecho de acceso a la información en todo el país, y por una Ley General del derecho de protección de datos personales.**

No se puede negar que la reforma al artículo 6 Constitucional vino a contribuir a avances importantes en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Cabe recordar que el espíritu y alcance central de dicha reforma del 20 de julio de 2007, fue el de consolidar criterios uniformes en materia de acceso a la información pública, mediante el establecimiento de las condiciones mínimas que el ejercicio de ese derecho debería de tener en piso mexicano.

Efectivamente la reforma constitucional referida buscó que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública fuera parejo



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

en todo el país, que su ejercicio entre una entidad federativa y otra no fueran dispar e incluso contradictorio, en algunos lados con mayor apertura y en otros con mayor restricción. Se trato o se busco, de emparejar el piso en todo el país en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

No obstante dichos avances, resulta necesario dar un nuevo impulso que permita desplegar una vez más de manera más efectiva este derecho, y seguir en la línea por emparejar o armonizar el ejercicio de este derecho en todo el territorio nacional, y evitar que su ejercicio pueda llegar a ser dispar entre una y otra entidad u orden de gobierno.

Hay que reconocer, que la diversidad legislativa ha llevado en algunos de los casos a que se detonen diferencias en el ejercicio del derecho de acceso a la información; por ejemplo, en los plazos y procedimientos para la entrega de la información; en el procedimiento de los medios de impugnación o recursos de revisión que conocen los órganos de transparencia; en las causas de clasificación de reserva; en la información que debe aparecer en los portales de transparencia de los sujetos obligados; o bien en la facultad para sancionar, dado que algunas legislaciones prevén la posibilidad de que el órgano garante imponga sanciones o medidas de apremio al ente público, incluso para sustanciar y conocer sobre responsabilidades administrativas, mientras que en otras no existen dichas facultades. Asimismo, algunas legislaciones se contemplan dentro de las leyes de transparencia la protección de datos personales en posesión de las entidades públicas, en tanto que otras ya cuentan hasta con un ordenamiento propio en la materia. Todo esto refleja disparidad o falta de armonización legislativa a nivel nacional en el acceso a la información, y también de la protección de datos personales.

Por ello es necesario diseñar un marco general que permita que sea un derecho igual para todos y un deber igual para cualquier instancia



360

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de gobierno. No puede permitirse que para un mexicano el mismo derecho sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su lugar de residencia en el país.

Debe contarse con un marco legal que permita un derecho unificado, tutelado e igual para todos en todo el territorio nacional. Y al mismo tiempo un deber igual para cualquier orden de gobierno, sin que varíe la normatividad general, procedimientos, sujetos obligados y las atribuciones de los órganos garantes de una entidad a otra. Siendo claro que la idea de evitar la asimetría normativa parte de la convicción de no minimizar, anular o empobrecer el ejercicio de este derecho por cuestiones de ámbito territorial.

Se requiere una mejor normativa para desvanecer la incertidumbre cuando se ejerce este derecho en una entidad y en otra y más al tratarse de un derecho fundamental, o como lo ha expresado nuestro máximo Tribunal de una garantía individual y un derecho social.

Se trata de contar con una Ley marco que permita armonizar o alinear de manera más clara y puntual los criterios y principios a los cuales están sujetos la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios respecto del derecho acceso a la información.

Para lograr ello, y con el fin de hacerlo desde una visión federalista será necesario dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una Ley General en materia de acceso a la información pública, con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General y garantizar su armonización en su aplicación a nivel nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

La armonización sería precisamente en cuanto a los mecanismos para presentar las solicitudes, en los procedimientos de revisión, en las obligaciones de transparencia, las causas de restricción de la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

información, las sanciones a la autoridad por violación al derecho de acceso a la información pública.

Se trata por ejemplo que si el plazo de dar respuesta es de diez días en una entidad lo sea también en las otras, que si los informes de cuenta pública o la cancelación de créditos fiscales son de acceso público en el orden federal también lo sea en orden local; que si en el portal electrónico de una delegación política debe publicarse el nombre de la obra, el monto, tipo de adjudicación, convocatoria, dictamen, empresa ganadora y contrato ello también se publique en el portal de cualquier municipio. De eso se trata este diseño constitucional.

En ese sentido, se propone adicionar al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una fracción XXIX-R y una fracción XXIX-S, para establecer que el Congreso de la Unión será competente:

"XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6º de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.

XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias."

Se trata de una propuesta de federalismo eficaz y eficiente, y respetuoso de la autonomía de los estados y la propia que tiene el propio Distrito Federal aun como asiento de los poderes federales, ya



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

que la aplicación de las normas contenidas en la ley general estaría a cargo de sus propios organismos autónomos de transparencia, dentro de su ámbito de competencia; es decir, se permite que cada ámbito estatal o local aplique la ley general en su propio terreno.

Esta propuesta parte de un federalismo de atribuciones compartidas, por un lado la regulación y por el otro su ejecución. Ya que se estaría dotando al Congreso de la Unión para emitir la norma marco o general, pero serían los propios organismos de transparencia del ámbito de los estados y del Distrito Federal los que estarían a cargo de su ejecución, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.

Dicha Ley sería el marco general bajo el cual deberán sujetarse todas las entidades federativas. Sin perjuicio estimo que se complemente dicho marco general en las disposiciones locales, pero conforme a dicha normativa general. Esto es, las normas locales se verían obligadas a tener que ceñir el derecho de acceso a la información conforme a lo establecido en la Ley General, sin demérito de perfeccionar o ampliar el ejercicio de su derecho según sus propias realidades.

Se trata de contar con un marco legal que desenvuelvan, desglose o regule los principios, criterios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva, y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes del acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.

Es decir, una ley general para lograr una homologación en los mecanismos de acceso a la información, los procedimientos de revisión, indicadores de gestión u obligaciones de transparencia comunes y específicas, las causas de restricción del derecho de acceso a la información y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por otro lado, una ley general en cuanto a la homologación en los principios, los mecanismos del ejercicio de los derechos, los procedimientos de revisión, medidas de seguridad, y las medidas de apremio o sanciones por incumplimiento en la materia.

Con dichas leyes marco generales, se lograría por ejemplo:

- Homologación de plazos para: dar respuesta a las solicitudes, de la prórroga para dar respuesta, para resolver los recursos de revisión, prórroga para resolver, plazo para cumplir las resoluciones.
- Uniformidad en los supuestos de clasificación, mediante el establecimiento de las causas o hipótesis de reserva o confidencialidad, a fin de evitar disparidad al respecto.
- Piso parejo sobre el tiempo o la temporalidad en los casos de restricción de la información mediante su reserva.
- Homologación respecto de la información pública de oficio u obligaciones de transparencia que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los Sujetos Obligados.
- Armonización para incluir obligaciones de transparencia específicas para determinados sujetos obligados (poder judicial, legislativo, ejecutivo, instituto electoral, comisión de derechos humanos, órgano de transparencia, universidades públicas o instituciones análogas, por citar algunos, ello de cada orden de gobierno.
- Evaluaciones con criterios y metodologías estandarizados.
- Armonización de los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales.
- Estandarización sobre los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Ratificación, Cancelación y Oposición) dentro de la protección de datos personales, y
- Uniformidad en el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para el debido acatamiento de éstas, entre otros aspectos normativos más.

A mayor abundamiento, la propuesta para contar con una ley general en materia de acceso a la información ha sido un planteamiento que se ha venido campeando por algún sector académico, doctrinal y por organizaciones comprometidas con la transparencia o la rendición de cuentas.

Así por ejemplo, la RED por la Rendición de Cuentas, quién ha señalado su compromiso con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política completa, articulada y coherente de rendición de cuentas en México, en su documento denominado "Red por la Rendición de Cuentas. Hacia una política de rendición de cuentas. Marzo del 2012", plantea entre otros aspectos el de "Alinear los procedimientos, los plazos, los criterios y las garantías que se establecen en las leyes de transparencia y de archivos del país, mediante una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que conforme a los principios ya establecidos en el Artículo Sexto Constitucional, garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas".

O bien el caso de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), señalo en su comunicado denominado "Consensos para la Transparencia en México", entre otros aspectos la necesidad de "Expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública para que las entidades federativas y la federación, adecuen sus leyes para que todas cuenten con los mismos procedimientos, plazos, criterios de información de oficio y garantías con altos estándares de calidad".

Siendo entonces, jurídica y socialmente sostenible impulsar una reforma constitucional de este calibre como la que se propone a esta Asamblea. Esta propuesta de una Ley General, junto con el impulso por constituir a los órganos de transparencia federal y locales, como órganos constitucionales autónomos, especializadas e imparciales en



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

su actuación, y depositarios de la autoridad en la materia, para hacerlos auténticos garantes del derecho de acceso a la información, y verdaderamente independientes de los poderes que están obligados a vigilar y supervisar, permitiría contar por un lado con instituciones fuertes y confiables y por otro con un marco legal armónico y parejo en los procedimientos y los principios en su ejercicio, todo ello en favor de los mexicanos, sin importar la entidad donde vivan.

9. Homologación de las características fundamentales de los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas

Como ya se ha expuesto, el fortalecimiento de las instituciones garantes del acceso a la información pública y protección de datos personales, no solamente deben darse en el orden federal sino también en el local, porque el federalismo es eficiencia y es eficacia en los distintos órdenes de gobierno. En ese sentido, se plantea la homologación de criterios o principios uniformes básicos, esenciales o fundamentales en el diseño normativo constitucional de dichos órganos como constitucionales autónomos, tanto del orden federal, como de los estados y del Distrito Federal.

El planteamiento, es que dichos criterios sean la base para el caso de órgano federal pero también para los demás órganos garantes de las entidades federativas, a fin de armonizar las características fundamentales o esenciales mínimas de los organismos garantes en la materia, con el objeto de contar con instituciones fuertes y confiables en todo el país, y cumplir así con el criterio de apoliticidad en cada uno de ellos.

En efecto, debe tomarse en cuenta, que resulta importante que algunas decisiones de carácter orgánico —como la que se propone— sean previstas en la Constitución, que se requiere que sean ubicadas en ese rango, en la medida en que, sin ellas, sería difícil

366

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

cumplir con determinadas finalidades y funciones constitucionalmente relevantes, como en el caso acontece, de dotar a todos los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de garantías de independencia, autonomía e imparcialidad, para que el piso por instituciones solidas sea parejo en todo el país. De lo que se trata es de blindar de eficacia institucional a estos órganos garantes.

Se trata de que el Poder Constituyente o el Poder de Reforma prevea un diseño institucional, cuya particular y específica configuración orgánica, resulte idónea y susceptible de alcanzar las finalidades de eficacia institucional que se han expresado, a fin de que el Constituyente Local y el legislador secundario observe y atiende conforme con dicho fin.

En otras palabras, se trata de un esquema institucional desde la Constitución para exigir de los poderes constituidos, directamente, no sólo la realización de determinadas funciones, sino la creación de órganos con determinadas características.

Por regla general, la distribución y configuración orgánica de los organismos públicos previstos desde la Norma Suprema resulta relevante, en la medida en que el establecimiento de una estructura distinta por parte de los órdenes jurídicos federales, locales y/o municipales sería inadecuada para cumplir con las finalidades y/o funciones que tales organismos están llamados a cumplir.

El tema relativo a la creación de organismos constitucionales autónomos de las entidades federativas —donde todavía no lo son— es una cuestión principalmente de carácter orgánico, que en ocasiones presenta una íntima relación con la adecuada protección de los derechos fundamentales.

En efecto, ya nuestro máximo Tribunal ha compartido los argumentos anteriores y ha reconocido que los derechos fundamentales implican



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

no sólo deberes de abstención (obligaciones de no hacer) para los poderes públicos, sino también deberes positivos de promoción (obligaciones de hacer) para su efectiva salvaguarda.

En ese sentido, resulta justificable la propuesta para establecer o disponer las características básicas o esenciales que deben reunir los órganos garantes locales de los estados y del Distrito Federal, a fin de que los mismos resulten en su diseño normativo idóneos y necesarios para la tutela efectiva del derecho a la información, más allá del orden de gobierno o la entidad correspondiente.

Lo que se plantea es que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quede establecido un mandato de ordenación específico y vinculante para todos los órdenes jurídicos locales, en el sentido de establecer un órgano garante, de control y vigilancia de acceso a la información y de protección de datos personales lo más uniformes posibles en su naturaleza jurídica, y asegurar los principios o criterios de inmediatez, esencialidad o de equilibrio constitucional, paridad de rango, dirección política, estabilidad, permanencia, independencia, transparencia, imparcialidad, apoliticidad, especialidad, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y democrático de derecho, a fin de que pueda atender de manera eficiente y eficaz la función estatal total que se les ha encomendado.

Luego entonces, se propone prever de mejor manera las características específicas y esenciales de los órganos garantes del derecho de acceso a la información, de tal suerte que no queda al arbitrio de los legisladores dotar a dichos órganos de ciertas particularidades contrarias a las de un órgano constitucional como el que se busca diseñar; por el contrario, el mandato constitucional será la de perfeccionar y crear órganos con ciertas características, que precisamente garanticen de manera uniforme y efectiva el ejercicio del derecho de acceso a la información.



347

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Y si bien la vigente fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone precisamente el establecimiento órganos u organismos especializados e imparciales con autonomía operativa, de gestión y de decisión, responsables de sustanciar los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, y tal precepto lo que busco fue uniformar o armonizar en la medida de lo posible la naturaleza de los órganos garantes en todos los órdenes de gobierno y de los propios entes o órganos públicos, lo cierto es que la disparidad entre unos y otros es un hecho conocido.

Con esta propuesta, se busca que dentro del Federalismo que nos hemos dado y con pleno respeto de la libertad regulatoria o ámbito normativo de los estados a este respecto, lo hagan garantizando las características o principios esenciales que la Constitución Federal haya establecido en favor de estos órganos garantes, como órganos constitucionales autónomos. Sin que, la Constitución Local o las leyes puedan ir más allá del margen de configuración que la Ley Suprema ha previsto para estos órganos garantes.

Más aún ello es exigente, ante la evidencia histórica que al respecto se ha suscitado en cuanto a las pretensiones por desnaturalizar a estos órganos garantes, aun a pesar de la distribución orgánica prevista actualmente en la fracción IV del segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución General, como fue el caso de la Constitución del Estado de Querétaro que propuso fusionar dos órganos en uno mismo, es decir fusionar las comisiones de derechos humanos y de acceso a la información en el Estado de Querétaro. No obstante ello no tuvo éxito pues el Máximo Tribunal determinó que tal diseño contravenía de manera expresa, el texto constitucional contenido en el artículo 6o., en virtud de que el órgano que se crea por virtud del artículo 33 de la Constitución del Estado, no es un órgano especializado en materia de acceso a la información pública.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por lo tanto se propone reformar el artículo 116 y 122 de la Constitución General, a fin de que en las Constituciones y leyes de los Estados o en el Estatuto Orgánico y leyes del Distrito Federal, se prevea lo siguiente:

- Que establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los demás órganos que su Constitución o el Estatuto de Gobierno les otorgue autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.
- Que dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia.
- Facultad de los organismos garantes para interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos de su competencia, en todo caso ello lo harán conforme a lo previsto en el artículo 1º de esta Constitución.

520

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- Que las resoluciones del organismo garante de los estados o del Distrito Federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.
- Que el servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los órganos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.
- Que el órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local o el Estatuto de Gobierno.
- Que se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.
- Que las personas encargadas de la conducción del organismo garante local, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución o Estatuto de Gobierno.
- Que los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución Local, el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de la Constitución General.

- Que la Ley que emitan las Legislaturas Locales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.
- Que los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado o a la Asamblea Legislativa, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.
- Que la legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales o la Asamblea del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

10. Establecer bases, principios y armonización en materia de archivos, así como dotar al congreso de la unión de la facultad para expedir una ley general de archivos.

En la presente iniciativa se plantea una propuesta de reforma en materia de archivos, partiendo de que dicho tema si bien debe ser visto a la luz del acceso a la información, también debe de ser valorado con un propósito más superior, que es el de preservar la memoria histórica de la Nación. Por ello, la propuesta que se hace a



570

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

este respecto es vista en ambas dimensiones y no solamente una; es decir, la memoria y la transparencia.

La necesidad de establecer normas estandarizadas que regulen la producción, organización y conservación de los documentos en nuestro país, debe ser visto a la luz de dos dimensiones; la primera, porque son un testimonio de la vida cotidiana y trascendente de la sociedad, preservando la memoria histórica de la nación; y la segunda, como un medio para garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información.

Así, en principio, se parte del hecho de que los testimonios documentales originaron el nacimiento de la historia. Sólo a partir de que el hombre deja evidencia de sus actos se habla de un pasado de la humanidad.

La historia no se hace exclusivamente con documentos escritos. Se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los objetos conservados en los museos, con los resultados realizados en los laboratorios científicos, con encuestas, con entrevistas grabadas, con las imágenes transmitidas por los más diversos medios y, más recientemente, con el cine, la televisión y el Internet.

Sin embargo, esos cambios no han disminuido la importancia de los archivos como conservadores y transmisores de la memoria. Al contrario, la riqueza documental acumulada en los repositorios federales, de las entidades federativas, municipales, eclesiásticos y privados, la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar a esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como legado rico, homogéneo y confiable para estudiar el pasado.

Los millones de documentos acumulados a la fecha son registro, prueba y memoria de los actos del hombre en su entorno natural y



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

social. De ahí la importancia de establecer criterios homogéneos que nos resulten útiles para su manejo adecuado, cuya conservación y acceso permita conocer y explorar nuestra identidad nacional; la razón de lo que somos actualmente y nuestro potencial como sociedad.

La vida del Estado es objeto de renovación constante y el instrumento natural de esa renovación se plasma en los documentos que están en posesión de los poderes públicos, al alcance de quienes desean consultarlos. Por esta razón, los archivos deben marchar por el mismo rumbo que las demás instituciones públicas y a la par de los cambios históricos que vive el país.

Con todo, la vieja función que dio origen a los archivos sigue siendo la misma: conservar, clasificar, inventariar y difundir la memoria histórica acumulada. Sin embargo, también es cierto, esta tarea enfrenta nuevos retos que es necesario solventar de una manera institucional y eficaz; como lo es la exigencia de estandarizar las normas, criterios y procesos de organización y administración de los archivos, y más, ante el hecho innegable de que los documentos públicos, son la materia prima que garantiza el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, elemento consustancial de un Estado democrático.

Sin duda existe una relación estrecha entre archivos y democracia, puesto que los archivos generan dos ingredientes fundamentales para la democracia: memoria y transparencia. La memoria, y la transparencia, que se construyen a través de archivos bien conservados y ordenados, son claves a la democracia, puesto que son necesarios para que los ciudadanos puedan hacer una elección razonada y juiciosa de sus gobernantes y de los programas de gobierno que se les proponen. Los archivos proporcionan las herramientas imprescindibles para que los ciudadanos puedan acceder a la verdad, conocer el desempeño de sus gobernantes,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

obligar a una verdadera rendición de cuentas, y mediante su voto, premiar o castigar la conducta de quienes les gobiernan

En efecto, no es concebible la existencia de dicha prerrogativa constitucional, si de manera correlativa, no se surte la obligación de registrar los actos públicos. Dicho de otra manera; no existe derecho de acceso a la información, si no existe información. La materia prima del derecho de acceso a la información, lo es la obligación de documentar los actos públicos. Es decir, debe registrar y comprobar el uso y destino de recursos públicos y en general del ejercicio de sus atribuciones.

Es así, que para hacer efectivo el ejercicio de este derecho fundamental y poder acceder debidamente a la información pública gubernamental, y de cuya efectividad son protagonistas en primera instancia los propios Sujetos Obligados, es que su actuar comprende de manera esencial la conservación de sus archivos documentales.

La necesidad de contar con archivos actualizados como elemento fundamental para dar vigencia a nuestro sistema democrático a través del derecho de acceso a la información, se desprende de la primera parte de la fracción V del artículo 6° de la Constitución Federal, que exige como un medio para dar cumplimiento a dichas finalidades, el que los órganos públicos preserven sus documentos en archivos administrativos actualizados.

Si bien como lo refiere las consideraciones del dictamen de la Comisiones Unidas de la Función Pública y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sobre la reforma constitucional al artículo 6° en materia de acceso a la información, "... resulta importante no confundir el archivo histórico con los archivos administrativos de gestión y concentración, que tienen una función distinta y específica. . ." y por ello, el elemento fundamental para dar vigencia a dicha prerrogativa constitucional, lo son los archivos administrativos de gestión y concentración, y no así el histórico que requiere un



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

tratamiento y acceso a su información específico, esto no conlleva a que no se conciba la necesidad de establecer las bases de una política nacional en materia de desarrollo archivístico, mediante la homologación de los procesos, criterios y principios de organización y administración de los archivos; dado que como se ha mencionado, no se trata sólo de apuntalar nuestro sistema democrático mediante la rendición de cuentas de nuestros gobernantes, sino igualmente se conciben como los depositarios de nuestra memoria nacional, el reflejo de lo que hemos hecho y dejado de hacer.

Hasta hace algunos meses, únicamente 22 entidades federativas contaban con su respectiva Ley de Archivos o de Documentación, o del Sistema estatal de archivos; lo que refleja la necesidad de establecer disposiciones observables por todas las entidades federativas, incluidos los municipios, en los que se establezcan los aspectos esenciales en la administración y conservación de la memoria histórica de la nación, así como de la materia prima que dota de eficacia el ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país.

Si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestro vida institucional, requerimos contar con criterios y mecanismos de registro y custodia de los archivos, que cancele la posibilidad de que los funcionarios públicos sin importar el orden jurídico al que pertenezca, hagan un uso discrecional de éstos, que venza la aún existente tentación de patrimonialismo documental, y los obligue a entregar al final de su encargo, la documentación que generaron.

Por ello, en el contexto de esta iniciativa, se incita al órgano que de forma provisional se constituye para modificar nuestras decisiones políticas fundamentales, conocido por parte de la doctrina como Poder Reformador de la Constitución; a efecto de que se establezcan en el texto constitucional dos cosas, primero, un deber de asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo

a los principios comúnmente reconocidos en la materia como son: conservación, procedencia, integridad y disponibilidad.

Si bien el alcance de dichas características es tarea de la legislación reglamentaria, resulta oportuno realizar una conceptualización al respecto.

- La conservación, implica adoptar las medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los archivos.
- La procedencia, conlleva a conservar el orden original de cada fondo documental producido por los sujetos obligados en el desarrollo de su actividad institucional, para distinguirlo de otros fondos semejantes;
- La integridad, implica garantizar que los documentos de archivo sean completos y veraces para reflejar con exactitud la información contenida; y
- La disponibilidad, conlleva a adoptar medidas pertinentes para la localización de los documentos de archivo.

Es importante destacar que la actual fracción V del artículo 6º Constitucional únicamente se refiere a los archivos de gestión, no así a los históricos, a cuyo acceso no deben ceñirse las leyes de acceso a la información.

Por lo que se propone prever en dicha fracción que “Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad”.

Con abstracción de lo anterior, en cuanto a técnica legislativa, se estima que lo correcto separar el contenido de la fracción V y que esta únicamente prevea la materia de archivos, y en consecuencia trasladar a la fracción VI el enunciado de las obligaciones de transparencia, y recorrer a la sexta y séptima.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En cuanto al contenido de la fracción V propuesto, este se integra en dos partes. La primera, las acciones que deben llevar a cabo los sujetos obligados, y la segunda, los principios a que deben ceñirse éstos.

El segundo aspecto sin duda complementario y en cuya sinergia descansará el éxito del primero, consiste en incorporar con pleno respeto a nuestra forma de Estado Federal, una cláusula de autorización en nuestra norma máxima, que permita que el Congreso de la Unión expida una ley general al respecto, cuyo fin es establecer disposiciones que normen los aspectos esenciales de la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y organización de los archivos, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las instituciones.

Mediante la integración de una Ley General de Archivos, se facilitará el uso de la información, y se contribuirá a al ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información, desembocando en una mejor rendición de cuentas; pero mejor aún, se constituirá sin duda un andamiaje que permita dar bases firmes y uniformes a la preservación de nuestra memoria histórica, tanto en la federación, como en las entidades federativas y los municipios.

En este sentido, debe estimularse la estandarización de las políticas de administración de archivos y el establecimiento de procedimientos que aseguran una apropiada atención y protección de los mismos. Se logra así, que la evidencia e información contenida se pueda recuperar de una manera eficiente, con base en prácticas y procedimientos homogéneos.

Igualmente con dicha medida se fortalecería la relación entre los acervos y las instituciones a partir de un marco jurídico que regula su



729

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

funcionamiento, que cubra los vacíos legales ante leyes inexistentes o disparidad en los procedimientos en los diversos órdenes de gobierno, y a su vez, garantice el fortalecimiento de las instituciones públicas desde la perspectiva del patrimonio documental que generan y resguardan.

La estandarización de los procesos de administración de documentos en nuestro país, evitarían la improvisación, facilitarían el intercambio de información, agilizarían los servicios de información y crearían mecanismos de medición de la eficiencia de los procesos.

Con esta medida, no se restaría importancia alguna al archivo General de la Nación o menoscabaría su naturaleza jurídica, sino por el contrario, se fortalecería su posición como organismo rector de la actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la administración de los archivos administrativos e históricos, bajo un nuevo diseño legislativo que amplifique y potencie el Sistema Nacional de Archivos contenido en la actual la Ley Federal de Archivos, y que no regule solamente a los órganos del Poder Ejecutivo Federal y deje a la expedición de disposiciones generales de los demás entes públicos federales, la observancia de las disposiciones genéricas en la materia; dicho esquema que si bien es similar a la primera generación de leyes de acceso a la información en nuestro país, debe incorporarse ya a un sistema horizontal y vertical del cumplimiento de sus obligaciones.

De la misma manera fortalecería el vínculo entre todos los actores del Sistema Nacional de Archivos, definiendo claramente participaciones y competencias.

La expedición de una ley que defina con base en experiencias nacionales e internacionales, un proyecto uniforme de los sistemas de clasificación y conservación de los archivos en los órdenes federal, de las entidades federativas, municipales, y los ámbitos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

universitarios, eclesiásticos y privados, nutrirá y unificar las disposiciones del Sistema Nacional de Archivos.

Por lo que en este sentido, es que se propone adicionar una fracción XXIX-T, para establecer que el Congreso de la Unión será competente "para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos."

Acotando, que la propuesta al artículo 73 se trata de una redacción que comprende dos partes, la primera, que la ley tendrá como objetivo homogeneizar (igualar) la organización y administración de los archivos, al respecto la Ley Federal de Archivos contiene dos capítulos que se refiere uno, a la organización, y el otro, a la administración. El de la organización consiste en distribuir las competencias intraorgánicas, es decir, al interior de los Sujetos Obligados. La administración comprende el seguimiento de las diversas etapas de los archivos, desde su registro hasta su baja definitiva.

La segunda parte de la redacción se refiere a la creación de un Sistema Nacional, el cual ya opera en la Ley Federal pero a través de colaboración y coordinación.

Finalmente en este rubro, resulta oportuno precisar que existen diversos tipos de archivos, como son públicos, privados y privados de interés. Por lo que se omite incorporar la expresión de públicos a propósito, con el fin de que la Ley pudiese normar igualmente en su caso, el acceso a archivos privados o la declaratoria de archivos privados de interés público.

11. Régimen transitorio



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

A fin de concretar el contenido y alcance del decreto que se somete a la consideración de esta Soberanía, se proponen varias disposiciones transitorias, y en ese sentido se plantea lo siguiente:

- VIGENCIA DE LA REFORMA. Se propone que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
- PERMANENCIA DE SU ENCARGO DE LOS ACTUALES COMISIONADOS. Se propone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.
- PLAZO EN LA DESIGNACION DE LOS DOS NUEVOS COMISIONADOS DEL NUEVO ORGANO FEDERAL. Que la designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante federal, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.
- PLAZO AL CONGRESO DE LA UNION PARA EMITIR LA LEYES GENERALES DE ACCESO A LA INFORMACION Y LA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES. El Congreso de la Unión deberá expedir dichas leyes en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.
- PLAZO AL CONGRESO DE LA UNIION PARA ADECUAR LA LEGISLACION FEDERAL El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la leyes en las materias y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.
- PLAZOS PARA LOS ORGANOS LEGISLATIVOS LOCALES PARA ADECUAR SU LEGISLACION, EN UN PRIMER



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MOMENTO AL PRESENTE DECRETO Y EN SEGUNDO MOMENTO A LA LEYES GENERALES. Se prevé que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Asimismo, dichos órganos legislativos deberán realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto:

- APLICACIÓN DE LA NORMA VIGENTE EN TANTO SE ADECUA LA NUEVA NORMATIVIDAD. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.
- SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS EN TRÁMITE. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.
- TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DE PERSONAL CON QUE CUENTA EL IFAI COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO AL NUEVO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. Se prevé que a la entrada



307

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

- REGLAS PARA ASEGURAR LA AUTONOMÍA PRESUPUESTAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE DECRETO. Se plantea que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los organismos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.

- CREACION DE UN FONDO EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA. Se propone que la Federación cree un Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en términos de las disposiciones



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.

Es decir se trata de un fondo etiquetado; es decir, que no podrá destinarse los recursos del mismo para gasto corriente u operativo de los organismos garantes. Siendo el caso que en la legislación aplicable, se deberán preverán las reglas respecto a la entrega, manejo y vigilancia de dicho fondo.

En el mismo sentido, del análisis de las iniciativas anteriores, con el propósito de facilitar su estudio, las dictaminadoras realizaron un cuadro comparativo del texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el texto del decreto con las modificaciones propuestas en la iniciativa en estudio para quedar como sigue:

VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 6o. (...) (...) I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.	Artículo 6o. (...) (...) I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>II. (...)</p> <p>III. (...)</p> <p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.</p> <p>V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.</p> <p>VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.</p>	<p>de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p> <p>El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.</p> <p>II. (...)</p> <p>III. (...)</p> <p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante federal y los organismos autónomos locales.</p> <p>IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal previstos en esta Constitución.</p> <p>V. Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad</p> <p>VI. Los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.</p> <p>VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.</p> <p>VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan esta</p>
--	--

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Constitución y la legislación aplicable.

La protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, depositario de la autoridad en la materia y responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

En el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

El Instituto tendrá las facultades que establezcan esta Constitución y la Ley federal. En todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia. El Instituto interpretará las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.



296

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El Instituto conocerá y resolverá las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiere negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. La Ley Federal determinará la forma y términos en que deberán promoverse las impugnaciones ante el Instituto Federal. No será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo. La resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del organismo garante local, y será vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, organismo local, personas o sujeto obligado correspondiente, quien deberá cumplirla en sus términos.

Las resoluciones del organismo garante federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados federales o locales, según corresponda. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia.

El Instituto, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal para dictar sus resoluciones.

La Ley Federal determinará las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos, pero en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

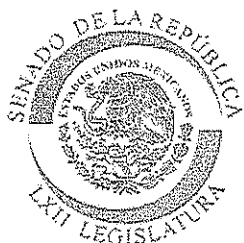
servicio especializado en la materia. El servicio profesional de acceso a la información pública, será la base del funcionamiento del Instituto.

El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se integrará y funcionará en los términos que disponga la ley federal.

El Instituto contará con el personal humano y los recursos financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos del Estado. Asimismo elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

El Consejo General será su órgano superior de dirección y administración y se integrará por siete comisionados. Los comisionados durarán en su cargo nueve años, y no podrán ser reelectos; y serán renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Solo podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes



256

257

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser designados por el órgano legislativo en sesión pública. La ley federal establecerá la forma, términos y procedimiento correspondientes.

Será elegido de entre los Comisionados al que ha de fungir como comisionado Presidente, quien tendrá la representación legal del organismo, quien podrá delegarla en términos de la Ley. La designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.

Para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.

Los comisionados y el comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal señalará los supuestos en los que los



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. Quienes hayan fungido como Comisionados no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.

Las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

El Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución y demás disposiciones aplicables.

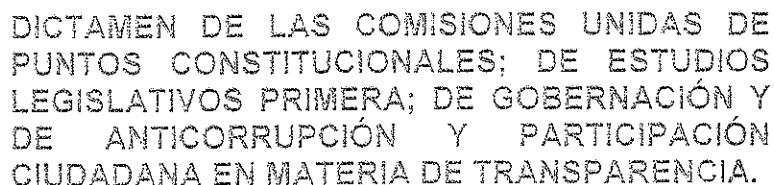
La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.

El Instituto podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

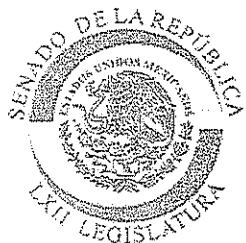
	<p>colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables, para la debida protección y promoción del derecho a la información pública.</p> <p>El Instituto podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.</p> <p>La ley federal en materia de transparencia y acceso a la información en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de esta Constitución.</p>
<p>Artículo 16. (...)</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 16. (...)</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El derecho a la protección de los datos personales se garantizará a través de los organismos públicos autónomos, especializados e imparciales de la Federación, estados y Distrito Federal, previstos en los artículo 6, 116 y 122 de esta Constitución y que se prevén a su vez como garantes en materia de acceso a la información. Lo serán en cuanto a los datos personales en posesión de los poderes, órganos, entes, entidades, personas o sujetos obligados referidos en las citadas disposiciones.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 73. (...)</p>	<p>Artículo 73. (...)</p>

120



29
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y</p> <p>VIII.- Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p>	<p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;</p> <p>VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos en la misma y en la Ley, y</p> <p>IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p>
<p>Artículo 105. (...)</p> <p>I. (...)</p> <p>II. (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>No existe correlativo</p>	<p>Artículo 105. (...)</p> <p>I. (...)</p> <p>II. (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

(...)	la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (...)
<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como</p>

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>	<p>los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será</p>	<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>	<p>Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 116. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I a VII (...)</p> <p>No existe correlativo</p>	<p>Artículo 116. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I a VII (...)</p> <p>VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos, y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.</p> <p>Dichos organismos garantes tendrán las facultades que establezca la Ley que emita cada una de las Legislaturas del Estado y en todo caso serán competentes para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos,</p>

7/6

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. Los organismos garantes podrán interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante estatal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el órgano garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los organismos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.</p> <p>La Ley que emitan las Legislaturas regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.</p> <p>Los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.</p> <p>La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p>
Artículo 122. (...) (...)	Artículo 122. (...) (...)
(...)	(...)
(...)	(...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

(...)	(...)
(...)	(...)
A. (...)	A. (...)
B. (...)	B. (...)
C. (...)	C. (...)
BASE PRIMERA. (...)	BASE PRIMERA. (...)
I. a IV. (...)	I. a IV. (...)
(...)	(...)
V. (...)	V. (...)
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (...)	BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. (...)
No existe correlativo.	<p>BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y leyes del Distrito Federal se establecerá un organismo especializado, imparcial y colegiado, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisión y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria.</p> <p>Dichos organismo garante tendrán las facultades que establezca la Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. El organismo garante podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.

Las resoluciones del organismo garante serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.

El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.

El órgano superior de dirección y administración del órgano garante deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga el Estatuto de Gobierno. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

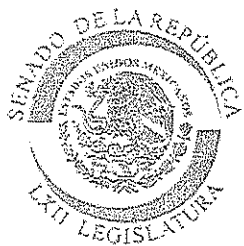
organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.

La Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regulará la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.

El organismo garante elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.

La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.

Tercero. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de acceso a la información pública, la ley general de protección de datos personales, y la ley general de archivos a que se refieren este Decreto en un plazo máximo de un año, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.

Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de

402

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

protección de datos personales a que se refieren este Decreto.

Sexto. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.

Séptimo. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciado ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.

En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.</p> <p>Décimo. La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transferían recursos a los organismos garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables. Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.</p> <p>Décimo Primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.</p>
--	---

3.- ANÁLISIS CONCEPTUAL Y TEMÁTICO DE LAS
COINCIDENCIAS Y DIVERGENCIAS DE LAS TRES INICIATIVAS
MATERIA DEL DICTAMEN.



Derivado de las tres iniciativas presentadas en materia de transparencia, se realizó un cuadro comparativo que contiene las 3 iniciativas y la redacción actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se pueden advertir las diferencias no sólo en algunos temas, sino en la redacción de cada una de ellas y el alcance que proponen en las diferentes iniciativas:

CPEUM Vigente	INICIATIVA PRI-PVEM	INICIATIVA PRD	INICIATIVA PAN
Artículo 6o. La manifestación de las ideas	Artículo 6o. A. La manifestación de las	Artículo 6o.	Artículo 6o.



424

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p>	<p>ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>(...)</p> <p>I...</p>	<p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p>	<p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público</p>
--	--	---	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p> <p>El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.</p>
II y III. (...)	II y III. (...)	II y III. (...)	II. (...) III. (...)
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.	IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos especializados que establece esta Constitución.	IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, por lo que la Constitución Federal, las de los Estados y el Estatuto de Gobierno del	IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante el organismo garante federal y los organismos autónomos locales. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión



126

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de dichos órganos.	expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante los organismos autónomos federal, estatal y del Distrito Federal previstos en esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.	V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	V...	V. Los sujetos obligados deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad
VI. a VII. (...)	VI. a VII. (...)	VI a VII...	VI. Los sujetos obligados publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. VII. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. VIII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan esta Constitución y la legislación aplicable.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>B. El Estado contará con un organismo especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.</p>	<p>El Congreso de la Unión establecerá un órgano que se denominará Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos, que contará con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Este órgano se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p>	<p>La protección del derecho de acceso a la información del orden federal es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, especializado e imparcial denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con autonomía técnica, de gestión, jurídica y presupuestaria, depositario de la autoridad en la materia y responsable de la protección del derecho de acceso a la información pública en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como de los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza</p>
---	--	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad.</p> <p>El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes de la Unión, salvo aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y podrá revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que establezca la Ley.</p>	<p>El Consejo será competente para conocer asuntos de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos personales; emitir recomendaciones y apercibimientos; y para resolver los procedimientos que se interpongan en contra de actos u omisiones provenientes de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, que violenten el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.</p>	<p>recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.</p> <p>En el ejercicio de esta función estatal la certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, celeridad, transparencia, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.</p> <p>El Instituto tendrá las facultades que establezcan esta Constitución y la Ley federal. En todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia. El Instituto interpretará las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.</p>
--	--	---	---



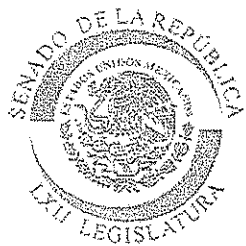
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>El Consejo estará facultado para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados señalados en la fracción I de este artículo.</p>	<p>El Instituto conocerá y resolverá las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubi negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. La Ley Federal determinará la forma y términos en que deberán promoverse las impugnaciones ante el Instituto Federal. No será necesario que el particular agote previamente el mecanismo de defensa a que se refiere este párrafo para acudir al juicio de amparo. La resolución del Instituto tendrá por efecto revocar, modificar o confirmar la resolución del organismo garante local, y será vinculatoria para la autoridad, entidad, órgano, organismo local, personas o sujeto obligado correspondiente, quien deberá cumplirla en sus términos.</p>
	<p>Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables. De manera excepcional, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los Presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados o los titulares de los órganos</p>	<p>Las resoluciones que emita el Consejo serán definitivas e inatacables para la autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de</p>	<p>Las resoluciones del organismo garante federal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismo, personas o sujetos obligados federales o locales, según corresponda. Los particulares podrán</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>constitucionales autónomos podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional.</p>	<p>cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para los órganos garantes referidos en la fracción IV de este artículo. Sólo podrán ser impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación por las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales.</p>	<p>Impugnarias mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia.</p> <p>El Instituto, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los organismos garantes de las entidades federativas y, en su caso, el organismo autónomo federal para dictar sus resoluciones.</p> <p>La Ley Federal determinará las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del Instituto, así como las relaciones de mando entre éstos, pero en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en</p>
--	--	---	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>la materia. El servicio profesional de acceso a la información pública, será la base del funcionamiento del Instituto.</p> <p>El Instituto tendrá un Consejo Consultivo que se integrará y funcionará en los términos que disponga la ley federal.</p> <p>El Instituto contará con el personal humano y los recursos financieros y materiales que autorice el presupuesto de egresos del Estado. Asimismo elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Federal, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Cámara de Diputados, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo Federal. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.</p>
	<p>El organismo garante se integra por siete comisionados, quienes serán nombrados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos por mayoría, y cuando se encuentre en receso por la Comisión Permanente, con la misma votación</p>	<p>La Cámara de Diputados garantizará que el Consejo cuente con un presupuesto anual suficiente para el cumplimiento de sus actividades.</p> <p>El Consejo contará con un órgano colegiado integrado por siete consejeros ciudadanos, que serán designados por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores, en la forma, términos y procedimiento que determine la ley federal,</p>	<p>El Consejo General será su órgano superior de dirección y administración y se integrará por siete comisionados. Los comisionados durarán en su cargo nueve años, y no podrán ser reelectos; y serán renovados en forma escalonada, por lo que uno y otros serán elegidos sucesivamente. Solo</p>



412

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>siguiendo el proceso establecido en el párrafo siguiente y lo dispuesto en la Ley.</p>	<p>favoreciéndose la equidad de género y el relevo escalonado de sus integrantes. Los consejeros durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección. Sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.</p>	<p>podrán ser removidos de su encargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.</p>
	<p>En caso de que la Cámara de Senadores objetare la propuesta, el Presidente de la República designará nuevamente, dentro de los siguientes treinta días. Si este segundo nombramiento fuera también objetado, el Presidente de la República designará directamente a otra persona en un plazo improrrogable de treinta días.</p>		<p>Los Comisionados serán designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley, a fin de recibir la opinión de las organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del público sobre las propuestas realizadas. Los aspirantes al órgano de dirección deberán comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, y deberán ser</p>
	<p>Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes,</p>		



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>científicas o de beneficencia.</p> <p>El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar ayuda al</p>	<p>El Consejo será presidido por uno de los siete consejeros, el cual será designado por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores. El presidente durará en su cargo tres años seis meses y podrá ser reelecto por una sola vez.</p> <p>Durante el desempeño de sus funciones, los consejeros no podrán tener ningún otro empleo cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.</p> <p>El Consejo, a través de su presidente, presentará un informe anual de actividades al Congreso de la Unión. Para tal efecto, comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley federal.</p> <p>Las violaciones a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales que tenga conocimiento el Consejo en el ejercicio de sus funciones, serán sancionadas en los términos de la Ley Federal de</p>	<p>designados por el órgano legislativo en sesión pública. La ley federal establecerá la forma, términos y procedimiento correspondientes.</p> <p>Será elegido de entre los Comisionados al que ha de fungir como comisionado Presidente, quien tendrá la representación legal del organismo, quien podrá delegarla en términos de la Ley. La designación del comisionado Presidente recaerá en el propio Pleno del Consejo General, quien lo designara mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.</p>
--	--	---	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>organismo garante y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.</p>	<p>Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siendo independientes de las del orden civil o penal que procedan y de los procedimientos para el resarcimiento del daño ocasionado.</p>	<p>Para ser comisionado se requerirá ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, además deberán contar por título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia a fin; no haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o</p>
--	--	---	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley federal.</p> <p>Los comisionados y el comisionado Presidente no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en las asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remuneradas. La Ley Federal señalará los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado. Quienes hayan fungido como Comisionados no podrán</p>
--	--	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha de la conclusión de su cargo, puestos en los poderes públicos federal, ni podrán contender a cargos de elección popular federal en la elección inmediata siguiente al que hubieran dejado el encargo.</p> <p>Las personas encargadas de la conducción del Instituto, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.</p> <p>Los Comisionados en funciones, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su cargo, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo.</p> <p>El Presidente del Instituto, presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.</p> <p>El Instituto, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el</p>
--	--	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

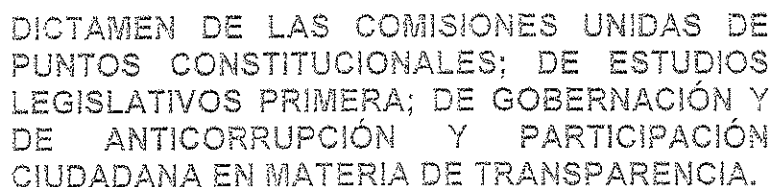
		<p>desempeño de sus funciones, el Instituto contará con el apoyo, el auxilio y la colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos, conforme esta Constitución y demás disposiciones aplicables.</p> <p>La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.</p> <p>El Instituto podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, en términos de las disposiciones aplicables para la debida protección y promoción del derecho a la información pública.</p> <p>El Instituto podrá celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en términos de lo que disponga la Ley Federal en la materia.</p> <p>La ley federal en materia</p>
--	--	---

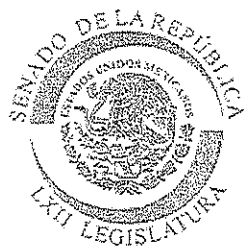


128

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			de transparencia y acceso a la información en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 de esta Constitución.
<p>Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.</p> <p>...</p>	...	<p>Artículo 16. ...</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley general, la ley federal y las leyes de los estados y el Distrito Federal, las cuales establecerán los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.</p> <p>...</p>	<p>Artículo 16. ...</p> <p>Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. El derecho a la protección de los datos personales se garantizará a través de los organismos públicos autónomos, especializados e imparciales de la Federación, estados y Distrito Federal, previstos en los artículo 6, 116 y 122 de esta Constitución y que se prevén a su vez como garantes en materia de acceso a la información.</p>

148



429

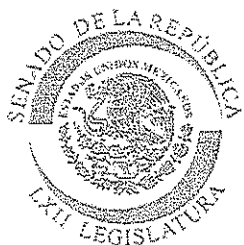
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.</p> <p>...</p>		<p>expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; el derecho de acceso a la información; los derechos de protección de datos personales; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.</p> <p>...</p>	
<p>Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (...)</p>	<p>Artículo 73. (...) (...)</p> <p>XXIX-R. Para expedir una Ley General reglamentaria del artículo 6° de esta Constitución que establezca las bases y los procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos</p>	<p>Artículo 73. (...) (...)</p> <p>XXIX-R. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de acceso a la información pública.</p>	<p>XXIX-R. Para expedir una ley general en materia de acceso a la información pública con el objeto de cumplir con los principios y bases previstas en el párrafo segundo del artículo 6° de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación,</p>



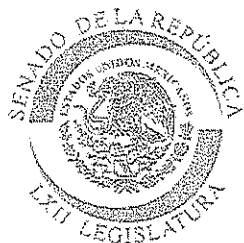
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	gubernamentales de todos los niveles de gobierno.		los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
	(XXIX-S. Para expedir la ley general y la ley federal en materia de protección de datos personales.	XXIX-S. Para expedir una ley general en materia de protección de datos personales con el objeto de cumplir con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 16 de esta Constitución, y garantizar su armonización y homogeneidad en su aplicación en el territorio nacional por la Federación, los Estados y el Distrito Federal en el ámbito de sus respectivas competencias.
			XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, con sujeción a los principios previstos en la fracción V del segundo párrafo del artículo 6° de esta Constitución; así como también, determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXX. (...)	XXX. (...)	XXX. (...)	XXX. (...)
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: I. a XI. (...)	Artículo 76. (...) I. a XI. (...)	Artículo 76. (...) I. a XI. (...)	Artículo 76. (...) I. a XI. (...)
	XII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de	XII. Designar a los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos;	XII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de



2013
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y		datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos previstos en la misma y en la Ley, y
XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.	XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.	XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.	XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
<p>Artículo 78. Durante los sesenta y cinco días del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de treinta y siete miembros de los que quince serán Diputados y veinte Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p> <p>Se recorre</p>	<p>Artículo 78. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VIII. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;</p> <p>IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p>	...	<p>Artículo 78. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VIII. Aprobar a los Comisionados del organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales que establece el artículo 6 de esta Constitución, en los términos establecidos en la misma y en la Ley, y</p> <p>IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.</p>
<p>Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:</p> <p>I. a XVIII. (...)</p> <p>XIX. Se deroga.</p>	<p>Artículo 89. (...)</p> <p>I. a XVIII. (...)</p> <p>XIX. Nombrar a los</p>



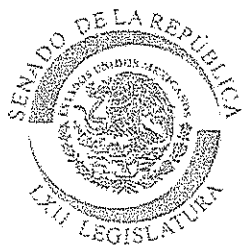
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución. (...).		
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: (...).	Artículo 105.- (...) I (...) II. (...) (...) a) a g) (...) h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Artículo 105.- (...) I (...) II. (...) (...) a) a g) (...) h) El Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales consagrados en los artículos 6° y 16 de esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, los órganos garantes de acceso a la información pública y de protección de datos personales equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales; y el órgano garante de acceso a la información pública y de protección de datos personales del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	Artículo 105.- (...) I (...) II. (...) (...) a) a g) (...) h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
III (...)	III (...)	III (...)	III (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

No Existe	IV. Del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución		
<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del</p>



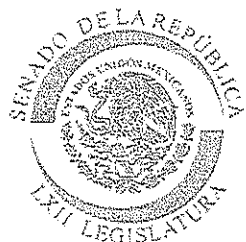
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>	<p>Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>	<p>Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los Consejeros Ciudadanos del Consejo Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>	<p>Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p>
<p>Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus</p>	<p>(...)</p>	<p>(...)</p>	<p>Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y</p>



92.7
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

atribuciones, procedan como corresponda. (...)			recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. (...)
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. (...)	Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. (...)	... (...)	Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. (...)
(...)	(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)	(...)
Para poder proceder penalmente por delitos			Para poder proceder penalmente por delitos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>		<p>federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los titulares de los organismos a los que las Constituciones locales Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.</p> <p>Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:</p> <p>I. a VII. (...)</p>	<p>Artículo 116. (...) I a VII (...)</p> <p>VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar</p>	<p>Artículo 116. (...) I a VII (...)</p> <p>VIII. Las constituciones y leyes de los estados en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos</p>	<p>Artículo 116. (...) I a VII (...)</p> <p>VIII. Las Constituciones y leyes de los Estados establecerán organismos especializados, imparciales y colegiados, depositario de la autoridad</p>



42

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

el derecho de acceso a la
 información y de
 protección de datos
 personales en posesión de
 cualquier autoridad,
 entidad, órgano u
 organismo gubernamental.
 Contarán con personalidad
 jurídica y patrimonio
 propio; así como plena
 autonomía técnica, de
 gestión, y capacidad para
 decidir sobre el ejercicio
 de su presupuesto y su
 organización interna.

personales en posesión de
 cualquier autoridad,
 entidad, órgano y
 organismo de los poderes
 Ejecutivo, Legislativo y
 Judicial, órganos
 autónomos, partidos
 políticos, fideicomisos y
 fondos públicos, así como
 de cualquier persona física
 o moral que reciba y ejerza
 recursos públicos o realice
 actos de autoridad, en el
 ámbito de su competencia,
 garantizarán la creación de
 órganos de acceso a la
 información pública y
 protección de datos
 personales con autonomía
 operativa, presupuestaria,
 de gestión y de decisión,
 personalidad jurídica y
 patrimonio propio en
 términos del artículo 6º de
 esta Constitución.
 Las legislaciones que
 sobre la materia emitan las
 entidades federativas
 deberán ajustarse a lo
 previsto en el artículo 6º,
 segundo párrafo de la
 presente Constitución y en
 la ley general en materia de
 acceso a la información
 pública que emita el
 Congreso de la Unión.

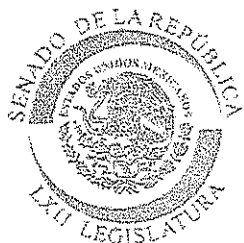
en la materia y
 responsables de garantizar
 en el ámbito de su
 competencia el derecho de
 acceso a la información y
 de protección de datos
 personales en posesión de
 los Poderes Legislativo,
 Ejecutivo y Judicial, así
 como de los tribunales
 administrativos, y
 laborales, universidades e
 instituciones de Educación
 Superior y demás órganos
 constitucionales
 autónomos, partidos
 políticos, fideicomisos y
 fondos públicos, y de
 cualquier persona física,
 moral, organización de la
 sociedad civil, sindicato u
 otra que reciba y ejerza
 recursos públicos o realice
 actos de autoridad en el
 ámbito local. Contarán con
 personalidad jurídica y
 patrimonio propios,
 independientes en sus
 decisiones y
 funcionamiento y
 profesional en su
 actuación; que para el
 desempeño de sus
 funciones contará con
 plena autonomía técnica,
 de gestión, jurídica y
 presupuestaria.

Dichos organismos
 garantes tendrán las
 facultades que establezca
 la Ley que emita cada una
 de las Legislaturas del
 Estado y en todo caso
 serán competentes para
 vigilar el cumplimiento de
 las disposiciones legales
 en la materia y para
 conocer y resolver de los
 recursos de revisión



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de transparencia, en el ámbito de su competencia. Los organismos garantes podrán interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.</p> <p>Las resoluciones del organismo garante estatal serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el órgano garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.</p> <p>El servicio profesional de</p>
--	--	--



450

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento de los organismos garantes estatales, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.</p>
--	--	--	---

El órgano superior de dirección y administración de los organismos garantes deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga su Constitución Local. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.

Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.

Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga la Constitución y la Ley local,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo artículo 6 de esta Constitución.</p> <p>La Ley que emitan las Legislaturas regularan la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso pue recusar con causa a un Comisionado.</p> <p>Los organismos garantes elaborarán su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad al Congreso del Estado, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos</p>
--	--	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.</p> <p>La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emitan las Legislaturas locales en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p>
<p>Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.</p> <p>(...)</p> <p>Artículo C. (...)</p> <p>BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:</p> <p>I. a IV. (...)</p> <p>V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión; y</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 122. (...)</p> <p>BASE PRIMERA (I a IV (...)</p> <p>V (...)</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo gubernamental. En el Distrito Federal habrá un organismo especializado, imparcial y colegiado,</p>	<p>Artículo 122. (...)</p> <p>BASE PRIMERA (...)</p> <p>I a IV (...)</p> <p>V (...)</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ...</p>	<p>Artículo 122. (...)</p> <p>BASE PRIMERA (...)</p> <p>I a IV (...)</p> <p>V (...)</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ...</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Distrito Federal. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;		
o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y	o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;	o...	o...
p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.	p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y	p) Nombrar a los Comisionados Ciudadanos del órgano garante del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales del Distrito Federal, conforme al procedimiento previsto en la ley;	p...
	q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.	q) Expedir las leyes que garanticen el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de	q...



438
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)</p> <p>No Existe.</p>	<p>BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)</p> <p>No Existe</p>	<p>cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal, las cuales deberán ajustarse a lo previsto en las leyes generales de acceso a la información pública y protección de datos personales que emita el Congreso de la Unión.</p> <p>r) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p> <p>BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)</p> <p>BASE SEXTA.- Existirá un órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, que tendrá autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el Distrito Federal. Este órgano se regirá por la ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p>	<p>r...</p> <p>BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)</p> <p>BASE SEXTA.- En el Estatuto de Gobierno y leyes del Distrito Federal se establecerá un organismo especializado, imparcial y colegiado, depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los tribunales administrativos y laborales, universidades e instituciones de Educación Superior y demás órganos autónomos que esta Constitución les otorga autonomía, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato u otro que reciba y ejerza</p>
---	--	---	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito local. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisión y funcionamiento y profesional en su actuación; que para el desempeño de sus funciones contará con plena autonomía técnica de gestión, jurídica y presupuestaria.</p> <p>Dichos organismo garante tendrán las facultades que establezca la Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en todo caso será competente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y para conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados antes referidos, así como de la promoción, difusión e investigación sobre el derecho a la información pública y la cultura de la transparencia, en el ámbito de su competencia. El organismo garante podrá interpretar en el orden administrativo las disposiciones aplicables al momento de resolver los recursos, pero en todo caso deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 1 de esta Constitución.</p>
--	--	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>Las resoluciones del organismo garante serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados descritos con anterioridad. Los particulares podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia. O bien podrán promover previamente ante el organismo garante federal el mecanismo de defensa previsto en el artículo 6 de esta Constitución.</p> <p>El servicio profesional de acceso a la información pública y protección de datos personales, será la base del funcionamiento del organismo garante, para lo cual deberán contar con el personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia.</p> <p>El órgano superior de dirección y administración del organismo garante deberá ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, los cuales deberán durar en su cargo un periodo determinado, que no podrá ser menor a siete años, y deberán ser renovados en forma escalonada, y solo podrán</p>
--	--	---



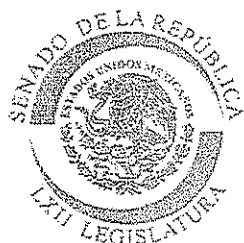
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		<p>ser removidos de su encargo mediante un procedimiento especial en los términos de lo que disponga el Estatuto de Gobierno. Se deberá procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano máximo de decisión.</p> <p>Las personas encargadas de la conducción del organismo garante, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución y de su propia Constitución.</p> <p>Los Comisionados serán designados en los términos y procedimiento que disponga el Estatuto de Gobierno y la Ley local, pero en todo caso para su designación se requerirá una votación calificada del órgano legislativo. La Ley preverá los requisitos para ser comisionado pero en todo caso deberán cumplir con los requisitos que se exige para los Comisionados del orden federal en términos del párrafo segundo del artículo 6 de esta Constitución.</p> <p>La Ley que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regulará la estructura, el funcionamiento del organismo garante, el régimen de incompatibilidades de los comisionados, el régimen de ausencias, los</p>
--	--	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>supuestos en los que los Comisionados deberán excusarse por algún impedimento para conocer de un caso concreto, así como el procedimiento mediante el cual las partes en un recurso puedan recusar con causa a un Comisionado.</p> <p>El organismo garante elaborará su propio proyecto de presupuesto de egresos y lo remitirá al Ejecutivo Local, a fin de que éste lo envíe en su oportunidad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. El proyecto de presupuesto de egresos no podrá ser modificado por el poder Ejecutivo local. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto, contemplará las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objeto.</p> <p>La legislación local en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales que emita la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en todo caso deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p>
	TRANSITORIOS	TRANSITORIOS	TRANSITORIOS
	<p>Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación</p>	<p>PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su</p>	<p>Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>en el Diario Oficial de la Federación.</p>	<p>publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p>	<p>en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p>Segundo. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.</p> <p>Tercero. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto, y conforme al procedimiento previsto en el mismo.</p>
	<p>Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.</p>	<p>SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá emitir las leyes generales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este decreto.</p>	<p>Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general de acceso a la información pública, la ley general de protección de datos personales, y la ley general de archivos a que se refieren este Decreto en un plazo máximo de un año contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.</p>
		<p>TERCERO. El Congreso de la Unión y los estados deberán realizar las adecuaciones necesarias a sus constituciones locales y al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en vigor del</p>	<p>El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones necesarias a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

		presente decreto.	siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.
	<p>Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados.</p>	<p>CUARTO. La Federación, los estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales o, en su caso, realizar las modificaciones necesarias a sus actuales leyes, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de las leyes generales a que hacen referencia los artículos 6° y 16 de esta Constitución.</p> <p>QUINTO. El Consejo Federal para el Acceso a la Información y Protección de Datos iniciará funciones a partir de la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información.</p>	<p>Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de seis meses, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su Constitución, sus leyes y demás disposiciones aplicables a lo establecido en el presente Decreto.</p> <p>Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberá realizar las adecuaciones necesarias a las leyes en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales en un plazo máximo de un seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la ley general de acceso a la información pública y de la ley general de protección de datos personales a que se refieren este Decreto.</p> <p>Sexto. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como organismo constitucional autónomo, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por</p>

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

			el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.
	<p>Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.</p>	<p>SEXTO. La designación de los consejeros ciudadanos del órgano garante federal, deberá tener lugar dentro de los sesenta días naturales a la entrada en vigor de la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información. En este proceso, los comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos podrán participar en la convocatoria para la designación de consejeros ciudadanos.</p>	<p>Séptimo. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.</p>
	<p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Ejecutivo Federal especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de noviembre de 2017.</p> <p>b) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.</p> <p>d) Quien sustituya al</p>	<p>SÉPTIMO. Para garantizar el escalonamiento en la renovación del órgano garante federal, en la primera designación de los consejeros ciudadanos, se designarán, por única vez, a tres consejeros para un periodo de tres años y cuatro consejeros para un periodo de siete años.</p>	<p>Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, se transferirán al organismo público autónomo creado en los términos del presente Decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán regiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.</p> <p>Noveno. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano</p>



442

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.</p> <p>e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.</p> <p>Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para adecuar su normatividad a lo establecido en el presente Decreto.</p> <p>Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.</p>		<p>legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos, según corresponda, a fin de instrumentar lo previsto en este Decreto.</p> <p>En las entidades federativas en donde el organismo garante tuviera la naturaleza de organismo constitucional autónomo las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. En los casos en que dicha naturaleza deviniera por motivo de este Decreto las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto que emitan los órganos legislativos de las entidades respectivas y en los presupuestos sucesivos siguientes a dicho decreto.</p> <p>Décimo. La Federación creará el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes, en los términos y condiciones previstos en las disposiciones aplicables.</p>
--	---	--	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

			<p>Pero en todo caso, la determinación de los montos se distribuirían entre las entidades federativas deberá hacerse en consideración del número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial. Dichos recursos solo se podrán destinar a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como a la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y de protección de datos personales.</p> <p>Décimo Primero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.</p>
--	--	--	--

Derivado del cuadro anterior, se pueden apreciar convergencias y divergencias entre las 3 iniciativas que se presentaron, para efectos del análisis que se desarrolla, se agruparon en temas generales, en los que se pueden advertir los puntos convergentes y se muestran igualmente de forma temática los puntos divergentes, conforme al siguiente cuadro:

CONVERGENCIAS

- 1. Autonomía del órgano garante federal.** Se propone que el órgano garante cuente con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios.
- 2. Número de integrantes del órgano garante federal.** Se propone que se integre por 7 miembros.
- 3. Renovación escalonada:** Coinciden en que la renovación de los integrantes del órgano garante se realice de forma escalonada.
- 4. Legitimación para promover acción de inconstitucionalidad:** Se otorga al



1004

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

órgano garante federal, facultad para promover acción de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

5. Sujeto excluido de la competencia del órgano garante: Se propone que se encuentre excluida de la competencia del órgano garante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

6. Responsabilidad política de los integrantes del órgano garante: Se establece que los miembros del órgano garante puedan ser sujetos de juicio político.

7. Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos especializados. Se propone establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que se sustanciarán ante los organismos especializados que se establecen en la CPEUM.

8. Facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia: Se propone que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una ley general en materia de acceso a la información y protección de datos personales, permitiendo por ende, la subsistencia de ley federal respectiva.

9. Existencia de órganos garantes en los Estados y el Distrito Federal. Se propone que en las constituciones de los Estados se establezcan organismos dotados de autonomía y especializados responsables de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tratándose de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, se le faculta para legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales.¹

DIVERGENCIAS

I. Preservación de la información pública.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se establece que los sujetos obligados, deben	Se propone que los sujetos obligados	No contiene previsión al respecto.

¹ Al respecto, el régimen jurídico que deberá establecer la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta acorde con los lineamientos establecidos en cada iniciativa a nivel federal.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	deberán asegurar la correcta organización, control y consulta de los archivos, atendiendo a los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad. Se dispone que los sujetos obligados publiquen a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.	
---	--	--

II. Organización y subsistencia del Sistema Nacional de Archivos.

PRIPVEM	PAN	PRD
No contiene una previsión al respecto.	Se dispone que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, así como para determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.	No contiene previsión al respecto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

III. Sujetos competencia del órgano garante federal:

PRI-PVEM	PAN	PRD
Tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión.	Agrega además de los Poderes Federales, a los tribunales administrativos, agrarios y laborales, universidades e instituciones de educación superior y demás organismos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil y sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal	Agrega además de los Poderes Federales, a los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.

IV. Principios que rigen la actuación del órgano garante.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad y máxima publicidad	Agrega los de profesionalismo, celeridad y transparencia.	No indica principios.

V. Carácter de las resoluciones del órgano garante federal y posibilidad de impugnación.

PRI-PVEM	PAN	PRD
----------	-----	-----

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>Se dice que las resoluciones que dicte serán vinculatorias, definitivas e inatacables.</p> <p>Recursos: Excepcionalmente, el Consejero jurídico del Ejecutivo Federal, los Presidentes de la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, o los titulares de los órganos constitucionales autónomos, podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando exista una alta probabilidad de daño directo y trascendente a la seguridad nacional.</p>	<p>Se dice que las resoluciones que dicte serán definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, órgano, organismo, personas o sujetos obligados, federales o locales según corresponda.</p> <p>Recursos: Se propone que sólo los particulares puedan impugnar sus resoluciones mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales competentes.</p>	<p>Se dice que las resoluciones que dicte, serán definitivas e inatacables para la autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.</p> <p>Recursos: Solo podrán impugnar sus resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación, las personas que ejerzan su derecho de acceso a la información o de protección de datos personales.</p>
--	---	--

VI. Sistema de selección de los integrantes del órgano garante.

PRIPVEM	PAN	PRD
<p>Propone que sus integrantes sean nombrados por el Ejecutivo Federal, con la no objeción del Senado, o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hasta por dos ocasiones, pues en caso de que el Senado o la Comisión</p>	<p>Propone que sean designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en su caso, por la Comisión Permanente, a propuesta de los grupos parlamentarios con afiliación de partido en la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la</p>	<p>Se propone que sus integrantes sean electos por el voto de las dos terceras partes del total de los integrantes de la Cámara de Senadores.</p> <p>En su selección, debe favorecerse la equidad de género.</p>

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>Permanente objetaren la segunda propuesta del Ejecutivo, éste último haría la designación de manera directa.</p>	<p>sociedad, para recibir la opinión de organizaciones no gubernamentales, universidades, instituciones académicas, centro de investigación, barras y asociaciones de profesionistas, y en general del públicos, sobre las propuestas realizadas.</p> <p>Los aspirantes deben comparecer en audiencia o entrevista pública ante el órgano legislativo y acreditar experiencia y conocimientos en la materia, debiendo ser designados en sesión pública del órgano legislativo.</p> <p>Se indica que se debe procurar que exista equidad de género en la conformación del órgano garante.</p>	
---	--	--

VII. Tiempo de permanencia y remoción de los integrantes del órgano garante.

PRI-PVEM	PAN	PRD
<p>Se propone que permanezcan siete años, sin posibilidad de reelección.</p> <p>No se especifican causas de remoción.</p>	<p>Se propone que permanezcan en sus cargos nueve años, sin posibilidad de reelección.</p> <p>Se dice que solo podrán ser removidos de su encargo en términos del</p>	<p>Se propone que duren en sus cargos siete años sin posibilidad de reelección.</p> <p>Se dice que solo podrán ser removidos de su encargo en términos del Título Cuarto de la CPEUM.</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	Título Cuarto de la CPEUM.	
--	-------------------------------	--

VIII. Selección del Presidente y duración en el cargo.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Será electo por los propios comisionados, mediante voto secreto por un periodo de tres años, sin posibilidad de reelección.	Será electo por los propios comisionados mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual.	Será electo por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores, por un periodo de tres años y seis meses, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

IX. Incompatibilidad de los integrantes del órgano garante para desempeñar cargos o empleos remunerados.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No previene alguna incompatibilidad.	Se dice que los comisionados no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remuneradas.	Se dice que sus integrantes no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo cargos no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

X. Requisitos para ser integrante del órgano garante federal.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No indica requisitos.	Señala que para ser comisionado se requiere ser ciudadano mexicano	No indica requisitos.

2013
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones II, IV, V y VI del artículo 95 de la CPEUM. Deben contar con título profesional de licenciatura en general y tener conocimientos en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales o cualquier materia afín. No haber desempeñado un cargo de elección popular federal, estatal o municipal, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no haber sido dirigente de un comité directivo, ejecutivo o equivalente de un partido político a nivel nacional, estatal o municipal, ni ministro de ningún culto religioso, durante los últimos cinco años inmediatos a la fecha de su designación; no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en algún partido político, cuando menos cinco años antes de su designación, y demás requisitos que prevea la Ley Federal.</p>	
--	--	--



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

XI. Fuero constitucional de los integrantes del órgano garante.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se sugiere que para proceder penalmente en contra de los integrantes del órgano garante federal, sea requisito la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 de la CPEUM.	Se sugiere para proceder penalmente en contra de los integrantes del órgano garante federal, sea requisito la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 de la CPEUM. De igual modo, se señala que para proceder penalmente por delitos federales contra los integrantes de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatutos de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, será necesaria la declaración de procedencia prevista en el artículo 111 de la CPEUM, para el efecto de que tal determinación se comuniqué a las legislaturas locales, para que actúen como corresponda.	No contiene previsión al respecto.

XII. Rendición de informes por parte del presidente del órgano garante federal.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se dice que el presidente estará obligado a rendir un informe anual ante el	Se dice que el presidente deberá presentar anualmente a los	Se dice que el presidente deberá presentar un informe anual de actividades al



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Senado, en la fecha y términos que se dispongan en la ley.	Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto deberá comparecer ante el Congreso en los términos que disponga la ley.	Congreso de la Unión, debiendo comparecer ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
--	--	--

XIII. Facultades de revisión del órgano garante federal.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se propone dotarlo de facultades para que conozca de los recursos que interpongan los particulares respecto de las decisiones de los organismos especializados de los estados y el Distrito Federal, y para revisar cualquier otra resolución de esos organismos en los términos que se indiquen en la ley.	<p>Se dice que conocerá y resolverá de las impugnaciones que presenten los particulares en contra de las resoluciones de los organismos garantes de transparencia y acceso a la información pública de los estados y del Distrito Federal, siempre que la resolución que se impugne hubiera negado total o parcialmente el acceso a la información solicitada por el particular. Al respecto se indica que no será necesario que el particular agote este medio de defensa para acudir al juicio de amparo.</p> <p>También conocerá de los recursos de revisión interpuestos por violación al derecho de acceso a la información pública por</p>	Se sugiere que el consejo del órgano garante esté facultado para revisar el fondo de las resoluciones que emitan los órganos garantes de los estados y del Distrito Federal.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>parte de los poderes, órganos, organismos, entidades, personas o sujetos obligados. En estos casos, el órgano garante debe interpretar las disposiciones aplicables, sujetándose a lo previsto en el artículo 1 de la CPUEM.</p> <p>Se contempla que el órgano garante, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia lo ameriten, atendiendo lo dispuesto en la ley reglamentaria.</p>	
--	---	--

XIV. Excusas y recusaciones de los integrantes del órgano garante federal.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No se contiene disposición alguna al respecto.	Se prevé que en la Ley Federal respectiva, se contemplen los supuestos en los que los integrantes del órgano garante deban excusarse de conocer de algún asunto, así como el procedimiento por el que las partes puedan recusar a alguno de los comisionados.	No se contiene disposición alguna al respecto.

XV. Servicio profesional y consejo consultivo.

140-1

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No contiene previsión al respecto.	Se dice que el órgano garante tendrá un consejo consultivo. Se indica que el la ley federal se determinarán las reglas de organización y funcionamiento de los órganos del instituto y sus relaciones de mando, pero que en todo caso dispondrá del personal calificado necesario para prestar un servicio especializado en la materia. El servicio profesional será la base del funcionamiento del órgano garante.	No contiene previsión al respecto.

XVI. Presupuesto del órgano garante.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No contiene previsión al respecto.	Se dice que el órgano garante elaborará su propio presupuesto de egresos, el cual remitirá al Ejecutivo Federal, para que este lo envíe con oportunidad a la Cámara de Diputados para su estudio, discusión, y en su caso, aprobación. Este proyecto no podrá ser modificado por el Ejecutivo Federal.	No contiene previsión al respecto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

XVII. Relaciones del órgano garante con otros poderes y órganos.

PRI-PVEM	PAN	PRD
<p>Se señala que el órgano garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos, y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.</p> <p>Se contempla que toda autoridad y servidor públicos estará obligado a prestar ayuda al organismo garante y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.</p>	<p>Se dice que el órgano garante, en la esfera de su competencia, mantendrá con los gobiernos federal, estatal y municipal, y con los demás organismos públicos autónomos, una relación de respeto y de colaboración mutua para el desarrollo democrático de las funciones del Estado Federal. Para el desempeño de sus funciones, el órgano garante contará con el apoyo, auxilio y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales y de los organismos públicos autónomos.</p> <p>Se contempla que el órgano garante federal, podrá conformar con los organismos garantes de los estados y del Distrito Federal, instancias de cooperación, colaboración, promoción y difusión que estimen oportunos, para la debida promoción y protección del derecho a la información pública.</p>	<p>No contiene previsión al respecto.</p>

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	Se prevé además, que el órgano garante pueda celebrar convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas que tengan como objeto fortalecer la cultura de la transparencia, el ejercicio del derecho a la información pública y de protección de datos personales.	
--	---	--

DIVERGENCIAS EN TRANSITORIOS.

XIX. Permanencia en el cargo de los actuales comisionados del IFAI.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se dispone que los actuales comisionados del IFAI permanezcan en sus cargos hasta la conclusión de su mandato.	Se dispone que los actuales comisionados del IFAI permanezcan en sus cargos hasta la conclusión de su mandato.	Se dispone que la designación de los integrantes del órgano garante federal, deberán ser designados dentro de los sesenta días naturales a la entrada en vigor de la ley federal respectiva. Se indica que en ese proceso los comisionados en funciones del IFAI podrán participar en la convocatoria que se emita.

XX. Designación de los primeros integrantes del órgano garante federal.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se dispone que la designación de los dos nuevos comisionados del órgano garante, se haga	Se dispone que la designación de los dos nuevos comisionados del órgano garante, se haga	Se dispone que la designación de los consejeros integrantes del órgano garante se realice dentro de los 60 días naturales



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

a más tardar dentro de los 90 días después de la entrada en vigor del decreto.	a más tardar dentro de los 90 días después de la entrada en vigor del decreto.	siguientes a la entrada en vigor del decreto.
--	--	---

XXI. Expedición de las leyes necesarias respectivas.

PRI-PVEM	PAN	PRD
Se dispone que se realice en un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto.	<p>Se dispone que se realice en un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto.</p> <p>Se exceptúa de lo anterior, las adecuaciones a la Ley Federal en materia de acceso a la Información Pública y de protección de datos personales, la que deberá ser expedida por el Congreso de la Unión en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del decreto.</p> <p>Se ordena que las legislaturas de los Estados y la Asamblea legislativa del Distrito Federal, adecuen su marco normativo en un plazo de seis meses.</p>	<p>Se dispone que por cuanto hace a las leyes generales en materia de acceso a la información y protección de datos personales, se emitan dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del decreto.</p> <p>Las demás adecuaciones, se prevé que se realicen en un plazo no mayor a un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto.</p>

XXII. Creación del Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No contiene disposición	Se dispone que la	No contiene disposición al



407
 DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
 PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
 LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
 DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
 CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

al respecto.	<p>Federación cree el Fondo Federal de Aportaciones para la Transparencia (APORTA), a través del cual se transfieran recursos a los organismos garantes en los términos de las disposiciones aplicables.</p> <p>La determinación de los montos se distribuirá entre las entidades federativas atendiendo al número de habitantes, la participación de la sociedad y la extensión territorial.</p> <p>Estos recursos solo podrán aplicarse para actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como en la difusión y promoción del derecho de acceso a la información y la cultura de la transparencia y protección de datos personales.</p>	respecto.
--------------	--	-----------

XXIII. Creación de un fondo para asegurar la autonomía presupuestaria de los
 órganos garantes locales.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No se contiene previsión alguna al respecto.	Se indica que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los	No se contiene previsión alguna al respecto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para asegurar la autonomía presupuestal de los órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales respectivos.	
--	---	--

XXIV. Situación de los recursos humanos, financieros y materiales del IFAI.

PRI-PVEM	PAN	PRD
No contiene previsión al respecto.	Se dispone que a la entrada en vigor del decreto, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al IFAI como órgano descentralizado, se transfieran al organismo público autónomo. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de la CPEUM y de ninguna manera ser verán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.	No contiene previsión al respecto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

3.- TRABAJO EN COMISIONES

Reuniones con organizaciones o instituciones.

La comisión de Puntos Constitucionales, la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana y la Comisión de Gobernación, realizaron diversas reuniones en las que se invitó a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, académicos y diversas personas interesadas en manifestar sus opiniones y posturas respecto de la materia de transparencia y de la aprobación del nuevo esquema en materia de transparencia que se dictamina.

Derivado de lo anterior con fecha 30 de octubre de 2012, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción y Participación Ciudadana realizaron reunión en la que se invitó a los Comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, con la finalidad de conocer sus puntos de vista en torno a las iniciativas en materia de transparencia que se dictaminan, presentándose los siguientes comisionados:

Jacqueline Peschard Mariscal	(Comisionada Presidente)
Wanda Sigrid Arzt Colunga	(Comisionada)
Gerardo Laveaga Rendón	(Comisionado)
María Elena Pérez-Jaén Zermeño	(Comisionada)
Ángel J. Trinidad Zaldívar	(Comisionado)

Asimismo, con fecha 6 de noviembre de 2012, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación realizaron una reunión en la que se invitó a representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, con la finalidad de conocer sus puntos de vista en torno a las iniciativas en materia de transparencia que se dictaminan, presentándose las siguientes personas:

- Lilia Saúl, Coordinadora Nacional de México, Infórmate.
- Eugenio Monterrey, Presidente de COMAIP.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- Alejandro González Arreola, representante de Gestión y Cooperación Social, A.C.
- Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Article 19.
- Edna Jaime, representante de México Evalúa.
- Óscar Guerra Ford, Presidente de INFO DF.

Con fecha 27 de noviembre de 2012, en reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, a la que asistieron Consejeros del Instituto Federal Electoral, Académicos e Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

Por parte del Instituto Federal Electoral:

- Dr. Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral;
- Dra. María Marván Laborde, Consejera del Instituto Federal Electoral, Presidenta del Órgano Garante de Transparencia del IFE.
- Mtro. Alfredo Figueroa Fernández, Consejero del Instituto Federal Electoral.
- Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre, Consejero del Instituto Federal Electoral.

Por parte de los académicos e investigadores:

- Mtro. Enrique Carpizo, Subdirector de la Coordinación de Análisis Jurídico y Políticas Públicas de la oficina del Abogado General de la UNAM.
- Dr. Edgar Corzo Sosa, Investigador "A" de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Por parte de las organizaciones de la Sociedad Civil:



451

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- Lic. Miguel Ángel Pulido Jiménez, Director Ejecutivo de FUNDAR;
- Dr. Juan Pardinás, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC.
- Lic. Tomás Severino, Director de Cultura Ecológica.
- Lic. Paulina Gutiérrez, del CIESAS

Comentarios recibidos.

Por otra parte se recibieron diversos comentarios y/o sugerencias en materia de transparencia que buscan enriquecer a las 3 iniciativas, algunas de ellas convergen y otras divergen en sus contenidos, así podemos agrupar en diversos temas generales las ideas que presentaron en sus respectivos comentarios; cabe referir que en los comentarios que presentan, en su mayoría versan sobre las necesidades en materia de transparencia, estableciendo varias alternativas en un mismo tema, asimismo, en muchos casos no se presentaron propuestas concretas en temas específicos; en este sentido, se elaboró una matriz que cuenta con temas generales y relevantes de las propias iniciativas y que gráficamente muestran las propuestas o criterios que en dichos temas refieren las instituciones u organizaciones que enviaron sus comentarios.

Dentro de las organizaciones, instituciones e incluso senadores integrantes de las comisiones unidas, que enviaron comentarios, se recibieron las siguientes:

1.- Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública.

Recibido: 19/09/12

Elaborado: 30/08/12

2.- Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales del Distrito Federal.

Recibido: 16/10/12

Elaborado: 28/09/12

3.- Sen. María del Rocío Pineda Gochi.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Recibido: 17/10/12

Elaborado: 17/10/12

4.- Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Recibido: 17/10/12

Elaborado: 17/10/12

5.- IFAI y Universidad Obrera.

Recibido: 19/10/12

Elaborado: 16/10/12

6.- Conferencia Nacional de Gobernadores.

Recibido: 22/10/12

Elaborado: 24 al 28/09/12

7.- Sen. Laura Rojas Hernández (PAN).

Recibido: 22/10/12

Elaborado: 16/10/12

8.- SEGOB, Unidad de Asuntos Jurídicos.

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 17/10/12

9.- Secretaría de la Función Pública.

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 12/10/12

10.- Secretaría de Economía.

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 17/10/12

11.- Comisionada Presidente del IFAI, Jacqueline Peschard.

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 22/10/12

12.- Sen. David Penchyna Grub

Recibido: 30/10/12

Elaborado: 30/10/12

13.- SEGOB Consejería Jurídica

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 22/10/12

14.- Dr. Laynes SHCP

Recibido: 23/10/12

Elaborado: 22/10/12



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

15.- Centro de Estudios Espinoza Yglesias

Recibido: 08/11/12

Elaborado: 19/09/12

16.- Red por la Rendición de Cuentas

Recibido: 08/11/12

Elaborado: 01/03/12

17.- Dr. Edgar Corzo Sosa (ponencia UNAM)

Recibido: 27/11/12

Elaborado: 26/11/12

18.- Mtro. Enrique Carpizo Aguilar (ponencia UNAM)

Recibido: 27/11/12

Elaborado: 26/11/12

19.- Miguel Pulido Jiménez FUNDAR

Recibido: 27/11/12

Elaborado: 27/11/12

20.- Consejera Electoral María Marván Laborde (presentación IFE)

Recibido: 27/11/12

Elaborado: 26/11/12

21.- Consejero Electoral Francisco Guerrero Aguirre (ponencia IFE)

Recibido: 27/11/12

Elaborado: 26/11/12

A efecto de sistematizar las propuesta en concreto se presenta el siguiente cuadro, el cual, señala con una marca afirmativa aquellos conceptos en los que se coincide y con una marca negativa, aquellos conceptos que específicamente señalan como no coincidencia, como ya se mencionó, la mayoría de los comentarios presentados, muestran trabajos realizados en foros o reuniones que reflejan las tendencias que particularmente se ven reflejadas dependiendo del ámbito en el cual se generaron, de los trabajos recibidos podemos sistematizar en el siguiente cuadro las particularidades de cada uno de ellos.



DIC. AMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

**COMPARATIVO TEMÁTICO TRANSPARENCIA
COMENTARIOS, PROPUESTAS Y SUGERENCIAS RECIBIDOS**

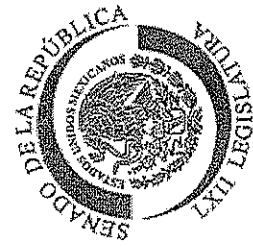
✓ Lo contiene expresamente
X Señala expresamente que no se comparte ese punto.
LR Ley Reglamentaria

Tema/Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDAR ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Agu.	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
Autonomía Constitucional al Federal	✓	✓	✓									✓			✓
Autonomía Constitucional a los Locales	✓	✓				✓									✓
Establecer principios rectores de los órganos	✓				✓	✓									✓
Aumento a 7 Comisionados	✓			✓											✓
Designación por el Ejecutivo con no objeción										✓					

² Opiniones recogidas del Primer Congreso Nacional Jurídico 9 y 10 de agosto 2012; Sesión Extraordinaria de Asamblea Nacional 31 de agosto 2012.

³ Documento realizado directamente por los Comisionados del INFO D.F., respecto de las 3 iniciativas presentadas, presentada en el 4º Feria de la Transparencia en el Zócalo de la Cd. México.

⁴ Se presentó trabajo de análisis a minutas (sic) presentadas al senado que suscriben las siguientes organizaciones: FUNDAR, México Informate, Artículo 19, Centro de Contraloría Social del CIESAS, El Colectivo por la Transparencia, Gestión Social y Cooperación GESOC, así como Cultura Ecológica. Asimismo, con fecha 27 de noviembre de 2012, el C. Miguel Pulido acudió a invitación del Senado a una plática en la que presentó información y posicionamientos adicionales, que se muestran en el cuadro.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS D. PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
 ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE
 ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
 TRANSPARENCIA.

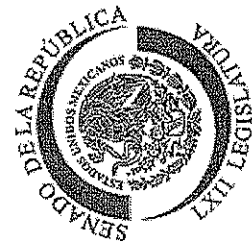
Tema / Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDAR ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Aguas	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
Designación por el Ejecutivo con ratificación	✓								✓			✓			✓
Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por temas				✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
Designación directa del Senado			✓												
Designación directa del Legislativo sin especificar	✓	✓													
Propuesta por Diputados y Senadores ratifica	✓														
Escalonamiento de Comisionados	✓														✓
Años de duración en el cargo	7														7
Designación del Presidente por los propios comisionados	✓														✓
Designación del Presidente por el órgano que los designa	✓									✓					
No reelección del Presidente	X														✓
Remoción y juicio pol. por el Mulo IV de la Const.	✓														✓
Solo propio Político		✓													
Declaratoria de Procedencia													X		
Incompatibilidad de los Comisionados para otros empleos, excepto docencia y	✓							✓							✓



DIAGNÓSTICO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema/Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDAR ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Aguascalientes	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
similares															
Incompatibilidad de los Comisionados si pertenecen a un partido político.	✓														
Perfil de Comisionados cualquier profesion	✓														
Perfil de Comisionados Abogados	X														
Equidad de género	✓	✓	✓			✓									✓
Servicio Profesional de Carrera	✓														
Presentación de un informe anual	✓														✓
Sujetos Obligados Partidos Políticos		✓	✓	✓	✓										✓
Sujetos Obligados Sindicatos		✓	5												
Sujetos Obligados Poder Judicial	✓														
Sujetos Obligados Poder Legislativo	✓			✓	✓										✓
Sujetos Obligados Organos Autonomos	✓			✓	✓	✓									✓
Sujetos Obligados Indirectos que manejen recursos pú.		✓	✓	✓	✓										✓

⁵ No existe consenso pues algunas redes y organizaciones consideran la inclusión de sindicatos y otra no.



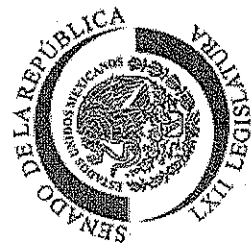
DISEÑO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema / Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDA ⁴	CONAGO Colima	CONAGO Tabasco	CONAGO Edo Mex.	CONAGO Querétaro	CONAGO Veracruz	CONAGO Aguas	CONAGO Chihuahua	CONAGO Hidalgo	CONAGO Zacatecas	CONAGO Durango	CONAGO Campeche	CONAGO
Sujetos Obligados personas físicas o morales que realicen actos de autoridad		✓	✓	✓	✓										✓
Fideicomisos y Fondos Públicos		✓	✓	✓											✓
Universidades autónomas, Tribunales aditivos, y otros federales			✓												
Excepción a la SCIN	✓	✓	X							✓					✓
Autonomía Presupuestal estableciendo piso financiero -federal-	✓														
Autonomía Presupuestal sin establecer piso financiero -federal-		✓		✓											✓
Autonomía Presupuestal estableciendo piso financiero -locales-	✓														
Autonomía Presupuestal sin establecer piso financiero -locales-															✓
Creación de un Fondo Federal de aportaciones	✓		✓												
Expedición de Ley General de Transparencia	✓		✓												✓
Ley General que contenga Transparencia, datos personales y/o archivos										✓		✓		✓	



DIAGRAMA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema/ Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDAR ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Aguascalientes	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
Expedición de Ley General de Datos Personales	✓	✓								X		X		X	
Expedición de Ley General de Archivos	✓		✓							X		X			
Modificar diversas leyes			✓												
Definitividad e inatacabilidad de resoluciones	✓		✓	✓					X						✓
Respetar el derecho al juicio de Amparo por parte de los particulares	✓	✓							✓			✓			✓
Segunda Instancia al organismo federal	✓		✓						X	X		X		X	✓
Facultad de atracción en todos casos que se solicite		✓													
Facultad de atracción en todos casos que se solicite, pero que decida el Instituto	✓														✓
Facultad de atracción en aquellos casos que lo solicite el propio instituto o el órgano local	✓					✓					✓				
Recursos que puedan interponer los sujetos obligados												✓			
Facultad de Acciones de Inconstitucionalidad Federal	✓	✓								✓		✓			✓



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
 ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE
 ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
 TRANSPARENCIA.

Tema / Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDA ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo. Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Aguas	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
Facultad de Controversias Constitucionales -Federal-	✓														
Facultad de Acciones de Inconstitucionalidad -Local-	X	✓								X					✓
Facultad de Controversias Constitucionales -Local-	✓														
Recurso extraordinario ante la SCJN por Ptes. de cámaras, órganos autónomos y Consejero Jco. Fed.			X	✓							X	✓			✓
Recurso extraordinario ante la SCJN no sea el Consejero Jco. sino el Procurador															
Recurso extraordinario ante la SCJN por otras autoridades							✓			✓		✓			✓
Coordinación de acciones con la ASF, Archivos e INEGI													LR		
Reserva de Información por seguridad nacional						✓						✓			
Reserva de Información por Estabilidad económica o financiera del País.												✓			
Ampliar las Reservas															



DIAGNÓSTICO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema / Proponente	COMAIP ²	INFO D.F. ³	FUNDAR ⁴	*CONAGO Colima	*CONAGO Tabasco	*CONAGO Edo Mex.	*CONAGO Querétaro	*CONAGO Veracruz	*CONAGO Ags.	*CONAGO Chihuahua	*CONAGO Hidalgo	*CONAGO Zacatecas	*CONAGO Durango	*CONAGO Campeche	*CONAGO
Prueba de interés Público (sobre información de particulares)	✓														
Prueba de Daño.	✓					✓									
Transparencia en Rec. Pub., levantando el secreto fiduciario, bancario y fiscal	✓														
Obligación de generar información	✓		✓												
Medidas de apremio	✓			✓											✓
Sancionar			✓	✓											✓
Sancionar en materia de responsabilidades directamente															
No Sancionar en materia de responsabilidades solo dar vista	✓					✓									
Datos personales a través del organismo garante -federal-															
Datos personales a través del organismo garante -local-									✓						
Datos personales lo debe ver otro organismo que se cree		✓	✓												



DIC1 /IEN DE LAS COMISIONES UNIDAS D PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA.

⁶ Propuesta de la Sen. Pineda Gochi.

⁷ Comunicado de prensa IFAI/144/12.

*

CONAGO. -Solo se muestran aquellos cambios sugeridos por los estados, sin embargo, los estados se pronunciaron solo sobre aquellas sugerencias o cambios, entendiéndose que aquellos temas en los que no haya referencia alguna, implica la coincidencia con la propuesta de reforma presentada en materia de transparencia, del grupo parlamentario del PRI-PVEM.

Igualmente la CONAGO, generó un cuadro general con los puntos coincidentes de algunos Estados y que son considerados como viables.

⁶ La Senadora Pineda Gochi, presentó propuesta de adición a 3 artículos Constitucionales 6°, 73 XXIX-R, y 115, con la finalidad de incluir a los Municipios.

⁷ Se recibió comunicado de prensa por correo electrónico, en el que el IFAI celebró con la Universidad Obrera convenio de colaboración para promover la cultura de transparencia, en la Presidencia del IFAI señaló la necesidad de transparentar la información de sindicatos.

* La CONAGO realizó acercamientos con diversos estados de la república a efecto de recabar sus opiniones respecto a la iniciativa en materia de transparencia, derivado de lo anterior, la CONAGO, presentó un cuadro comparativo con las propuestas que consideraron viables de incorporar o eliminar; sin embargo, para mayor objetividad, se presentan las propuestas de todos los estados que generaron algún cambio y el general que envía la CONAGO.

DIRECCION GENERAL DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACION Y DE ANTICORUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema/Proponente	Sen Laura Rojas ⁸	SEGOB ⁹	S. Función Pública ¹⁰	Sec. Economía ¹¹	Peschard ¹²	Sen. David Penchyna ¹³	Consejería Jurídica del Ejecutivo F ¹⁴	SHCP ¹⁵	CEEY ¹⁶	RRC ¹⁷	IFE ¹⁸	UNAM ¹⁹	UNAM ²⁰
Creación de un Fondo Federal de aportaciones	✓												
Expedición de Ley General de Transparencia	✓				✓							✓	✓
Ley General que contenga Transparencia, datos personales y/o archivos		✓	✓	✓						✓			
Expedición de Ley General de Datos Personales	✓												✓
Expedición de Ley General de Archivos	✓				✓								
Modificar diversas leyes												✓	
Definitividad e inatacabilidad de resoluciones	✓		✓		✓			✓	×		TEPJF	TEPJF	
Respetar el derecho al Juicio de Amparo por parte de los particulares	✓								✓			✓	
Segunda instancia al organismo federal	✓		×						×				
Facultad de atracción en todos casos que se solicite	×												
Facultad de atracción en todos casos que se solicite, pero que decida el Instituto					✓								
Facultad de atracción en aquellos casos que lo solicite el propio instituto o el órgano	✓												



DICIAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE
 ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE
 ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
 TRANSPARENCIA.

Tema / Proponente	Sen Laura Rojas ⁸	SEGOB ⁹	S. Función Pública ¹⁰	Sec. Economía ¹¹	Peschard ¹²	Sen. David Penchyna ¹³	Consejería Jurídica del Ejecutivo F ¹⁴	SHCP ¹⁵	CEEY ¹⁶	RRC ¹⁷	IFE ¹⁸	UNAM ¹⁹	UNAM ²⁰
Recursos que pueden interponer los sujetos obligados													
Facultad de Acciones de Inconstitucionalidad -Federal-	✓						X					✓	
Facultad de Controversias Constitucionales -Federal-													
Facultad de Acciones de Inconstitucionalidad -Local-	✓											✓	
Facultad de Controversias Constitucionales -Local-													
Recurso extraordinario ante la SCJN por Ptes. de cámaras, órganos autónomos y Consejero Jco. Fed.	X	✓			X		✓	✓				X	X
Recurso extraordinario ante la SCJN no sea el Consejero Jco. sino el Procurador			✓										
Recurso extraordinario ante la SCJN por otras autoridades													
Coordinación de acciones con la ASF, Archivos e INEGI	LR		X				X			✓			



DICOMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema/Proponente	Sen Laura Rojas ⁸	SEGOB ⁹	S. Función Pública ¹⁰	Sec. Economía ¹¹	Peschard ¹²	Sen. David Penchyna ¹³	Consejería Jurídica del Ejecutivo F ¹⁴	SHCP ¹⁵	CEEY ¹⁶	RRC ¹⁷	IFE ¹⁸	UNAM ¹⁹	UNAM ²⁰
Reserva de Información por seguridad nacional	X							✓					
Reserva de Información por Estabilidad económica o financiera del País	X							✓					
Ampliar las reservas			✓					✓					
Prueba de Interés Público (sobre información de particulares)													
Prueba de Daño													
Transparencia en Rec. Púb. levantando el secreto fiduciario, bancario y fiscal													
Obligación de generar información										✓			
Medidas de apremio			✓										
Sancionar					✓					✓			
Sancionar en materia de responsabilidades directamente													
No Sancionar en materia de responsabilidades solo dar vista					✓								
Datos personales a través del organismo garante Federal	✓	✓											✓



DICAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tema / Proponente	Datos personales a través del organismo garante									
	Local									
Sen Laura Rojas ⁸										
SEGOB ⁹										
S. Función Pública ¹⁰										
Sec. Economía ¹¹										
Peschar ¹²										
Sen. David Penchyna ¹³										
Consejería Jurídica del Ejecutivo F ¹⁴										
SHCP ¹⁵										
CEEY ¹⁶								✓		
RRC ¹⁷										
IFE ¹⁸										
UNAM ¹⁹										
UNAM ²⁰										

4.- Contenido de la Ley General.

De la aprobación de la presente reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, se hace necesario modificar el marco normativo que regula el acceso a la información pública, toda vez que, se presentan figuras nuevas y una autonomía constitucional que necesariamente deben contener disposiciones secundarias que le permitan llevar a cabo los procesos que se aprueban en éste dictamen de reforma constitucional; igualmente los artículos transitorio, ordenan al Congreso de la Unión, así como a los congresos locales a emitir la normatividad que permita implementar el sistema de transparencia bajo los criterios constitucionales que se aprueban; asimismo, es indispensable contar con una ley general de archivos que permita homogenizar en todas las dependencias y en los tres niveles de gobierno la forma de generar, conservar y procesar los archivos con que cuenten, ello permitirá a la ciudadanía acceder de forma íntegra y ordenada a la información requerida en ejercicio de su derecho de acceso a la información; entre ello podemos referir a los siguientes aspectos:

Ley General Reglamentaria del Artículo 6° Constitucional.

1. **Disposiciones Generales**, que permitan definir de manera clara a los sujetos obligados, ámbitos de aplicación de la ley, autoridades federales y locales, documentos e información pública, definición de información reservada, autoridades locales, entre otros.
2. **Principios de preservación de la información**, es necesario incorporar los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad de la información, a efecto de desarrollar el concepto y alcance de cada uno de ellos, con la finalidad de establecer las directrices que se deben verificar en torno a la información generada.
3. **Sujetos obligados**, señalando en forma exhaustiva y detallada los entes, organismos, entidades de interés público y privado,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

sindicatos y todos aquellos sujetos obligados directos en materia de transparencia, acorde a la definición establecida en la fracción I del artículo 6º constitucional.

4. **En el caso de partidos políticos**, la Ley General, debe establecer la mecánica de acceso a la información pública, la cual deberá contener y describir las facultades de los órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos políticos, a partir de lo cual las facultades en materia de transparencia de los partidos políticos conferidas actualmente al Instituto Federal Electoral pasarían a la competencia del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como el resto de los sujetos obligados, con el propósito de estandarizar los procedimientos, plazos, formatos y demás requisitos para facilitar a los ciudadanos el acceso a la información pública de los partidos políticos como entidades de interés público. Por tanto, el IFE ya no sería órgano garante en materia de transparencia, y al contrario, tendrá la obligación de atender las solicitudes que se planteen como sujeto obligado, al igual que el resto de los otros sujetos obligados; cabe aclarar que esto no implica una renuncia a las facultades de fiscalización de los partidos, pues éstas continúan en el IFE pero sobre este ámbito cabe precisar el ámbito de actuación de cada autoridad: los partidos son sujetos obligados para divulgar la información que el IFE les haya determinado en materia de fiscalización; por su parte, el IFE es sujeto obligado para divulgar la información que los partidos le remitan sobre el particular y también sobre los resultados y hallazgos de la revisión, auditoría y confronta de dicha información.

En la ley general se deberán atender diversas particularidades normadas actualmente en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información



454
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Pública, en lo conducente y en lo aplicable a los partidos políticos; así como los asuntos de competencia del comité de acceso a la información nacional y las competencias de los comités de acceso a la información locales, es decir estatales, del Distrito Federal o municipales, así como también generar una homogenización en la legislación local; en consecuencia, la normativa transitoria de la Ley General deberá establecer que se trasladarán a la Ley General las disposiciones vigentes del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información; en la parte relativa y aplicable del acceso a la información y transparencia de los partidos políticos.

Asimismo, como parte de las acciones de armonización para el ejercicio de las nuevas atribuciones en materia de transparencia de los partidos políticos, conferidas al IFAI, se deberán realizar las reformas y adiciones correspondientes al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para dar coherencia al sistema legal y normativo aplicable a los partidos políticos en materia de acceso a la información y transparencia.

De igual manera, en la Ley General se deberán establecer claramente las obligaciones en materia de transparencia, procedimientos, plazos para la atención y resolución de las solicitudes, entre otras de los tres poderes del estado y los tres órdenes de gobierno, como el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en el ámbito federal, estatal o del Distrito Federal y municipal.

5. **Establecimiento de criterios mínimos que deben observar los sujetos obligados y que sea necesario transparentar**, como la obtención, uso y destino de los recursos públicos, así como su aplicación específica y las constancias que acrediten el fin último de los mismos.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

6. **Competencia de los órganos garantes federal y locales o del Distrito Federal y municipales o delegacionales**, integración y funcionamiento, así como coordinación y desgloses respectivos.
7. **Procedimiento para establecer la obligatoriedad de los criterios del órgano garante federal por parte de los órganos garantes locales o del Distrito Federal y municipales o delegacionales**, con el propósito de facultar al órgano garante federal, respecto al procedimiento que deberá seguir para establecer la obligatoriedad de los criterios adoptados, a fin de que los órganos garantes locales apliquen los criterios obligatorios en materia de transparencia y con ello, avanzar en la homologación de criterios de resolución de casos similares en todo en territorio nacional en beneficio de la cultura de la transparencia.
8. **Integración y mecánica de nombramientos de los integrantes de órganos garantes federal, locales o del Distrito Federal, Municipales o delegacionales**, con el propósito de armonizar las disposiciones contenidas en las legislaciones locales a fin de garantizar los estándares mínimos de independencia, profesionalismo, especialización, entre otros, que permitan a los organismos garantes de los tres niveles de gobierno, cumplir el mandato constitucional y legal para el ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en todo el país.
9. **Requisitos y perfiles de los integrantes de los órganos, federal, locales o del Distrito Federal, Municipales o delegacionales**, incluyendo incompatibilidad de empleos.
10. **Mecanismo y procedimiento de nombramiento de los integrantes de los organismos garantes, elección y periodo de duración de la presidencia del órgano garante**, así como los casos de renuncia, suplencia, entre otros.

11. **Determinar los formatos de solicitudes, procedimientos y plazos en los que se debe tramitar las solicitudes de acceso a la información,** con el propósito de estandarizar los procedimientos y plazos para el ejercicio del derecho de acceso a la información que llevan a cabo los sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno, entes y órganos autónomos constitucionales, a fin de homologar los criterios de acceso a la información para la vigencia del derecho fundamental de los ciudadanos.
12. **Información reservada o confidencial,** en la que se establezca aquella información que por sus características particulares no puede ser divulgada, como expedientes administrativos, procesos de fiscalización en trámite, juicios en proceso, averiguaciones previas, información clasificada por tener algún impacto en la seguridad nacional o en la estabilidad económica; debiendo considerar el procedimiento de prueba de daño y prueba de interés público que se tengan que acreditar respecto de aquellas personas particulares que como sujetos obligados sea necesaria la entrega de información.

En éste apartado se debe desarrollar plenamente los conceptos de interés público, seguridad nacional y dignidad humana, que son las causas por las cuales se determinará la reserva y clasificación de la información, por ello el legislador debe acotar lo más posible estos aspectos a efecto de no dejar a la interpretación subjetiva de los sujetos obligados o del organismo garante, la aplicación de los conceptos referidos, por ello en la ley general se debe introducir un capítulo especial que atienda éstas particularidades y que limite el uso sólo a aquellos casos que evidentemente generen un menoscabo a los bienes jurídicos protegidos por la constitución.

A fin de acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir de parte de los entes obligados y al mismo tiempo garantizar el



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

debido cuidado de aquella información sensible que distintas disposiciones jurídicas protegen, en la Ley General que expida el Congreso de la Unión se normarán todas las reservas a la información en un título especial a efecto de que toda la información pública no sujeta a ellas se sujete al principio de máxima publicidad. En particular, dichas reservas son las que se refieren a:

- Secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal.
- Información relativa a la seguridad pública y nacional.
- Información sobre expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación y deliberativos que no hayan concluido, de manera enunciativa más no limitativa, en materia administrativa, fiscal, penal, civil, fiscalización, jurisdiccional, mercantil, electoral, familiar, jurisdiccional, parlamentaria, etc.
- Información que puede afectar la estabilidad económica y financiera nacional y regional.
- Información sobre estrategias y planes electorales.
- Padrones de afiliados, asociados o beneficiarios (sólo en los términos y criterios aplicables).
- Infraestructura y estrategias militares y navales.

Igualmente se actualizará una causa de interés público, sustentada en el interés económico de los sujetos legitimados para promover la controversia constitucional, cuando existan actos o normas de carácter general, que vulneren las disposiciones constitucionales relativas a la estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, o los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en beneficio de todos sus gobernados.



1135
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

13. **Obligatoriedad de los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno de documentar la gestión pública para el ejercicio de sus atribuciones y facultades, como principio generador de información**, es decir, se establecerá la obligación de que los servidores públicos y todos los sujetos obligados deban documentar la información relativa al ejercicio de sus atribuciones y facultades conferidas en las leyes respectivas, con el propósito de desarrollar uno de los principios básicos para garantizar el cumplimiento efectivo del ejercicio del derecho a la información, que es la generación, creación o documentación relativa al ejercicio de atribuciones y facultades de los sujetos obligados, a fin de contrarrestar las tendencias o acotar los casos para declarar la inexistencia de la información, en perjuicio del derecho fundamental del ciudadano para acceder a la información.
14. **Regulación de existencia e inexistencia de información**, así como los procedimientos que sancionen la declaratoria de inexistencia de manera falsa.
15. **Creación de los comités por dependencias federales y locales**, así como las bases generales de su actuación.
16. **Coordinación y auxilio de autoridades**, incluidas la Auditoría Superior de la Federación, INEGI y archivos, estableciendo las facultades de conformación de convenios o bases de colaboración entre dichos órganos.
17. **Homologar los formatos de solicitud, procedimientos y plazos de acceso a la información ante los organismos garantes de todos los sujetos obligados**, así como los recursos que se pueden generar derivado de las resoluciones.
18. **Procedimiento de segunda instancia, mediante el Recurso de revisión ante el Órgano Garante Federal**, respecto de las resoluciones que emitan los organismos garantes locales, en el



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

cual se deben establecer plazos, notificaciones, requerimientos y resolución.

19. **Supuestos para la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción del órgano garante federal respecto a los asuntos competencia de los organismos garantes locales o del Distrito Federal, Municipales o delegacionales**, en el cual el órgano garante federal tenga facultades para atraer los asuntos ventilados en primera instancia ante los órganos locales, en el que se determinen las hipótesis de procedencia, plazos, procedimientos, remisión de constancias y resoluciones, entre otros.

Las hipótesis para la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción que se deberán establecer en la Ley General, a juicio del órgano garante, serán los siguientes:

- a) En caso de interés general;
- b) En caso de asuntos relevantes;
- c) En asuntos donde exista una contradicción de criterios.

20. **Procedimiento, legitimación y personería de los organismos garantes federal y locales o del Distrito Federal, en casos de acciones de inconstitucionalidad en las que se controvierta una norma federal o local**, que impacte en materia de transparencia, tanto para el órgano federal, como para los órganos locales en tratándose de leyes aprobadas por sus legislaturas locales.

21. **Facultad de los organismos garantes para emitir recomendaciones**, en espejo a la facultad prevista en el artículo 102, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los organismos de protección de los derechos humanos, se propone facultar a los organismos garantes en materia de transparencia, para formular recomendaciones, no

vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, así como la obligación de todo servidor público para responder las recomendaciones emitidas, ya sea que no se acepten o bien, si serán cumplidas por las autoridades o servidores públicos, considerando que para el último supuesto éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Lo anterior, tiene como propósito fortalecer las resoluciones de los órganos garantes en materia de transparencia, federal y locales, en armonía con la facultad conferida a los organismos defensores de derechos humanos, que en la práctica han sido efectivas para el ejercicio de las atribuciones de dichos organismos y las Dictaminadoras han considerado necesario como elemento encaminado a fortalecer las resoluciones en materia de transparencia.

22. **Juicio político y declaratoria de procedencia**, igualmente se deben establecer las obligaciones en materia de responsabilidades de los comisionados del órgano garante, a efecto de poder ser sancionados por sus conductas o excesos en sus determinaciones; igualmente en caso de la comisión de delitos procedería la declaratoria de procedencia en los términos constitucionales.
23. **Datos personales en posesión de autoridades**, en materia de datos personales, deberá establecerse un apartado especial que considere el tratamiento de datos personales en posesión de autoridades, en el cual se establezcan los parámetros bajo los cuales se debe proteger este derecho y las versiones públicas que los contengan.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Se deberá establecer en la ley general que tratándose de información que se encuentre en posesión de autoridades, pero que corresponda a información proporcionada por particulares, como por ejemplo: los datos personales en posesión de autoridades contenidos en expedientes médicos, o cualquier otro dato personal en posesión de cualquiera de los sujetos obligados, deben prever el otorgamiento de la información, protegiendo aquella que se considere puede generar un menoscabo en la esfera jurídica del particular.

24. **Disposiciones en materia de transparencia de los partidos políticos**, se trasladarán a la Ley General como facultades del IFAI, las obligaciones de transparencia conferidas en el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la parte conducente y aplicable a los partidos políticos y en las disposiciones transitorias se establecerá el régimen de coordinación entre estos dos organismos autónomos constitucionales para evitar la invasión de esferas competenciales y evitar la tensión institucional que pudiera presentarse entre dos organismos de las misma naturaleza jurídica constitucional.

25. **Plazos y términos del informe anual que debe rendir el Consejo ante el Senado de la República**, así como el contenido mínimo genérico que debe contener.

Ley General de Archivos.

1. Disposiciones generales que permitan establecer el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, las definiciones de documentación y archivos, las disposiciones relacionadas a la organización y conservación de los archivos en posesión de los tres poderes y los tres ámbitos de gobierno, así como de los organismos constitucionales autónomos.

2. Establecer los mecanismos de coordinación y de concertación entre los obligados en la materia de archivos con la finalidad de conservación, resguardo, difusión y acceso de archivos que generen las dependencias.
3. Normar criterios uniformes que permitan sistematizar la información de los archivos, estableciendo los métodos y técnicas para su localización y consulta.
4. Organizar y clasificar los diversos tipos de archivos que generen las dependencias y organismos obligados con la finalidad de contar con un catálogo uniforme que permita una adecuada consulta y organización homogénea en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes del estado.
5. Determinar los criterios y procedimientos relacionados con la consulta de archivos, garantizando la disponibilidad, integridad de los archivos.
6. Establecer los instrumentos de control archivístico, así como el cuadro general de clasificación y catálogos de disposiciones documentales e inventarios generales de archivos.
7. Lineamientos específicos para clasificación de documentación como confidencial.
8. Creación de órganos de control y comités generales que normen reglamentariamente sus determinaciones respecto a criterios archivísticos en los tres niveles de gobierno.
9. Medidas de apremio y sanciones que en su caso procedan.

5.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

De la revisión realizada por las Comisiones Dictaminadoras para el estudio y dictamen de las tres iniciativas que se describen en el presente, las Comisiones Unidas acordaron por unanimidad identificar qué temas de los que están contenidos en las diferentes iniciativas son materia de reforma constitucional, y cuáles temas corresponden más bien a la iniciativa que en su oportunidad se presente para la expedición de la Ley General en materia de transparencia o de algún otro ordenamiento legal secundario.

Lo anterior, con el propósito de que la reforma constitucional que hoy se dictamina en materia de transparencia establezca el fundamento constitucional o bases para la regulación, dentro del plazo establecido en los transitorios, por parte del legislador ordinario, tanto federal como de las entidades federativas y del Distrito Federal, de los temas que, en su oportunidad, deberán ser materia de análisis y discusión para su inclusión en los ordenamientos jurídicos secundarios.

Asimismo, del análisis detallado y pormenorizado realizado por las Comisiones Unidas a las tres iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios en materia de transparencia y acceso a la información que se describen en los apartados que anteceden del presente dictamen, encontramos que existe coincidencia plena sobre los siguientes temas:

- 1) **Autonomía del órgano garante federal:** Se propone que el órgano garante cuente con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios.
- 2) **Número de integrantes del órgano garante federal:** Se propone que se integre por 7 miembros.
- 3) **Renovación escalonada:** Coinciden en que la renovación de los integrantes del órgano garante se realice de forma escalonada.
- 4) **Legitimación para promover acción de inconstitucionalidad:** Se otorga al órgano garante federal, facultad para promover acciones de



4774

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

- 5) **Sujeto excluido de la competencia del órgano garante:** Se propone que se encuentre excluida de la competencia del órgano garante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- 6) **Responsabilidad política de los integrantes del órgano garante:** Se establece que los miembros del órgano garante puedan ser sujetos de juicio político.
- 7) **Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos autónomos:** Se propone establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que se sustanciarán ante los organismos autónomos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
- 8) **Facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia:** Se propone que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una ley general en materia de acceso a la información y protección de datos personales, permitiendo por ende, la subsistencia de ley federal respectiva.
- 9) **Existencia de órganos garantes en los Estados y el Distrito Federal:** Se propone que en las constituciones de los Estados se establezcan organismos dotados de autonomía y especializados responsables de garantizar el acceso a la información y la protección



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Tratándose de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, se le faculta para legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales.

Por otro lado, las Dictaminadoras identificaron dos temas que requieren un estudio más profundo para poder lograr un consenso entre todos los Grupos Parlamentarios representados en las Comisiones Unidas, a saber:

- 1) Sujetos obligados.
- 2) Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante.

1. Sujetos Obligados.

Respecto al primer tema (Sujetos obligados), contenido en el artículo 6º, fracción I de la CPEUM, cada una de las iniciativas en estudio propone:

Texto vigente	Propuesta PRD	PRI/ PVEM	PAN
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.	I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés	De conformidad al texto vigente.	I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y

4176

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p>	<p>ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.</p> <p>El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que desplieguen.</p>
--	---	---

En consecuencia, la actual definición de sujetos obligados contenida en la fracción I del artículo 6º de la CPEUM, establece como sujetos obligados,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de forma genérica a las autoridades, entidades, órganos y organismos federales, estatales y municipales.

Al respecto, el Partido de la Revolución Democrática propone ampliar la actual definición de sujetos obligados a:

"I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad".

Los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, están conformes con la definición actual de sujetos obligados contenida en la fracción I del artículo 6º de la CPEUM, por lo que no proponen modificación alguna.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, propone ampliar la definición de sujetos obligados contenida en el texto vigente, para quedar como sigue:

"I. Toda la información en posesión cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, tribunales administrativos, agrarios y laborales; universidades e instituciones de educación superior y demás órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral, organización de la sociedad civil, sindicato o cualquier otra que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, es pública y sólo

1198

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

podrá reservarse temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

El acceso a la información pública de aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberá hacerse a través de la autoridad, ente, órgano u organismo público a que se hubieren entregado los montos respectivos o que sea el responsable de supervisar la actuación de esos particulares, pero en todo caso, éstos estarán obligados a proporcionar a aquellos la información relativa al uso, destino o actividades que realicen con dichos recursos o sobre las acciones de autoridad que despliegan”.

Con el propósito de contar con mayores elementos que permitan tomar las decisiones correspondientes, en el tema objeto de estudio, las Dictaminadoras realizaron un estudio comparativo de las legislaciones locales de las entidades federativas y el Distrito Federal, encontrándose lo siguiente:

a) Cuadro comparativo de sujetos obligados en las legislaciones locales y del Distrito Federal.²²

Entidad	Poder Ejecutivo	Poder Judicial	Poder Legislativo	Organismos autónomos	Ayuntamientos	Instancias o personas que manejen recursos públicos
Aguascalientes	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Baja California	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Baja California Sur	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Campeche	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Chiapas	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Chihuahua	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Coahuila	SI	SI	SI	SI	SI	NO (Sólo Universidades públicas)
Colima	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Distrito Federal	SI	SI	SI	SI	NA	SI
Durango	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Guanajuato	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Guerrero	SI	SI	SI	SI	SI	SI

²² Información obtenida de la legislación sustantiva de cada entidad federativa.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Entidad	Poder Ejecutivo	Poder Judicial	Poder Legislativo	Organismos autónomos	Ayuntamientos	Instancias o personas que manejen recursos públicos
Hidalgo	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Jalisco	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Estado de México	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Michoacán	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Morelos	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nayarit	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Nuevo León	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Oaxaca	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Puebla	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Querétaro	SI	SI	SI	SI	SI	NO (Sólo Universidad Autónoma)
Quintana Roo	SI	SI	SI	SI	SI	NO
San Luis Potosí	SI	SI	SI	SI	SI	SI (Inclusive recursos internacionales)
Sinaloa	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Sonora	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tabasco	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tamaulipas	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Tlaxcala	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Veracruz	SI	SI	SI	SI	SI	NO (Sólo OCS y Agrupaciones y asociaciones políticas)
Yucatán	SI	SI	SI	SI	SI	NO
Zacatecas	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Del cuadro anterior, se obtienen las siguientes conclusiones:

- 1) En las treinta y dos entidades federativas (32), se considera como sujetos obligados a: poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos.
- 2) En treinta y un entidades federativas (31), los Ayuntamientos son sujetos obligados, excepto en el Distrito Federal, por organización administrativa.
- 3) En veintitrés (23) entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, son sujetos obligados las instancias o personas que manejan recursos públicos.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- 4) Sólo en nueve (9) entidades federativas: Chiapas, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, no son sujetos obligados las instancias o personas que manejan recursos públicos.

b) Respecto a la propuesta de incluir a los partidos políticos como sujetos obligados directos, contenida en las iniciativas del PRD y PAN, respectivamente, encontramos que:

Entidad Federativa	Consideración de partidos políticos como sujetos obligados
Aguascalientes	Si
Baja California	Si (A través del Instituto Electoral)
Baja California Sur	Si (A través del Instituto Electoral)
Campeche	Si (A través del Instituto Electoral)
Chiapas	No
Chihuahua	Si
Coahuila	Si
Colima	Si
Distrito Federal	Si
Durango	Si
Guanajuato	Si (A través del Instituto Electoral)
Guerrero	Si (A través del Instituto Electoral)
Hidalgo	Si
Jalisco	Si
Estado de México	Si (A través del Instituto Electoral)
Michoacán	Si
Morelos	Si
Nayarit	Si (A través del Instituto Electoral)
Nuevo León	Si (A través del Instituto Electoral)
Oaxaca	Si (A través del Instituto Electoral)
Puebla	Si
Querétaro	Si
Quintana Roo	Si (A través del Instituto Electoral)
San Luís Potosí	Si
Sinaloa	Si
Sonora	Si
Tabasco	Si
Tamaulipas	Si (Indirectamente por ejercer recursos públicos)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Tlaxcala	Si
Veracruz	Si
Yucatán	Si (A través del Instituto Electoral)
Zacatecas	Si

Del anterior cuadro, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- 1) Actualmente a nivel federal, los partidos políticos nacionales son sujetos obligados indirectos en materia de transparencia, a través del Instituto Federal Electoral, es decir:
 - Responden a solicitudes de información vía IFE.
 - Están obligados a difundir información, sin que medie solicitud de información, en diversas materias tales como: documentos básicos y normatividad interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para la elección de dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos en los estados y sus informes ordinarios y de campaña, entre otros.
- 2) En dieciocho (18) entidades federativas las legislaciones, excepto en el Estado de Chiapas, la legislaciones locales considera a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de transparencia y acceso a la información.
- 3) En trece (13) entidades federativas consideran sujetos obligados indirectos a los partidos políticos, conforme a la legislación federal, son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

c) Derecho comparado

<i>País</i>	<i>Sujetos obligados</i>
El Salvador ²³	<ul style="list-style-type: none">• Todos los órganos del Estado y sus dependencias.

²³ Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador.

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

País	Sujetos obligados
	<ul style="list-style-type: none"> • Instituciones autónomas. • Municipalidades. • Personas, entidades u organismos que administren recursos o bienes del estado, o ejecute actos de la administración pública en general. (Los recursos también pueden ser de procedencia internacional). • Sociedades de economía mixta. • Servidores públicos dentro y fuera del territorio nacional y las personas que laboren en el gobierno y demás entidades públicas.
Honduras ²⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Poder Legislativo. • Poder Ejecutivo. • Poder Judicial. • Instituciones autónomas. • Municipalidades. • Órganos e instituciones del Estado. • Organizaciones No Gubernamentales. • Organizaciones Privadas de Desarrollo. • Cualquier persona física o moral que reciba o administre recursos públicos nacionales e internacionales.
Chile ²⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerios. • Intendencias. • Gobernaciones. • Gobiernos regionales. • Municipalidades. • Fuerzas armadas, de orden y seguridad pública. • Órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. • Contraloría General de la República. • Banco Central. • Empresas públicas creadas por ley. • Empresas del Estado y sociedades donde tenga participación accionaria superior al 50%, y mayoría en el directorio. • Autoridades y funcionarios de la administración pública.

²⁴ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Honduras.

²⁵ Ley Núm. 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública de Chile.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<i>País</i>	<i>Sujetos obligados</i>
Canadá ²⁶	<ul style="list-style-type: none"> • Todas las instituciones del Gobierno Federal. • Dependencias y Ministerios del Estado.
Estados Unidos de América ²⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier departamento del Ejecutivo. • Departamento Militar. • Corporaciones del gobierno. • Corporaciones controladas por el gobierno. • Cualquier institución del Ejecutivo. • Cualquier agencia reguladora independiente. <p>(Nota: No incluye la rama legislativa ni judicial, ni al Consejo de Seguridad Nacional, ni el Consejo de la Casa Blanca, ni cuerpos privados que manejan recursos públicos).</p>

2. Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante.

De la revisión a las leyes locales de las entidades federativas, respecto al mecanismo de nombramiento de los integrantes de los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información, se obtuvo que:

<i>Entidad</i>	<i>Disposición legal que lo contempla</i>	<i>Nombre del cargo y número de integrantes</i>	<i>Intervención del Ejecutivo</i>	<i>Tipo de intervención del Congreso</i>	<i>Poder que emite la convocatoria</i>	<i>Votación requerida</i>	<i>Procedimiento extraordinario</i>
Ags.	Ley	3 Comisionados	No	Elegidos por el Congreso previa convocatoria	Congreso	Mayoría calificada	NA
BC	Constitución	3 Consejeros	Si Envía lista de candidatos	Aprobación de propuesta del Ejecutivo	Ejecutivo	Mayoría calificada	Si se rechaza a primera propuesta, se envía una nueva, si vuelve a ser rechazada se tiene por elegidos a los primeros integrantes de la lista. Tienen 10 días naturales para resolver.

²⁶ Documento publicado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública en 2004, disponible en:

<http://www.redta.org/ Acceso%20a%20la%20Informacin/M%C3%A9xico-Cuadro%20comparativo%20de%20las%20Leyes%20de%20Acceso%20a%20la%20Informaci%C3%B3n%20en%20Canad%C3%A1,%20Estados%20Unidos%20y%20M%C3%A9xico.pdf>

²⁷ Ídem

504

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
BCS	Ley	3 Consejeros	No	Cada fracción parlamentaria propone hasta 2 candidatos. Se somete a pleno para ser votado.	NA	Mayoría simple	La votación se lleva a cabo con cédula secreta hasta cubrir las vacantes. Si no se alcanza la votación requerida el Presidente de la Mesa Directiva lleva a cabo la insaculación.
Camp.	Ley	3 Consejeros	No	Los grupos parlamentarios presentan 3 propuestas cada uno, lo cual se somete a comisiones para el análisis y selección. Las comisiones proponen al pleno la propuesta final.	NA	2/3 partes del Congreso	Si no se logra la votación, se lleva a cabo una segunda propuesta en los siguientes 20 días hábiles. Si no se logra la votación, se deberán elegir con mayoría simple.
Chis.	Ley	5 consejeros	Si, Gobernador presenta propuesta al Congreso	El Congreso debe ratificar la propuesta del Ejecutivo en los siguientes 15 días naturales, en su defecto se tiene por aprobada.	NA	Mayoría calificada	NA
Chih.	Constitución	5 Consejeros	No	La Junta de Coordinación Parlamentaria presenta la propuesta al Pleno del Congreso	NA	2/3 partes de los miembros presentes del Congreso	NA
Coah.	Constitución Ley	5 Consejeros	No	Designan a los Consejeros a partir de la propuesta del Consejo General del Instituto en la materia, previo análisis y	Consejo General del Instituto en la materia.	2/3 partes del Congreso	Los aspirantes son sometidos a un examen práctico y teórico elaborado, aplicado y calificado por la Universidad Pública estatal. En caso de no ser aprobado en la

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
				selección en comisiones.			primera votación, las comisiones presentan una segunda lista.
Col.	Ley	3 Comisionados	Si, Gobernador presenta propuesta al Congreso, previa audiencia a la sociedad en general.	El Congreso debe resolver sobre la aprobación en 30 días.	Consulta pública por parte del Ejecutivo del Estado.	Mayoría calificada	Si no se aprueba la primera propuesta, se envía una segunda.
DF	Ley	5 Comisionados	No	Previa convocatoria, las comisiones presentan propuesta al Pleno de la Asamblea Legislativa para que elija a los Comisionados.	La convocatoria es emitida por la Asamblea Legislativa 60 días antes de que concluya el encargo del o los Comisionados de que se trate.	2/3 de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.	NA
Dgo.	Ley	3 comisionados	Si, Gobernador presenta propuesta al Congreso 40 días antes de que exista la vacante.	El Congreso debe ratificar la propuesta del Ejecutivo en los 10 días siguientes en que se reciba.	NA	Mayoría calificada	Si no se aprueba, dentro de los 10 días siguientes el Gobernador envía una nueva propuesta para ser aprobada por la mayoría absoluta, si no se aprueba, se llevará a cabo votación secreta para obtener la aprobación de la mitad más uno. Si no se aprueba, el Gobernador designará a los comisionados dentro de los 10 días siguientes.
Gto.	Ley	3 Consejeros	Si, El Ejecutivo presenta propuesta al Congreso de	Aprueba la propuesta del ejecutivo.	Consulta previa por parte del Ejecutivo del Estado	2/3 de los miembros del Congreso	Si no se aprueba en la primera propuesta, se presenta una nueva.

506

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
			la Unión				
Gro.	Ley	3 Consejeros	No	Previa convocatoria, la comisión competente presenta una propuesta de candidatos al Pleno del Congreso.	Convocatoria al Público en General emitida por el Congreso Estatal	2/3 de los miembros del Congreso	
Hgo.	Ley	5 Consejeros	Si, Ejecutivo presenta propuesta al Congreso	El congreso debe aprobar la propuesta del Ejecutivo	Consulta previa por parte del Ejecutivo Estatal	NA	El Congreso tiene 10 días para resolver, y en su defecto, llevará el nombramiento directamente el Ejecutivo hasta en tanto no los elija el Congreso.
Jal.	Constitución Ley	3 Consejeros	No	Congreso aprueba tras la propuesta de las comisiones competentes, previa convocatoria.	Convocatoria emitida por el Congreso del Estado	2/3 del Congreso del Estado	Los candidatos son sometidos a un examen aplicado, elaborado y calificado por 5 instituciones de educación superior del Estado o especialistas en la materia. Si no se logra la votación de la primera propuesta se somete una segunda, y se puede tener hasta una tercera votación. Si después de 3 intentos no se logra la votación requerida, se elegirán por insaculación.
Edo. Mex.	Ley	5 Comisionados	Si, Propone a la Legislatura	La Legislatura deberá aprobar la propuesta del Ejecutivo	NA	NA	NA
Mich.	Constitución	3 Consejeros	No	Comisiones proponen una terna de	Congreso estatal emite convocatoria	2/3 de los miembros presentes.	



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
				candidatos al Pleno del Congreso, previa convocatoria pública.	pública		
Mor.	Ley	3 Consejeros	No	Previa convocatoria, el Congreso debe elegir de entre los aspirantes a los Consejeros.	Convocatoria emitida por el Congreso local.	Mayoría calificada.	NA
Nay.	Ley	5 Consejeros y 1 Presidente	No	El Congreso designa al Presidente del Consejo	NA	2/3 de los miembros presentes	Los demás Consejeros son designados de la siguiente forma: 2 Consejeros Empresarios (1 mujer) designados por el Consejo Empresarial Estatal 1 Notario designado por el Colegio de Notarios Públicos del Estado y 1 abogado designado por las agrupaciones de abogados del Estado.
NL	Ley	4 Comisionados	No	Previa convocatoria pública, las comisiones presentan al Pleno una propuesta de candidatos	Convocatoria pública emitida por el Congreso, 60 días antes de que se lleve a cabo la designación	2/3 integrantes del Congreso local	Si no se logra la votación requerida, se elegirán mediante insaculación
Oax.	Constitución Ley	3 Consejeros	No	Previa convocatoria pública, las comisiones presentan una terna al pleno del Congreso para la designación de los Consejeros.	Convocatoria Pública emitida por el Congreso del Estado	2/3 de los integrantes de la Legislatura	Se somete hasta 3 rondas de votación, si no se logra la mayoría, se somete una nueva tema.

508

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
Pue.	Ley	3 Comisionados	No	Previa convocatoria pública, las comisiones someten una terna al Pleno para la designación de los comisionados.	La convocatoria es emitida por el Congreso más tardar la 3ª semana del mes de octubre del año en que se hará la designación.	Mayoría calificada	NA
Qro.	Constitución Ley	4 Comisionados	No	El Congreso elige a los comisionados con la votación requerida.	El Congreso emite la convocatoria se emite 45 días antes a que lleve a cabo la elección.	2/3 de los integrantes del Congreso	NA
QRoo	Ley	3 Consejeros	No	Los grupos parlamentarios presentan 2 o más candidatos a las comisiones. Éstas presentan una propuesta al Pleno para su elección.	La convocatoria es a los Grupos Parlamentarios.	Mayoría calificada	NA
SLP	Constitución Ley	3 Comisionados	No	Previa convocatoria, el Congreso elige a los comisionados.	La convocatoria es emitida por el Congreso y es abierta durante los 30 días anteriores a la elección.	2/3 del Congreso	NA
Sin.	Ley	3 Comisionados	Si, El Ejecutivo presenta una lista con el doble de los comisionados que serán electos al Congreso.	El Congreso debe elegir de entre las propuestas del Ejecutivo.	Consulta previa por parte del Ejecutivo del Estado.	NA	NA
Son.	Constitución	3 Vocales	No	El Congreso	La	2/3 partes	NA

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
	Ley			emite una convocatoria pública y mediante entrevista pública ante las comisiones se presenta una propuesta al Pleno para ser aprobada.	convocatoria es emitida por el Congreso estatal.	del Congreso.	
Tab.	Ley	3 Consejeros	Si, El Ejecutivo propone tres ternas por cada designación al Congreso del Estado.	El Congreso deberá aprobar de entre las ternas del Ejecutivo.	NA	NA	Si no se aprueban las ternas, se presentarán nuevas.
Tamps.	Ley	3 Comisionados	Si, El Ejecutivo presenta su propuesta para ser ratificada por el Congreso.	El Congreso debe ratificar la propuesta del Ejecutivo.	NA	Mayoría Simple	NA
Tlax.	Constitución Ley	3 Comisionados	No	Prevía convocatoria, a propuesta de las comisiones, se deben elegir los Comisionados.	La convocatoria es expedida por el Congreso 45 días antes de la conclusión del ejercicio del Comisionado en cuestión o bien, 5 días después de que surja alguna ausencia.	2/3 del Congreso	Los candidatos son sometidos a un examen oral y escrito en la materia.
Ver.	Constitución Ley	3 Consejeros	Si, El Ejecutivo, previa convocatoria, presenta una terna al Congreso para su	El Congreso deberá elegir al Consejero a partir de la terna presentada por el Ejecutivo en el	La convocatoria es emitida por el Ejecutivo 45 días hábiles antes a la fecha en que	2/3 del Congreso	Si no se logra la votación, se presentan hasta 2 temas. Si no se logra la votación, el Congreso estará obligado a elegir de la última propuesta.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Entidad	Disposición legal que lo contempla	Nombre del cargo y número de integrantes	Intervención del Ejecutivo	Tipo de Intervención del Congreso	Poder que emite la convocatoria	Votación requerida	Procedimiento extraordinario
			aprobación.	orden de prelación en que sean presentados.	se lleve a cabo la elección.		
Yuc.	Ley	3 Consejeros	Si, El Ejecutivo presenta una terna al Congreso.	El Congreso, deberá elegir al Consejero a partir de los candidatos de la terna.	NA	2/3 del Congreso	De no lograrse la votación requerida, el Congreso hará la designación mediante insaculación.
Zac.	Ley	3 Comisionados	Si, El Ejecutivo presenta propuesta al Legislativo.	El Congreso debe aprobar la propuesta del Ejecutivo.	NA	NA	NA

Del cuadro anterior, las Dictaminadoras concluyeron que en las legislaciones de las entidades federativas:

- No existe un mecanismo uniforme respecto al mecanismo de nombramiento de los integrantes del órgano garante.
- Se tienen mecanismos mixtos para el nombramiento en los que:
 - Interviene el Ejecutivo local, enviando la propuesta de nombramiento, en los casos de: Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
 - La Legislatura Local realiza el proceso de nombramiento mediante convocatoria: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, DF, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.
- Por tanto, no existe una tendencia dominante en las entidades federativas respecto al establecimiento de un solo mecanismo de nombramiento de los integrantes de los organismos garantes en materia de transparencia.

Asimismo, con el propósito de contar con los mayores elementos que permitan a las Comisiones Unidas tomar la mejor decisión respecto al tema objeto de estudio, se procedió a realizar un análisis detallado, respecto al



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

mecanismo de nombramiento de los organismos constitucionales autónomos del Estado Mexicano.

a) Mecanismos de nombramiento de los integrantes de los órganos constitucionales autónomos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce cinco órganos autónomos a los cuales les ha conferido mandatos específicos, a saber:

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El INEGI es el órgano constitucional responsable de coordinar al sistema nacional de información estadística y geográfica, así como recopilar y construir las bases de datos sobre la realidad nacional en el ámbito económico, político, social y geográfico.

La conducción del INEGI está a cargo de una instancia colegiada denominada "Junta de Gobierno". Al respecto, el Artículo 26, apartado B, tercer párrafo de la CPEUM, dispone lo siguiente:

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Es decir, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta es una facultad del Presidente de la República. Las propuestas se someten a la aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. De ahí que el nombramiento corre a cargo del Poder Ejecutivo, pero el Senado tiene una facultad de "veto", ya que de no aprobarlo, el primero tiene que enviar una nueva propuesta hasta que ambos Poderes se pongan de acuerdo. Cabe señalar que el Senado no ha hecho uso de esta facultad de veto a la fecha.

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la “autonomía constitucional” al INEGI fue para que el país pudiera contar con información confiable, no sesgada ni partidista que fuera útil al momento de tomar decisiones y diseñar políticas públicas tendientes a resolver los problemas nacionales, en particular, los datos sobre el nivel de pobreza, el Producto Interno Bruto y población estatales (pues sirven de base para el reparto de las Participaciones Federales de las entidades federativas y municipios) e inflación.

2. Banco de México (BANXICO)

El Banco de México es el banco central del país cuyo mandato es suministrar y controlar la cantidad de dinero que necesite la economía nacional para el efecto procurar la estabilidad del poder adquisitivo (es decir, baja inflación).

La conducción del BANXICO está a cargo de una instancia colegiada denominada “Junta de Gobierno”. Al respecto, el artículo 28 de la CPEUM, séptimo párrafo, dispone lo siguiente:

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia (beneficencia, sic DOF 20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Es decir, el mecanismo de designación de los miembros de la Junta es una facultad del Presidente de la República. Las propuestas se someten a la aprobación del Senado o de la Comisión Permanente. De ahí que el nombramiento corre a cargo del Poder Ejecutivo, pero el Senado tiene una facultad de "veto", ya que de no aprobarlo, el primero tiene que enviar una nueva propuesta hasta que ambos Poderes se pongan de acuerdo. Cabe señalar que a la fecha, el Senado si ha hecho uso de esta facultad en 2001, cuando rechazó la propuesta del Dr. Carlos Hurtado, obligando al Ejecutivo a enviar una nueva propuesta.

La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la "autonomía constitucional" al BANXICO fue para evitar que éste le prestara dinero al Gobierno Federal, pues de hacerlo, ello dispararía la inflación. De esta manera, el presupuesto público sólo puede ser financiado con recursos provenientes de los impuestos, productos y aprovechamientos así como de los empréstitos que apruebe el Congreso en la Ley de Ingresos.

3. Instituto Federal Electoral (IFE).

El IFE es el organismo responsable de organizar las elecciones federales, regular a los partidos políticos, coadministrar los tiempos del Estado en radio y televisión y fomentar la cultura política en el país. Todo lo anterior con el propósito de fortalecer la calidad de la democracia nacional.



577

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La conducción del IFE está a cargo de una instancia colegiada denominada "Consejo General". Al respecto, el artículo 42, IV, párrafos segundo y tercero de la CPEUM disponen lo siguiente:

El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

Es decir, el mecanismo de designación de los miembros del Consejo es una facultad de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa consulta social. De ahí que el nombramiento requiere un amplio consenso de las fuerzas políticas del país debido a que los nombramientos requieren el voto de la mayoría calificada.

La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la "autonomía constitucional" al IFE fue para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales en la organización de las elecciones mediante una instancia profesional y ciudadana y sin intervención de las autoridades.

4. Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF es el órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene el mandato de fiscalizar de manera posterior los ingresos, la deuda, los egresos y en general, la administración de los programas a los cuales se haya destinado recursos públicos.

La conducción de la ASF está a cargo del Auditor Superior de la Federación. Al respecto, el artículo 79, fracción IV, párrafo segundo de la CPEUM, dispone lo siguiente:

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento,



516

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

Es decir, el mecanismo de designación del titular de la ASF es una facultad de la Cámara de Diputados, y para cuyo nombramiento se necesita del voto de la mayoría calificada. De ahí que el nombramiento requiere un amplio consenso de las fuerzas políticas del país.

La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la "autonomía constitucional" a la ASF fue para garantizar la imparcialidad y la orientación técnica y no partidista cuando se procede a la revisión de los recursos públicos federales.

5. Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH es el organismo encargado de velar por la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Para dicho fin, tiene el mandato de conocer de quejas presentadas por particulares, en contra de actos u omisiones que violenten derechos humanos provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los provenientes del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento con tal mandato, puede formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.

La conducción de la CNDH está a cargo de un Consejo Consultivo, que a su vez, está encabezado por un Presidente. Al respecto, el artículo 102, B, párrafos sexto a octavo de la CPEUM disponen lo siguiente:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.

Es decir, el mecanismo de designación de los miembros del Consejo Consultivo así como de su Presidente es una facultad de la Cámara de Senadores, o en su caso, de la Comisión Permanente, previa consulta pública. De ahí que el nombramiento requiere un amplio consenso de las fuerzas políticas del país debido a que los nombramientos requieren el voto de la mayoría calificada.

En el nombramiento sólo interviene uno de los Poderes porque la CNDH es un órgano que se creó para defender a las personas de los abusos de las autoridades del Estado Mexicano. Por lo mismo, el Constituyente Permanente decidió que únicamente participará el Senado a efecto de garantizar la debida independencia de dicho Poder, cuyas autoridades emiten el mayor número de actos u omisiones que violentan derechos humanos.



518

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La razón principal por la cual el Constituyente Permanente decidió darle la autonomía constitucional a la CNDH fue para garantizar la imparcialidad e independencia del órgano vigilante y defensor de los derechos humanos frente al abuso de cualquier tipo de autoridad. Al no existir ningún vínculo jurídico, administrativo ni presupuestario con las instituciones públicas, se garantiza su independencia para llevar a cabo las investigaciones de hechos violatorios de derechos humanos que conozca, y por consiguiente, emitir sus recomendaciones con total libertad.

b) Características generales de los órganos constitucionales autónomos.

La Constitución no reconoce un mismo tipo de autonomía constitucional. El Constituyente Permanente la ha venido construyendo conforme la realidad social y política del país lo ha demandado. Para dicho efecto, ha mandado la constitución de órganos a los cuales se les han asignado atribuciones que antes estaban asignadas a los tres Poderes constituyentes de la Nación. Así lo han determinado los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Novena Época

Registro: 170238

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVII, Febrero de 2008

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 12/2008

Página: 1871

**ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS
CARACTERÍSTICAS.**

Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales,



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 32/2005. Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. 22 de mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez.

El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó, con el número 12/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.

Novena Época
Registro: 172456

Instancia: Pleno

Jurisprudencia

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007*

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 20/2007

Página: 1647

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Conforme a la doctrina constitucional, por "poder constituyente" se entiende al órgano creador de la Constitución de un orden jurídico; esto es, al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico.

Tomando en cuenta que estrictamente, la Constitución de un orden jurídico puede ser producida a través de un acto o de un conjunto de actos, directamente encaminado a tal efecto, o bien, a través de un procedimiento consuetudinario de creación. Por lo mismo, el "poder constituyente", es aquel que crea una Constitución y en este sentido, organiza a una nación en cualquier tiempo y en cualquier ámbito geográfico.

En este sentido, el Constituyente de 1917 es el que creó a los órganos constituidos del Poder, que en su origen, fueron los tres Poderes de la Unión Federal. Sin embargo, el mismo poder constituyente le reservó facultades al Constituyente Permanente para que éste reformara a la Constitución. Éste, haciendo uso de dicha facultad, ha decidido retirar

algunas facultades a los órganos constituidos originales para trasladárselas a nuevos órganos constituidos, a los que genéricamente, se han denominado como “órganos constitucionales autónomos”.

Es así que se podría determinar una jerarquía constitucional que parte en primer lugar del pueblo, el Poder Supremo; en segundo lugar, está el Poder Constituyente de 1917, que fue el depositario del mandato popular emanado de la Revolución Mexicana. En tercer lugar, está el Constituyente Permanente, que tiene la facultad exclusiva de reformar a la Constitución. En cuarto sitio lo ocupan los Órganos Constituidos o Poderes Constituidos, a saber, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en quinto sitio, se encuentran los órganos constitucionales autónomos, que reciben su investidura y sus facultades directamente del Constituyente Permanente, y para cuya conformación, es necesaria la intervención de uno o dos de los Poderes Constituidos.

c) Reflexiones sobre los mecanismos de nombramientos que la Constitución señala para los órganos constitucionales autónomos y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Constitución señala dos mecanismos generales de nombramiento para los órganos constitucionales autónomos:

1. **El nombramiento compartido**, es decir, aquel que requiere la intervención de dos de los Poderes Constituidos, como es el caso del INEGI y BANXICO donde participa el Ejecutivo y el Senado, o en su ausencia, por la Comisión Permanente.
2. **El nombramiento exclusivo**, es decir, aquel que requiere sólo la intervención de uno de los Poderes Constituidos, como es el caso del IFE, la ASF y de la CNDH. En los dos primeros, a cargo de la Cámara de Diputados, mientras que en el segundo, del Senado de la República.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los Poderes Constituidos, la Constitución mandata la intervención del Senado



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

de la República para aprobar las ternas que le someta el Presidente de la República, teniendo éste una facultad de veto limitada, puesto que si en dos ocasiones los representantes de la Unión Federal no logran ponerse de acuerdo, el Presidente está facultado para hacer el nombramiento directo. Ello es así, debido a que la Corte es uno de los Poderes Constituidos a diferencia de los órganos constitucionales autónomos. Toda vez que la Nación Mexicana no puede quedar desamparada por falta de una completa integración y funcionamiento de uno de sus Poderes Constituidos, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por ello que la Constitución señaló claramente un procedimiento que siempre garantiza la funcionalidad de éste Poder (si el Senado no nombra a los Ministros en dos ocasiones, el Presidente de la República sin mayor trámite tiene la facultad de nombrarlo directamente); más aún, habida cuenta que los otros Poderes Constituidos (el Ejecutivo y el Legislativo) obtienen su nombramiento directamente del pueblo, el Poder Supremo.

Es decir, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución establece la intervención de los otros dos Poderes Constituidos que fueron electos directamente por el pueblo y además, establece los incentivos para que los miembros de este tercer Poder Constituido sean nombrados sin demora, estableciendo para ello un procedimiento expedito que consiste en:

- Primero, el Poder Ejecutivo envía una terna, y
- Segundo, el Senado elige de entre dicha terna al Ministro. De no aceptar la terna, el Ejecutivo puede enviar una segunda terna, y si ésta tampoco es aceptada por el Senado, el Ejecutivo nombra directamente al Ministro. Lo anterior, dentro de un plazo perentorio.

La lógica detrás del envío de una terna es facilitar la aceptación del Senado, pues es más fácil elegir a uno de tres que en los casos donde sólo se le envía una única propuesta. Y si de esos tres, ninguno cubriera los requisitos necesarios para ocupar el cargo, existe una segunda opción a evaluar, con otros tres aspirantes. Es así que la Constitución prevé que por cada Ministro, el Senado pueda estudiar la idoneidad de hasta 6 personas. De ahí la severidad de la Constitución por cuanto si los seis candidatos



524

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

propuestos no son aprobados por el Senado, el Presidente sin demora, debe hacer el nombramiento.

La lógica constitucional que está detrás del hecho de que dos Poderes intervengan en la designación de los Ministros de la Corte se base en el hecho de que la Corte es uno de los tres Poderes Constituidos que no recibe su mandato directamente del pueblo, el Poder Supremo. Por lo mismo, tal intervención es para efectos de legitimación democrática, según el criterio del Constituyente Permanente.

Con base en lo anterior, se puede extraer la siguiente lógica constitucional relativa a los nombramientos constitucionales:

- i. En el caso de uno de los Poderes Constituidos, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombramiento demanda la intervención de los otros Poderes Constituidos. Y como la Corte tiene una mayor jerarquía que los órganos constitucionales autónomos, la misma Constitución señaló un mecanismo expedito de nombramiento con todos los incentivos para que éste se concrete. Y si a pesar de los incentivos el nombramiento no se logra concretar en un plazo perentorio, el Presidente de la República, que es el representante del Estado mexicano, tiene la facultad de materializarlo.
- ii. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, los nombramientos los hace, ya sea un solo de los Poderes Constituidos o dos de ellos. Pero por tener una menor jerarquía constitucional, no mandata un procedimiento expedito que garantice un nombramiento en un plazo perentorio.

Derivado de lo anterior, resulta necesario establecer un mecanismo de colaboración en el cual se atienda la propuesta del Senado de la República y que el ejecutivo tenga el derecho de objetar la propuesta realizada, ello genera una plena independencia de los Comisionados respecto del Ejecutivo Federal; por otra parte, debe establecerse un mecanismo que



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

permita dotar de plena autonomía y libertad frente a los partidos políticos o grupos parlamentarios del Senado de la República, por ello, se debe construir la designación frente a un acuerdo y amplio consenso de los integrantes del Senado, por lo cual deberá contar con una mayoría calificada que permita esa independencia e inclinación hacia cualquier grupo o partido; sin embargo, se debe establecer un mecanismo que permita una elección que aun cuando el Ejecutivo Federal objetare, no se requiera la mayoría tan amplia como la requerida para la designación en primera ocasión.

En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento permitirá la articulación de dos poderes de la Unión y la colaboración de ambos para generar una plena autonomía en los integrantes del organismo garante.

El esquema que se plantea debe incluir propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, pues son ellas, quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en las necesidades en el tema de transparencia, por ello se debe abrir el espacio para que sean ellas mismas quienes acerquen a los candidatos a participar en el proceso de selección.

ANÁLISIS PARTICULAR DEL CONTENIDO PROPUESTO

Una vez abordados estos dos temas relevantes, podemos referir las consecuencias del análisis y decisión por la cual se determina considerar en la legislación constitucional, la redacción de los aspectos siguientes:

I).- La iniciativa propone realizar modificaciones al artículo 6º Constitucional, en el cual se divida el numeral en dos incisos, el primero de ellos que considera los principios rectores y consideraciones generales de la garantía de acceso a la información y transparencia, asimismo en un segundo inciso se establecen las bases generales de funcionamiento del organismo garante de éstos principios; se considera viable establecer en el mismo artículo 6º Constitucional, la parte dogmática del principio de transparencia y en un inciso subsecuente del mismo ordenamiento el

organismo que garantiza éstos principios, ello con la finalidad de hacer armónico el principio y su garantía, que permita visualizar integralmente el sistema generado en torno a la transparencia y acceso a la información pública; se propone la siguiente redacción al inciso A) del artículo 6° Constitucional.

Artículo 6o. *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

A).- *Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

I. *Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.*



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

II y III. (...)

IV. *Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos **que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.***

V. *Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre **el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.***

VI. a VII. (...)

Se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, ello en plena convicción de evolucionar en materia de acceso a la información pública y particularmente aquella que corresponda al ejercicio de sus recursos.

Se incluye como sujetos obligados directos a los **Partidos Políticos**, por ello en la ley reglamentaria debe establecer la mecánica de acceso a la información pública la cual deberá contener y describir las facultades de los órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos políticos y eliminar del Instituto Federal Electoral la triangulación de las solicitudes de información; en consecuencia las determinaciones que los comités de información generan puedan ser verificables por el órgano garante, con ello se eliminaría acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, el propio IFE, ya no tendría que atender y resolver sobre la información requerida a los partidos políticos y su comité de información se vería disminuido considerablemente ya que solo atendería las solicitudes que se generen respecto a su actividad como institución; cabe referir, que las facultades de fiscalización continúan en el IFE y será aquel, quien determine la forma en que entregará la información

relacionada con ésta materia; derivado de ello, se tienen que atender diversas particularidades entre ellas la competencia nacional al órgano federal y competencia al órgano local de Comités Estatales o Municipales, generar una homogenización en la legislación local; reglas sobre el gasto público y fiscalización; en consecuencia la normativa transitoria de la Ley General deberá establecer reformas al reglamento de transparencia del IFE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que permita ésta nueva modalidad en sujetos obligados.

En relación a la inclusión de **sindicatos**, aun cuando se consideren como sujetos obligados directos respecto de los recursos públicos que reciban, se propone manejar una situación similar a la contenida en el ámbito privado; tratándose de sindicatos de los denominados públicos, el esquema de su conformación es en el sentido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; disposiciones que consideran su registro a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; en este sentido y derivado del nuevo esquema en materia de transparencia adoptado por las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2012, se considera debe evolucionar el sistema de transparencia de los sindicatos denominados públicos, a efecto de ser congruentes con aquellos que se consideran del ámbito privado.

A efecto de homologar el sistema de transparencia en sindicatos, sean denominados públicos o privados se debe adoptar en la Ley General reglamentaria del artículo 6° Constitucional, que se propone, un esquema similar al contenido en la Ley Federal del Trabajo, por ello se describen algunos puntos relevantes.

El esquema adoptado por el régimen privado de transparencia relacionada con los sindicatos, se advierte en dos aspectos:

1. Obligaciones de transparencia en cuanto a su registro;



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

2. Obligaciones de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas con respecto al patrimonio sindical.

En el primer caso, **los entes obligados lo son las autoridades que tienen a su cargo el registro de dichas organizaciones**, a la sazón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los de competencia local; en materia de apartado B del artículo 123 compete al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

El artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, dispone que en el registro de tales organizaciones gremiales se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la autonomía, equidad y democracia sindical.

En términos del artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades antes mencionadas se encuentran obligadas a hacer pública, para cualquier persona, la información actualizada de los registros de los sindicatos, y expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así como de aquellas que regulen el acceso a la información gubernamental en las entidades federativas.

En el segundo caso, que se regulará en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, **el sujeto obligado lo es la directiva del sindicato**, quien tiene el deber de rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical a la asamblea, cada seis meses por lo menos, lo que incluye la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.

Se precisa además que en todo momento el trabajador tendrá derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato.



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Se contempla que en los Estatutos de los sindicatos se prevean procedimientos internos que puedan ser accionados por los trabajadores, que estimen no haber recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical.

La presente reforma considera a órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, ello toda vez que se hace necesario verificar el destino de los recursos que se otorgan y así estar en posibilidad de conocer el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue conferido.

Una de las mayores preocupaciones y comentarios del IFAI y organizaciones de la sociedad civil en torno a la problemática detectada en materia de transparencia y acceso a la información, radica en que las autoridades manifiestan la inexistencia de la información, por lo cual existe la necesidad de establecer un principio constitucional que establezca la obligación de la autoridad a generar la información que documente en el ejercicio de sus facultades establecidas en la ley; es decir, aquella información que por su naturaleza debe existir en alguna área o dependencia de la administración pública federal, estatal, del Distrito Federal, delegacional o municipal, para evitar que sea declarada como inexistente, ello no implica la generación de información que conforme a sus atribuciones no deba generar, pues de lo contrario, se sumergiría a las dependencias en un constante desarrollo de información que no es necesaria para sus funciones y que distraería recursos materiales, financieros y humanos en trabajos específicos que no compete desarrollarlos; no obstante, existe información que evidentemente debe ser generada por las dependencias, pues no se entendería un adecuado funcionamiento o la implementación de determinadas políticas públicas sin que se cuente con la información completa relacionada; es por ello que es obligación de los servidores públicos en generar toda la gama de información relacionada con sus actividades y que permita el pleno ejercicio de la función pública.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por ello, en el presente Dictamen se propone que sea en la Ley General, donde se establezca un apartado que norme la obligación de la autoridad de generar la información.

Se establecen criterios específicos para la reserva temporal de información, entre ellas nos encontramos al interés público y seguridad nacional, las cuales implican lo siguiente:

Interés público: En la actual fracción I del artículo 6° Constitucional se considera la reserva de información; entre ellas, a la relacionada con causas de interés público; en este sentido, el dictamen de las Comisiones Unidad de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2207-II, publicado el martes 6 de marzo de 2007), estableció esta particularidad en materia de reserva como aquella que reviste una importancia tal cuya divulgación puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, refiriendo lo siguiente:

“...Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite algunas excepciones. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse de manera temporal. Este es, por ejemplo, el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes.

En términos de lo anterior, resulta necesario preservar el principio de reserva que determinada información debe contener, por ello se conserva el término de interés público que debe prevalecer en los criterios de ponderación de entrega de información y documentación que obra en poder de las autoridades.

Igualmente se actualizará una causa de interés público, sustentada en el interés económico de los sujetos legitimados para promover la controversia constitucional, cuando existan actos o normas de carácter general, que vulneren las disposiciones constitucionales relativas a la estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, o los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en beneficio de todos sus gobernados.

Seguridad nacional. Se comparte la definición actual de seguridad nacional, misma que se encuentra normada en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que refiere lo siguiente:

"Art. 3...

I a XI...

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

Dicha definición ha sido interpretada y aplicada diligentemente por el actual organismo garante de transparencia, mismo que cuenta con las experiencias y criterios que permiten conocer efectivamente aquella información que evidentemente es materia de seguridad nacional y la que bajo ése pretexto ha sido negada a los particulares, por ello sus determinaciones existen los criterios suficientes que permitan determinar la calificación o no clasificación de la información en posesión de autoridades.

El incorporar a la seguridad nacional y dignidad humana como principios de reserva de información, constituye un avance en la conformación integral de la reforma constitucional, ello en virtud de estar creando un organismo de última instancia, que no admite recurso o medio de impugnación por



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

parte de los sujetos obligados, ello permitirá que exista un detallado análisis en las resoluciones del organismo garante, que impliquen la determinación de reserva o no reserva de aquella información clasificada como tal por los sujetos obligados.

El incorporar las reservas, lejos de ser un retroceso, implica un equilibrio y límite en la actuación de los organismos garantes, ésta situación está contenida actualmente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 3 fracción XII, por lo cual no es un concepto que se utiliza e interpreta actualmente en la clasificación y entrega de la información; en este sentido, resulta indispensable contenerlo en el precepto constitucional, lo que implica que se desarrolle el concepto y las características de cada principio de reserva en la ley reglamentaria y con ello identificar plenamente los criterios y parámetros por los cuales se considerará determinada información como reservada.

Debemos recordar que los actos de autoridad, implican una exacta aplicación de la ley, pues bajo el principio de que la autoridad solo puede realizar los actos que se encuentran contenidos en las leyes, compete al poder legislativo contener en la ley general, aquellas características particulares que revistan de reserva a la información que la autoridad genere, debiendo, en estos casos establecer el mínimo de discrecionalidad tanto para la autoridad con motivo de su clasificación, como para el organismo garante respecto a su interpretación.

Las modificaciones propuestas en la fracción IV, establece el principio de certeza y expedites que deben existir en la garantía de acceso a la información; asimismo, se determina la creación de órganos especializados que normen y atiendan las solicitudes que en ésta materia se generen; con base en esta fracción se estatuye la constitución de varios órganos garantes, lo cual administrado con las modificaciones a artículos posteriores, dan vida a organismos constitucionales autónomos en los Estados de la República y el Distrito Federal.

La redacción de la fracción V del artículo 6° inciso A) constitucional, establece que los sujetos obligados en materia de transparencia, deben generar información en torno al ejercicio de los recursos públicos y mostrar los indicadores que generen con la finalidad de obtener información integral, para que la ciudadanía o interesados en el desempeño gubernamental cuenten con la información del cumplimiento de los objetivos de la dependencia u oficina que rinde cuentas y muestre los indicadores que arrojan los resultados que se presentan; ello con la visión de retroalimentación que permita el escrutinio de la sociedad en general en las cuentas rendidas y el método por el cual se obtienen los resultados arrojados.

Dentro de la Ley General se deben incorporar los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad de la información, resultando de especial importancia el detalle que se genere en cuanto a su concepción, pues resulta indispensable establecer las directrices que permitan cumplir con los principios que deben prevalecer en torno a la conformación y preservación de la información y documentación pública.

Dentro de las propuestas de modificación que presentaron los diversos grupos parlamentarios, se advirtieron redacciones amplias y descriptivas respecto a los organismos estatales y del Distrito Federal autónomos, así como el desarrollo más detallado de los temas referidos; no obstante, se puede referir que la intención es proponer reformas constitucionales en las cuales se afecte lo menos posible a las disposiciones contenidas, considerando principios rectores, mismos que se ampliarán en la ley reglamentaria, por ello, la propuesta de reforma constitucional es acotada y con un contenido básico, pero que permite atender una integralidad de principios rectores.

II).- Como fue mencionado en el párrafo anterior, se propone que el artículo 6° Constitucional se constituya por dos incisos: el apartado A) ya mencionado y un apartado B), el cual considera a la estructura y funcionamiento genérico del organismo garante del artículo 6°; con base en los anterior, dentro de la estructura de éste inciso B), se pueden advertir

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

diversos elementos nuevos que se integran a la materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en este sentido, se presentan las siguientes propuestas de redacción:

B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.

El inciso B del artículo 6° Constitucional crea al organismo encargado de transparencia y acceso a la información pública, como un ente autónomo, en el cual se describen los principios rectores de su actuar, se define su autonomía y personalidad jurídica, así como la facultad de proponer su proyecto de presupuesto y organización interna.

Dentro de las propuestas relacionadas con la autonomía presupuestaria, resultó viable incorporar la referencia a la decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, asimismo el organismo tendrá facultades para proponer el presupuesto para que sea considerado, lo que no implica necesariamente que el mismo sea aprobado en sus términos por la Cámara de Diputados al momento de generar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello la facultad final de decisión sobre el presupuesto que se asignará será de la Cámara de Diputados, la cual con base en las necesidades nacionales resolverá en la asignación de los recursos; lo anterior con base en la necesidad de generar un procedimiento en el cual el organismo presente su propio presupuesto al Ejecutivo, quien lo presentará a su vez a la Cámara de Diputados, la cual lo analizará y determinará en definitiva; en éste mismo tema, debe existir una planeación presupuestal del organismo, pero no debe haber una autorregulación; deben existir 2 fases básicas a atender, El Organismo planeará su presupuesto y lo envía al Ejecutivo Federal; y La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto final que se

asignará al organismo garante del artículo 6° en el ámbito federal; ello con la finalidad de no establecer una nueva figura presupuestal que ocasione incertidumbre en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que genere en los demás organismos autónomos la convicción de una autonomía presupuestal plena que no atienda al equilibrio económico que debe prevalecer en toda la administración de los tres poderes del Estado, lo anterior conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 5° fracción I)

El organismo contará con facultades para emitir normatividad interna y reglamentaria que sea necesaria para el ejercicio de sus actividades, ello genera una autonomía jurídica, que busca dotarse de elementos normativos que para el mejor desempeño de sus funciones, con ello, podrá desarrollar procesos internos ágiles para las resoluciones y determinaciones que en la materia genere.

II.1). Los párrafos segundo y tercero del inciso B) del artículo 6° de la Constitución establecen expresamente la referencia a que el organismo debe ceñir su actuar a la Ley General respectiva, asimismo en párrafo segundo establece los principios rectores del funcionamiento del organismo:

“Este organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.”

Se consideró necesario incorporar un párrafo en el cual se establezca de manera puntual que existirán dos tipos de leyes que regularán tanto el procedimiento de acceso a la información, así como el procedimiento del organismo garante; ello toda vez que en el ámbito federal se constituirán



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

dos leyes: una federal que será la que rija las actividades del órgano garante federal, y una general que normará y unificará los procedimientos en todos los organismos garantes de los Estados y el Distrito Federal; resulta viable establecer esta característica en un párrafo del artículo 6° constitucional, ya que aun cuando se entienda que las leyes generales impactan en el ámbito local, mientras que las federales solo impacten en el ámbito federal, al coexistir dos normativas, puede generarse la confusión en el ámbito de su aplicación, para ello, se determina que la ley general normará los procedimientos y bases generales de actuación de los organismos encargados de transparencia, mientras que la ley federal, atenderá las disposiciones generales y normará el actuar del organismo federal, resulta así que, la coexistencia de ambas normativas son complementarias, pues se prevé que igualmente en el ámbito local cada Estado y el Distrito Federal cuenten con su propia normativa local que regule la actuación de sus organismos en materia de transparencia.

En el segundo párrafo se determinan los principios rectores del actuar de la autoridad encargada de la transparencia y acceso a la información pública, entre los cuales se pueden advertir el de certeza, el cual busca que las actuaciones de la autoridad exista la certidumbre de su actuación, a través de procedimientos que permiten conocer el alcance y determinaciones que pueden existir en materia de transparencia y acceso a la información pública, ya que se trata de uno de los principios que otorga seguridad jurídica a todos los involucrados en el tema referido.

Respecto al principio de legalidad, debemos tomar en cuenta que se dotará al organismo de definitividad e inatacabilidad en sus resoluciones, lo que implica una gran responsabilidad, ya que aquellos actos que genere deben estar perfectamente investidos de legalidad; es decir, la actuación de la autoridad encargada de transparencia y acceso a la información pública, debe conducirse completamente apegada a derecho, lo que impactará en sus resoluciones, debiendo prever el contar con personal altamente calificado, que maneje el derecho que impregne de legalidad las determinaciones y resoluciones del organismo, lo que buscará generar una institución sólida y confiable, que con sus criterios se pueda trascender a

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

las determinaciones de los organismos autónomos en las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

En relación al principio de independencia, la configuración de los órganos garantes, incluyen una autonomía constitucional, ello garantiza la independencia que existe entre el Ejecutivo Federal y el órgano encargado de solicitar y entregar información pública gubernamental, actualmente el órgano encargado de dicha tarea cuenta con una independencia subjetiva, pues de facto sigue siendo un órgano integrante de la Administración Pública Federal, como lo señala el actual artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con la reforma constitucional que se propone, se garantizará su independencia al conformarse en un órgano plenamente autónomo, con lo que se garantiza la no dependencia del Ejecutivo Federal.

El principio de imparcialidad se encuentra íntimamente ligado al principio de independencia, ya que con la autonomía constitucional del Poder Ejecutivo, se garantiza que las determinaciones sean completamente imparciales; en el cual se deben valorar los principios que rigen el derecho al acceso a la información pública, y aquella información con que cuentan las dependencias del Ejecutivo Federal o de cualquier otro sujeto obligado, lo que impacta en resoluciones dotadas de plena imparcialidad.

Se dota del principio de eficacia al órgano garante, con la finalidad de generar resoluciones que en tiempos muy cortos puedan determinar sobre el otorgamiento de la información o su negativa; es una exigencia respecto del órgano que actualmente lleva las tareas en materia de transparencia, el gozar de la eficacia necesaria, toda vez que actualmente los procedimientos que se siguen pueden verse afectados en el retardo de la entrega de la información, para ello se debe dotar de elementos adicionales que permitan al organismo generar una alta eficiencia en su actuación, por lo cual, se incluyen principios como el de definitividad e inatacabilidad en sus resoluciones, el establecimiento de una ley general en materia de transparencia y otra en materia de archivos, estos



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

instrumentos normativos y otros más garantizarán una plena eficacia en la actuación del organismo.

Toda vez que el organismo federal será rector en la materia, el cual podrá revisar las determinaciones de los organismos locales y del Distrito Federal, resulta indispensable determinar la objetividad en sus determinaciones, la cual se verá reflejada no sólo en las resoluciones en materia de transparencia, sino en los criterios generales que emita y que permitan ser utilizados por los organismos locales para normar sus criterios, y así generar una homogenización en todo el territorio nacional.

El profesionalismo es un principio que genera la convicción en los funcionarios y comisionados que formarán parte de este organismo en constituirse en personal que realmente sea profesional en su actuar, lo que implica el velar por la capacitación, formación y desarrollo del capital humano que intervendrá en el proceso de acceso a la información, con ello se busca generar determinaciones debidamente fundadas y motivadas derivadas del estudio profundo que los servidores públicos del organismo realicen en sus criterios de resoluciones.

La máxima publicidad ha sido un principio probado y calificado como indispensable en la materia de acceso a la información, pero no sólo implica que toda aquella información sea considerada como pública, sino reamente generar criterios que permitan ponderar corduras de reserva frente a la máxima publicidad, y el daño que se pueda generar, para ello, el organismo debe generar directrices que permitan determinar el alcance de la máxima publicidad en relación con la propia información que se solicite, debiendo siempre valorar las consideraciones que la autoridad vierta, así como los terceros afectados que se encuentren involucrados con la información a entregarse.

II.2). El párrafo cuarto, quinto y sexto del inciso B) del artículo 6° de la Constitución establece a los sujetos obligados en la materia, asimismo el párrafo sexto señala que la ley reglamentaria establecerá aquella

información que se deba considerar como reservada o confidencial de la siguiente manera:

“El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva de la información, en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.”

Por lo que respecta a los sujetos obligados, se ha determinado incluir como sujetos obligados directos aquellos que se mencionan en la fracción I del artículo 6° inciso A), constitucional ya referido, por las causas y comentarios que se expusieron en párrafos anteriores, por tanto, éste párrafo está relacionado con el que se refiere a los sujetos obligados



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

directos antes mencionados, quienes serán sujetos a la competencia del organismo garante en materia de transparencia.

Existe la disposición de considerar como sujeto obligado directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual deberá rendir la información que le sea solicitada por quienes ejerzan el derecho de acceso a la información, siendo el organismo garante quien pueda verificar las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver en definitiva sobre la reserva de la información, ello genera un nuevo espectro de atribuciones para el organismo garante, el cual abarcará prácticamente a todos los poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno, se plantea una excepción a los temas de transparencia y acceso a la información, respecto a la Suprema Corte, siendo aquellos que tengan que ver con procedimientos jurisdiccionales, ello evidentemente con el propósito de proteger los procesos que se sigan en las salas o pleno ello no implica que esta última no sea sujeta del régimen de transparencia; sin embargo, el tratamiento que se genera en torno a la información en éste rubro, deberá ser resuelta por un comité conformado por tres Ministros, quienes resolverán sobre el otorgamiento o negativa de la información.

Se dota al organismo garante de facultades de revisión de las determinaciones que emitan los organismos garantes en los Estados y en el Distrito Federal, ello con la finalidad de normar criterios homogéneos que en materia de transparencia deban prevalecer en todos los niveles de gobierno y en los tres niveles federal, local y municipal; evitando con ello que en los Estados de la República en los que los gobiernos tengan injerencia en temas relacionados con transparencia, sea el órgano federal el que determine finalmente sobre la información requerida; con base en lo anterior, se garantiza igualmente que, los principios rectores en la materia se vean protegidos por la autoridad superior federal, sin que ello se considere como una invasión de competencias, pues la finalidad es permear una cultura en materia de transparencia en todo el país.

La garantía de acceso a la información pública, es otorgada a los gobernados, quienes deben tener el derecho a solicitar a la autoridad



542

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

federal la revisión de las determinaciones que en el ámbito local les haya sido negada; en este sentido, la relevancia o trascendencia de la información que se solicite no impacta en la determinación del conocimiento del organismo garante federal, pues lo que se busca proteger es precisamente la garantía de acceso a la información y no la relevancia de la misma, ya que al constituirlo como un derecho constitucional para cualquier gobernado, resulta indispensable protegerlo sin importar si la solicitud que fue negada no reviste características relevantes y trascendentes, pensarlo de otra manera, generaría una justicia en la que sólo aquella información considerada subjetivamente como relevante pueda ser verificable a través del organismo protector federal.

Para complementar el esquema de verificación de la autoridad federal, se establece un procedimiento de atracción, en el cual el organismo garante federal o los organismos garantes estatales, puede conocer de aquellos asuntos que realmente son importantes y trascendentes, los cuales deben ser atraídos y resueltos por el organismo federal, con las facultades otorgadas, el organismo garante federal puede aplicar criterios que en casos similares haya determinado, o bien, establecer el criterio que en temas similares se deba atender, por ello resulta de suma relevancia dotar de la facultad de atracción, misma que se verá reflejada en cuanto a su procedimiento en la ley general que emita el Congreso de la Unión.

Se incluye un párrafo en el cual se establece la existencia de información reservada o confidencial, aun cuando existe el criterio de considerar en la ley y no en la constitución esta particularidad, existe también la interpretación de que no debe existir dicha restricción, lo que implica que toda la información de cualquier naturaleza deba ser considerada como pública, lo que deja abierto un gran espacio, en el que debe preverse información que necesariamente deba ser reservada o confidencial, como aquella que se integra a averiguaciones previas o procesos penales, aquella que atañe a seguridad nacional o estabilidad financiera o económica, entre otras realmente relevantes, se incorpora esta clasificación en la propia Carta Magna para no dejar en duda que necesariamente debe existir información reservada y confidencial; será así



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

la propia ley la que determinará aquella que se debe considerar como tal, considerando igualmente los casos en que la misma debe pasar de ser confidencial o reservada a pública.

A fin de acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir de parte de los entes obligados y al mismo tiempo garantizar el debido cuidado de aquella información sensible que distintas disposiciones jurídicas protegen, en la Ley General que expida el Congreso de la Unión se normarán todas las reservas a la información en un título especial a efecto de que toda la información pública no sujeta a ellas se sujete al principio de máxima publicidad. En particular, dichas reservas son las que se refieren a:

1. Secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal.
2. Información relativa a la seguridad pública y nacional.
3. Información sobre expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación y deliberativos que no hayan concluido, de manera enunciativa más no limitativa, en materia administrativa, fiscal, penal, civil, fiscalización, jurisdiccional, mercantil, electoral, familiar, jurisdiccional, parlamentaria, etc.
4. Información que puede afectar la estabilidad económica y financiera nacional y regional.
5. Información sobre estrategias y planes electorales.
6. Padrones de afiliados, asociados o beneficiarios (sólo en los términos y criterios aplicables).
7. Infraestructura y estrategias militares y navales.

II.3). El párrafo séptimo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución otorga definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del organismo garante, estableciendo una excepción a dichas determinaciones conforme a lo siguiente:

“Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.”

544

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante, con la finalidad de cumplir con varios de los principios que se han otorgado al organismo, entre ellos, el de eficacia, certeza y objetividad. Con ello las determinaciones de la autoridad no serán sujetas a revisión por parte de algún otro ente, así la información deberá entregarse de manera inmediata por las resoluciones que en que hayan recaído, ya sean en el ámbito federal o local.

Al dotar de definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del órgano garante, es indispensable que las determinaciones que emitan sean completamente apegadas a derecho, respetando las garantías constitucionales y del debido proceso, ya que se generarán determinaciones que no pueden ser combatidas ante los órganos jurisdiccionales y por tanto, se convierte en una autoridad materialmente jurisdiccional; ello genera la necesidad de contar con un cuerpo legal que en sus determinaciones garanticen el apego a las normas y su interpretación así como la ponderación en garantías y derechos humanos a que hace referencia la nueva evolución del derecho constitucional; para conseguir las metas en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como la ponderación de derechos en conflicto.

II.4). Los párrafos octavo y noveno del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refieren al método de designación de los comisionados, así como el procedimiento que se debe seguir para su conformación, en los términos siguientes:

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Al respecto podemos referir que se optó por ésta forma de designación en base a los diversos criterios que se recogieron de diversos comentarios y exposiciones de organismos e instituciones; en este sentido podemos advertir los siguientes modelos que se propusieron:

1. Designación por el Ejecutivo con no objeción;
2. Designación por el Ejecutivo con ratificación;
3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas;
4. Designación directa del Senado;
5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara;
6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica.

Derivado de lo anterior se recogieron los siguientes datos:

1. Designación por el Ejecutivo con no objeción; coincidieron con esta propuesta la Secretaría de Gobernación, Función Pública, Secretaría de Economía y la CONAGO en el Estado de Chihuahua.
2. Designación por el Ejecutivo con ratificación; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Red por la Rendición de Cuentas, UNAM (oficina

594

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

del Abogado General), COMAIP y CONAGO en el estado de Zacatecas.

3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas; UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), CONAGO en los estados de Colima, Tabasco, Veracruz y Aguascalientes.
4. Designación directa del Senado; Info D.F.
5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara; COMAIP, Info D.F.
6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica, COMAIP.

Como podemos observar la preferencia en la designación de los Comisionados del organismo garante, se perfila en el sentido de una colaboración entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con ello se genera una plena independencia de los Comisionados respecto del Ejecutivo Federal y del Legislativo; en este sentido, se propone que sea el Senado de la República quien a través de una consulta a la sociedad, misma que se puede acceder por conducto de las organizaciones de la sociedad civil.

Derivado de lo anterior, se establece un amplio consenso en el nombramiento realizado por el Senado de la República, en el cual se considera exista una mayoría calificada de las dos terceras partes en el nombramiento del Comisionado, el cual podrá ser objetado por el Ejecutivo Federal; una vez generada esa objeción, se regresa a la Cámara de Senadores a efecto de valorar una nueva propuesta y generar un nuevo nombramiento, el cual en esta segunda votación podrá ser electo solo por las tres quintas partes de los Senadores presentes en la sesión; en caso de que el Ejecutivo Federal vuelva a objetar ese nombramiento, será directamente el Senado quien determine la persona que asumirá el cargo del Comisionado.

En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento permitirá la participación de dos poderes de la Unión y la colaboración de ambos para garantizar plena autonomía a los integrantes del organismo garante.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Adicionalmente, la determinación de generar este mecanismo de nombramiento es porque el órgano constitucional autónomo, garante de la transparencia, es una instancia híbrida que realizará actividades de autoridad administrativa y actividades jurisdiccionales de última instancia. Es decir, cuenta con un mandato de doble naturaleza, por lo cual, el mecanismo de nombramiento propuesto es diferente al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al previsto para los órganos constitucionales autónomos, que en este caso, se refiere a la no objeción por parte del Presidente de la República.

Así pues, el presente dictamen prevé que el nombramiento de los comisionados se lleve a cabo por el Senado, con la “no objeción” del Presidente de la República. Esta figura de “no objeción”, es en los hechos, la figura de veto y la configuración de una “afirmativa ficta”, es decir, es una modalidad de “afirmación aprobadora”, en la que el Presidente de la República tiene la facultad de aprobar de facto el nombramiento hecho por el Senado en un plazo perentorio (afirmativa ficta), o bien, desaprobarlo de manera expresa por considerar que dicho nombramiento no resulta idóneo o no fue apegado a derecho, hasta por dos ocasiones.

Esta mecánica de nombramiento que involucra a dos poderes, garantiza la autonomía del organismo garante, así como su debida integración y funcionalidad, pues en caso de que el Presidente de la República objetare en dos ocasiones el nombramiento hecho por el Senado, será éste, a través del procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley, quien nombre de forma directa y autónoma a los consejeros en cuestión.

El procedimiento para el nombramiento de los comisionados del órgano garante que nos ocupa, es especial y particular para éste, diseñado a partir de las particularidades de las funciones que ejercerá. Es decir, se plantea una mecánica completamente innovadora y particularizada por tratarse de un órgano del Estado que garantizará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, al tiempo que vigilará que los órganos del

548

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Estado y demás sujetos obligados cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales en la materia.

Así pues, se considera que los nombramientos deben hacerse por el Senado, por tratarse de un organismo ciudadano que vela por el respeto de los derechos humanos y garantías individuales relativas al derecho al acceso a la información. En este sentido, se prevé un procedimiento similar al de los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, en el sentido de que son nombrados por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en representación de la ciudadanía, pero con la posibilidad de ser objetados por el Ejecutivo Federal, en atención a garantizar la autonomía e independencia del órgano. La intervención de dos poderes en el proceso de nombramiento es una condición importante para evitar la partidización de sus funcionarios, o la dependencia implícita de los mismos hacia un poder supremo.

II.5). El párrafo décimo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refieren a la duración en el cargo de los comisionados y las particularidades que revisten su cargo, en los términos siguientes:

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

A efecto de garantizar la autonomía en sus determinaciones, se hace indispensable que los comisionados no desempeñen ningún otro cargo o empleo, previendo sólo autorizar aquellas que tengan relación con actividades docentes o similares, esta propuesta ha sido bien recibida por parte de los actores legislativos que consideran un acierto en la determinación de estas medidas, toda vez que los comisionados con la finalidad de resolver en plenitud de funciones, y sin la injerencia de cualquier índole, garanticen los principios rectores de su actividad como la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

independencia, imparcialidad y objetividad, por ello las resoluciones que emitan deben estar libres de cualquier suspicacia que se genere en torno a las actividades secundarias que realicen los comisionados. En este sentido, cobra vital importancia el que se establezca constitucionalmente la prohibición de desempeñar otro cargo, empleo o comisión que pudiera vulnerar el ejercicio de su actividad.

II.6). El párrafo décimo primero del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refieren a la equidad de género que debe prevalecer en el nombramiento de los comisionados, en los términos siguientes:

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano garante, y en búsqueda de la nivelación en paridad del papel de la mujer en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera particular en los órganos directivos.

II.7). El párrafo décimo segundo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refiere a la designación del comisionado presidente del organismo, en los términos siguientes:

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

En el tema de la designación de los comisionados se analizaron las diversas propuestas en la forma de elección, y se consideraron tanto la designación directa por parte del Senado de la República, la propuesta de designación por parte de los propios comisionados, así como la

532

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

designación por parte del Ejecutivo Federal. En este orden de ideas, debemos atender a la naturaleza jurídica completa que se dotará al organismo garante, en la cual se busca armonizar todos los principios que en su actuar debe observar. En este sentido, el principio de independencia debe prevalecer en el sistema de designación que se opte para el presidente del organismo, lo que implica que sea a través de un método democrático, por ello se considera que deberá ser a través del voto directo y secreto de los propios comisionados, quienes decidirán sobre quién ostentará el cargo de presidente del organismo, que finalmente será quien represente a la institución, y generará los criterios y líneas de acción sobre las que debe laborar la institución. Esto no implica que las determinaciones que se adopten sean unilaterales, pues al tratarse de un órgano colegiado los puntos de vista y decisiones deben ser tomadas con el mayor consenso de sus comisionados, permitiendo generar decisiones democráticas en las que se analicen todos los puntos de vista vertidos sobre temas específicos.

Así pues, por las razones expuestas, se considera que la designación del presidente debe ser por parte de los propios comisionados, pues esta medida garantiza la independencia en sus determinaciones. Considerarlo de distinta forma, conllevaría a generar tensión interinstitucional, pues implicaría una intervención exterior, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, en un órgano al que se está dotando de autonomía constitucional, lo que debe ser congruente con la reforma integral, incluido el mecanismo de nombramiento del Presidente del organismo.

II.8). El párrafo décimo tercero del inciso B) del artículo 6° de la Constitución propone la creación de un Consejo Consultivo, en los términos siguientes:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Se establece la conformación de un Consejo Consultivo conformado principalmente por ciudadanos, el cual será designado por el Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente, en la conformación se deberá atender a las organizaciones de la sociedad civil, mismas que podrán formular propuestas, que no necesariamente tendrán que ser las consideradas para la conformación del consejo, igualmente se podrán generar acercamientos con universidades, expertos en la materia, etc.; el Consejo Consultivo del organismo garante podrá Establecer los lineamientos generales de actuación del organismo; aprobar la normatividad interna, que en su caso, se pueda generar, opinar sobre el proyecto de informe anual que se presente a la Cámara de Senadores, solicitar al presidente del organismo garante información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto; conocer y pronunciarse sobre el ejercicio del presupuesto asignado al organismo garante para el ejercicio de sus atribuciones; entre otras que establezca la ley.

II.9). El párrafo décimo cuarto del inciso B) del artículo 6° de la Constitución otorga medidas de apremio al organismo, en los términos siguientes:

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Es indispensable que se dote de facultades coercitivas en las determinaciones del organismo garante, para ello, la reforma constitucional que se dictamina, establece las facultades referidas, dejando en la ley secundaria aquellas medidas de apremio que puede aplicar la autoridad en materia de transparencia, ello para efecto de obtener la información que se

352

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

requiera y en los plazos solicitados. Entre ellos, se deberán considerar en la Ley General, la amonestación o el apercibimiento, lo que permitirá al organismo contar con elementos coercitivos que permitan generar en los entes obligados, la convicción de proporcionar la información de manera puntual, conforme a las disposiciones normativas, en los plazos y formas que son permitidas por la ley. Con base en ello se considera que la información hacia los ciudadanos será más expedita y de mayor calidad, ya que de lo contrario, los entes obligados, podrían verse afectados por las medidas que en su caso, se impongan por el organismo.

II.10). El párrafo décimo quinto del inciso B) del artículo 6° de la Constitución, establece la obligación de todas las autoridades para coadyuvar con el organismo, en los términos siguientes:

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

Aun cuando se ha mencionado que esta disposición es consecuencia de la organización de toda la administración pública, debemos tomar en cuenta que se está creando a un organismo autónomo, el cual se regirá por una ley general y una federal, por ello debe quedar patente en la norma constitucional que aun cuando no pertenezca a la administración pública federal, las autoridades de ésta, deben estar en aptitud de proporcionar todo el auxilio y apoyo que el organismo garante requiera, no solo respecto al apoyo físico que, en su caso, se pueda requerir, sino, respecto de información que debe estar perfectamente coordinada entre las diversas entidades, organismo o dependencias que conforman a la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial correspondientes; resulta con ello una necesidad de considerar en la norma constitucional el apoyo o auxilio que se pueda requerir a cualquier autoridad; esta disposición, se encuentra adminiculada con el párrafo posterior que considera una coordinación específica.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

II.11). El párrafo décimo sexto del inciso B) del artículo 6° de la Constitución establece el sistema de coordinación entre el organismo garante y otras entidades del Estado Mexicano, con el propósito de fortalecer el sistema de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, en los términos siguientes:

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

Se dota al organismo garante de una coordinación constitucional entre la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, existen diversos criterios que consideran innecesaria la disposición constitucional; sin embargo, debemos tomar en cuenta que el organismo de transparencia, se enfila hacia una institución que permita verificar la información proporcionada por los diversos entes y autoridades obligadas; así, es indispensable que la información proporcionada sea congruente con aquella que generen las instituciones que se han mencionado, por ello, no basta que en la ley general se determine la posibilidad de coordinación, pues la misma implicaría un acuerdo de voluntades en el cual se puede distorsionar la finalidad principal que es precisamente proporcionar información que sea congruente respecto a todas las dependencias, estadísticas, archivo y auditoría, que genere certeza en la información proporcionada.

Con base en esta disposición se fortalece al organismo garante, pues al dotarlo de medidas de apremio y un amplio margen de verificación de información con las dependencias del gobierno, puede sistematizar y verificar la congruencia completa de la información que se proporciona al gobernado, quien finalmente, contará con las herramientas necesarias para

obtener información confiable y certera que permitan un adecuado escrutinio de las tareas en la administración pública.

III.- Se modifica el artículo 73 para incorporar dos fracciones que autoricen al Congreso de la Unión a expedir las leyes generales necesarias para el funcionamiento de los organismos garantes, en los siguientes términos:

Artículo 73. (...)
(...)

XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos

XXX. (...)

Se faculta al Congreso de la Unión para crear leyes generales reglamentarias del artículo 6° constitucional, la cual contendrá las disposiciones normativas y de procedimiento mínimos que deben observar los órganos garantes tanto federal como locales en materia de transparencia.

Con ello, se garantiza una homogenización en las disposiciones y procedimientos que se seguirán en los tres ámbitos de aplicación y en los tres órdenes de gobierno, como consecuencia, resulta indispensable conformar una ley general en materia de transparencia y acceso a la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

información pública y una ley general en materia de archivos, en la que se normarán los criterios bajo los cuales las autoridades generarán la información y la entrega de la misma.

Para efecto de establecer un contenido mínimo de las disposiciones que se deben regular, se presenta en el apartado 4 de este dictamen, denominado **Contenido de la Ley General**, en el que se muestra la descripción genérica que mínimamente debe contener tanto la Ley Reglamentaria del artículo 6° Constitucional; así como la Ley General de Archivos; en base a lo anterior y en obviada de repeticiones, se considera indispensable que el legislador atienda los parámetros referidos en el capítulo ya referido de éste dictamen.

IV.- Se modifican los artículos 76, 78 y 89 en los que se establece la forma de designación de los Comisionados, propuestos por el Ejecutivo Federal y facultando al Senado de la República para determinar una no objeción respecto de los comisionados del órgano garante propuestos, en los siguientes términos:

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. *Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Ejecutivo Federal, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley, y*

XIII. *Las demás que la misma Constitución le atribuya.*

Artículo 78. (...)

(...)

I. a VII. (...)



556

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley,

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 89. (...)

I. a XVIII. (...)

XIX. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.

(...).

Derivado de la designación de los comisionados del órgano garante, es necesario armonizar el articulado constitucional que permita otorgar facultades al Senado de la República y al Ejecutivo para la designación y no objeción en el nombramiento de los comisionados, la objeción, como se mencionó en apartados anteriores, es el mecanismo idóneo para la conformación de un esquema de coparticipación en la designación de los comisionados, ya que intervienen dos poderes de la unión que generan los contrapesos necesarios para un adecuado funcionamiento e independencia en las determinaciones y actuaciones del organismo garante del artículo 6° Constitucional; en este sentido y en obvia de repeticiones, podemos referir en éste apartado los razonamientos específicos que llevaron a la consideración de adoptar la figura de no objeción, para ello, resulta relevante referir lo establecido en el punto 5 de las Consideraciones Jurídicas de este dictamen denominado **Consideraciones Jurídicas**, en su apartado **2 Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante**, así como a las consideraciones vertidas en el punto II.4 de éste capítulo de **Análisis Particular del Contenido Propuesto**, en los cuales se muestran las razones jurídicas por las cuales se adoptó la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

determinación de considerar una no objeción en los nombramientos referidos.

V.- Se modifica el artículo 105, fracciones I y II en temas de controversias constitucionales y para promover acciones de inconstitucionalidad, en los siguientes términos:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a k). ...

l) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación.

m) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;

...

...

II. De las acciones de inconstitucionalidad ...

(...)

a) a f) (...)



558

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

g).- *La Comisión Nacional de los Derechos Humano, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.*

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

III (...)

En armonía con la eliminación o supresión del recurso extraordinario propuesto en una de las iniciativas en materia de transparencia, y en concordancia a la propuesta para la ampliación de los supuestos constitucionales de procedencia de las controversias constitucionales, en que se otorga legitimación activa para promover controversias en términos de los dispuesto por el artículo 105, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley Reglamentaria, se propone adicionar dos incisos en los que se establezcan los supuestos de procedencia del medio de control constitucional descrito, ampliando con



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

ello, el procesal constitucional para abarcar al Ejecutivo Federal y el Banco de México, reconociéndolos como sujetos con legitimación activa para promover controversias que se susciten entre dos órganos autónomos o bien, entre un órgano constitucional autónomo y la Federación, en ambos casos, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales relacionados con la dignidad humana, seguridad nacional o estabilidad económica.

En consecuencia, las Dictaminadoras acuerdan desechar la propuesta para promover un recurso extraordinario, relacionado con el peligro inminente a la seguridad nacional o a la estabilidad económica o financiera del país, contenido en la iniciativa del PRI- PVEM.

Asimismo, las Dictaminadoras consideran necesaria la modificación de la fracción I del artículo 105, con el objeto de que el órgano garante que se propone puedan ser sujetos activos y pasivos en una controversia constitucional. Lo anterior se sustenta en los siguientes razonamientos teóricos y jurídicos.

En los sistemas de control de la constitucionalidad contemporáneos se diseñan medios de control idóneos para resolver los conflictos entre los órganos del Estado, los cuales se denominan controversias constitucionales, controversias entre órganos, conflictos de competencias, o conflictos positivos y negativos, expresiones que hacen referencia a la finalidad de estos recursos, es decir, la solución jurisdiccional de las diferencias o controversias que surgen entre los organismos garantes de la transparencia y el Banco de México o el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus determinaciones, sean éstas actos u omisiones.

Consecuentemente, la legitimación procesal básica que debe preverse en el caso de estos medios de control se centra en los órganos constituidos del Estado, comúnmente conocidos como poderes públicos, nacionales, provinciales, comunitarios o sus equivalentes – federales, locales, municipales, etc., etc. –, los cuales pueden entrar en conflicto entre sí al ejercer su competencia, situación que se regula con base en distintas



557

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

hipótesis jurídicas, considerando por ejemplo, la naturaleza de la determinación que origina la controversia, o bien los conceptos de anticonstitucionalidad que se argumentan al plantearla.

Ahora bien, independientemente de que los conflictos de competencias se presentan con mayor frecuencia precisamente, entre los órganos tradicionales del Estado o Poderes Públicos, en los sistemas de control de la constitucionalidad más desarrollados se prevén los casos en los que estas controversias pueden involucrar a los órganos u organismos constitucionales autónomos, como suelen denominarse en nuestro país, como son los encargados de la protección de los Derechos Humanos, o los que ejercen algunas otras competencias especializadas por disposición constitucional.

Esto se debe a que el criterio fundamental para determinar la legitimación procesal activa y pasiva en las controversias constitucionales se basa en la existencia de un ámbito competencial previsto en las normas constitucionales a favor de los Poderes Públicos y de los Órganos Autónomos, cuya preservación en el caso de los conflictos de constitucionalidad, sólo puede lograrse mediante la acción directa de los órganos a los que se asigna, toda vez que por encima de ellos no se encuentra ninguna otra instancia facultada para evitar o resolver el conflicto y restablecer el orden constitucional interrumpido por el acto o la omisión que infringe la distribución de competencias señalada en la Constitución del Estado. A esto se debe que en estos sistemas de control, tratándose de los conflictos entre órganos, no se legitime a las entidades, dependencias, comisiones, ni a los comités que forman parte de alguno de los Poderes Públicos u organismos autónomos, sencillamente porque sólo a éstos se atribuye una competencia constitucional, independientemente de la estructura orgánica interna que corresponda a cada uno para ejercerla.

Tanto los especialistas en el tema, como los criterios jurisprudenciales en la materia, coinciden sobre el particular, según se advierte en estos dos ejemplos:



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

a) El tratadista español Ignacio Torres Muro ("La legitimación en los procesos constitucionales", Editorial Reus, Madrid, 2007, pág. 155) sostiene:

"Aparte de estas incertidumbres relativas respecto a los sujetos legitimados, es preciso resaltar también que las normas concurrentes excluyen cualquier tipo de participación en estos conflictos de quienes no ostenten la condición de órganos ejecutivos superiores de los entes en presencia. Así en la Administración del estado solamente podrá plantearlos el Gobierno y no ninguno de los muchos otros entes que la configuran. Lo mismo sucede con las Comunidades Autónomas, destacándose que deberán ser sus órganos colegiados ejecutivos, y nadie más, quienes activen estos mecanismos, que no están a disposición de otros órganos, ni, por supuesto, de entes locales o de otro tipo que pudieran pretender la defensa de los intereses de aquellas".

b) En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania ha mantenido un criterio jurisprudencial inequívoco en el sentido de que para que este órgano de control pueda conocer de estas controversias "debe tratarse de conflictos de constitucionalidad" entre órganos del Estado u órganos auxiliares (BVerfGE, 3/15).

En otros sistemas constitucionales como el de Italia, el Tribunal de Cuentas (Corte dei Conti) está legitimado para intervenir en los conflictos de constitucionalidad, condición que le ha reconocido jurisprudencialmente el Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) de manera inequívoca, tanto cuando actúa en calidad de órgano competente para el juicio contable, como cuando lo hace en tanto órgano fiscalizador de las cuentas públicas (Pisaneschi, A., I conflitti d'attribuzioni tra i poteri dello Stato", Presupposti e processo, Milano, 1992).

Tratándose de este mismo órgano, pero en España, el artículo 8 de la Ley del Tribunal de Cuentas (LOTcu) determina que "Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por el Tribunal Constitucional".

562

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En América Latina pueden encontrarse ejemplos de sistemas de control en los que se establece una legitimación amplia para los conflictos entre órganos y organismos, con base en fórmulas que abarcan a cualquiera de ellos, sin limitar su connotación a los Poderes Públicos del Estado, como puede advertirse en estos casos:

- a) En el artículo 202.3 de la Constitución de Perú se determina que entre las atribuciones del Tribunal Constitucional está la de “Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley”; y
- b) En Ecuador, el artículo 436 constitucional, apartado 7, señala que corresponde a la Corte Constitucional “dirimir los conflictos de competencias o de atribuciones entre funciones del Estado u órganos establecidos en la Constitución”.

Esta amplia legitimación procesal es necesaria y se justifica claramente, porque los conflictos entre los Poderes Públicos y los órganos autónomos pueden presentarse en diversos supuestos de colisión que no son privativos de los órganos tradicionales, toda vez que la base constitucional de estas posibles controversias es la asignación de un ámbito competencial previsto en la Constitución a un órgano determinado, el cual obviamente, puede ser uno de los Poderes Públicos del Estado, o bien, uno de los órganos especializados establecidos en los sistemas constitucionales como el nuestro, a los que se confiere una competencia directa en el propio texto constitucional, de lo que se deduce fácilmente que la controversia entre órganos no debe limitarse a algún tipo de ellos, sino debe preverse para cualquier caso en el que el órgano constitucionalmente competente pueda impugnar los actos o las omisiones de otro u otros, al considerar que infringen las prescripciones constitucionales vigentes, por ejemplo, en cuanto a la distribución de competencias.

En nuestro sistema constitucional, como se sabe, las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción I de la Ley Fundamental, fueron establecidas mediante la reforma constitucional que



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

entró en vigor en 1995, con base en la cual las antiguas hipótesis de conflictos entre órganos contempladas en la versión anterior de este mismo precepto, de escasísima aplicación, cedieron su lugar a supuestos normativos distintos, los cuales a lo largo de dieciocho años han sido permanentemente aplicados para resolver conflictos constitucionales entre los órganos del Estado.

No obstante, a diferencia de las acciones de inconstitucionalidad simultáneamente establecidas en la fracción II de este precepto, las controversias constitucionales no han sido modificadas desde la entrada en vigor del Decreto de Reformas constitucionales del 31 de Diciembre de 1994, manteniendo hasta la fecha la misma estructura con la que fueron incorporadas a nuestro sistema constitucional. Los únicos casos en los que este precepto ha sido reformado durante este período, de conformidad con los Decretos de fechas 8 de diciembre de 2005 y 15 de octubre de 2012, se refieren a la improcedencia de este recurso con relación a los conflictos entre Estados en materia de límites territoriales, aspecto regulado en el artículo 46 constitucional vigente, el cual no se refiere al control de la constitucionalidad.

En tales condiciones, la gradual ampliación de la legitimación procesal para interponer una acción de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico, con base en la cual los partidos políticos y las Comisiones protectoras de los Derechos Humanos pueden hacer uso de este medio de control en contra de leyes federales y locales de la materias respectivas, contrasta con la legitimación procesal que prevalece en las controversias constitucionales limitada a los Poderes Públicos federales, locales y municipales, la cual ha sido un obstáculo para que órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral puedan intervenir como partes en un juicio de este tipo.

Inclusive, tratándose de las Comisiones de Derechos Humanos, se advierte una incongruencia palmaria en nuestro sistema de control de la constitucionalidad, cuando se compara la legitimación procesal en el caso de estos dos medios de control, toda vez que estos órganos

564

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

constitucionales autónomos no pueden intervenir en las controversias constitucionales y en cambio, sí pueden ser parte activa en los juicios derivados de una acción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, si se toma en cuenta la evidente importancia que actualmente tienen los órganos autónomos en nuestro sistema constitucional y la conveniencia de que su intervención en los procesos de conformación y ejercicio del poder público en nuestro país se fortalezca, elementos que sirven de apoyo entre otros, para justificar la creación del Órgano Garante en materia de Transparencia y Acceso a la Información que se propone en esta iniciativa, resulta incuestionable la necesidad correlativa de conferirle a este nuevo órgano autónomo la legitimación activa y pasiva para intervenir en las controversias constitucionales reguladas en la fracción I del artículo 105 constitucional.

Para este efecto, se propone la adición de los incisos l) y m) a la fracción I del artículo 105 constitucional, en los cuales se prevén las controversias constitucionales entre dos órganos constitucionales autónomos como el organismo garante y el Banco de México; así como las controversias constitucionales entre el organismo garante con la Federación.

La fracción II del artículo 105 Constitucional corresponde a las acciones de inconstitucionalidad, mismas que se pueden proponer tratándose de posibles contradicciones de leyes y tratados internacionales aprobados por el Senado en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que contravengan disposiciones constitucionales, por ser el organismo garante el especialista en estos temas, se considera necesaria la facultad para impugnar vía acciones de inconstitucionalidad aquellas disposiciones relacionadas con los temas propuestos; en este sentido, podrá impugnar normas locales y del Distrito Federal que pretendan vulnerar los derechos que la propia Constitución otorga a la ciudadanía.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Cabe referir que el artículo 105 en sus fracciones I y II considera a los juicios de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, en los incisos a) a g) que actualmente contiene la Constitución se refieren a los sujetos legitimados y materias para interponer los medios de control constitucional citados, a saber:

- El 33% de las Cámaras del Congreso de la Unión,
- El Procurador General de la República,
- Las legislaturas locales,
- Los partidos políticos y
- La CNDH.

La redacción propuesta es coincidente con la que faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para impugnar leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República.

Por otra parte, se concede a los organismos locales la misma facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, pero únicamente relacionados con el ámbito local, así se generan controles federales como locales, en los cuales el organismo federal podrá incluso controvertir las normas locales, lo que genera un esquema completo de atención y protección de los derechos constitucionales.

VI.- Se modifican los artículos 108, 110 y 111, con la finalidad de sujetar a los comisionados del organismo garante federal, así como de los organismos locales al título IV de la Constitución para ser sujetos de responsabilidad administrativa y declaratoria de procedencia, en los siguientes términos:

Artículo 108.- (...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia

566

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional**, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)

Artículo 111. *Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.*

...

...

...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

*Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones
procedan como corresponda.*

...
...
...
...
...

Dada la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos, es importante garantizar que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, sus resoluciones de ser controversiales pueden implicar que las autoridades consideren afectaciones o intromisiones excesivas y por consiguiente puede generarse represalias en contra de sus comisionados, ello conlleva a dotar de mayor protección tanto en materia administrativa, como en materia penal a sus miembros; en este sentido, para ser sujetos de responsabilidad se deben agotar los procedimientos especiales contenidos en la norma constitucional, denominado juicio político, siendo la autoridad legislativa en funciones materialmente jurisdiccionales, quienes realizan la evaluación de las acusaciones y pruebas que acrediten la responsabilidad de los imputados; con ello, la autoridad encargada de verificar la imputación que se realice, recae en el legislativo el cual tendrá una visión distinta e imparcial de aquella que correspondería al Poder Ejecutivo el cual es sujeto obligado y puede tener cargas de imparcialidad en sus determinaciones.

Respecto a la declaratoria de procedencia, se propone incluir a los comisionados del organismo garante, con la finalidad de dotar de una mayor protección respecto a las diversas imputaciones que busquen mermar el actuar de los funcionarios referidos, por ello, resulta indispensable que la Constitución proteja a la figura de comisionados para brindar la seguridad jurídica en el desempeño de sus funciones y la adecuada aplicación del principio de imparcialidad y objetividad de los que se dota a el organismo en su actuar.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En virtud de lo anterior se propone reformar los artículos 108, 110 y 111 de nuestra Constitución, ya que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones.

VII.- Se modifican los artículos 116 y 122, con la finalidad de armonizar las facultades del organismo garante federal, con las facultades de los organismos garantes de los Estados y el Distrito Federal, en los siguientes términos:

Artículo 116. (...)

I a VII (...)

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

Artículo 122. (...)



540

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

BASE PRIMERA (
I a IV (...)

V (...)
a) a n) (...)

ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)

La disposición normativa constitucional contenida en el artículo 6° Constitucional que se propone, establece un nuevo sistema de autonomía en los organismos garantes del derecho de acceso a la información, las modificaciones se presentan a la norma suprema de la federación, la cual considera la normativa que debe ser atendida por los Estados y el Distrito Federal, así, se presentan modificaciones a los artículos que establecen bases de organización en los Estados de la República, en la que se describe de manera general, la necesidad de crear organismos garantes en los Estados y el Distrito Federal, además se incluyen los principios bajo los cuales deben proceder en la creación de dichos organismos, así como la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.

Se establece igualmente la coordinación con la entidad de fiscalización de los Estados y la autoridad en materia de archivos; ello genera certeza y homogenización en los procesos federal y local que se lleven a cabo en ambas aplicaciones de ley, con ello, se garantiza que existirá una normativa igual en los procedimientos locales lo que permitirá que el organismo federal pueda resolver en segunda instancia sobre las determinaciones primigenias.

VIII.- Se establecen bases transitorias que permiten la armonización de las disposiciones constitucionales respecto a las particularidades que genera la creación de un nuevo organismo, en los siguientes términos:

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente Decreto.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

a) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de noviembre de 2017.

b) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.

c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.

f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, continuará ejerciendo las atribuciones correspondientes.

Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas en materia de transparencia el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ejercerá sus atribuciones y competencias



574

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente.

Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Las bases transitorias establecen los plazos y términos en que se deben modificar las legislaciones afectadas, tanto a nivel federal, como a nivel estatal y del Distrito Federal; se establecen igualmente las bases transitorias en las que se define la continuación del encargo de los actuales Comisionados del Instituto Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública; la designación de los dos nuevos Comisionados y el escalonamiento que se debe generar en sus cargos; entre otros.

Con base en los puntos anteriores, las Comisiones Unidas procedieron a realizar sus consideraciones, aprobando el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Estudios Legislativos Primera; de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, IV Y V, Y EL PÁRRAFO SEGUNDO, PARA QUEDAR COMO APARTADO A, Y SE ADICIONA UN APARTADO B AL ARTÍCULO 6; SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXIX-R y XXIX-S DEL ARTÍCULO 73; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 76 Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE; SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 78; SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 89; SE ADICIONAN LOS INCISOS l) Y m) A LA FRACCIÓN I, Y EL INCISO h) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 105; SE REFORMA EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 108; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 110; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 111; SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 116; SE REFORMA EL INCISO ñ) Y SE RECORREN LOS INCISOS o) Y p), ADICIONÁNDOSE UN INCISO q) DE LA FRACCIÓN V, DE LA BASE PRIMERA DEL APARTADO C DEL ARTÍCULO 122, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,



54

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II (...)

III (...)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos **que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.**

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el **ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.**

VI. a VII. (...)

B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.

Este organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión

En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva de la información, en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.



578

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Artículo 73. (...)

I. a XXIX-Q (...)

XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos

XXX. (...)

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (...)

(...)



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

I. a VII. (...)

VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley,

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 89. (...)

I. a XVIII. (...)

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;

XX (...)

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a k).(...)

I) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus



582

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación.

m) Los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;

(...)
(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad ...

(...)

a) a g (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)
(...)
(...)

III (...)
(...)
(...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(...)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional**, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los **organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)
(...)
(...)
(...)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y **los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional** por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(...)
(...)
(...)



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, **en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía** se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

Artículo 116. (...)

(...)

I a VII (...)

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

Artículo 122. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A. a C. (...)

BASE PRIMERA (...)

I a IV (...)

V (...)

a) a n) (...)

ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)

D a H (...)

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.



588

**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente Decreto.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de noviembre de 2017.
- b) Propondrá a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, continuará ejerciendo las atribuciones correspondientes.

Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas en materia de transparencia el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente.

Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano descentralizado, y posteriormente ante el organismo público autónomo federal creado en los términos del presente Decreto.

Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a



**DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS PRIMERA; DE GOBERNACIÓN Y
DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**

formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.


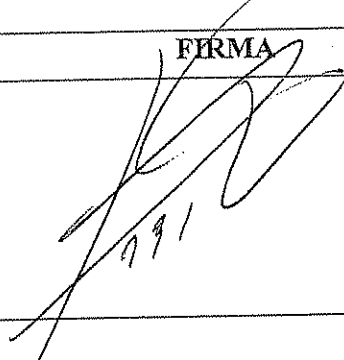

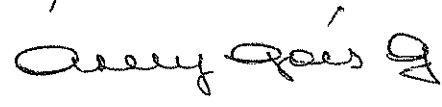

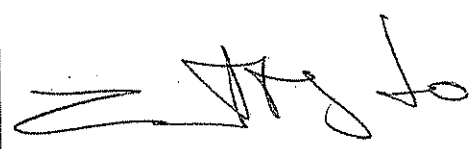



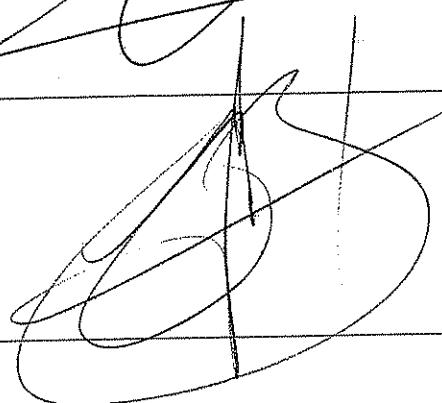
Sala de Comisiones del Senado de la República, a 19 de diciembre de 2012.



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8ª SESIÓN ORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 10:00 HORAS,
P.B. DEL HEMICICLO, SALA 2 Y 5.




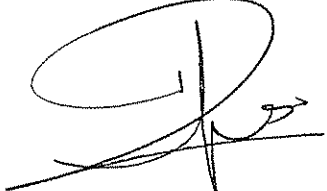

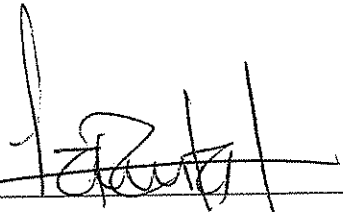

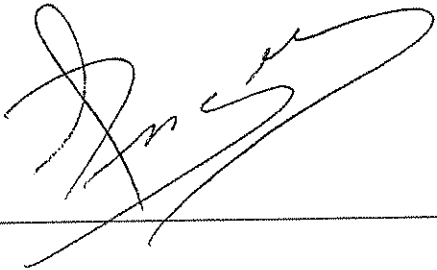
LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE		FIRMA
	SEN. PABLO ESCUDERO MORALES Presidente PVEM	
	SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ Secretaria PRI	
	SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT Secretaria PAN	
	SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA Integrante PRI	
	SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO Integrante PRI	



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8ª SESIÓN ORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 10:00 HORAS,
P.B. DEL HEMICICLO, SALA 2 Y 5.

NOMBRE		FIRMA
	SEN. MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Integrante PRI	
	SEN. ROBERTO GIL ZUARTH Integrante PAN	
	SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Integrante PAN	
	SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Integrante PRD	



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN,
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

LISTA DE ASISTENCIA

18 de diciembre 16:00 horas

Salas 3 y 4 Planta Baja del Hemiciclo.

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN
PRESIDENTE

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA
SECRETARIO

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO
SECRETARIO

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE
INTEGRANTE

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ
INTEGRANTE



597

**SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE
GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA.**

**REUNIÓN DE TRABAJO
19 DE DICIEMBRE DE 2012, 10:00 HRS.
REGISTRO DE ASISTENCIA**

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Senadora Cristina Díaz Salazar (Presidenta)

Senador Héctor Larios Córdova (Secretario)

Senador Armando Ríos Piter (Secretario)

Senador Luis Armando Melgar Bravo (Secretario)

Senador Miguel Romo Medina (Integrante)

Senador Gerardo Sánchez García (Integrante)



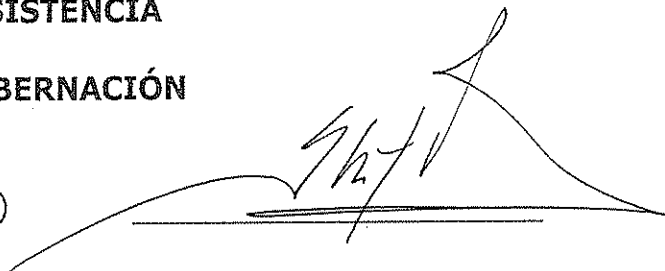
595

**SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE
GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA.**

**REUNIÓN DE TRABAJO
19 DE DICIEMBRE DE 2012, 10:00 HRS.
REGISTRO DE ASISTENCIA**

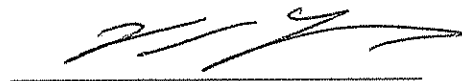
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Senadora Graciela Ortíz González (Integrante)



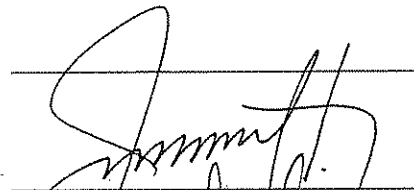
Senador Omar Fayad Meneses (Integrante)

Senador Fernando Yunes Márquez (Integrante)



Senador Salvador Vega Casillas (Integrante)

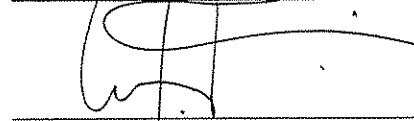
Senador Javier Corral Jurado (Integrante)



Senador Raúl Morón Orozco (Integrante)



Senador Manuel Camacho Solís (Integrante)



Senadora Mónica T. Arriola Gordillo (Integrante)


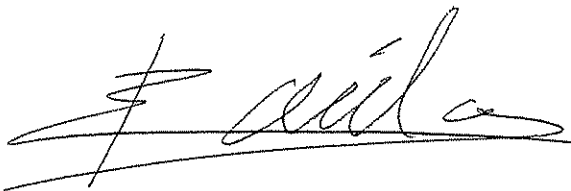

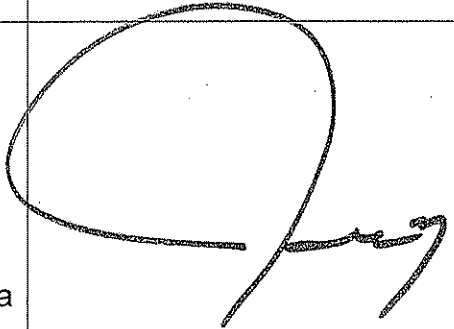


Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza
(Integrante)

REGISTRO DE ASISTENCIA


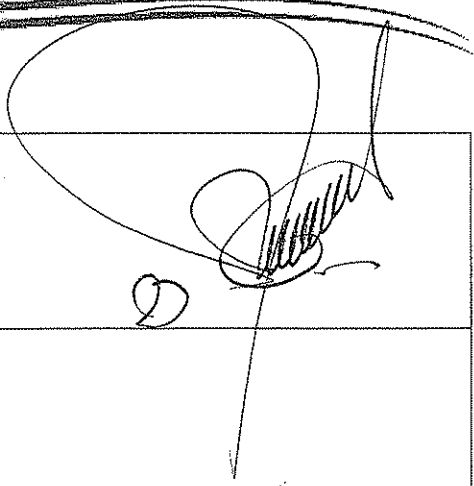


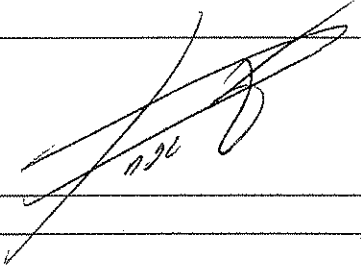
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

19 de diciembre de 2012

Nombre		Firma
Junta Directiva		
	Sen. Raúl Cervantes Andrade (Presidente)	
	Sen. José María Martínez Martínez (Secretario)	
	Sen. Alejandro Encinas Rodríguez (Secretario)	

Integrantes	
 Daniel Amador Gaxiola	
 Sen. Arely Gómez González	
 Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo	
 Sen. Ricardo Barroso Agramont	
 Sen. David Penchyna Grub.	
 Sen. Raúl García Guzmán	
 Sen. Sonia Mendoza Díaz	
 Sen. Fernando Torres Graciano.	

 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya	
 Sen. Adán Augusto López Hernández.	
 Sen. Pablo Escudero Morales	

PUNTOS CONSTITUCIONALES

Sen. Raúl Cervantes Andrade
PRESIDENTE



Sen. José María Martínez Martínez
SECRETARIO



Sen. Pablo Escudero Morales
INTEGRANTE



Sen. Arely Gómez González
INTEGRANTE



Sen. Alejandro de Jesús Encina
Rodríguez
SECRETARIO



Sen. Daniel Amador Gaxiola
INTEGRANTE



Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo
INTEGRANTE



Raúl Cervantes Andrade

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE
AL DICTAMEN EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

José María Martínez Martínez

Arely Gómez González

Alejandro de Jesús Encina Rodríguez

Daniel Amador Gaxiola

Diva Hadamira Gastélum Bajo

Sen. Ricardo Barroso Agramunt
INTEGRANTE



Sen. David Penchyna Grub
INTEGRANTE



Sen. Sonia Mendoza Díaz
INTEGRANTE



Sen. Fernando Torres Graciano
INTEGRANTE



Sen. Raúl Gracia Guzmán
INTEGRANTE



Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya
INTEGRANTE



Sen. Adán Augusto López Hernández
INTEGRANTE



[Handwritten signatures and scribbles across the right side of the page, including the name 'Ortiz' and 'Gracia']

GOBERNACION

Sen. María Cristina Díaz Salazar
PRESIDENTA



Sen. Héctor Larios Córdova
SECRETARIO



Sen. Armando Ríos Piter
SECRETARIO



Sen. Luís Armando Melgar Bravo
SECRETARIO



Sen. Omar Fayad Meneses
INTEGRANTE



Sen. Miguel Romo Medina
INTEGRANTE



Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo
INTEGRANTE
(INDE)

Sen. Gerardo Sánchez García
INTEGRANTE



Sen. Graciela Ortiz González
INTEGRANTE



Sen. Fernando Yunes Márquez
INTEGRANTE



Sen. Salvador Vega Casillas
INTEGRANTE



Sen. Javier Corral Jurado
INTEGRANTE



Sen. Raúl Morón Orozco
INTEGRANTE



Sen. Víctor Manuel Camacho Solís
INTEGRANTE



Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza
INTEGRANTE



[Handwritten signatures and marks over horizontal lines]

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Sen. Raúl Gracia Guzmán
PRESIDENTE



Sen. Miguel Ángel Chico Herrera
SECRETARIO



Sen. Zoé Robledo Aburto
SECRETARIO



Sen. Raúl Cervantes Andrade
INTEGRANTE



Sen. Sonia Mendoza Díaz
INTEGRANTE



Raúl Gracia

Miguel Ángel Chico Herrera

Zoé Robledo Aburto

Raúl Cervantes Andrade

Sonia Mendoza Díaz

ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Sen. Pablo Escudero Morales

PRESIDENTE

Sen. Arely Gómez González

SECRETARIA

Sen. María Marcela Torres Peimbert

SECRETARIA

Sen. Daniel Amador Gaxiola

INTEGRANTE

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo

INTEGRANTE

Sen. María del Rocío Pineda Gochi

INTEGRANTE

Sen. Roberto Gil Zuarth

INTEGRANTE

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández

INTEGRANTE

Sen. Angélica de la Peña Gómez

INTEGRANTE

REGISTRO DE ASISTENCIA


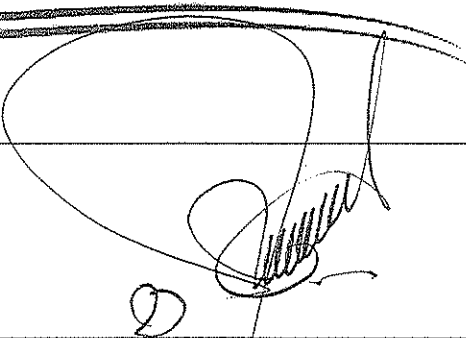


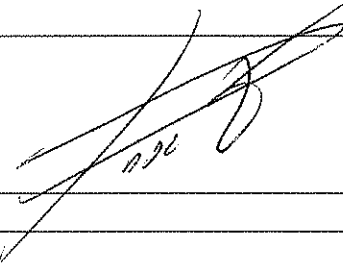
SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE GOBERNACIÓN Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

19 de diciembre de 2012

Nombre	Firma
Junta Directiva	
 Sen. Raúl Cervantes Andrade (Presidente)	
 Sen. José María Martínez Martínez (Secretario)	
 Sen. Alejandro Encinas Rodríguez (Secretario)	

Integrantes	
 Daniel Amador Gaxiola	
 Sen. Arely Gómez González	
 Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo	
 Sen. Ricardo Barroso Agramont	
 Sen. David Penchyna Grub.	
 Sen. Raúl García Guzmán	
 Sen. Sonia Mendoza Díaz	
 Sen. Fernando Torres Graciano.	

 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya	
 Sen. Adán Augusto López Hernández.	
 Sen. Pablo Escudero Morales	



688

**SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE
GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA.**

**REUNIÓN DE TRABAJO
19 DE DICIEMBRE DE 2012, 10:00 HRS.
REGISTRO DE ASISTENCIA**

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Senadora Cristina Díaz Salazar (Presidenta)

Senador Héctor Larios Córdova (Secretario)

Senador Armando Ríos Piter (Secretario)

Senador Luis Armando Melgar Bravo (Secretario)

Senador Miguel Romo Medina (Integrante)

Senador Gerardo Sánchez García (Integrante)



609

**SENADO DE LA REPÚBLICA
LXII LEGISLATURA
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA; DE
GOBERNACIÓN Y DE ANTICORRUPCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE
TRANSPARENCIA.**

**REUNIÓN DE TRABAJO
19 DE DICIEMBRE DE 2012, 10:00 HRS.
REGISTRO DE ASISTENCIA**

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Senadora Graciela Ortíz González (Integrante)

Senador Omar Fayad Meneses (Integrante)

Senador Fernando Yunes Márquez (Integrante)

Senador Salvador Vega Casillas (Integrante)

Senador Javier Corral Jurado (Integrante)

Senador Raúl Morón Orozco (Integrante)

Senador Manuel Camacho Solís (Integrante)

Senadora Mónica T. Arriola Gordillo (Integrante)

Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza
(Integrante)



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN,
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

LISTA DE ASISTENCIA
18 de diciembre 16:00 horas
Salas 3 y 4 Planta Baja del Hemiciclo.

SENADOR RAÚL GRACIA GUZMÁN
PRESIDENTE

SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA
SECRETARIO

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO
SECRETARIO

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE
INTEGRANTE

SENADORA SONIA MENDOZA DÍAZ
INTEGRANTE



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8ª SESIÓN ORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 10:00 HORAS,
P.B. DEL HEMICICLO, SALA 2 Y 5.

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE		FIRMA
	SEN. PABLO ESCUDERO MORALES Presidente PVEM	
	SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ Secretaria PRI	
	SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT Secretaria PAN	
	SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA Integrante PRI	
	SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO Integrante PRI	



612

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8ª SESIÓN ORDINARIA
19 DE DICIEMBRE DE 2012, A LAS 10:00 HORAS,
P.B. DEL HEMICICLO, SALA 2 Y 5.

NOMBRE		FIRMA
	SEN. MARÍA DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Integrante PRI	
	SEN. ROBERTO GIL ZUARTH Integrante PAN	
	SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Integrante PAN	
	SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ Integrante PRD	

PUNTOS CONSTITUCIONALES

Sen. Raúl Cervantes Andrade
PRESIDENTE



Sen. José María Martínez Martínez
SECRETARIO



Sen. Pablo Escudero Morales
INTEGRANTE



Sen. Arely Gómez González
INTEGRANTE



Sen. Alejandro de Jesús Encina
Rodríguez
SECRETARIO



Sen. Daniel Amador Gaxiola
INTEGRANTE



Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo
INTEGRANTE



Raúl Cervantes Andrade

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE
AL DICTAMEN EN MATERIA DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA

José María Martínez Martínez

Arely Gómez González

Alejandro de Jesús Encina Rodríguez

Daniel Amador Gaxiola

Diva Hadamira Gastélum Bajo

Sen. Ricardo Barroso Agramunt
INTEGRANTE



Sen. David Penchyna Grub
INTEGRANTE



Sen. Sonia Mendoza Díaz
INTEGRANTE



Sen. Fernando Torres Graciano
INTEGRANTE



Sen. Raúl Gracia Guzmán
INTEGRANTE



Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya
INTEGRANTE



Sen. Adán Augusto López Hernández
INTEGRANTE



[Handwritten signatures and scribbles across the right side of the page, including the word 'Orta' and 'Gracia']

GOBERNACION

Sen. María Cristina Díaz Salazar
PRESIDENTA



Sen. Héctor Larios Córdova
SECRETARIO



Sen. Armando Ríos Piter
SECRETARIO



Sen. Luís Armando Melgar Bravo
SECRETARIO



Sen. Omar Fayad Meneses
INTEGRANTE



Sen. Miguel Romo Medina
INTEGRANTE



Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo
INTEGRANTE
(INDE)

Sen. Gerardo Sánchez García
INTEGRANTE



Sen. Graciela Ortiz González
INTEGRANTE



Sen. Fernando Yunes Márquez
INTEGRANTE



Sen. Salvador Vega Casillas
INTEGRANTE



Sen. Javier Corral Jurado
INTEGRANTE



Sen. Raúl Morón Orozco
INTEGRANTE



Sen. Víctor Manuel Camacho Solís
INTEGRANTE



Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza
INTEGRANTE



[Handwritten signatures and marks over horizontal lines]

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA

Sen. Raúl Gracia Guzmán
PRESIDENTE



Sen. Miguel Ángel Chico Herrera
SECRETARIO



Sen. Zoé Robledo Aburto
SECRETARIO



Sen. Raúl Cervantes Andrade
INTEGRANTE



Sen. Sonia Mendoza Díaz
INTEGRANTE



Raúl Gracia
Miguel Ángel Chico Herrera
Zoé Robledo Aburto
Raúl Cervantes Andrade

ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Sen. Pablo Escudero Morales
PRESIDENTE



Sen. Arely Gómez González
SECRETARIA



Sen. María Marcela Torres Peimbert
SECRETARIA



Sen. Daniel Amador Gaxiola
INTEGRANTE



Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo
INTEGRANTE



Sen. María del Rocío Pineda Gochi
INTEGRANTE



Sen. Roberto Gil Zuarth
INTEGRANTE



Sen. Laura Angélica Rojas Hernández
INTEGRANTE



Sen. Angélica de la Peña Gómez
INTEGRANTE





79
fórnese a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales, de Transparencia
y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias, **MESA DIRECTIVA**
662
para dictamen.
Diciembre 21 del 2012. **OFICIO No. DGPL-1P1A.-4055**


México, D. F., a 20 de diciembre de 2012.

**CC. SECRETARIOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
PRESENTES**

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes
expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**



Atentamente


SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
Vicepresidente



634

664

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I, IV y V, y el párrafo segundo, para quedar como apartado A, y se adiciona un apartado B al artículo 6; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S del artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 78; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adicionan los incisos l) y m) a la fracción I, y el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el inciso ñ) y se recorren los incisos o) y p), adicionándose un inciso q) de la fracción V, de la base primera del apartado C del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza



635

665

recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. (...)

III. (...)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. a VII. (...)

B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.





636

666

Este organismo se registrará por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.



637

667

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.



El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

Artículo 73. (...)

I. a XXIX-Q (...)



639
669

XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. (...)

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley, y

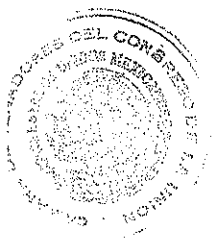
XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (...)

(...)

I. a VII. (...)

VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley,





6/10

6/10

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 89. (...)

I. a XVIII. (...)

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;

XX. (...)

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a k). (...)

l) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación.

m) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;

(...)

(...)

II. De las acciones de inconstitucionalidad ..



641
641

(...)

a) a g) (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)

III. (...)

(...)

(...)

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.





692

672

(...)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)



643

673

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(...)

(...)

(...)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 116. (...)





674
674

(...)
I. a VII. (...)

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

Artículo 122. (...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)

A. a C. (...)

BASE PRIMERA (...)
I. a IV. (...)

V. (...)

a) a n) (...)





645
675

ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos u organismos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del Distrito Federal, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas;

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)

D a H (...)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



646

676

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6º de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

TERCERO.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente Decreto.

CUARTO.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República o la Comisión Permanente, especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1º de noviembre de 2017.
- b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.



647

647

d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2021.

f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

QUINTO.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

SEXTO.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

SÉPTIMO.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, ejercerá las atribuciones correspondientes.

OCTAVO.- En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas en materia de transparencia el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.



648

678

NOVENO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se substanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.

DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
México, D.F., a 20 de diciembre de 2012.



SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES
Vicepresidente

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA
Secretaria

Se remite a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.- México, D. F., a 20 de diciembre de 2012.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios

1

CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

LXII LEGISLATURA

AÑO PRIMERO SECCIÓN SEPTIMA NÚMERO 1112
COMISIÓN ES UNIDAS DE: PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN Y DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

México, D.F., a 21 de diciembre DE 2012.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 Y 122 DE LA.- Minuta Proyecto de Decreto que remite la H. Cámara de Senadores.

ÍNDICE "C" FOJA 60 LIBRO VII LD 496



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

658

689

*Secretaría de
Publicidad.
Agosto 21 del 2013.*

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

DICTAMEN

*Con fundamento en el
Artículo 230 numeral
Vuelto
Agosto 22 del 2013.*

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.

1. El 06 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno del Senado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona el numeral IV y adiciona numeral 8 del artículo 6º; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 29; adiciona la fracción XXIX-R y XXIX y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma el numeral 1 inciso g) y se recorren los

57
690

De conformidad con lo que establece el Artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad, agosto veintiuno del dos mil trece. Con fundamento en el Artículo 230 numeral 3 del Reglamento supra citado, la Presidencia anuncia la discusión del Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. En términos del Artículo 230, numeral 2, del Reglamento supra citado, hace uso de la tribuna el Diputado Julio César Moreno Rivera Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, para fundamentar el Dictamen y presentar propuestas de modificación al Dictamen, en votación económica, se aceptan los cambios y pasan a formar parte del dictamen. Hacen uso de la tribuna los siguientes Diputados: Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar moción suspensiva; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar moción suspensiva; en votación económica, se desechan las mociones suspensivas. De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 230 numeral 1 del Reglamento supra citado, hacen uso de la tribuna para fijar la posición de su Grupo Parlamentario los siguientes Diputados: Luis Antonio González Roldán del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Amalia Dolores García Medina del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución



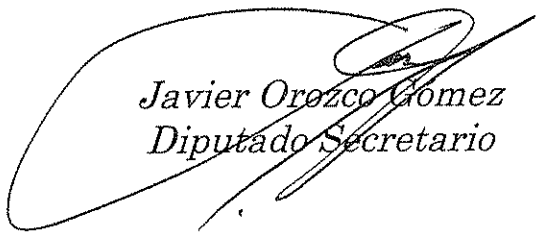
Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario

Página 1 de 6

Cámara de Diputados. LXII Legislatura
Dirección de Trámite Legislativo de la
Dirección General de Proceso Legislativo
A Azcoytia A. / vchm

661
692

Democrática; José Alfredo Botello Montes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia está a discusión en lo general, hacen uso de la tribuna los siguientes Diputados: Elizabeth Oswelia Yáñez Robles del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro; Francisco Alfonso Durazo Montaña del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra; Rubén Acosta Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en pro; Luisa María Alcalde Luján del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra; Roberto Carlos Reyes Gámiz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Ricardo Monreal Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, en contra; Areli Madrid Tovilla del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en contra; Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Marcos Rosendo Medina Filigrana del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en pro. Agotado el registro de oradores y considerado suficientemente discutido, la Presidencia informa que se reservaron los Artículos 6º y tercero transitorio, para discutirlo en lo particular e instruye a la Secretaría para que active el sistema de votación electrónica, por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los Artículos no reservados, se emiten: cuatrocientos dieciocho votos en pro, veinticinco votos en contra y una abstención. Aprobado en lo



*Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario*

Página 2 de 6

Cámara de Diputados. LXII Legislatura
Dirección de Trámite Legislativo de la
Dirección General de Proceso Legislativo
A Azcoyúa A. / vchn

663
694

general y en lo particular los Artículos no reservados por cuatrocientos dieciocho votos. La Presidencia informa que han sido reservados para su discusión en lo particular, los Artículos 6° y tercero transitorio. De conformidad con el Artículo 110 del Reglamento citado, se abre la discusión en lo particular, hacen uso de la tribuna los siguientes Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva de modificación al artículo 6° apartado A fracción I base primera, párrafo segundo Inciso I, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva de modificación al artículo 6° apartado A fracción I base primera, párrafo segundo Inciso I, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva de modificación al artículo 6° apartado A fracción I base primera, párrafo segundo Inciso I, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Gloria Bautista Cuevas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva de modificación al artículo 6° apartado A fracción I base primera, adición de un inciso J, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Nelly del Carmen Vargas Pérez, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción I Base Octava, párrafo primero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción I, Base



Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario

645
696

Octava, párrafo primero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Zuleyma Huidobro González del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción I, Base Octava, párrafo primero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, retira su reserva; Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción I, Base Octava, párrafo segundo, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Víctor Manuel Jorrín Lozano del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción I, Base Octava, párrafo tercero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Juan Luis Martínez Martínez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción II, párrafo primero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; José Luis Valle Magaña del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción II, párrafo tercero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Alfonso Durazo Montaña del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción II, párrafo cuarto, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Loretta Ortiz Ahlf del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, retira su reserva; José Luis Muñoz Soria del Grupo Parlamentario del Partido


Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario

667
648

de la Revolución Democrática, retira su reserva; Merilyn Gómez Pozos del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción II, párrafo sexto, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Francisco Coronato Rodríguez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción II, adición de un párrafo once, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Aleida Alavez Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado A fracción VIII, párrafo séptimo, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Loretta Ortiz Ahlf del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva de modificación al artículo 6° Apartado B, párrafo primero, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Loretta Ortiz Ahlf del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar reserva de modificación al artículo tercero transitorio, en votación económica, se desecha y queda en sus términos; Aida Fabiola Valencia Ramírez del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar reserva de modificación al artículo tercero transitorio, en votación económica, se desecha y queda en sus términos. La Presidencia instruye a la Secretaria active el sistema de votación electrónico por cinco minutos para recoger la votación nominal de los artículos 6° y tercero Transitorio en sus términos, se emiten: trescientos noventa y dos votos en pro, cuarenta votos en contra y tres abstenciones. Aprobados los Artículos 6° y tercero transitorio en sus términos. Aprobado en lo general y en lo



Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario

669
700

particular el Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6º, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del Artículo 72 Constitucional. Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro Distrito Federal a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece.



Javier Orozco Gómez
Diputado Secretario



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

660
891

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

subsecuentes del artículo 105; se adiciona el primer párrafo del artículo 110; se adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adiciona la fracción p y q y se recorre la subsecuente, se adiciona una base sexta del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó rectificar el turno de dicha Iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
3. El 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos



Comisión de Puntos Constitucionales

652
673

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. Con fecha 9 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó rectificar el turno de dicha Iniciativa para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen.
5. El 04 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio, en representación de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



664
695
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la Iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva, comunicó la rectificación de turno de las Iniciativas en materia de transparencia descritas con anterioridad, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
7. El 19 de diciembre de 2012, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, se discutió y aprobó el Proyecto de Dictamen.



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

666
697

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

8. El 20 de diciembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.
9. El 21 de diciembre de 2012, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados, el expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Reglamentarias, la Minuta antes mencionada, para su análisis, estudio y elaboración de dictamen correspondiente.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

II.- CONTENIDO DE LA MINUTA.

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta Comisión considera que dada la relevancia del tema se hace transcripción de las consideraciones del Dictamen aprobado por el Senado de la República, bajo lo siguiente:

"[...] del análisis detallado y pormenorizado realizado por las Comisiones Unidas a las tres iniciativas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios en materia de transparencia y acceso a la información que se describen en los apartados que anteceden del presente dictamen, encontramos que existe coincidencia plena sobre los siguientes temas:

1) Autonomía del órgano garante federal: *Se propone que el órgano garante cuente con autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y patrimonio propios.*

2) Número de integrantes del órgano garante federal: *Se propone que se integre por 7 miembros.*

3) Renovación escalonada: *Coinciden en que la renovación de los integrantes del órgano garante se realice de forma escalonada.*

4) Legitimación para promover acción de inconstitucionalidad: *Se otorga al órgano garante federal, facultad para promover acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes*



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

670

701

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

en los Estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el organismo garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

5) Sujeto excluido de la competencia del órgano garante: *Se propone que se encuentre excluida de la competencia del órgano garante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.*

6) Responsabilidad política de los integrantes del órgano garante: *Se establece que los miembros del órgano garante puedan ser sujetos de juicio político.*

7) Mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos ante órganos autónomos: *Se propone establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, que se sustanciarán ante los organismos autónomos que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).*

8) Facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia: *Se propone que el Congreso de la Unión tenga facultad para expedir una ley general en materia de acceso a la información y protección de datos personales, permitiendo por ende, la subsistencia de ley federal respectiva.*

9) Existencia de órganos garantes en los Estados y el Distrito Federal: *Se propone que en las constituciones de los Estados se establezcan organismos dotados de autonomía y especializados responsables de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar con personalidad jurídica y patrimonio propio.*

Tratándose de la Asamblea legislativa del Distrito Federal, se le faculta para legislar en materia de acceso a la información y protección de datos personales.



Comisión de Puntos Constitucionales

671
702

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por otro lado, las Dictaminadoras identificaron dos temas que requieren un estudio más profundo para poder lograr un consenso entre todos los Grupos Parlamentarios representados en las Comisiones Unidas, a saber:

- 1) Sujetos obligados.*
- 2) Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante.*

[...]

- 1) En las treinta y dos entidades federativas (32), se considera como sujetos obligados a: poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos autónomos.*
- 2) En treinta y un entidades federativas (31), los Ayuntamientos son sujetos obligados, excepto en el Distrito Federal, por organización administrativa.*
- 3) En veintitrés (23) entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, son sujetos obligados las instancias o personas que manejan recursos públicos.*
- 4) Sólo en nueve (9) entidades federativas: Chiapas, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, no son sujetos obligados las instancias o personas que manejan recursos públicos.*

[...] podemos extraer las siguientes conclusiones:

- 1) Actualmente a nivel federal, los partidos políticos nacionales son sujetos obligados indirectos en materia de transparencia, a través del Instituto Federal Electoral, es decir:*

- Responden a solicitudes de información vía IFE.*
- Están obligados a difundir información, sin que medie solicitud de información, en diversas materias tales como: documentos básicos y normatividad interna, directorio de cargos y sueldos, convocatorias para la elección de dirigentes y candidatos, resoluciones de órganos disciplinarios que hayan causado estado, así como recursos públicos canalizados a sus órganos en los estados y sus informes ordinarios y de campaña, entre otros.*



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

2) En dieciocho (18) entidades federativas las legislaciones, excepto en el Estado de Chiapas, la legislaciones locales considera a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de transparencia y acceso a la información.

3) En trece (13) entidades federativas consideran sujetos obligados indirectos a los partidos políticos, conforme a la legislación federal, son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

[...]

2. Mecanismo de designación de los integrantes del órgano garante.

De la revisión a las leyes locales de las entidades federativas, respecto al mecanismo de nombramiento de los integrantes de los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información, se obtuvo que:

[...]

a) No existe un mecanismo uniforme respecto al mecanismo de nombramiento de los integrantes del órgano garante.

b) Se tienen mecanismos mixtos para el nombramiento en los que:

i. Interviene el Ejecutivo local, enviando la propuesta de nombramiento, en los casos de: Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

ii. La Legislatura Local realiza el proceso de nombramiento mediante convocatoria: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, DF, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

c) Por tanto, no existe una tendencia dominante en las entidades federativas respecto al establecimiento de un solo mecanismo de nombramiento de los integrantes de los organismos garantes en materia de transparencia.

[...] Características generales de los órganos constitucionales autónomos.

La Constitución no reconoce un mismo tipo de autonomía constitucional. El Constituyente Permanente la ha venido construyendo conforme la realidad social y política del país lo ha demandado. Para dicho efecto, ha mandatado la constitución



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de órganos a los cuales se les han asignado atribuciones que antes estaban asignadas a los tres Poderes constituyentes de la Nación.

Conforme a la doctrina constitucional, por "poder constituyente" se entiende al órgano creador de la Constitución de un orden jurídico; esto es, al órgano que crea al conjunto de normas fundamentales positivas de un orden jurídico específico.

Tomando en cuenta que estrictamente, la Constitución de un orden jurídico puede ser producida a través de un acto o de un conjunto de actos, directamente encaminado a tal efecto, o bien, a través de un procedimiento consuetudinario de creación. Por lo mismo, el "poder constituyente", es aquel que crea una Constitución y en este sentido, organiza a una nación en cualquier tiempo y en cualquier ámbito geográfico.

En este sentido, el Constituyente de 1917 es el que creó a los órganos constituidos del Poder, que en su origen, fueron los tres Poderes de la Unión Federal. Sin embargo, el mismo poder constituyente le reservó facultades al Constituyente Permanente para que éste reformara a la Constitución. Éste, haciendo uso de dicha facultad, ha decidido retirar algunas facultades a los órganos constituidos originales para trasladárselas a nuevos órganos constituidos, a los que genéricamente, se han denominado como "órganos constitucionales autónomos".

Es así que se podría determinar una jerarquía constitucional que parte en primer lugar del pueblo, el Poder Supremo; en segundo lugar, está el Poder Constituyente de 1917, que fue el depositario del mandato popular emanado de la Revolución Mexicana. En tercer lugar, está el Constituyente Permanente, que tiene la facultad exclusiva de reformar a la Constitución. En cuarto sitio lo ocupan los Órganos Constituidos o Poderes Constituidos, a saber, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y en quinto sitio, se encuentran los órganos constitucionales autónomos, que reciben su investidura y sus facultades directamente del Constituyente Permanente, y para cuya conformación, es necesaria la intervención de uno o dos de los Poderes Constituidos.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

c) Reflexiones sobre los mecanismos de nombramientos que la Constitución señala para los órganos constitucionales autónomos y para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Constitución señala dos mecanismos generales de nombramiento para los órganos constitucionales autónomos:

1. El nombramiento compartido, es decir, aquel que requiere la intervención de dos de los Poderes Constituidos, como es el caso del INEGI y BANXICO donde participa el Ejecutivo y el Senado, o en su ausencia, por la Comisión Permanente.

2. El nombramiento exclusivo, es decir, aquel que requiere sólo la intervención de uno de los Poderes Constituidos, como es el caso del IFE, la ASF y de la CNDH. En los dos primeros, a cargo de la Cámara de Diputados, mientras que en el segundo, del Senado de la República.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es uno de los Poderes Constituidos, la Constitución mandata la intervención del Senado de la República para aprobar las ternas que le someta el Presidente de la República, teniendo éste una facultad de veto limitada, puesto que si en dos ocasiones los representantes de la Unión Federal no logran ponerse de acuerdo, el Presidente está facultado para hacer el nombramiento directo. Ello es así, debido a que la Corte es uno de los Poderes Constituidos a diferencia de los órganos constitucionales autónomos. Toda vez que la Nación Mexicana no puede quedar desamparada por falta de una completa integración y funcionamiento de uno de sus Poderes Constituidos, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es por ello que la Constitución señaló claramente un procedimiento que siempre garantiza la funcionalidad de éste Poder (si el Senado no nombra a los Ministros en dos ocasiones, el Presidente de la República sin mayor trámite tiene la facultad de nombrarlo directamente); más aún, habida cuenta que los otros Poderes Constituidos (el Ejecutivo y el Legislativos) obtienen su nombramiento directamente del pueblo, el Poder Supremo.

Es decir, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución establece la intervención de los otros dos Poderes Constituidos que fueron electos directamente por el pueblo y además, establece los incentivos para que los miembros



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de este tercer Poder Constituido sean nombrados sin demora, estableciendo para ello un procedimiento expedito que consiste en:

- Primero, el Poder Ejecutivo envía una terna, y*
- Segundo, el Senado elige de entre dicha terna al Ministro. De no aceptar la terna, el Ejecutivo puede enviar una segunda terna, y si ésta tampoco es aceptada por el Senado, el Ejecutivo nombra directamente al Ministro. Lo anterior, dentro de un plazo perentorio.*

La lógica detrás del envío de una terna es facilitar la aceptación del Senado, pues es más fácil elegir a uno de tres que en los casos donde sólo se le envía una única propuesta. Y si de esos tres, ninguno cubriera los requisitos necesarios para ocupar el cargo, existe una segunda opción a evaluar, con otros tres aspirantes. Es así que la Constitución prevé que por cada Ministro, el Senado pueda estudiar la idoneidad de hasta 6 personas. De ahí la severidad de la Constitución por cuanto si los seis candidatos propuestos no son aprobados por el Senado, el Presidente sin demora, debe hacer el nombramiento.

La lógica constitucional que está detrás del hecho de que dos Poderes intervengan en la designación de los Ministros de la Corte se base en el hecho de que la Corte es uno de los tres Poderes Constituidos que no recibe su mandato directamente del pueblo, el Poder Supremo. Por lo mismo, tal intervención es para efectos de legitimación democrática, según el criterio del Constituyente Permanente.

Con base en lo anterior, se puede extraer la siguiente lógica constitucional relativa a los nombramientos constitucionales:

- i. En el caso de uno de los Poderes Constituidos, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombramiento demanda la intervención de los otros Poderes Constituidos. Y como la Corte tiene una mayor jerarquía que los órganos constitucionales autónomos, la misma Constitución señaló un mecanismo expedito de nombramiento con todos los incentivos para que éste se concrete. Y si a pesar de los incentivos el nombramiento no se logra concretar en un plazo perentorio, el Presidente de la República, que es el representante del Estado mexicano, tiene la facultad de materializarlo.*



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

ii. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, los nombramientos los hace, ya sea un solo de los Poderes Constituidos o dos de ellos. Pero por tener una menor jerarquía constitucional, no mandata un procedimiento expedito que garantice un nombramiento en un plazo perentorio.

Derivado de lo anterior, resulta necesario establecer un mecanismo de colaboración en el cual se atienda la propuesta del Senado de la República y que el ejecutivo tenga el derecho de objetar la propuesta realizada, ello genera una plena independencia de los Comisionados respecto del Ejecutivo Federal; por otra parte, debe establecerse un mecanismo que permita dotar de plena autonomía y libertad frente a los partidos políticos o grupos parlamentarios del Senado de la República, por ello, se debe construir la designación frente a un acuerdo y amplio consenso de los integrantes del Senado, por lo cual deberá contar con una mayoría calificada que permita esa independencia e inclinación hacia cualquier grupo o partido; sin embargo, se debe establecer un mecanismo que permita una elección que aun cuando el Ejecutivo Federal objetare, no se requiera la mayoría tan amplia como la requerida para la designación en primera ocasión.

En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento permitirá la articulación de dos poderes de la Unión y la colaboración de ambos para generar una plena autonomía en los integrantes del organismo garante.

El esquema que se plantea debe incluir propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, pues son ellas, quienes tienen mayor conocimiento y experiencia en las necesidades en el tema de transparencia, por ello se debe abrir el espacio para que sean ellas mismas quienes acerquen a los candidatos a participar en el proceso de selección.

ANÁLISIS PARTICULAR DEL CONTENIDO PROPUESTO

[...]

I).- *La iniciativa propone realizar modificaciones al artículo 6º Constitucional, en el cual se divida el numeral en dos incisos, el primero de ellos que considera los principios rectores y consideraciones generales de la garantía de acceso a la información y transparencia, asimismo en un segundo inciso se establecen las bases*



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

generales de funcionamiento del organismo garante de éstos principios; se considera viable establecer en el mismo artículo 6° Constitucional, la parte dogmática del principio de transparencia y en un inciso subsecuente del mismo ordenamiento el organismo que garantiza éstos principios, ello con la finalidad de hacer armónico el principio y su garantía, que permita visualizar integralmente el sistema generado en torno a la transparencia y acceso a la información pública [...]

Se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, ello en plena convicción de evolucionar en materia de acceso a la información pública y particularmente aquella que corresponda al ejercicio de sus recursos.

*Se incluye como sujetos obligados directos a los **Partidos Políticos**, por ello en la ley reglamentaria debe establecer la mecánica de acceso a la información pública la cual deberá contener y describir las facultades de los órganos de primera instancia que atienden ésta información; en este sentido, se deben de crear comités de información al interior de los partidos políticos y eliminar del Instituto Federal Electoral la triangulación de las solicitudes de información; en consecuencia las determinaciones que los comités de información generan puedan ser verificables por el órgano garante, con ello se eliminaría acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, asimismo, el propio IFE, ya no tendría que atender y resolver sobre la información requerida a los partidos políticos y su comité de información se vería disminuido considerablemente ya que solo atendería las solicitudes que se generen respecto a su actividad como institución; cabe referir, que las facultades de fiscalización continúan en el IFE y será aquel, quien determine la forma en que entregará la información relacionada con ésta materia; derivado de ello, se tienen que atender diversas particularidades entre ellas la competencia nacional al órgano federal y competencia al órgano local de Comités Estatales o Municipales, generar una homogenización en la legislación local; reglas sobre el gasto público y fiscalización; en consecuencia la normativa transitoria de la Ley General deberá establecer reformas al reglamento de transparencia del IFE, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que permita ésta nueva modalidad en sujetos obligados.*



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

*En relación a la inclusión de **sindicatos**, aun cuando se consideren como sujetos obligados directos respecto de los recursos públicos que reciban, se propone manejar una situación similar a la contenida en el ámbito privado; tratándose de sindicatos de los denominados públicos, el esquema de su conformación es en el sentido de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional; disposiciones que consideran su registro a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; en este sentido y derivado del nuevo esquema en materia de transparencia adoptado por las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado A del artículo 123, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de noviembre de 2012, se considera debe evolucionar el sistema de transparencia de los sindicatos denominados públicos, a efecto de ser congruentes con aquellos que se consideran del ámbito privado.*

A efecto de homologar el sistema de transparencia en sindicatos, sean denominados públicos o privados se debe adoptar en la Ley General reglamentaria del artículo 6º Constitucional, que se propone, un esquema similar al contenido en la Ley Federal del Trabajo, por ello se describen algunos puntos relevantes.

El esquema adoptado por el régimen privado de transparencia relacionada con los sindicatos, se advierte en dos aspectos:

- 1. Obligaciones de transparencia en cuanto a su registro;*
- 2. Obligaciones de transparencia en cuanto a la rendición de cuentas con respecto al patrimonio sindical.*

*En el primer caso, **los entes obligados lo son las autoridades que tienen a su cargo el registro de dichas organizaciones**, a la sazón, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los casos de competencia federal, y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en los de competencia local; en materia de apartado B del artículo 123 compete al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.*

El artículo 364 bis de la Ley Federal del Trabajo, dispone que en el registro de tales organizaciones gremiales se deberán observar los principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto a la autonomía, equidad y democracia sindical.



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

679
710

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En términos del artículo 365 Bis de la Ley Federal del Trabajo, las autoridades antes mencionadas se encuentran obligadas a hacer pública, para cualquier persona, la información actualizada de los registros de los sindicatos, y expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de registro, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, así como de aquellas que regulen el acceso a la información gubernamental en las entidades federativas.

*En el segundo caso, que se regulará en el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, **el sujeto obligado lo es la directiva del sindicato**, quien tiene el deber de rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical a la asamblea, cada seis meses por lo menos, lo que incluye la situación de los ingresos por cuotas sindicales y otros bienes, así como su destino.*

Se precisa además que en todo momento el trabajador tendrá derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato.

Se contempla que en los Estatutos de los sindicatos se prevean procedimientos internos que puedan ser accionados por los trabajadores, que estimen no haber recibido la información sobre la administración del patrimonio sindical.

La presente reforma considera a órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, ello toda vez que se hace necesario verificar el destino de los recursos que se otorgan y así estar en posibilidad de conocer el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue conferido.

Una de las mayores preocupaciones y comentarios del IFAI y organizaciones de la sociedad civil en torno a la problemática detectada en materia de transparencia y acceso a la información, radica en que las autoridades manifiestan la inexistencia de la información, por lo cual existe la necesidad de establecer un principio constitucional que establezca la obligación de la autoridad a generar la información que documente en el ejercicio de sus facultades establecidas en la ley; es decir, aquella información que por su naturaleza debe existir en alguna área o dependencia de la administración pública federal, estatal, del Distrito Federal, delegacional o municipal, para evitar que sea declarada como inexistente, ello no implica la



Comisión de Puntos Constitucionales

680

711

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

generación de información que conforme a sus atribuciones no deba generar, pues de lo contrario, se sumergiría a las dependencias en un constante desarrollo de información que no es necesaria para sus funciones y que distraería recursos materiales, financieros y humanos en trabajos específicos que no compete desarrollarlos; no obstante, existe información que evidentemente debe ser generada por las dependencias, pues no se entendería un adecuado funcionamiento o la implementación de determinadas políticas públicas sin que se cuente con la información completa relacionada; es por ello que es obligación de los servidores públicos en generar toda la gama de información relacionada con sus actividades y que permita el pleno ejercicio de la función pública.

Por ello, en el presente Dictamen se propone que sea en la Ley General, donde se establezca un apartado que norme la obligación de la autoridad de generar la información.

Se establecen criterios específicos para la reserva temporal de información, entre ellas nos encontramos al interés público y seguridad nacional, las cuales implican lo siguiente:

Interés público: *En la actual fracción I del artículo 6º Constitucional se considera la reserva de información; entre ellas, a la relacionada con causas de interés público; en este sentido, el dictamen de las Comisiones Unidad de Puntos Constitucionales y de la Función Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 2207-II, publicado el martes 6 de marzo de 2007), estableció esta particularidad en materia de reserva como aquella que reviste una importancia tal cuya divulgación puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, refiriendo lo siguiente:*

"...Ahora bien, como todo derecho fundamental, su ejercicio no es absoluto y admite algunas excepciones. En efecto, existen circunstancias en que la divulgación de la información puede afectar un interés público valioso para la comunidad. Por ello, obliga a una ponderación conforme a la cual si la divulgación de cierta información puede poner en riesgo de manera indubitable e inmediata un interés público jurídicamente protegido, la información puede reservarse de manera temporal. Este



681
712

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

es, por ejemplo, el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, la economía nacional, la vida, salud o seguridad de las personas y los actos relacionados con la aplicación de las leyes.

En términos de lo anterior, resulta necesario preservar el principio de reserva que determinada información debe contener, por ello se conserva el término de interés público que debe prevalecer en los criterios de ponderación de entrega de información y documentación que obra en poder de las autoridades.

Igualmente se actualizará una causa de interés público, sustentada en el interés económico de los sujetos legitimados para promover la controversia constitucional, cuando existan actos o normas de carácter general, que vulneren las disposiciones constitucionales relativas a la estructura, orden interior o régimen del Estado que regula o persigue la satisfacción de las necesidades humanas de sus gobernados, las actividades económicas establecidas por el Estado mexicano conforme a los lineamientos de la Constitución Política que lo rige, o los principios rectores del desarrollo económico estatuido en la Ley Fundamental en beneficio de todos sus gobernados.

Seguridad nacional. *Se comparte la definición actual de seguridad nacional, misma que se encuentra normada en la fracción XII del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que refiere lo siguiente:*

"Art. 3...

I a XI...

XII. Seguridad nacional: Acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del Estado constitucional;

Dicha definición ha sido interpretada y aplicada diligentemente por el actual organismo garante de transparencia, mismo que cuenta con las experiencias y criterios que permiten conocer efectivamente aquella información que evidentemente es materia de seguridad nacional y la que bajo ése pretexto ha sido negada a los particulares, por ello sus determinaciones existen los criterios suficientes que



Comisión de Puntos Constitucionales

682

713

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

permitan determinar la calificación o no clasificación de la información en posesión de autoridades.

El incorporar a la seguridad nacional y dignidad humana como principios de reserva de información, constituye un avance en la conformación integral de la reforma constitucional, ello en virtud de estar creando un organismo de última instancia, que no admite recurso o medio de impugnación por parte de los sujetos obligados, ello permitirá que exista un detallado análisis en las resoluciones del organismo garante, que impliquen la determinación de reserva o no reserva de aquella información clasificada como tal por los sujetos obligados.

El incorporar las reservas, lejos de ser un retroceso, implica un equilibrio y límite en la actuación de los organismos garantes, ésta situación está contenida actualmente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 3 fracción XII, por lo cual no es un concepto que se utiliza e interpreta actualmente en la clasificación y entrega de la información; en este sentido, resulta indispensable contenerlo en el precepto constitucional, lo que implica que se desarrolle el concepto y las características de cada principio de reserva en la ley reglamentaria y con ello identificar plenamente los criterios y parámetros por los cuales se considerará determinada información como reservada.

Debemos recordar que los actos de autoridad, implican una exacta aplicación de la ley, pues bajo el principio de que la autoridad solo puede realizar los actos que se encuentran contenidos en las leyes, compete al poder legislativo contener en la ley general, aquellas características particulares que revistan de reserva a la información que la autoridad genere, debiendo, en estos casos establecer el mínimo de discrecionalidad tanto para la autoridad con motivo de su clasificación, como para el organismo garante respecto a su interpretación.

Las modificaciones propuestas en la fracción IV, establece el principio de certeza y expedites que deben existir en la garantía de acceso a la información; asimismo, se determina la creación de órganos especializados que normen y atiendan las solicitudes que en ésta materia se generen; con base en esta fracción se estatuye la constitución de varios órganos garantes, lo cual administrado con las modificaciones



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

a artículos posteriores, dan vida a organismos constitucionales autónomos en los Estados de la República y el Distrito Federal.

La redacción de la fracción V del artículo 6º inciso A) constitucional, establece que los sujetos obligados en materia de transparencia, deben generar información en torno al ejercicio de los recursos públicos y mostrar los indicadores que generen con la finalidad de obtener información integral, para que la ciudadanía o interesados en el desempeño gubernamental cuenten con la información del cumplimiento de los objetivos de la dependencia u oficina que rinde cuentas y muestre los indicadores que arrojan los resultados que se presentan; ello con la visión de retroalimentación que permita el escrutinio de la sociedad en general en las cuentas rendidas y el método por el cual se obtienen los resultados arrojados.

Dentro de la Ley General se deben incorporar los principios de conservación, procedencia, integridad y disponibilidad de la información, resultando de especial importancia el detalle que se genere en cuanto a su concepción, pues resulta indispensable establecer las directrices que permitan cumplir con los principios que deben prevalecer en torno a la conformación y preservación de la información y documentación pública.

Dentro de las propuestas de modificación que presentaron los diversos grupos parlamentarios, se advirtieron redacciones amplias y descriptivas respecto a los organismos estatales y del Distrito Federal autónomos, así como el desarrollo más detallado de los temas referidos; no obstante, se puede referir que la intención es proponer reformas constitucionales en las cuales se afecte lo menos posible a las disposiciones contenidas, considerando principios rectores, mismos que se ampliarán en la ley reglamentaria, por ello, la propuesta de reforma constitucional es acotada y con un contenido básico, pero que permite atender una integralidad de principios rectores.

II).- *Como fue mencionado en el párrafo anterior, se propone que el artículo 6º Constitucional se constituya por dos incisos: el apartado A) ya mencionado y un apartado B), el cual considera a la estructura y funcionamiento genérico del organismo garante del artículo 6º; con base en los anterior, dentro de la estructura de éste inciso B), se pueden advertir diversos elementos nuevos que se integran a la*



684
715

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en este sentido, se presentan las siguientes propuestas de redacción:

B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.

El inciso B del artículo 6º Constitucional crea al organismo encargado de transparencia y acceso a la información pública, como un ente autónomo, en el cual se describen los principios rectores de su actuar, se define su autonomía y personalidad jurídica, así como la facultad de proponer su proyecto de presupuesto y organización interna.

Dentro de las propuestas relacionadas con la autonomía presupuestaria, resultó viable incorporar la referencia a la decisión sobre el ejercicio de su presupuesto, asimismo el organismo tendrá facultades para proponer el presupuesto para que sea considerado, lo que no implica necesariamente que el mismo sea aprobado en sus términos por la Cámara de Diputados al momento de generar el Presupuesto de Egresos de la Federación, por ello la facultad final de decisión sobre el presupuesto que se asignará será de la Cámara de Diputados, la cual con base en las necesidades nacionales resolverá en la asignación de los recursos; lo anterior con base en la necesidad de generar un procedimiento en el cual el organismo presente su propio presupuesto al Ejecutivo, quien lo presentará a su vez a la Cámara de Diputados, la cual lo analizará y determinará en definitiva; en éste mismo tema, debe existir una planeación presupuestal del organismo, pero no debe haber una autorregulación; deben existir 2 fases básicas a atender, El Organismo planeará su presupuesto y lo envía al Ejecutivo Federal; y La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto final que se asignará al organismo garante del artículo 6º en el ámbito federal; ello con la finalidad de no establecer una nueva figura presupuestal que ocasione incertidumbre en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que genere en los demás



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

organismos autónomos la convicción de una autonomía presupuestal plena que no atienda al equilibrio económico que debe prevalecer en toda la administración de los tres poderes del Estado, lo anterior conforme a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (artículo 5º fracción I)

El organismo contará con facultades para emitir normatividad interna y reglamentaria que sea necesaria para el ejercicio de sus actividades, ello genera una autonomía jurídica, que busca dotarse de elementos normativos que para el mejor desempeño de sus funciones, con ello, podrá desarrollar procesos internos ágiles para las resoluciones y determinaciones que en la materia genere.

II.1). *Los párrafos segundo y tercero del inciso B) del artículo 6º de la Constitución establecen expresamente la referencia a que el organismo debe ceñir su actuar a la Ley General respectiva, asimismo en párrafo segundo establece los principios rectores del funcionamiento del organismo:*

"Este organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.

En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad."

Se consideró necesario incorporar un párrafo en el cual se establezca de manera puntual que existirán dos tipos de leyes que regularán tanto el procedimiento de acceso a la información, así como el procedimiento del organismo garante; ello toda vez que en el ámbito federal se constituirán dos leyes: una federal que será la que rija las actividades del órgano garante federal, y una general que normará y unificará los procedimientos en todos los organismos garantes de los Estados y el Distrito Federal; resulta viable establecer esta característica en un párrafo del artículo 6º constitucional, ya que aun cuando se entienda que las leyes generales impactan en el ámbito local, mientras que las federales solo impacten en el ámbito federal, al coexistir dos normativas, puede generarse la confusión en el ámbito de su aplicación, para ello, se determina que la ley general normará los procedimientos y bases



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

generales de actuación de los organismos encargados de transparencia, mientras que la ley federal, atenderá las disposiciones generales y normará el actuar del organismo federal, resulta así que, la coexistencia de ambas normativas son complementarias, pues se prevé que igualmente en el ámbito local cada Estado y el Distrito Federal cuenten con su propia normativa local que regule la actuación de sus organismos en materia de transparencia.

En el segundo párrafo se determinan los principios rectores del actuar de la autoridad encargada de la transparencia y acceso a la información pública, entre los cuales se pueden advertir el de certeza, el cual busca que las actuaciones de la autoridad exista la certidumbre de su actuación, a través de procedimientos que permiten conocer el alcance y determinaciones que pueden existir en materia de transparencia y acceso a la información pública, ya que se trata de uno de los principios que otorga seguridad jurídica a todos los involucrados en el tema referido. Respecto al principio de legalidad, debemos tomar en cuenta que se dotará al organismo de definitividad e inatacabilidad en sus resoluciones, lo que implica una gran responsabilidad, ya que aquellos actos que genere deben estar perfectamente investidos de legalidad; es decir, la actuación de la autoridad encargada de transparencia y acceso a la información pública, debe conducirse completamente apegada a derecho, lo que impactará en sus resoluciones, debiendo prever el contar con personal altamente calificado, que maneje el derecho que impregne de legalidad las determinaciones y resoluciones del organismo, lo que buscará generar una institución sólida y confiable, que con sus criterios se pueda trascender a las determinaciones de los organismos autónomos en las Entidades Federativas y el Distrito Federal.

En relación al principio de independencia, la configuración de los órganos garantes, incluyen una autonomía constitucional, ello garantiza la independencia que existe entre el Ejecutivo Federal y el órgano encargado de solicitar y entregar información pública gubernamental, actualmente el órgano encargado de dicha tarea cuenta con una independencia subjetiva, pues de facto sigue siendo un órgano integrante de la Administración Pública Federal, como lo señala el actual artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con la reforma



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

687
718

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

constitucional que se propone, se garantizará su independencia al conformarse en un órgano plenamente autónomo, con lo que se garantiza la no dependencia del Ejecutivo Federal.

El principio de imparcialidad se encuentra íntimamente ligado al principio de independencia, ya que con la autonomía constitucional del Poder Ejecutivo, se garantiza que las determinaciones sean completamente imparciales, en el cual se deben valorar los principios que rigen el derecho al acceso a la información pública, y aquella información con que cuentan las dependencias del Ejecutivo Federal o de cualquier otro sujeto obligado, lo que impacta en resoluciones dotadas de plena imparcialidad.

Se dota del principio de eficacia al órgano garante, con la finalidad de generar resoluciones que en tiempos muy cortos puedan determinar sobre el otorgamiento de la información o su negativa; es una exigencia respecto del órgano que actualmente lleva las tareas en materia de transparencia, el gozar de la eficacia necesaria, toda vez que actualmente los procedimientos que se siguen pueden verse afectados en el retardo de la entrega de la información, para ello se debe dotar de elementos adicionales que permitan al organismo generar una alta eficiencia en su actuación, por lo cual, se incluyen principios como el de definitividad e inatacabilidad en sus resoluciones, el establecimiento de una ley general en materia de transparencia y otra en materia de archivos, estos instrumentos normativos y otros más garantizarán una plena eficacia en la actuación del organismo.

Toda vez que el organismo federal será rector en la materia, el cual podrá revisar las determinaciones de los organismos locales y del Distrito Federal, resulta indispensable determinar la objetividad en sus determinaciones, la cual se verá reflejada no sólo en las resoluciones en materia de transparencia, sino en los criterios generales que emita y que permitan ser utilizados por los organismos locales para normar sus criterios, y así generar una homogenización en todo el territorio nacional.

El profesionalismo es un principio que genera la convicción en los funcionarios y comisionados que formarán parte de este organismo en constituirse en personal que realmente sea profesional en su actuar, lo que implica el velar por la capacitación,



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

formación y desarrollo del capital humano que intervendrá en el proceso de acceso a la información, con ello se busca generar determinaciones debidamente fundadas y motivadas derivadas del estudio profundo que los servidores públicos del organismo realicen en sus criterios de resoluciones.

La máxima publicidad ha sido un principio probado y calificado como indispensable en la materia de acceso a la información, pero no sólo implica que toda aquella información sea considerada como pública, sino reamente generar criterios que permitan ponderar corduras de reserva frente a la máxima publicidad, y el daño que se pueda generar, para ello, el organismo debe generar directrices que permitan determinar el alcance de la máxima publicidad en relación con la propia información que se solicite, debiendo siempre valorar las consideraciones que la autoridad vierta, así como los terceros afectados que se encuentren involucrados con la información a entregarse.

II.2). *El párrafo cuarto, quinto y sexto del inciso B) del artículo 6° de la Constitución establece a los sujetos obligados en la materia, asimismo el párrafo sexto señala que la ley reglamentaria establecerá aquella información que se deba considerar como reservada o confidencial de la siguiente manera:*

"El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva de la información, en los términos que establezca la Ley.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

689

730

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial."

Por lo que respecta a los sujetos obligados, se ha determinado incluir como sujetos obligados directos aquellos que se mencionan en la fracción I del artículo 6º inciso A), constitucional ya referido, por las causas y comentarios que se expusieron en párrafos anteriores, por tanto, éste párrafo está relacionado con el que se refiere a los sujetos obligados directos antes mencionados, quienes serán sujetos a la competencia del organismo garante en materia de transparencia.

Existe la disposición de considerar como sujeto obligado directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual deberá rendir la información que le sea solicitada por quienes ejerzan el derecho de acceso a la información, siendo el organismo garante quien pueda verificar las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver en definitiva sobre la reserva de la información, ello genera un nuevo espectro de atribuciones para el organismo garante, el cual abarcará prácticamente a todos los poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno, se plantea una excepción a los temas de transparencia y acceso a la información, respecto a la Suprema Corte, siendo aquellos que tengan que ver con procedimientos jurisdiccionales, ello evidentemente con el propósito de proteger los procesos que se sigan en las salas o pleno ello no implica que esta última no sea sujeta del régimen de transparencia; sin embargo, el tratamiento que se genera en torno a la información en éste rubro, deberá ser resuelta por un comité conformado por tres Ministros, quienes resolverán sobre el otorgamiento o negativa de la información.

Se dota al organismo garante de facultades de revisión de las determinaciones que emitan los organismos garantes en los Estados y en el Distrito Federal, ello con la finalidad de normar criterios homogéneos que en materia de transparencia deban prevalecer en todos los niveles de gobierno y en los tres niveles federal, local y municipal; evitando con ello que en los Estados de la República en los que los



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

690
721

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

gobiernos tengan injerencia en temas relacionados con transparencia, sea el órgano federal el que determine finalmente sobre la información requerida; con base en lo anterior, se garantiza igualmente que, los principios rectores en la materia se vean protegidos por la autoridad superior federal, sin que ello se considere como una invasión de competencias, pues la finalidad es permear una cultura en materia de transparencia en todo el país.

La garantía de acceso a la información pública, es otorgada a los gobernados, quienes deben tener el derecho a solicitar a la autoridad federal la revisión de las determinaciones que en el ámbito local les haya sido negada; en este sentido, la relevancia o trascendencia de la información que se solicite no impacta en la determinación del conocimiento del organismo garante federal, pues lo que se busca proteger es precisamente la garantía de acceso a la información y no la relevancia de la misma, ya que al constituirlo como un derecho constitucional para cualquier gobernado, resulta indispensable protegerlo sin importar si la solicitud que fue negada no reviste características relevantes y trascendentes, pensarlo de otra manera, generaría una justicia en la que sólo aquella información considerada subjetivamente como relevante pueda ser verificable a través del organismo protector federal.

Para complementar el esquema de verificación de la autoridad federal, se establece un procedimiento de atracción, en el cual el organismo garante federal o los organismos garantes estatales, puede conocer de aquellos asuntos que realmente son importantes y trascendentes, los cuales deben ser atraídos y resueltos por el organismo federal, con las facultades otorgadas, el organismo garante federal puede aplicar criterios que en casos similares haya determinado, o bien, establecer el criterio que en temas similares se deba atender, por ello resulta de suma relevancia dotar de la facultad de atracción, misma que se verá reflejada en cuanto a su procedimiento en la ley general que emita el Congreso de la Unión.

Se incluye un párrafo en el cual se establece la existencia de información reservada o confidencial, aun cuando existe el criterio de considerar en la ley y no en la constitución esta particularidad, existe también la interpretación de que no debe existir dicha restricción, lo que implica que toda la información de cualquier



Comisión de Puntos Constitucionales

691

722

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

naturaleza deba ser considerada como pública, lo que deja abierto un gran espacio, en el que debe preverse información que necesariamente deba ser reservada o confidencial, como aquella que se integra a averiguaciones previas o procesos penales, aquella que atañe a seguridad nacional o estabilidad financiera o económica, entre otras realmente relevantes, se incorpora esta clasificación en la propia Carta Magna para no dejar en duda que necesariamente debe existir información reservada y confidencial; será así la propia ley la que determinará aquella que se debe considerar como tal, considerando igualmente los casos en que la misma debe pasar de ser confidencial o reservada a pública.

A fin de acotar el margen de discrecionalidad que pudiera existir de parte de los entes obligados y al mismo tiempo garantizar el debido cuidado de aquella información sensible que distintas disposiciones jurídicas protegen, en la Ley General que expida el Congreso de la Unión se normarán todas las reservas a la información en un título especial a efecto de que toda la información pública no sujeta a ellas se sujete al principio de máxima publicidad. En particular, dichas reservas son las que se refieren a:

- 1. Secretos bancario, fiduciario, industrial y fiscal.*
- 2. Información relativa a la seguridad pública y nacional.*
- 3. Información sobre expedientes, averiguaciones, juicios y procesos de investigación y deliberativos que no hayan concluido, de manera enunciativa más no limitativa, en materia administrativa, fiscal, penal, civil, fiscalización, jurisdiccional, mercantil, electoral, familiar, jurisdiccional, parlamentaria, etc.*
- 4. Información que puede afectar la estabilidad económica y financiera nacional y regional.*
- 5. Información sobre estrategias y planes electorales.*
- 6. Padrones de afiliados, asociados o beneficiarios (sólo en los términos y criterios aplicables).*
- 7. Infraestructura y estrategias militares y navales.*



692
733

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

II.3). El párrafo séptimo del inciso B) del artículo 6º de la Constitución otorga definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del organismo garante, estableciendo una excepción a dichas determinaciones conforme a lo siguiente:

"Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados."

Se dota de definitividad e inatacabilidad a las determinaciones del órgano garante, con la finalidad de cumplir con varios de los principios que se han otorgado al organismo, entre ellos, el de eficacia, certeza y objetividad. Con ello las determinaciones de la autoridad no serán sujetas a revisión por parte de algún otro ente, así la información deberá entregarse de manera inmediata por las resoluciones que en que hayan recaído, ya sean en el ámbito federal o local.

Al dotar de definitividad e inatacabilidad a las resoluciones del órgano garante, es indispensable que las determinaciones que emitan sean completamente apegadas a derecho, respetando las garantías constitucionales y del debido proceso, ya que se generarán determinaciones que no pueden ser combatidas ante los órganos jurisdiccionales y por tanto, se convierte en una autoridad materialmente jurisdiccional; ello genera la necesidad de contar con un cuerpo legal que en sus determinaciones garanticen el apego a las normas y su interpretación así como la ponderación en garantías y derechos humanos a que hace referencia la nueva evolución del derecho constitucional; para conseguir las metas en materia de seguridad jurídica y legalidad, así como la ponderación de derechos en conflicto.

II.4). Los párrafos octavo y noveno del inciso B) del artículo 6º de la Constitución se refieren al método de designación de los comisionados, así como el procedimiento que se debe seguir para su conformación, en los términos siguientes:

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Al respecto podemos referir que se optó por ésta forma de designación en base a los diversos criterios que se recogieron de diversos comentarios y exposiciones de organismos e instituciones; en este sentido podemos advertir los siguientes modelos que se propusieron:

- 1. Designación por el Ejecutivo con no objeción;*
- 2. Designación por el Ejecutivo con ratificación;*
- 3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas;*
- 4. Designación directa del Senado;*
- 5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara;*
- 6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica.*

Derivado de lo anterior se recogieron los siguientes datos:

- 1. Designación por el Ejecutivo con no objeción; coincidieron con esta propuesta la Secretaría de Gobernación, Función Pública, Secretaría de Economía y la CONAGO en el Estado de Chihuahua.*
- 2. Designación por el Ejecutivo con ratificación; Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, Red por la Rendición de Cuentas, UNAM (oficina del Abogado General), COMAIP y CONAGO en el estado de Zacatecas.*
- 3. Propuesta por Ejecutivo con designación del Senado por ternas; UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), CONAGO en los estados de Colima, Tabasco, Veracruz y Aguascalientes.*



694
725

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

4. Designación directa del Senado; Info D.F.
5. Designación directa del Legislativo sin especificar la cámara; COMAIP, Info D.F.
6. Propuesta por Diputados y Senado ratifica, COMAIP.

Como podemos observar la preferencia en la designación de los Comisionados del organismo garante, se perfila en el sentido de una colaboración entre dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, con ello se genera una plena independencia de los Comisionados respecto del Ejecutivo Federal y del Legislativo; en este sentido, se propone que sea el Senado de la República quien a través de una consulta a la sociedad, misma que se puede acceder por conducto de las organizaciones de la sociedad civil.

Derivado de lo anterior, se establece un amplio consenso en el nombramiento realizado por el Senado de la República, en el cual se considera exista una mayoría calificada de las dos terceras partes en el nombramiento del Comisionado, el cual podrá ser objetado por el Ejecutivo Federal; una vez generada esa objeción, se regresa a la Cámara de Senadores a efecto de valorar una nueva propuesta y generar un nuevo nombramiento, el cual en esta segunda votación podrá ser electo solo por las tres quintas partes de los Senadores presentes en la sesión; en caso de que el Ejecutivo Federal vuelva a objetar ese nombramiento, será directamente el Senado quien determine la persona que asumirá el cargo del Comisionado.

En base a lo anterior, podemos referir que el mecanismo de nombramiento permitirá la participación de dos poderes de la Unión y la colaboración de ambos para garantizar plena autonomía a los integrantes del organismo garante.

Adicionalmente, la determinación de generar este mecanismo de nombramiento es porque el órgano constitucional autónomo, garante de la transparencia, es una instancia híbrida que realizará actividades de autoridad administrativa y actividades jurisdiccionales de última instancia. Es decir, cuenta con un mandato de doble naturaleza, por lo cual, el mecanismo de nombramiento propuesto es diferente al de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al previsto para los órganos constitucionales autónomos, que en este caso, se refiere a la no objeción por parte del Presidente de la República.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Así pues, el presente dictamen prevé que el nombramiento de los comisionados se lleve a cabo por el Senado, con la "no objeción" del Presidente de la República. Esta figura de "no objeción", es en los hechos, la figura de veto y la configuración de una "afirmativa ficta", es decir, es una modalidad de "afirmación aprobadora", en la que el Presidente de la República tiene la facultad de aprobar de facto el nombramiento hecho por el Senado en un plazo perentorio (afirmativa ficta), o bien, desaprobarlo de manera expresa por considerar que dicho nombramiento no resulta idóneo o no fue apegado a derecho, hasta por dos ocasiones.

Esta mecánica de nombramiento que involucra a dos poderes, garantiza la autonomía del organismo garante, así como su debida integración y funcionalidad, pues en caso de que el Presidente de la República objetare en dos ocasiones el nombramiento hecho por el Senado, será éste, a través del procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley, quien nombre de forma directa y autónoma a los consejeros en cuestión.

El procedimiento para el nombramiento de los comisionados del órgano garante que nos ocupa, es especial y particular para éste, diseñado a partir de las particularidades de las funciones que ejercerá. Es decir, se plantea una mecánica completamente innovadora y particularizada por tratarse de un órgano del Estado que garantizará el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, al tiempo que vigilará que los órganos del Estado y demás sujetos obligados cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales en la materia.

Así pues, se considera que los nombramientos deben hacerse por el Senado, por tratarse de un organismo ciudadano que vela por el respeto de los derechos humanos y garantías individuales relativas al derecho al acceso a la información. En este sentido, se prevé un procedimiento similar al de los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral, en el sentido de que son nombrados por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, en representación de la ciudadanía, pero con la posibilidad de ser objetados por el Ejecutivo Federal, en atención a garantizar la autonomía e independencia del órgano.



Comisión de Puntos Constitucionales

676
702

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La intervención de dos poderes en el proceso de nombramiento es una condición importante para evitar la partidización de sus funcionarios, o la dependencia implícita de los mismos hacia un poder supremo.

II.5). El párrafo décimo del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refieren a la duración en el cargo de los comisionados y las particularidades que revisten su cargo, en los términos siguientes:

Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.

A efecto de garantizar la autonomía en sus determinaciones, se hace indispensable que los comisionados no desempeñen ningún otro cargo o empleo, previendo sólo autorizar aquellas que tengan relación con actividades docentes o similares, esta propuesta ha sido bien recibida por parte de los actores legislativos que consideran un acierto en la determinación de estas medidas, toda vez que los comisionados con la finalidad de resolver en plenitud de funciones, y sin la injerencia de cualquier índole, garanticen los principios rectores de su actividad como la independencia, imparcialidad y objetividad, por ello las resoluciones que emitan deben estar libres de cualquier sospecha que se genere en torno a las actividades secundarias que realicen los comisionados. En este sentido, cobra vital importancia el que se establezca constitucionalmente la prohibición de desempeñar otro cargo, empleo o comisión que pudiera vulnerar el ejercicio de su actividad.

II.6). El párrafo décimo primero del inciso B) del artículo 6° de la Constitución se refieren a la equidad de género que debe prevalecer en el nombramiento de los comisionados, en los términos siguientes:

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

Se plantea que en la conformación del órgano máximo de decisión y administración deberá procurarse que exista equidad de género. Lo anterior en aras del pluralismo y del equilibrio de los integrantes del órgano garante, y en búsqueda de la nivelación



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

en paridad del papel de la mujer en todas y cada una de las zonas de la gestión pública y de manera particular en los órganos directivos.

II.7). El párrafo décimo segundo del inciso B) del artículo 6º de la Constitución se refiere a la designación del comisionado presidente del organismo, en los términos siguientes:

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

En el tema de la designación de los comisionados se analizaron las diversas propuestas en la forma de elección, y se consideraron tanto la designación directa por parte del Senado de la República, la propuesta de designación por parte de los propios comisionados, así como la designación por parte del Ejecutivo Federal. En este orden de ideas, debemos atender a la naturaleza jurídica completa que se dotará al organismo garante, en la cual se busca armonizar todos los principios que en su actuar debe observar. En este sentido, el principio de independencia debe prevalecer en el sistema de designación que se opte para el presidente del organismo, lo que implica que sea a través de un método democrático, por ello se considera que deberá ser a través del voto directo y secreto de los propios comisionados, quienes decidirán sobre quién ostentará el cargo de presidente del organismo, que finalmente será quien represente a la institución, y generará los criterios y líneas de acción sobre las que debe laborar la institución. Esto no implica que las determinaciones que se adopten sean unilaterales, pues al tratarse de un órgano colegiado los puntos de vista y decisiones deben ser tomadas con el mayor consenso de sus comisionados, permitiendo generar decisiones democráticas en las que se analicen todos los puntos de vista vertidos sobre temas específicos.

Así pues, por las razones expuestas, se considera que la designación del presidente debe ser por parte de los propios comisionados, pues esta medida garantiza la independencia en sus determinaciones. Considerarlo de distinta forma, conllevaría a generar tensión interinstitucional, pues implicaría una intervención exterior, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, en un órgano al que se está dotando de autonomía



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

constitucional, lo que debe ser congruente con la reforma integral, incluido el mecanismo de nombramiento del Presidente del organismo.

II.8). El párrafo décimo tercero del inciso B) del artículo 6º de la Constitución propone la creación de un Consejo Consultivo, en los términos siguientes:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Se establece la conformación de un Consejo Consultivo conformado principalmente por ciudadanos, el cual será designado por el Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente, en la conformación se deberá atender a las organizaciones de la sociedad civil, mismas que podrán formular propuestas, que no necesariamente tendrán que ser las consideradas para la conformación del consejo, igualmente se podrán generar acercamientos con universidades, expertos en la materia, etc.; el Consejo Consultivo del organismo garante podrá Establecer los lineamientos generales de actuación del organismo; aprobar la normatividad interna, que en su caso, se pueda generar, opinar sobre el proyecto de informe anual que se presente a la Cámara de Senadores, solicitar al presidente del organismo garante información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto; conocer y pronunciarse sobre el ejercicio del presupuesto asignado al organismo garante para el ejercicio de sus atribuciones; entre otras que establezca la ley.

II.9). El párrafo décimo cuarto del inciso B) del artículo 6º de la Constitución otorga medidas de apremio al organismo, en los términos siguientes:

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Es indispensable que se dote de facultades coercitivas en las determinaciones del organismo garante, para ello, la reforma constitucional que se dictamina, establece las facultades referidas, dejando en la ley secundaria aquellas medidas de apremio que puede aplicar la autoridad en materia de transparencia, ello para efecto de obtener la información que se requiera y en los plazos solicitados. Entre ellos, se deberán considerar en la Ley General, la amonestación o el apercibimiento, lo que permitirá al organismo contar con elementos coercitivos que permitan generar en los entes obligados, la convicción de proporcionar la información de manera puntual, conforme a las disposiciones normativas, en los plazos y formas que son permitidas por la ley. Con base en ello se considera que la información hacia los ciudadanos será más expedita y de mayor calidad, ya que de lo contrario, los entes obligados, podrían verse afectados por las medidas que en su caso, se impongan por el organismo.

II.10). *El párrafo décimo quinto del inciso B) del artículo 6º de la Constitución, establece la obligación de todas las autoridades para coadyuvar con el organismo, en los términos siguientes:*

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

Aun cuando se ha mencionado que esta disposición es consecuencia de la organización de toda la administración pública, debemos tomar en cuenta que se está creando a un organismo autónomo, el cual se regirá por una ley general y una federal, por ello debe quedar patente en la norma constitucional que aun cuando no pertenezca a la administración pública federal, las autoridades de ésta, deben estar en aptitud de proporcionar todo el auxilio y apoyo que el organismo garante requiera, no solo respecto al apoyo físico que, en su caso, se pueda requerir, sino, respecto de información que debe estar perfectamente coordinada entre las diversas entidades, organismo o dependencias que conforman a la administración pública federal, los Poderes Legislativo y Judicial correspondientes; resulta con ello una necesidad de considerar en la norma constitucional el apoyo o auxilio que se pueda



Comisión de Puntos Constitucionales

700
731

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

requerir a cualquier autoridad; esta disposición, se encuentra adminiculada con el párrafo posterior que considera una coordinación específica."

III. CUADRO COMPARATIVO.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.	Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.	Artículo 6. (...)
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de		...



Comisión de Puntos Constitucionales

701

732

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
expresión.		
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.		...
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:		...
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y	A.- Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes	A.- En materia de derecho de acceso a la información. I. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
bases:	principios y bases:	administrativos , en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.	I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal , es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad	Base Primera. Toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Para los efectos de este Apartado, son sujetos obligados: a) Los Poderes de la Unión; b) Los Poderes de los Estados de la Federación; c) Los órganos Ejecutivo,



Comisión de Puntos Constitucionales

703

734

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	<p>nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.</p>	<p>Legislativo y Judicial del Distrito Federal;</p> <p>d) Los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;</p> <p>e) Los organismos autónomos y las universidades públicas;</p> <p>f) Los fideicomisos y fondos públicos;</p> <p>g) Toda persona física, moral, sindicato o fideicomiso privado respecto de los recursos públicos que reciba y ejerza ;</p> <p>h) Las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, y</p> <p>i) Los partidos políticos.</p>



Comisión de Puntos Constitucionales

7001

735

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		Los sujetos obligados deberán preservar la documentación que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de reserva, confidencialidad o inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.	II. ...	Base Segunda. ...
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.	III. ...	Base Tercera. ...
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos	IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de	Base Cuarta. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de



Comisión de Puntos Constitucionales

705

736

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.	revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.	revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información que prevé esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.	V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	Base Quinta. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a	VI. ...	Base Sexta. ...



Comisión de Puntos Constitucionales

706

737

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
personas físicas o morales.		
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.	VII. ...	Base Séptima. ...
	B. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la Ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.	Base Octava. La Federación, los Estados y el Distrito Federal contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con organismos autónomos, especializados, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos



Comisión de Puntos Constitucionales

707

758

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		<p>personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley. Tratándose de los sujetos obligados a que se refiere el inciso i) de la fracción I de este apartado, serán competentes las autoridades electorales.</p> <p>La protección de datos personales en posesión de particulares, estará a cargo del ente público que señale la ley.</p>
	Este organismo se registrará por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la	Los organismos autónomos previstos en esta Base, se registrarán por las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, las cuales deberán



Comisión de Puntos Constitucionales

708

737

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	Unión	ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
	En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.	En su funcionamiento, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
	El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme	II. El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el ámbito federal tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la



Comisión de Puntos Constitucionales

709

740

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad,	información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; con excepción de los asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos de los Estados y del Distrito Federal, que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley.



Comisión de Puntos Constitucionales

710

711

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley.	
	El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.	El organismo autónomo en el ámbito federal de oficio o a petición fundada de los organismos autónomos equivalentes de los Estados o del Distrito Federal, podrá atraer y resolver los recursos de revisión interpuestos ante estos últimos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.
	La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.	La ley general establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
	Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.	Las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		sujetos obligados. El Procurador General de la República, el Consejero jurídico del Gobierno, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica o cuando se trasgreden los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o sean emitidas con motivo del



Comisión de Puntos Constitucionales

712

743

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		ejercicio de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo de esta fracción.
	<p>El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el</p>	<p>El organismo autónomo en el ámbito federal, contará con un órgano superior, que funcionará en Pleno, integrado por un comisionado presidente y seis comisionados, que durarán en su cargo siete años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos.</p> <p>Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el</p>



Comisión de Puntos Constitucionales

713

714

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.	voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la Ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
	En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las	En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una



Comisión de Puntos Constitucionales

744
745

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.	votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.
	Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.	Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, en donde cuatro de los comisionados deberán cumplir además con lo estipulado en la fracción III del mismo



Comisión de Puntos Constitucionales

715

716

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		artículo, mientras que los otros tres comisionados deberán haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la transparencia y acceso a la información pública, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, deberán cumplir los requisitos y observar las normas de conflicto de intereses que establezca la ley, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto



Comisión de Puntos Constitucionales

716

717

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.
	En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.	En la conformación del pleno del organismo autónomo en el ámbito federal , se garantizará el principio de igualdad consagrado en esta Constitución.
	El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.	El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.
	El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los	El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los



Comisión de Puntos Constitucionales

717

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.	miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
	La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.	La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo autónomo en el ámbito federal para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.
	Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el	Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el



Comisión de Puntos Constitucionales

718

718

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.	organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.
	El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.	El organismo autónomo en el ámbito federal , la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la entidad especializada en materia de archivos y el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, coordinarán sus acciones entre sí , así como con los organismos equivalentes de los Estados y del Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano .
B. (...)		B. (...)



Comisión de Puntos Constitucionales

719

750

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:	Artículo 73. ...	Artículo 73. ...
I. a XXIX-Q. (...)	I. a XXIX-Q. (...)	I. a XXIX-Q. (...)
	XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.	XXIX-R. Para expedir la ley general que desarrollará las bases , principios generales y procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de todos los niveles de gobierno .
	XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y	XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal , estatal, municipal y del Distrito



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	municipal y determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.	Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.
XXX. (...)	XXX. (...)	XXX. (...)
Artículo 76. (...)	Artículo 76. (...)	Artículo 76. (...)
I. a XI. (...)	I. a XI. (...)	I. a XI. (...)
XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya	XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley, y	XII. Nombrar a los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley, y



Comisión de Puntos Constitucionales

721

752

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya	XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya
Artículo 78. (...)	Artículo 78. (...)	Artículo 78. (...)
(...)	(...)	(...)
I. a VII. (...)	I. a VII. (...)	I. a VI. (...)
		VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.	VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en	VIII. Nombrar a los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de



Comisión de Puntos Constitucionales

722

733

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley,	transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley, y
	IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.	IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.
Artículo 89. (...)	Artículo 89. (...)	Artículo 89. (...)
I. a XIX. (...)	I. a XIX. (...)	I. a XIX. (...)
	XX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;	XX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		establecidos en esta Constitución y en la ley, y
XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.		XXI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo 105. (...)	Artículo 105. (...)	Artículo 105. (...)
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:	I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:	I. (...)
a) a k). (...)	a) a k). (...)	a) a k). (...)
l). Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.	l) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;	l). (...)



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	m) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;	m) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
II. De las acciones de inconstitucionalidad...	II. De las acciones de inconstitucionalidad	II. (...)
(...)	(...)	(...)
a) a g) (...)	a) a g) (...)	a) a g) (...)
	h) El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales	h) El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados



Comisión de Puntos Constitucionales

725

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.	internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información de los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano autónomo en materia de transparencia y acceso a la información del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
(...)	(...)	(...)
III. (...)	III. (...)	III. (...)
		IV. De los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia a que se refiere el artículo 6o. de esta Constitución.
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
Artículo 108. (...)	Artículo 108. (...)	Artículo 108. (...)
(...)	(...)	(...)
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de	Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su	Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal , los



Comisión de Puntos Constitucionales

777

758

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.	caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.	Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
(...)	(...)	(...)
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la	Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los	Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho,



Comisión de Puntos Constitucionales

728

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.	Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los	los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados de los organismos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.	asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda	Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de	Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.	y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
Artículo 111.- Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la	Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal,	Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal,



Comisión de Puntos Constitucionales

731

762

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.	los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.	los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados de los organismos autónomos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda	Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía , se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este	Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía , se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este



Comisión de Puntos Constitucionales

733

744

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.	supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
Artículo 116. (...)	Artículo 116. (...)	Artículo 116. (...)
(...)	(...)	(...)
I. a VII. (...)	I. a VII. (...)	I. a VII. (...)
	VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de	VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información que garantizarán el derecho a la información y la



Comisión de Puntos Constitucionales

734

765

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su	protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia.



Comisión de Puntos Constitucionales

735

766

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	organización interna.	
	El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.	El organismo autónomo coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.
Artículo 122. (...)	Artículo 122. (...)	Artículo 122. (...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
(...)	(...)	(...)
A. a C. (...)	A. a C. (...)	A. a C. (...)
BASE PRIMERA (...)	BASE PRIMERA (...)	BASE PRIMERA (...)



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
I. a IV. (...)	I. a IV. (...)	I. a IV. (...)
V. (...)	V. (...)	V. (...)
a) a n) (...)	a) a n) (...)	a) a n) (...)
ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión	ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos u organismos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de	ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así



Comisión de Puntos Constitucionales

737

738

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.	como con plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.
	El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del Distrito Federal, y con la entidad especializada en materia de archivos, con objeto de fortalecer la rendición de cuentas;	El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del Distrito Federal, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas;
o) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de	o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el	o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
iniciativa ante la propia Asamblea, y	Congreso de la Unión;	Congreso de la Unión;
p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.	p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y	p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y
	q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.	q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)	BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)	BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- (...)
D a H (...)	D a H (...)	D a H (...)
	Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.	Primero.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
	Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6º de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y	Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a las que se refiere el artículo 73 fracciones XXIX-R y XXIX-S, adicionados por este



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.	Decreto , en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto .
		El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico en un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de las Leyes Generales a las que se refiere el párrafo anterior.



740
771

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	<p>Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente Decreto.</p>	<p>Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá</p>



Comisión de Puntos Constitucionales

741

732

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		la negativa de su petición.
	<p>Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.</p> <p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República o la Comisión Permanente, especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de</p>	<p>Cuarto.- En un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará a los comisionados que integren el organismo autónomo, especializado e imparcial, en el ámbito federal, así como por única ocasión nombrará a dos de los</p>



Comisión de Puntos Constitucionales

742

773

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	noviembre de 2017.	comisionados electos para que ejerzan su cargo cinco años y para que otros tres comisionados ocupen su cargo tres años, y dos comisionados para que desempeñen durante siete años su encargo.
	b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.	
	c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2018.	El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la
	d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo del 2026.	
	e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su	



Comisión de Puntos Constitucionales

7/5

7/4

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	<p>mandato el 1 de noviembre del 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.</p>	<p>Unión.</p> <p>En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.</p>



Comisión de Puntos Constitucionales

744

745

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		En tanto se integra el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información pública que se crea en virtud del presente Decreto conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en funcionamiento el organismo descentralizado previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con las atribuciones establecidas en dicha ley.
	Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su	Quinto.- Las Legislaturas de los Estados, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar su legislación en materia de este Decreto, en un plazo de



Comisión de Puntos Constitucionales

745

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.	seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las leyes generales previstas en el artículo 73 fracciones XXIX-R y XXIX-S, adicionados por el presente Decreto.
	Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.	Sexto.- El organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.
	Séptimo.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en	Séptimo.- En tanto se determina el ente público facultado para la protección de datos



Comisión de Puntos Constitucionales

746

777

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, ejercerá las atribuciones correspondientes.	personales en posesión de particulares, el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información pública , ejercerá las atribuciones correspondientes.
	Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.	Octavo.- En tanto el Congreso de la Unión expide las leyes y reformas previstas en el artículo Segundo Transitorio , el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, una vez integrado conforme al artículo Cuarto Transitorio , ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental



Comisión de Puntos Constitucionales

747

748

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		vigente. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, continuarán su trámite ante el nuevo organismo en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.
	Noveno.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6º. de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.	



Comisión de Puntos Constitucionales

748

779

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
	Décimo.- Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.	Noveno.- Una vez integrado el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, conforme al artículo Cuarto Transitorio, todos los recursos financieros, materiales y patrimoniales, así como los trabajadores adscritos al Instituto que alude el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pasarán a formar parte de dicho organismo. Los trabajadores que pasen a formar parte de este nuevo organismo, se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados sus derechos individuales, ya adquiridos, en el ámbito



Comisión de Puntos Constitucionales

749

780

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE	MINUTA	PROYECTO DE DECRETO
		laboral y de seguridad social.

IV.- CONSIDERACIONES.

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anti-Corrupción y Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y V, y el párrafo segundo, para quedar como apartado A, y se adiciona un apartado B al artículo 6; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S del artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 78; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adicionan los incisos l) y m) a la fracción I, y el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el inciso ñ) y se recorren los incisos o) y p), adicionándose un inciso q) de la fracción V, de la base primera del apartado



Comisión de Puntos Constitucionales

750

781

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

C del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Diputados integrantes de este cuerpo Legislativo, coincidimos en que esta reforma que se está dictaminando es de trascendencia para el país y de relevancia para todos los mexicanos y mexicanas, para las Instituciones y, para el Estado, en tanto que este último tiene como una de sus finalidades, consolidar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas que se encuentra encaminada a abatir cualquier acción que dé como resultado la corrupción que debe ser entendida como una actividad lacerante que ha dañado a la Sociedad, a las Instituciones, al Estado y en resumen a todo México.

La Constitución representa el pilar de cualquier orden jurídico, dado que regula la creación de normas jurídicas generales y especiales, como lo mencionaba Kelsen, en el ámbito político tiene la característica de contener el fundamento del Poder, es decir, crearlo, darle forma y legitimarlo, asimismo, en el campo social la Constitución plasma la voluntad del pueblo, la organización derivada de la convivencia social y de los factores reales del poder, pero también la Constitución es la que precisa el conjunto de valores, finalidades del Estado y de la Sociedad misma. Nuestra Carta Magna, contiene intrínsecamente esos elementos y con las características de ser



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

escrita, rígida, codificada, reformable, totalizadora, es un todo armónico y sin contradicción y es suprema¹.

En este tenor, nuestro marco constitucional acepta la posibilidad de reformarla y, cumpliendo los requisitos legales que ella misma enmarca, es viable modificar el texto constitucional, esto consiste en darle coherencia a las necesidades del Estado y de los ciudadanos, es en sí adaptarla a los cambios que se vayan presentando en los diversos ámbitos y así satisfacer las finalidades para las que fue creada. En este rubro, el Doctor Carpizo mencionó que la Constitución que tenemos en este momento es muy diferente a aquella que fue promulgada el 5 de febrero de 1917, sin embargo, desde esa fecha hasta el día de hoy enmarca los principios que le dieron sustento por parte del Constituyente de Querétaro.

A través del tiempo, nuestra Carta Magna ha sufrido reformas y transformaciones, algunas de ellas derivadas de caprichos políticos o de tomas de decisiones triviales, pero otras son acordes, esto quiere decir, que se han ido cumpliendo necesidades y actualizando la norma constitucional al entorno evolutivo de la Sociedad y del Estado.

En ese sentido, la Minuta que se está dictaminando, contempla en primer término modificar la estructura del artículo 6º Constitucional, cuya finalidad

¹ Arteaga Nava, Elisur, "Derecho Constitucional" Ed. Oxford, 3ra., edición México 2004, págs. 1 a la 10.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

es la de crear todo un sistema constitucional en torno al derecho de acceso a la información, la transparencia y las telecomunicaciones. Lo trascendental de esta modificación radica en que dicho artículo consagra la garantía de libertad de expresión y de manifestación de las ideas, dicha garantía se considera como una piedra angular de los derechos del hombre (fundamentales), parte esencial del núcleo del Estado democrático, como lo manifestó el Constituyente de 1917.

En 1977, se modificó el texto del artículo 6º Constitucional, insertando el derecho a la información como parte de la garantía de libertad y manifestación de las ideas; al respecto, el Alto Tribunal de la Nación se manifestó en torno a dilucidar lo que se debería establecer como información y su relación con la garantía de libertad, en la siguiente tesis aislada:

INFORMACIÓN. DERECHO A LA, ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 6º., DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

*La adición al artículo 6o. constitucional en el sentido de que el derecho a la información será garantizado por el Estado, se produjo con motivo de la iniciativa presidencial de cinco de octubre de mil novecientos setenta y siete, así como del dictamen de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de las que se desprende que: a) Que el derecho a la información es una garantía social, correlativa a la **libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la llamada "Reforma Política", y que consiste en que el Estado permita el que, a través de los diversos medios de comunicación, se manifieste de***



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

manera regular la diversidad de opiniones de los partidos políticos. b) Que la definición precisa del derecho a la información queda a la legislación secundaria; y c) Que no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estime oportuno, solicite y obtenga de órganos del Estado determinada información. Ahora bien, respecto del último inciso no significa que las autoridades queden eximidas de su obligación constitucional de informar en la forma y términos que establezca la legislación secundaria; pero tampoco supone que los gobernados tengan un derecho frente al Estado para obtener información en los casos y a través de sistemas no previstos en las normas relativas, es decir, el derecho a la información no crea en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pide conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debe ejercerse por el medio que al respecto se señale legalmente.²

El precedente que estableció el máximo tribunal de nuestro país, dejó claro que la información es una garantía social del gobernado, un deber del Estado y una obligación para las autoridades respetarla. Para ese momento histórico la citada reforma constitucional cumplía con los fines para lo que fue creada.

Posteriormente, nuestro país se adhiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el 24 de marzo de 1981 y se publica hasta el 20 de mayo del mismo año. En el punto 2, del artículo 19 del Pacto mencionado se establece lo siguiente:

² Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis Aislada 8a. Época; 2a. Sala; Tomo X, Agosto de 1992; Pág. 44. No. de Reg. 206435. "énfasis añadido"



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

754

785

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

"2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección³."

Con la adopción del mencionado instrumento, nuestro país se incorporó a la cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, en ese sentido, el primer paso realizado por el Estado, fue la creación de un mecanismo jurídico que cumpliera con la exigencia del instrumento internacional del que nuestra Nación es parte; por ello, el 12 de julio de 2003, se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Una de las finalidades de dicha norma fue la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como un órgano perteneciente a la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, con la principal función de ser una autoridad intermediaria entre el gobernado y la Administración Pública Federal, cumpliendo con la garantía de acceso a la información y protección de datos personales, buscando que las entidades federativas se homologaran en esta faceta de transparencia.

³ PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, adopción: Nueva York, Estados Unidos de América, 16 de diciembre de 1966, documento consultado en el sitio: <http://www.sre.gob.mx/tratados/>, el 8 de enero de 2013.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

Posteriormente, el 20 de julio del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que modificó el artículo 6º Constitucional, en la que se plasmaron las bases para el ejercicio del derecho al acceso de la información en los tres niveles de gobierno, asimismo, se estableció a los órganos pertenecientes a la Administración Pública, Autoridades Federales, Estatales y Municipales como **sujetos obligados** a tener sus archivos en orden y hacer pública la información propia de sus funciones, con la salvedad de aquella que se considere como reservada por su propia naturaleza, al respecto, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LX Legislatura, expresaron que fortalecer los instrumentos y mecanismos de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, otorga a los gobernados herramientas indispensables para llevar a cabo un control social de los órganos del Estado y, para evaluar a sus gobernantes, contando con elementos objetivos de juicio para hacerlo, además de que genera realmente una ciudadanía responsable y participativa que exige rendición de cuentas a sus gobernantes⁴.

Con esta reforma se consolidó la garantía social de acceso a la información y la obligación de la autoridad para la rendición de cuentas, a través de un organismo especializado, como es el caso del Instituto Federal de Acceso a

⁴ Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, del 1 marzo de 2007, número 2204-I. [Énfasis añadido].



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

756

737

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

la Información y Protección de Datos, y sus homólogos en las entidades y el Distrito Federal.

Dicho lo anterior, los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, coincidimos que con el trabajo legislativo realizado hasta el día de hoy, nuestro país cuenta con un marco normativo que cumple con los aspectos primordiales de la transparencia:

"Proactiva: Es la obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre su actividades, presupuestos y políticas.

Reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria"⁵.

Ahora bien, desde las reformas realizadas y la creación del organismo de transparencia, nuestra nación ha trabajado para consolidar una cultura de rendición de cuentas, acceso a la información y protección de datos, sin embargo, como lo menciona el proyecto de reformas que se está dictaminando, es necesario realizar las adecuaciones encausadas a

⁵ El Derecho de acceso a la información: Definición, protección internacional del derecho y principios básicos, consultado en el [sitio http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin_principios_basicos.pdf](http://www.access-info.org/documents/Access_Docs/Advancing/Spain/El_Derecho_de_acceso_a_la_informacin_principios_basicos.pdf) consultado el 7 de enero de 2013.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

fortalecer la transparencia que nuestro México necesita y los mexicanos y mexicanas exigen.

ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO COMO GARANTE DE LA TRANSPARENCIA.

La Minuta en análisis, contiene en su parte total la transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en un Organismo Autónomo Constitucional, esto, obedece al concepto de cimentar el elemento principal de la transparencia que es la imparcialidad, si bien es cierto, desde la creación del Instituto hasta la fecha, se ha ido paulatinamente ganando la credibilidad de nuestra sociedad, aunque es un organismo con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión como está establecido en su marco normativo, no deja de ser una entidad que está vinculada directamente a la administración pública, lo que genera especulaciones sobre el actuar del órgano, viciando y atrasando la transparencia; en este sentido, el Licenciado Federico Guzmán Tamayo, Comisionado del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, manifestó que "Un ciudadano no puede confiar en órganos de transparencia que sospecha o presume que



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

están subordinados a los entes o poderes públicos a los que se supone vigila.”⁶

En este orden de ideas, si la prioridad es contar con todo un esquema de transparencia robusto y conciso, es necesario tener un esquema jurídico sólido y congruente, conjuntamente con instituciones eficientes, responsables e imparciales.

Como se había mencionado anteriormente, el Instituto por méritos propios ha ganado un espacio considerable dentro de la sociedad mexicana, por lo que se puede decir que se ha cumplido con la primera fase dentro de la cultura de transparencia, ya que se otorgó a los ciudadanos un ente público Federal y Estatal que funge como intermediario y peticionario de la información, lo que se corrobora con la siguiente gráfica:

⁶ Cita consultada en sitio <http://www.infoem.org.mx/doc/publicaciones/04.pdf> el 7 de enero de 2013.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

RESUMEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Solicitudes recibidas*, Respuestas, Consultas al Portal de Obligaciones de Transparencia y Recursos presentados al 31/12/2012							
CONCEPTO	2003-2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
SOLICITUDES DE ACCESO Y CORRECCIÓN A DATOS PERSONALES	32.003	17.994	19.598	21.842	26.773	36.430	154.640
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	234.889	87.256	97.999	100.296	96.620	94.724	711.684
Total de solicitudes	266.892	105.250	117.597	122.138	123.293	131.154	866.324
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACCESO Y CORRECCIÓN A DATOS PERSONALES	27.669	14.784	16.186	17.802	21.965	30.418	128.824
RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	208.803	76.936	84.336	89.340	86.749	82.914	628.778
Total de respuestas	236.472	91.420	100.522	107.142	108.714	113.332	757.602
SOLICITUDES CONCLUIDAS POR FALTA DE RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL	20.582	10.541	14.622	13.431	15.051	15.685	89.912
SOLICITUDES CONCLUIDAS POR FALTA DE PAGO DE LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN	2.410	1.139	1.103	1.030	905	1.150	7.737
Total de solicitudes concluidas por falta de pago o de respuesta al requerimiento de información adicional	9.107	11.680	15.725	14.461	15.956	16.835	97.549
CONSULTAS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA**	4.966.618	13.978.771	9.525.069	8.129.846	13.215.663	18.908.945	68.724.912
RECURSOS DE ACCESO A INFORMACIÓN Y VERIFICACIONES DE FALTA DE RESPUESTA	11.567	5.287	5.172	7.282	5.177	4.821	39.306
RECURSOS DE ACCESO Y CORRECCIÓN DE DATOS PERSONALES	1.222	728	822	846	941	1.298	5.856
OTROS RECURSOS***	313	38	44	33	67	0	495
TOTAL DE RECURSOS ANTE EL IFAI	13.102	6.053	6.038	8.160	6.185	6.119	45.657

* Solicitudes ingresadas por vía electrónica.

** En las fracciones I, V y XVIII se considera una consulta al ingresar a la fracción, en las demás fracciones se registra como consulta hasta el momento en que se accede al detalle de los resultados almacenados en la búsqueda general.

*** Incluye recursos contra Otros Sujetos Obligados y recursos no asociados a una solicitud de información ingresada a través de Internet Gobierno Federal.



Comisión de Puntos Constitucionales

760

791

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La anterior gráfica corrobora el actuar del Instituto, sin embargo, los Diputados integrantes de estas Comisiones, estamos conscientes que si la pretensión primordial es fortalecer todo el orden en torno a la transparencia, es necesario contar con un marco jurídico eficaz y eficiente y un ente que tenga la facultad, la responsabilidad y la tutela de garantía constitucional de transparencia, es decir, un órgano garante independiente de cualquier organismo del Estado.

La Minuta que se está dictaminando propone la evolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a un ente constitucional autónomo. Para conocer la trascendencia de esta transformación, es prudente mencionar someramente la teoría clásica de la división de Poderes de Montesquieu, dicha teoría tuvo como parte medular evitar la arbitrariedad y el abuso de una sola autoridad que llegaba a los extremos, por ello, si el Poder "está distribuido entre distintos órganos que mutuamente se frenan, queda cerrada la posibilidad de que el poder constituido se haga ilimitado, soberano."⁷ es decir, los pesos y contrapesos que debe contener, en ese entonces el Estado Moderno.

Como es sabido, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, se consagró "que toda sociedad en la que no esté

⁷ Serna de la Garza, José María y Caballero Juárez, José Antonio (Coordinadores) "Estado de Derecho y Transición Jurídica, edit. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM" México 2002, participación de Pedroza de la Llave Susana Thalía, capítulo V "Los Órganos Constitucionales Autónomos", pag. 173.



Comisión de Puntos Constitucionales

761

792

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes **no tiene constitución**⁸. La división de poderes, es la forma de pesos y contrapesos de las Instituciones del Estado, con la finalidad de hacerlo eficiente en el cumplimiento de sus propias funciones, esta división está presente en la mayoría de los Estados. México adoptó la división de poderes dentro de la Constitución de 1857, el Constituyente de Querétaro de 1917, da continuidad a esta forma, estableciendo que una división de poderes armoniza la autonomía de los órganos que instituyen al Estado y vincula las atribuciones, funciones y facultades con la única finalidad de combinar todas las actividades en beneficio de los intereses del conjunto social denominado nación.

En ese contexto, nuestros tres niveles de gobierno del Estado, cuentan a su vez, con órganos que sirven para el mejor desarrollo de sus funciones, así tenemos que el Poder Legislativo cuenta con Comisiones, el Judicial con Juzgados y Tribunales y el Ejecutivo con Secretarías de Estado y todo un aparato denominado Administración Pública sea Federal, Estatal o Municipal cual fuese el caso, en este sentido, se tiene un esquema de organismos con funciones centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, con la característica específica del grado de autonomía que se les otorga para realizar sus funciones, sin embargo, no se debe olvidar que siempre estarán

⁸ Idem. 174



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

vinculados a la Administración Pública, lo que trae como resultado un cierto grado de sumisión a la misma.

A través del tiempo, con la evolución de la Sociedad y el Estado, se ha requerido adoptar mecanismos o herramientas que conlleven a dar solución a diferentes problemáticas, al respecto, encontramos a los organismos autónomos constitucionales, que han sido creados para coadyuvar con las instituciones del Estado, como lo ha manifestado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial siguiente:

**"ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.**

El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.

2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.



Comisión de Puntos Constitucionales

763

777

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

*3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, **pues su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.** Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son:*

- a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal;*
- b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación;*
- c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y*
- d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad”.⁹*

De acuerdo a los elementos mencionados, se puede concluir que un organismo autónomo está incluido en la estructura del Estado, en aras de atender una necesidad específica del Estado y del Gobernado, para lograr sus objetivos especiales se confieren atributos que son reconocidos en la Ley Fundamental, para efectos de que su actuar sea contundente y sus resoluciones sean categóricas.

⁹ Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis Jurisprudencial, 9a. Época; Tomo XXV, Mayo de 2007, Pleno; S.J.F., Pág. 1647, No., de Reg. 172456. “énfasis añadido”



Comisión de Puntos Constitucionales

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

764
795
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

De lo anteriormente descrito, el proyecto que se está dictaminando, cuenta con esos elementos, dado que el órgano autónomo tendrá como finalidad primordial, garantizar la transparencia de acción y de ejercicio de los entes obligados en el texto constitucional, por lo que su denominación será la de un organismo autónomo en el ámbito federal.

Dada su naturaleza de organismo autónomo, especializado e imparcial consolida las acciones en materia de transparencia, facultándolo para desarrollar un procedimiento administrativo que revise, atraiga y, en su caso, sancione a los sujetos obligados que incumplan una petición.¹⁰

Ahora bien, al frente del órgano estarán siete comisionados, con duración en el encargo de siete años, sin posibilidad de reelección.

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LA TRANSPARENCIA

Dentro del Proyecto de la Minuta, se otorgan facultades al organismo autónomo para tener acceso a la información de entes no solamente de la administración pública, esta es otra arista relevante del presente proyecto y que se encuentra relacionado directamente con la autonomía del órgano de transparencia; el hecho de que se dé esta forma, conlleva a ampliar las

¹⁰ Los elementos referentes al desarrollo del procedimiento que se ventilará ante el Instituto, se desarrollará en la Ley Federal conducente o, en su caso, en la modificación a la que se encuentra en vigencia.



Comisión de Puntos Constitucionales

725

796

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

facultades de ejercicio a otros entes, fuera de la administración, y a nivel nacional, precisando los sujetos obligados:

- a) Los Poderes de la Unión;
- b) Los Poderes de los Estados de la Federación;
- c) Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal;
- d) Los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
- e) Los organismos autónomos y las universidades públicas;
- f) Los fideicomisos y fondos públicos;
- g) Toda persona física, moral, sindicato o fideicomiso privado respecto de los recursos públicos que reciba y ejerza;
- h) Las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, y
- i) Los partidos políticos.

En el esquema que actualmente tiene el Instituto sería más que imposible poder solicitarle a los sujetos antes citados cualquier información de naturaleza pública. Si la pretensión primordial es la supervisión de los



Comisión de Puntos Constitucionales

760

797

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

sujetos obligados, es muy necesario insertar dentro del texto de nuestra Carta Magna, una autoridad que tenga rango constitucional con la finalidad de que ejerza funciones fundamentales para el Estado¹¹, por ello, es que se debe de contar con un organismo autónomo cuyo objetivo sea la consolidación del derecho a la información.

En ese orden de ideas, la información que se llegue a requerir con esta reforma, no será solamente de la Administración Pública, sino de todas aquellas instituciones que tengan una relación directa con el ejercicio de recursos que reciban por parte del Estado, como es el caso de los organismos de la misma jerarquía constitucional.

Se agrega a los partidos políticos, como sujetos obligados del derecho de acceso a la información, como los define Handbook of Party Politics: "Grupos autónomos de ciudadanos que tienen como fin hacer nominaciones de candidatos y contender en procesos electorales con la expectativa de ganar posiciones públicas de poder en las estructuras del Estado y dirigir desde ellas las instituciones públicas"¹²

De igual forma, el proyecto de la minuta tiene a bien, establecer que los sindicatos también son entes que deberán ser sujetos a rendir cuentas, si se

¹¹ Moreno Ramírez Ileana, Los órganos constitucionales autónomos en el ordenamiento jurídico mexicano, colección Breviarios Jurídicos, Edit., Porrúa, México 2005, primera edición pág. 22.

¹² Cita consultada en el sitio <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/25.pdf> el 10 de enero de 2013.



Comisión de Puntos Constitucionales

767

778

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

toma en consideración que la naturaleza de los sindicatos es compleja, toda vez que constituyen una asociación de índole privada, que representan y defienden el interés de todos y cada uno de sus afiliados, y en cuanto a institución de carácter social poseen una esencia cuasi-pública, ya que tales organizaciones representan el interés general de un amplio sector de la población (trabajadores), siendo, justamente, esta última, la función que reviste especial trascendencia en el ámbito público y político, y que justifica la supervisión del Estado. Cabe precisar que, los sindicatos sólo deberán rendir cuentas respecto de los recursos públicos que reciban del Estado.

Además, se incluyen a las universidades públicas u organismos equivalentes como institutos de educación superior en la parte considerativa en estudio, a efecto de que se obliguen constitucionalmente a proporcionar la información relativa a los recursos públicos que reciba o ejerza por cualquier cargo o comisión.

Las Diputadas y los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas, estiman pertinente precisar los alcances de la presente reforma constitucional, en los siguientes términos:

- **Modificación al apartado A, del artículo 6º Constitucional.**

Se propone una redacción para modificar el artículo 6º, para establecer un orden respecto de las diferentes disposiciones en materia del derecho al



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

acceso a la información. La racionalidad de dicha redacción responde a la de organizar en un apartado "A" todo lo relativo a la materia del derecho de acceso a la información, estableciendo en una fracción I los principios y bases relativas que deberán regir para el ejercicio del derecho de acceso a la información, para la Federación, los Estados, los municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias; mientras que en una fracción II se establece la creación y competencia de un organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el ámbito federal.

Ahora bien, entrando en materia de este apartado "A", tanto en el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Minuta de nuestra colegisladora, el artículo 6º de la Carta Magna establece las bases y principios por los que la Federación, los Estados y el Distrito Federal deben regirse para el ejercicio del derecho al acceso a la información. Es decir, se toma en cuenta sólo a dos niveles de gobierno: la Federación y las entidades federativas. Sin embargo, en la fracción I de este artículo, donde se expone la primera de estas bases, se refiere a que toda la información en posesión de cualquier autoridad, incluida la municipal, es de carácter público. Notablemente se incorporó a un tercer nivel de gobierno y, por tanto, las disposiciones previstas en el artículo en comento, rigen también a los municipios del país y no sólo a la Federación y las entidades



Comisión de Puntos Constitucionales

767

500

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

federativas. Pero en correlación, se debe contemplar además a los órganos políticos-administrativos del Distrito Federal, denominado genéricamente "Delegaciones" al efecto de que se incluyan en el alcance de esta reforma constitucional.

Por ello, como tanto en el primer párrafo del apartado "A" de la Minuta, o bien, el párrafo segundo del texto Constitucional vigente, no hacen referencia a este nivel de gobierno, se considera que se trata de una omisión que introduce una discordancia. En tal virtud, se propone incluir en dicho párrafo la referencia explícita a que los principios y bases contenidos en el artículo rigen también a los municipios y a los órganos político-administrativos del Distrito Federal, dando así una mayor claridad, certeza y armonización al texto Constitucional.

Se hace importante mencionar que para efectos de adecuar la redacción del Apartado A, relativo a la materia de acceso a la información pública, el presente dictamen propone modificar la nomenclatura de las fracciones de esta Apartado "A" para que se les denomine ahora "BASES" en una Fracción I, en virtud de que contendrán precisamente los principios y bases generales en esta materia; y se propone la creación de una fracción II que contendrá la creación del órgano constitucionalmente autónomo en el ámbito federal, y que servirá de marco referencia para las Constituciones Locales y del Distrito Federal.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Uno de los puntos centrales de la reforma en materia de transparencia y protección de datos es no sólo la de señalar las obligaciones en cuanto al acceso a la información de las diferentes autoridades, sino sobre todo, definir con toda claridad y especificidad a los que serán sujetos obligados en esta materia. Por lo que se propone establecer este concepto desde la fracción I, donde se incluye una nomenclatura de las autoridades y entidades que englobará en lo sucesivo la figura de "sujetos obligados", que se refiere a cualquier entidad o persona que reciba o ejerza recursos públicos.

Por otro lado, para dicha fracción I, se propone también que estos sujetos tengan la obligación de preservar los documentos que deriven del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, es decir preservar la información de todo acto que se derive de las mismas.

En la intención de incorporar el principio de protección de datos que establece la Constitución, se propone incluir los conceptos relativos a información confidencial o reservada como un supuesto que podrá proceder según lo estipule la ley secundaria.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Dentro del cuarto párrafo de la Base Octava que enseguida se precisará, se establecen los principios que regirán la actuación de estos órganos constitucionalmente autónomos, en donde entre varios, destacan que sean "especializados e imparciales", es razón suficiente para considerar que resulta innecesario precisar que en cada alusión que se haga a este organismo se citen sus características, ya que como se comenta, es el caso de que la propia Constitución así lo contempla en un solo párrafo en su base octava, por lo que resulta imprecisa su repetición por técnica legislativa.

De igual forma se propone adicionar para mayor certeza jurídica en su referencia a este concepto de organismo autónomo la denominación de "en materia de transparencia y acceso a la información".

En este sentido, y para un mayor alcance a los términos del cuarto párrafo del Apartado B que propone la Minuta del Senado, se propone establecer que la Federación, los Estados y el Distrito Federal contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con organismos autónomos, especializados, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

772

803

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

La importancia de crear o fortalecer a los organismos autónomos a nivel Federal, estatal y en el Distrito Federal, para que observen una ley general, se fundamenta en la necesidad de armonizar los estándares y procedimientos en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales para no generar discrepancias en los contenidos y derechos fundamentales a los que la ciudadanía tiene acceso.

A su vez, de esta nueva redacción se desprende la creación de un ente especializado cuya función única será el tratamiento de datos personales en posesión de particulares, por la legislación que emane como resultado de la presente reforma, aunque se prevé en los transitorios del presente dictamen que el órgano constitucionalmente autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia, seguirá siendo competente en este rubro, hasta en tanto no se materialice la creación del ente en comento.

En este marco, se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos, misma que marcará el ámbito de competencia de las autoridades y legislaciones en los niveles federal, estatal y del Distrito Federal a fin de asegurar que en todo el país, el acceso a la información



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

pública y la protección de datos observen las condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

Se propone que dentro de lo que la Minuta establece en el apartado "B", párrafos cuarto al décimo sexto del artículo 6º, no se refiera al organismo autónomo establecido en la reforma en materia de transparencia como "organismo garante", sino como "organismo autónomo en el ámbito federal". Esto en virtud de que dicho organismo será responsable de garantizar el derecho al acceso a la información a través de la acción sobre los sujetos obligados, más no se desprende que de su existencia y de sostener dicha responsabilidad, el ejercicio de este derecho quede garantizado *de facto*. Por ello, se considera que emplear el término "organismo garante", podría significar una vulneración a la Constitución. Por otro lado, se homologa este nuevo término, "organismo autónomo en el ámbito federal", en todos los artículos en que se haga alusión a este organismo.

Es importante señalar que los organismos autónomos constitucionales han sido creados para coadyuvar con las instituciones del Estado, y éstos han evolucionado para convertirse en mecanismos que dan solución a las diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad. Aunado a ello, tienen



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

dentro de su naturaleza la creación de lazos de confianza entre la sociedad y el accionar gubernamental.

El organismo autónomo en el ámbito federal, consolida y fortalece las atribuciones del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, como la autoridad constitucional de las acciones de transparencia y acceso a la información, facultándolo así para conocer los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos de los Estados y del Distrito Federal, así como atraer y resolver los recursos de revisión interpuestos ante éstos, como se detalla más adelante en la propuestas a este Dictamen de Minuta para el artículo 105 Constitucional.

En relación con la estructura del organismo autónomo en el ámbito federal, existe coincidencia con el texto de la Minuta del Senado, mismo que señala que el órgano superior de dirección estará integrado por un comisionado presidente y seis comisionados, mismos que durarán en su cargo siete años, su renovación será escalonada, no tendrán posibilidad de reelección y serán sujetos de juicio político, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dada la importancia del organismo autónomo en el ámbito federal y sus nuevas atribuciones frente a un catálogo ampliado de sujetos obligados, se



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

considera importante tener una pluralidad de criterios en el proceso de elección de los comisionados, lo cual sería posible al adoptar como mecanismo el nombramiento concurrente, mediante el cual el Senado propone su nombramiento, previa consulta pública a la sociedad, y en caso de que se designe con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, se faculte al Ejecutivo Federal para objetar la designación, es decir, en coincidencia con los términos de la Minuta del Senado en este proceso.

En este mismo espíritu democrático, necesitamos reiterar el compromiso de México país con la igualdad entre hombres y mujeres que ya contempla nuestra Constitución, no se trata sólo de un concepto, sino de una práctica que fortalece la inclusión y la transparencia en las instituciones.

Incorporar en el texto Constitucional la garantía de igualdad de oportunidades para la ciudadanía en la conformación del pleno del nuevo órgano autónomo en el ámbito federal, disminuye la brecha de desigualdad que en ocasiones se presenta al momento de la conformación, aún más, permite que se sienta precedente para la futura integración de órganos autónomos.

En la fracción II, párrafo cuarto se propone que las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. En donde establece los sujetos



Comisión de Puntos Constitucionales

776

807

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

legitimados para interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad, la estabilidad económica o cuando se trasgredan los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o sean emitidas con motivo del ejercicio de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo de esta fracción.

Y para el efecto de obtener mayor certeza jurídica, profesional y objetiva en el carácter inatacable de las resoluciones que llegue a dictar este organismo, se propone establecer en los requisitos de los comisionados que la mayoría tengan experiencia en la rama del Derecho, y por otra parte se justifique la experiencia en el ámbito de transparencia, lo anterior en la búsqueda de un equilibrio en el funcionamiento y toma de decisiones del organismo, de tal forma que los comisionados del organismo autónomo, deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V, VI del artículo 95 de esta Constitución, en donde cuatro de los comisionados deberán cumplir además con lo estipulado en la fracción III del mismo artículo, mientras que los otros tres comisionados deberán haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la transparencia y acceso a la información pública, no podrán tener otro



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio. De igual forma se propone que el organismo autónomo en el ámbito federal, contará con un órgano superior, que funcionará en Pleno, por lo que ante los requisitos constitucionales y los principios rectores que se establecen en este dictamen, como precisamente que se integren de manera colegiada en todos los órganos, no se asimilan las condiciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde si bien es cierto que existe un consejo consultivo, esto obedece a que la responsabilidad recae en una sola persona o titular al frente del organismo protector de los derechos humanos, mientras que en el organismo constitucionalmente autónomo en materia de transparencia existirá un órgano de dirección, que será precisamente el Pleno integrado por los siete comisionados que lo integran, con los requisitos antes referidos.

- **Adición de la fracción XXIX-R al artículo 73 Constitucional.**

Se propone adicionar la fracción XXIX-R al artículo 73, toda vez que de acuerdo a la Minuta, esta fracción refiere a la facultad del Congreso de la Unión de expedir leyes en materia de transparencia, considerando que en la



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

actualidad sólo existe la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es decir, capaz de regular la materia en el ámbito federal, pero no en el estatal, del Distrito Federal y de los municipios. Sin embargo, se propone contar con una ley general que desarrolle las bases, principios generales previstos en el Apartado A del artículo 6º de esta Constitución y determinen en su caso, el ámbito de facultades y competencias de la Federación, entidades federativas y sus municipios, así como para el Distrito Federal y órganos políticos administrativos, incluyendo los procedimientos que regulen la materia en todos los órdenes de gobierno, por lo que ya no resulta necesario modificar la Carta Magna para facultar al Congreso a expedir más ordenamientos en esta materia, más allá de esta ley general que viene expresada en lo dictaminado para el artículo 6º Constitucional.

- **Adición de la fracción XXIX-S al artículo 73 Constitucional.**

Esta adición corresponde a darle facultades al Congreso para expedir la ley general que establece la homogeneidad en la organización y administración de los archivos y, asimismo, plasma el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos en los tres niveles de gobierno.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

• Artículo 105 constitucional

La Minuta propone un inciso l) para facultar al organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo Federal, para interponer Controversias Constitucionales sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación. De igual forma se desprende de la propuesta de la Minuta que pretende modificar el inciso m), para otorgar la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pueda conocer de controversias que se susciten entre el llamado "organismo garante" por el Dictamen a la Minuta y el Banco de México.

Sin embargo, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se adicionó un inciso l) a la Fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, mediante la cual se faculta a promover controversias constitucionales a ***"Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales"***, con lo que se garantiza la inclusión de este tipo de organismos constitucionalmente autónomos como entes legitimados para ejercitar este tipo de mecanismos de control constitucional.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- **Reforma al tercer párrafo del artículo 108 constitucional.**

Esta propuesta de modificación se plantea bajo el contexto de armonizar el párrafo tercero con el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, toda vez que en el primer párrafo establece que se reputara como servidores públicos a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, en la Asamblea Legislativa del Distrito federal.

- **Reforma al artículo 110 constitucional.**

Dada la relevancia y trascendencia de las funciones que realizan los órganos constitucionales autónomos en el Estado, es importante garantizar que sus titulares tengan garantías de estabilidad y permanencia, pero también reglas para establecer su responsabilidad en caso de violaciones a sus deberes, y esa responsabilidad debe ampliar a todos los comisionados o equivalentes de los organismos constitucionalmente autónomos que se deriven del Pacto Federal. En virtud de lo anterior se propone reformar el artículo 110 de nuestra Constitución, ya que uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país actualmente es garantizar el desempeño honesto y transparente de todos y cada uno los servidores públicos respecto al ejercicio de sus funciones.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- **Reforma al artículo 116 constitucional.**

El contenido de la presente propuesta pretende otorgar autonomía constitucional a todos los organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información pública que ya existen en los Estados de la República y el Distrito Federal. Este es un paso trascendental que, mediante una reforma al artículo 116 Constitucional y, en el apartado siguiente se describe otra en el mismo sentido al artículo 122 Constitucional, lo cual permite asegurar que en cada Estado y en el Distrito Federal exista un organismo especializado, colegiado e imparcial, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna, responsable de velar por el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de las autoridades.

En segundo lugar, con las presentes propuestas se pretende establecer las bases, estándares y procedimientos armonizados en todo el país y que no genere diferencias en el contenido, garantías y condiciones de ejercicio de derechos fundamentales, como se mencionó anteriormente la iniciativa propone dotar al Congreso de la Unión de la facultad para expedir una ley general que deberá establecer los estándares mínimos y los procedimientos



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

en la materia, para asegurar que en todo el país la protección de estos derechos y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas en el territorio nacional.

- **Reforma al artículo 122 constitucional.**

Se homologa para legislar en materia de derecho al acceso de la información y protección de datos personales en el distrito federal, mediante la adición de un inciso ñ), a la fracción V, Base Primera, del Apartado A.

- **Modificación al Segundo Transitorio de la Minuta.**

Se sugiere referir a todas las leyes generales a las que la reforma en materia de transparencia de manera económica y no de forma específica, como lo refiere la Minuta del Senado. Esto, de forma que el Congreso tenga la posibilidad de explorar la manera más eficiente y eficaz de generar las leyes que se emanan de dicha reforma, pudiendo analizar y estudiar en todo momento la conveniencia de determinar cuántas leyes generales se requieren y en qué materias. Asimismo, se modifica el plazo de un año, para ser el de ciento ochenta días que se tendrán para expedir estas leyes generales y, se propone que sólo se cuente con seis meses para hacer adecuaciones al marco jurídico ya existente.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- **Se modifica el contenido del Tercer Transitorio.**

La propuesta propone que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

- ***Modificación al Cuarto Transitorio.***

En congruencia con la Minuta del Senado y en correlación con el Segundo Transitorio, en la búsqueda de una mayor certeza jurídica en el proceso de designación que por primera ocasión se deban verificar en el organismo constitucionalmente autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública, se propone modificar este cuarto transitorio para que en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores, o en sus



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará a los Comisionados que integren el organismo autónomo, especializado e imparcial, en el ámbito federal, así como por única ocasión nombrará a dos de los comisionados electos para que ejerzan su cargo cinco años y para que otros tres comisionados ocupen su cargo tres años, y dos comisionados para que desempeñen durante siete años su encargo.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

785

9/6

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

En tanto se integra el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se crea en virtud del presente Decreto conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en funcionamiento el organismo descentralizado previsto en el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con las atribuciones establecidas en dicha ley. En consecuencia, es importante mencionar que esta propuesta concuerda con el Dictamen a la Minuta para dar continuidad con los trabajos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en tanto se integra el organismo autónomo.

- **Modificación al Quinto Transitorio.**

Se propone modificar el plazo para que los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal adecuen sus legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos, de un año a seis meses, con el objeto de dar mayor celeridad al proceso de homologación.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- **Modificación del artículo Octavo Transitorio.**

Se propone la modificación del artículo Octavo Transitorio, para dar continuidad a los procesos iniciados actualmente por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en tanto se integra el organismo autónomo en el ámbito federal en los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y protección de datos personales.

- **Modificación del Noveno Transitorio.**

En virtud de que en el apartado anterior de esta propuesta se incluye la previsión de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración del organismo autónomo en el ámbito federal continuarán su trámite ante el nuevo organismo, resulta innecesario, por tanto, conservar el Noveno Transitorio contemplado en la Minuta, pues versa sobre el mismo asunto.

- **Modificación al Décimo Transitorio.**

El artículo Décimo Transitorio de la Minuta, pasa a ser el Noveno Transitorio.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen,



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

78F

818

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 6o; EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 108; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 110; LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 111; Y **SE ADICIONAN** LAS FRACCIONES XXIX-R Y XXIX-S AL ARTÍCULO 73; UNA FRACCIÓN XII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 76; UNA FRACCIÓN VIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 78; UNA FRACCIÓN XX, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL PARA SER LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 89; UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 105; UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 116; EL INCISO ñ), RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES EN SU ORDEN, DE LA FRACCIÓN V, DE LA BASE PRIMERA, DEL APARTADO C, DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 6. (...)



Comisión de Puntos Constitucionales

799
819

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

...

...

...

A.- En materia de derecho de acceso a la información.

I. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados, **los municipios**, el Distrito Federal **y sus órganos político-administrativos**, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Base Primera. Toda la información en posesión de **los sujetos obligados** es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público o **de seguridad nacional**, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Para efectos de este Apartado, son sujetos obligados:



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

789

820

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- a) Los Poderes de la Unión;
- b) Los Poderes de los Estados de la Federación;
- c) Los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal;
- d) Los ayuntamientos y los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
- e) Los organismos autónomos y las universidades públicas;
- f) Los fideicomisos y fondos públicos;
- g) Toda persona física, moral, sindicato o fideicomiso privado respecto de los recursos públicos que reciba y ejerza;
- h) Las personas físicas o morales que realicen actos de autoridad en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, y
- i) Los partidos políticos.

Los sujetos obligados deberán preservar la documentación que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de reserva, confidencialidad o inexistencia de la información.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Base Segunda. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Base Tercera. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

Base Cuarta. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos **en materia de transparencia y acceso a la información** que prevé esta Constitución.

Base Quinta. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos **y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.**



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Base Sexta. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

Base Séptima. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Base Octava. La Federación, los Estados y el Distrito Federal contarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, con organismos autónomos, especializados, colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley. Tratándose de los sujetos obligados a que se refiere el inciso i) de la base primera, fracción I de este apartado, serán competentes las autoridades electorales.



792
823

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

La protección de datos personales en posesión de particulares, estará a cargo del ente público que señale la ley.

Los organismos autónomos previstos en esta Base, se regirán por las leyes en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, las cuales deberán ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

II. El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública en el ámbito federal tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; con excepción de los asuntos jurisdiccionales que



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

793
824

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos de los Estados y del Distrito Federal, que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo en el ámbito federal de oficio o a petición fundada de los organismos autónomos equivalentes de los Estados o del Distrito Federal, podrá atraer y resolver los recursos de revisión interpuestos ante estos últimos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley general establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Procurador General de la República, el Consejero jurídico del Gobierno,



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrán interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, cuando dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad o la estabilidad económica o cuando se trasgredan los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, o sean emitidas con motivo del ejercicio de la facultad de atracción prevista en el segundo párrafo de esta fracción.

El organismo autónomo en el ámbito federal, contará con un órgano superior, que funcionará en Pleno, integrado por un comisionado presidente y seis comisionados, que durarán en su cargo siete años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser reelectos.

Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos



Comisión de Puntos Constitucionales

826

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, en donde cuatro de los comisionados deberán cumplir además con lo estipulado en la fracción III del mismo artículo, mientras que los otros tres comisionados deberán haberse desempeñado cuando menos tres años en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la transparencia y acceso a la información pública, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, deberán cumplir los requisitos y observar las normas de conflicto de intereses que establezca la ley, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del pleno del organismo autónomo en el ámbito federal, se garantizará el principio de igualdad consagrado en esta Constitución.



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo autónomo en el ámbito federal para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo autónomo en el ámbito federal y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo autónomo en el ámbito federal, la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, la entidad especializada en materia de archivos y el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, coordinarán sus acciones entre sí, así como con los organismos



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

778

829

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

equivalentes de los Estados y del Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.

B. (...)

Artículo 73. ...

I. a XXIX-Q. (...)

XXIX-R. Para expedir la ley general que desarrollará las bases, principios generales y procedimientos en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

779
830

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

XXX. (...)

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. Nombrar a los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley, y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. (...)

(...)

I. a VI. (...)



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

831

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

VIII. **Nombrar a los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley, y**

IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Artículo 89. (...)

I. a XIX. (...)



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

801
832

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

XX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley, y

XXI. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 105. (...)

I. a III. (...)

IV. De los recursos de revisión interpuestos en contra de las resoluciones del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia a que se refiere el artículo 6o. de esta Constitución.

...

...



Comisión de Puntos Constitucionales

802
833

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, **los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal**, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal otorguen autonomía**, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(...)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

803

834

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, **los comisionados de los organismos constitucionales autónomos**, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, **así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

835
804

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral **y los**



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

836 825

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

comisionados de los organismos autónomos por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

(...)

(...)

(...)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales **y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía**, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

837
824

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan
como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 116. (...)

(...)

I. a VII. (...)

**VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos
autónomos en materia de transparencia y acceso a la información que**



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

807
838

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

garantizarán el derecho a la información y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia.

El organismo autónomo coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas.

Artículo 122. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

808
837

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE TRANSPARENCIA.

A. a C. (...)

BASE PRIMERA (...)

I. a IV. (...)

V. (...)

a) a n) (...)

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio,



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

809
840

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

así como con plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización del Distrito Federal, y con la entidad especializada en materia de archivos, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas;

- o)** Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;
- p)** Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y
- q)** Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA. a BASE QUINTA.- (...)

D. a H. (...)



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

810
841

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales a las que se refiere el artículo 73 fracciones XXIX-R y XXIX-S, adicionados por este Decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico en un plazo de seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de las leyes generales a las que se refiere el párrafo anterior.

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

871

842

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

Cuarto.- En un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Senadores, o en sus recesos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará a los comisionados que integren el organismo autónomo, especializado e imparcial, en el ámbito federal, así como por única ocasión nombrará a dos de los comisionados electos para que ejerzan su cargo cinco años y para que otros tres comisionados ocupen su cargo tres años, y dos comisionados para que desempeñen durante siete años su encargo.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

812

843

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

En tanto se integra el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información pública que se crea en virtud del presente Decreto conforme a lo dispuesto en este artículo, continuará en funcionamiento el organismo descentralizado previsto en



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

813

844

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con las atribuciones establecidas en dicha ley.

Quinto.- Las Legislaturas de los Estados, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán adecuar su legislación en materia de este Decreto, en un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de las leyes generales previstas en el artículo 73 fracciones XXIX-R y XXIX-S, adicionados por el presente Decreto.

Sexto.- El organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo.- En tanto se determina el ente público facultado para la protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo



DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información pública, ejercerá las atribuciones correspondientes.

Octavo.- En tanto el Congreso de la Unión expide las leyes y reformas previstas en el artículo Segundo Transitorio, el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, una vez integrado conforme al artículo Cuarto Transitorio, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración del organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, continuarán su trámite ante el nuevo organismo en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.

Noveno.- Una vez integrado el organismo autónomo en el ámbito federal en materia de transparencia y acceso a la información, conforme al artículo Cuarto Transitorio, todos los recursos financieros, materiales y



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Puntos Constitucionales

815
816

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

patrimoniales, así como los trabajadores adscritos al Instituto que alude el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pasarán a formar parte de dicho organismo. Los trabajadores que pasen a formar parte de este nuevo organismo, se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados sus derechos individuales, ya adquiridos, en el ámbito laboral y de seguridad social.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de agosto de 2013.

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN Y, RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES


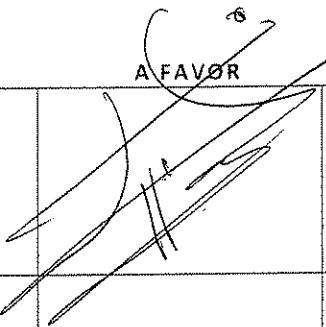



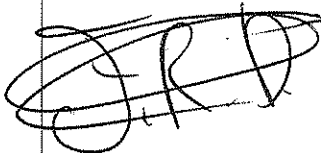

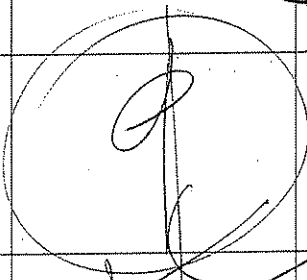

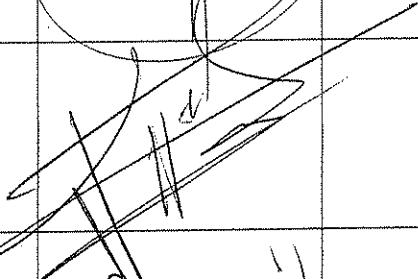

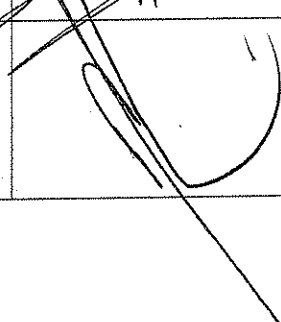
810
847

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

LISTA DE VOTACIÓN

EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
 PRESIDENTE	4°	D.F	(GPPRD)			
DIP. JULIO CESAR MORENO RIVERA						
 SECRETARIO	03	QUERÉTARO	(GPPAN)			
DIP. MARCOS AGUILAR VEGA						
 SECRETARIO	4°	D.F	(GPPAN)			
DIP. FERNANDO RODRIGUEZ DOVAL						
 SECRETARIO	08	CHIHUAHUA	(GPPRI)			
DIP. PEDRO DOMINGUEZ ZEPEDA						
 SECRETARIO	11	NUEVO LEÓN	(GPPRI)			
DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA						
 SECRETARIO	02	QUINTANA ROO	(GPPRI)			
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA						



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES


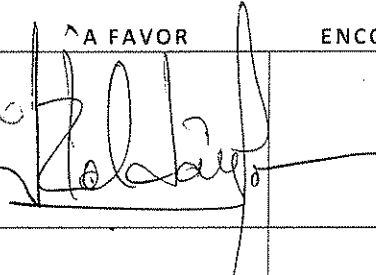



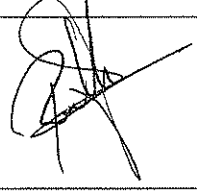

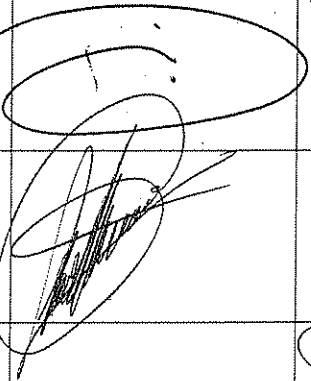


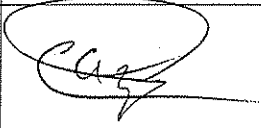
817
848

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

LISTA DE VOTACIÓN

EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
 SECRETARIO	5°	MÉXICO	(PANAL)			
 SECRETARIO	4º	GUERRERO	(MC)			
 SECRETARIA	4º	D.F.	(PVEM)			
 SECRETARIA	07	MÉXICO	(GPPRI)			
 SECRETARIA	5°	MÉXICO	(GPPRD)			
 SECRETARIO	03	CHIHUAHUA	(GPPAN)			



LISTA DE VOTACIÓN

EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	2ª	QUERÉTARO	(GPPAN)			
 INTEGRANTE	15	D.F.	(GPPAN)			
 INTEGRANTE	02	GUANAJUATO	(GPPAN)			
 INTEGRANTE	05	SONAORA	(GPPAN)			
 INTEGRANTE	05	NUEVO LEÓN	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	2º	COAHUILA	(GPPRI)			



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES


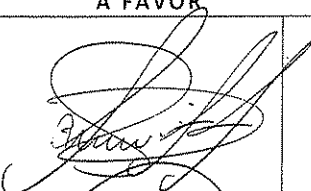





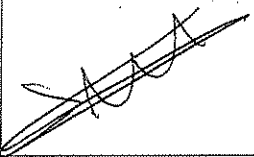



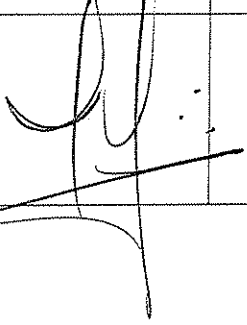
819
850

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

LISTA DE VOTACIÓN

EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	02	CAMPECHE	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	03	CHIAPAS	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	03	NAYARIT	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	13	MÉXICO	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	01	QUERÉTARO	(GPPRI)			
 INTEGRANTE	05	HIDALGO	(GPPRI)			



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES



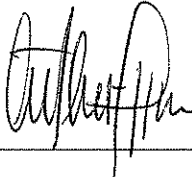

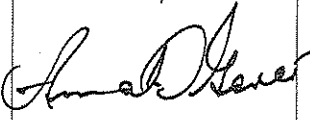

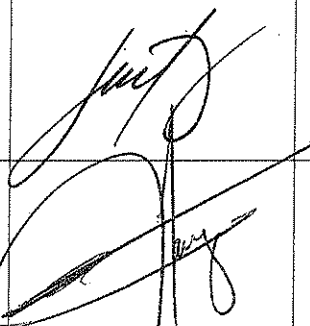


851

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

LISTA DE VOTACIÓN

EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	A FAVOR	ENCONTRA	ABSTENCIÓN
 INTEGRANTE	5a	MÉXICO	(PT)			
		DIP. RICARDO CANTÚ GARZA				
 INTEGRANTE	02	AGUASCALIENTES	(PVEM)			
		DIP. ANTONIO CÚELLAR STEFFAN				
 INTEGRANTE	4°	D.F.	(GPPRD)			
		DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA				
 INTEGRANTE	4°	D.F.	(GPPRD)			
		DIP. JOSÉ ÁNGEL ÁVILA PÉREZ				
 INTEGRANTE	11	D.F.	(GPPRD)			
		DIP. LUIS ÁNGEL X. ESPINOSA CHÁZARO				
 INTEGRANTE	17	D.F.	(GPPRD)			
		DIP. FERNANDO ZÁRATE SALGADO				



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Minuta que reforma diversas disposiciones de la CPEUM en materia de Transparencia. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

321

352

Asunto que se vota: _____

DIPUTADO (A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Areli Madrid Tovilla Presidenta. PRI			
Dip. Flor Ayala Rojas Linares Secretaria. PRI			
Dip. Juan Isidro Del Bosque Márquez. Secretario. PRI			
Dip. Lizbeth Loy Gamboa Song Secretaria. PRI			
Dip. María del Rocío García Olmedo Secretaria. PRI			
Dip. Enrique Alejandro Flores Flores. Secretario. PAN			
Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos Secretaria. PAN			
Dip. Verónica García Reyes Secretaria. PRD			



EXH. LEGISLATIVA
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Minuta que reforma diversas disposiciones de la CPEUM en materia de Transparencia. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

822

853

DIPUTADO (A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz Secretario. PRD			
Dip. Laura Ximena Martel Cantú Secretaria. PVEM			
Dip. Acosta Montoya, Rubén Integrante. PVEM			
Dip. Barrera Estrada, Rodimiro Integrante. PRI			
Dip. Belaunzarán Méndez, Fernando Integrante. PRD	 Enlogenera1		
Dip. Borboa Becerra, Omar Antonio Integrante. PAN			
Dip. Campos Córdova, Lisandro Arístides. Integrante. PRI			
Dip. Carbajal Hernández, Juan Manuel Integrante. PRI			



LXI LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Minuta que reforma diversas disposiciones de la CPEUM en materia de Transparencia. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

823

854

DIPUTADO (A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Carbajal González, Alejandro Integrante. PRD			
Dip. Coronado Quintanilla, Alberto Integrante. PAN			
Dip. Hurtado Gallegos, José Antonio Integrante. MC			
Dip. Inzunza Montoya, Alfonso Integrante. PRI			
Dip. Navarrete Contreras, Joaquina Integrante. PRD			
Dip. Salinas Núñez, Javier Integrante. PRD			
Dip. Sosa Govea, Martha Leticia Integrante. PAN			

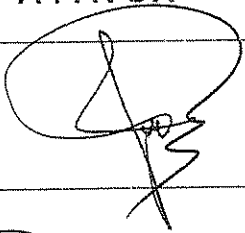

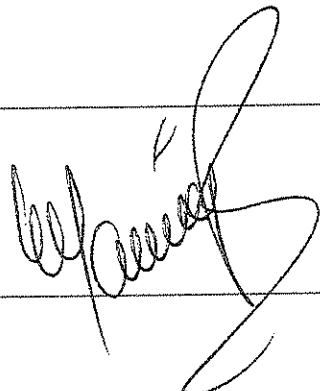


EXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Minuta que reforma diversas disposiciones de la CPEUM en materia de Transparencia. Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Anticorrupción y, de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

824
855

DIPUTADO(A)	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Dip. Terán Juárez, Jorge Integrante. PRI			
Dip. Treviño Villarreal, Pedro Pablo Integrante. PRI			
Dip. Castillo Valdez Benjamín Integrante. PRI			
Dip. Yáñez Robles, Elizabeth Oswelia Integrante. PAN			







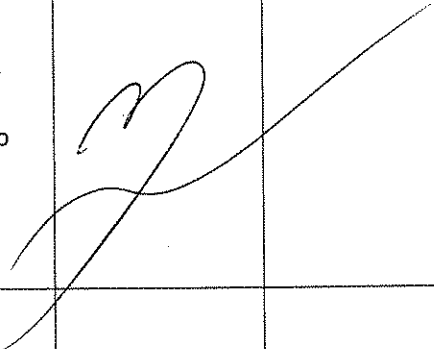

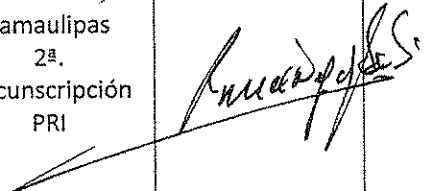


PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen en sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Transparencia

825

856





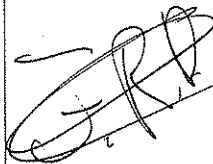


NOMBRE	ESTADO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 Dip. Marcos Aguilar Vega	Querétaro 03 Distrito PAN			
 Dip. Alberto Díaz Trujillo	Estado de México 15 Distrito PAN			
 Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos	Chiapas 6° Distrito PRI			
 Dip. Brenda María Alvarado Sánchez	Estado de México 11° Distrito PRI			
 Dip. Amira Gricelda Gómez Tueme	Tamaulipas 2ª. Circunscripción PRI			



PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen en sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Transparencia

826
857

NOMBRE	ESTADO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
 Dip. Ricardo Monreal Ávila	Distrito Federal 4ª. Circunscripción Mov. Ciudadano			
 Dip. Roberto López Suárez	Zacatecas 2ª. Circunscripción PRD			
 Dip. Rubén Camarillo Ortega	Aguascalientes 2ª. Circunscripción PAN			
 Dip. Fernando Rodríguez Doval	Distrito Federal 4ª. Circunscripción PAN			
 Dip. María del Rocío Corona	Jalisco 1er. Distrito PRI			


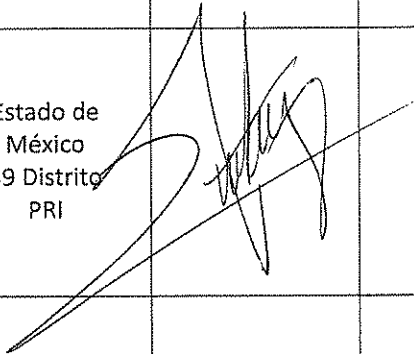

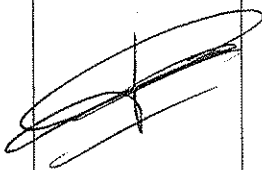

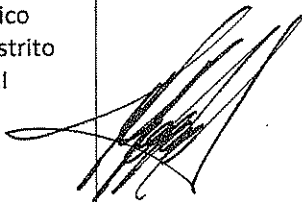

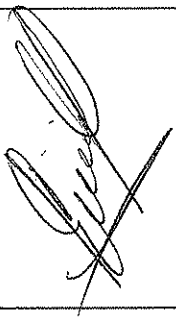

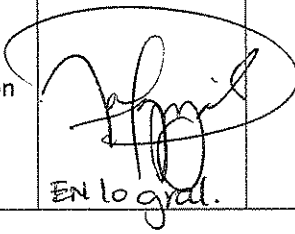


PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen en sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Transparencia

827

858

NOMBRE	ESTADO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
Nakamura				
 Dip. Cristina González Cruz	Estado de México 39 Distrito PRI			
 Dip. Norma Ponce Orozco	Estado de México 16 Distrito PRI			
 Dip. Miguel Samano Peralta	Estado de México 1er. Distrito PRI			
 Dip. Eduardo Román Quian Alcocer	Quintana Roo 1er. Distrito PRI			
 Dip. Alfa Eliana	Coahuila 2ª. Circunscripción PRD	 En lo gral.		





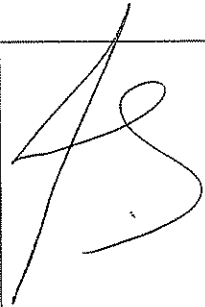

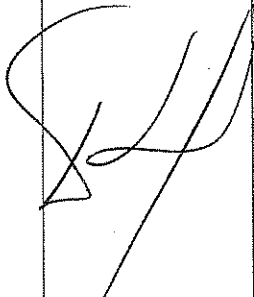
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

Dictamen en sentido Positivo a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Transparencia

828

859

NOMBRE	ESTADO	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
--------	--------	---------	-----------	------------

González Magallanes				
 Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana	Tabasco 5º. Distrito PRD			
 Dip. Jorge Salgado Parra	Guerrero 6º Distrito PRD			
 Dip. Felipe Arturo Camarena García	Guanajuato 12º Distrito PVEM			


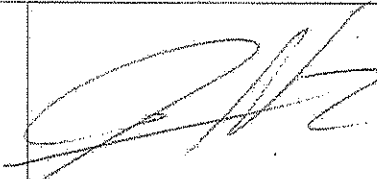
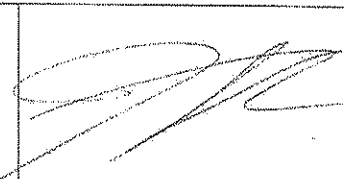

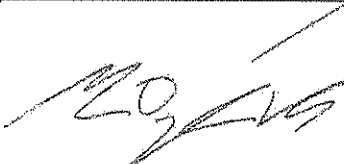
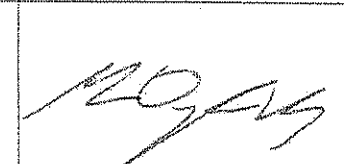

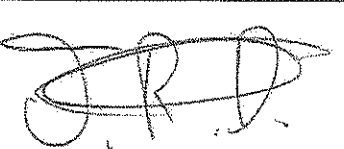
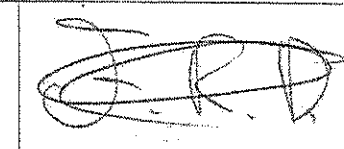


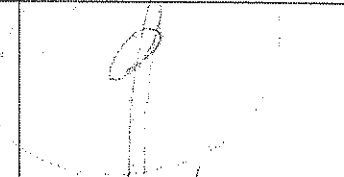


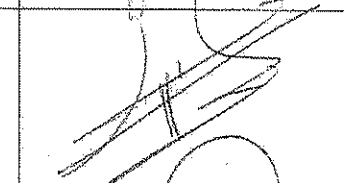

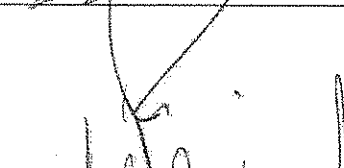


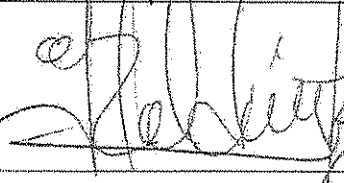
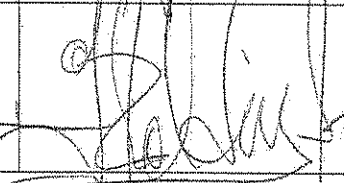


COMISIÓN DE PUNTOS CONTITUCIONALES

LISTA DE ASISTENCIA

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 11/04/13 en el Lobby del edificio "E" planta baja, de este Palacio Legislativo.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	ENTRADA	SALIDA
 PRESIDENTE	4°	D.F	(GPPRD)		
 SECRETARIO	03	QUERÉTARO	(GPPAN)		
 SECRETARIO	4°	D.F	(GPPAN)		
 SECRETARIO	08	CHIHUAHUA	(GPPRI)		
 SECRETARIO	11	NUEVO LEÓN	(GPPRI)		
 SECRETARIO	02	QUINTANA ROO	(GPPRI)		
 SECRETARIO	5°	MÉXICO	(PANAL)		



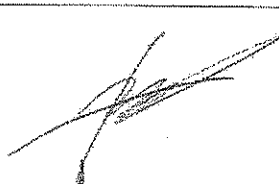


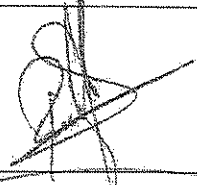

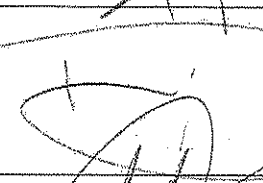
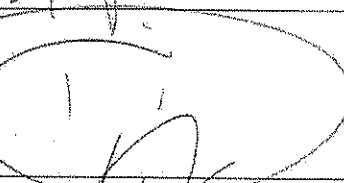




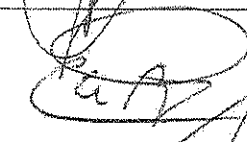



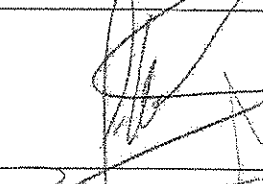

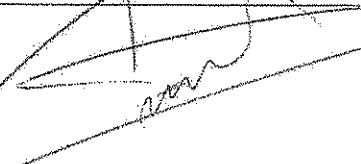
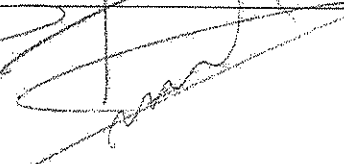


COMISIÓN DE PUNTOS CONTITUCIONALES

LISTA DE ASISTENCIA

LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 11/04/13 en el Lobby del edificio "E" planta baja, de este Palacio Legislativo.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	ENTRADA	SALIDA
 SECRETARIO	4ª	GUERRERO	(MC)		
 SECRETARIA	4ª	D.F.	(PVEM)		
 SECRETARIA	07	MÉXICO	(GPPRI)		
 SECRETARIA	5ª	MÉXICO	(GPPRD)		
 SECRETARIO	03	CHIHUAHUA	(GPPAN)		
 INTEGRANTE	2ª	QUERÉTARO	(GPPAN)		
 INTEGRANTE	15	D.F.	(GPPAN)		














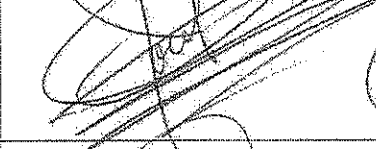


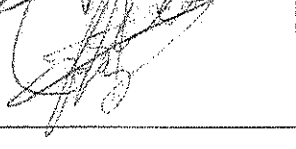


COMISIÓN DE PUNTOS CONTITUCIONALES

LISTA DE ASISTENCIA

LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 11/04/13 en el Lobby del edificio "E" planta baja, de este Palacio Legislativo.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	ENTRADA	SALIDA
 INTEGRANTE	02	GUANAJUATO	(GPPAN)		
 INTEGRANTE	05	SONAORA	(GPPAN)		
 INTEGRANTE	05	NUEVO LEÓN	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	2°	COAHUILA	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	02	CAMPECHE	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	03	CHIAPAS	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	03	NAYARIT	(GPPRI)		

832
863



COMISIÓN DE PUNTOS CONTITUCIONALES

LISTA DE ASISTENCIA

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 11/04/13 en el Lobby del edificio "E" planta baja, de este Palacio Legislativo.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	ENTRADA	SALIDA
 INTEGRANTE	13	MÉXICO	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	01	QUERÉTARO	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	05	HIDALGO	(GPPRI)		
 INTEGRANTE	5a	MÉXICO	(PT)		
 INTEGRANTE	02	AGUASCALIENTES	(PVEM)		
 INTEGRANTE	4°	D.F.	(GPPRD)		
 INTEGRANTE	4°	D.F.	(GPPRD)		

833
864




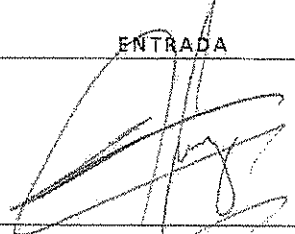
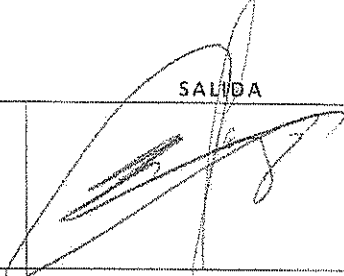

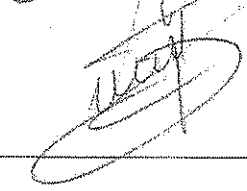
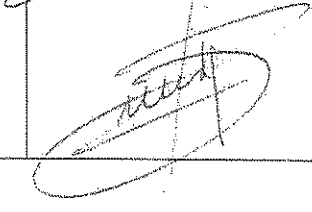
COMISIÓN DE PUNTOS CONTITUCIONALES

LISTA DE ASISTENCIA

LXII LEGISLATURA

CÁMARA DE DIPUTADOS

Reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, 11/04/13 en el Lobby del edificio "E" planta baja, de este Palacio Legislativo.

DIPUTADO	DTTO	ENTIDAD	GP	ENTRADA	SALIDA
 INTEGRANTE	11	D.F.	(GPPRD)		
 INTEGRANTE	17	D.F.	(GPPRD)		



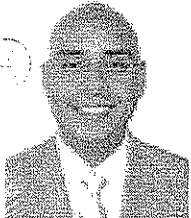


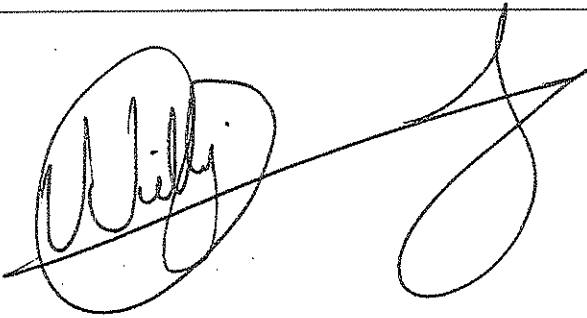

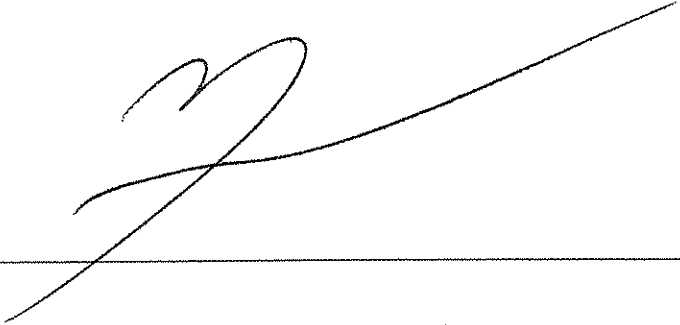


LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Inicial
de abril de 2013

834
865

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Marcos Aguilar Vega	Querétaro 03 Distrito PAN	
 Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos	Chiapas 6° Distrito PRI	
 Dip. Brenda María Alvarado Sánchez	Estado de México 11 Distrito PRI	
 Dip. Amira Gricelda Gómez Tueme	Tamaulipas 2ª. Circunscripción PRI	



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS


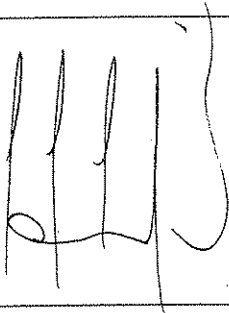




*Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias*

**REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN**

*Lista de Asistencia Inicial
de abril de 2013*

835

866

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Alberto Díaz Trujillo	Estado de México 15 Distrito PAN	
 Dip. Ricardo Monreal Ávila	Distrito Federal 4ª Circunscripción Movimiento Ciudadano	
 Dip. Roberto López Suárez	Zacatecas 2ª. Circunscripción PRD	
 Dip. Rubén Camarillo Ortega	Aguascalientes 2ª. Circunscripción PAN	




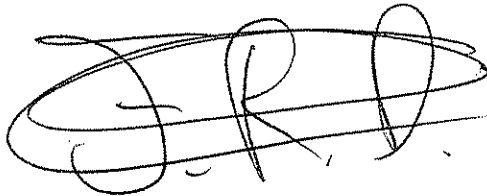



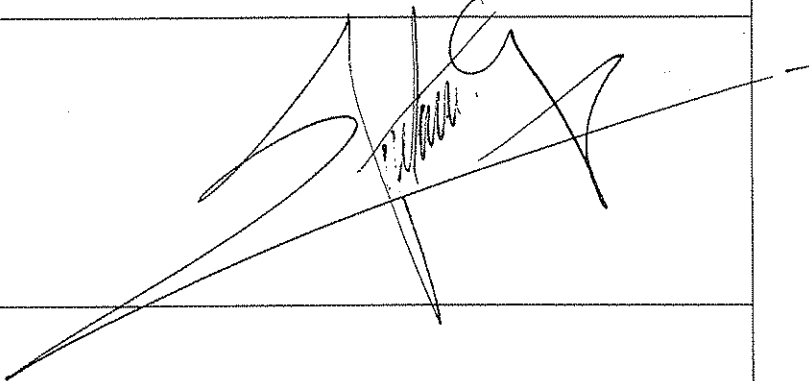

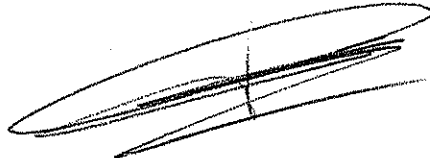
LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Inicial
de abril de 2013

836
867

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Fernando Rodríguez Doval	Distrito Federal 4ª. Circunscripción PAN	
 Dip. María del Rocío Corona Nakamura	Jalisco 1º Distrito PRI	
 Dip. Cristina González Cruz	Estado de México 39º Distrito PRI	
 Dip. Norma Ponce Orozco	Estado de México 16º Distrito PRI	



IXI LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

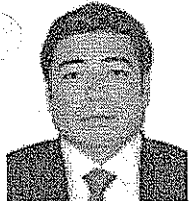
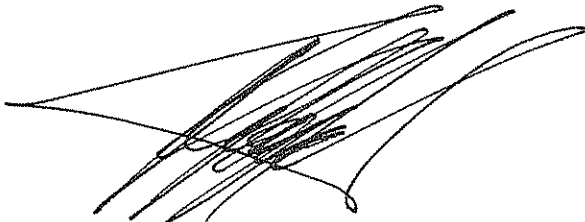

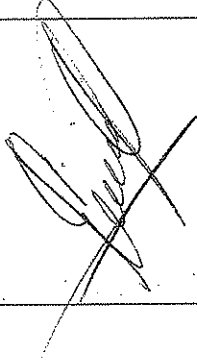
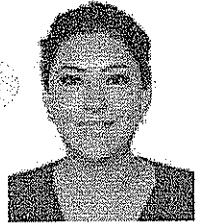
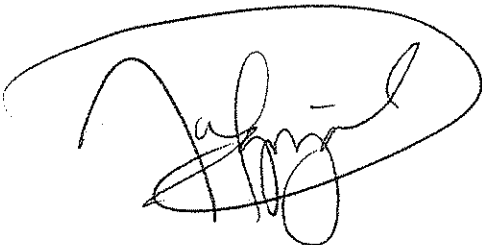

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Inicial
de abril de 2013

837

868

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Miguel Samano Peralta	Estado de México 1er. Distrito PRI	
 Dip. Eduardo Román Quian Alcocer	Quintana Roo 1er. Distrito PRI	
 Dip. Alfa Eliana González Magallanes	Coahuila 2ª. Circunscripción PRD	
 Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana	Tabasco 5º Distrito PRD	



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS


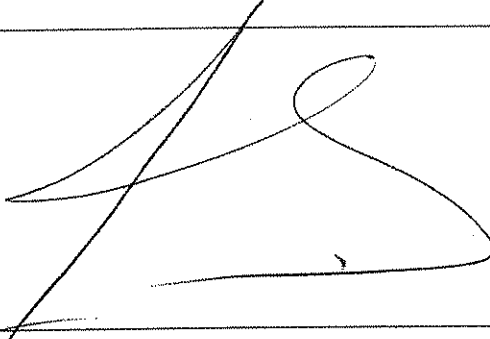
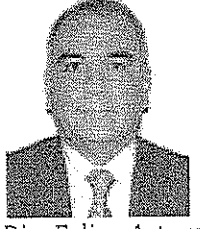
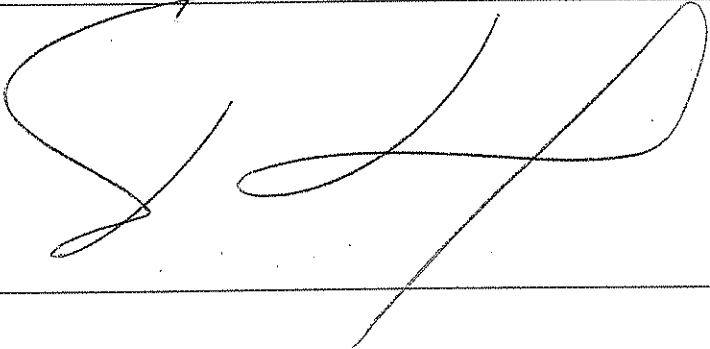
Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Inicial
de abril de 2013

838

869

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Jorge Salgado Parra	Guerrero 6° Distrito PRD	
 Dip. Felipe Arturo Camarena García	Guanajuato 12 Distrito PVEM	



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias




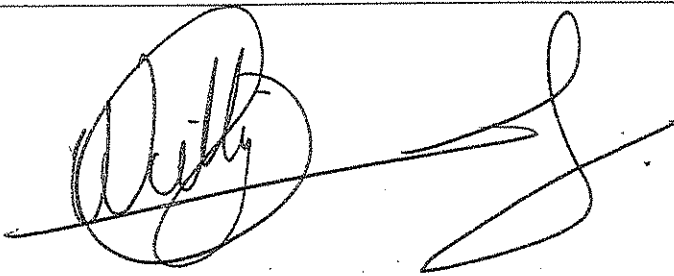

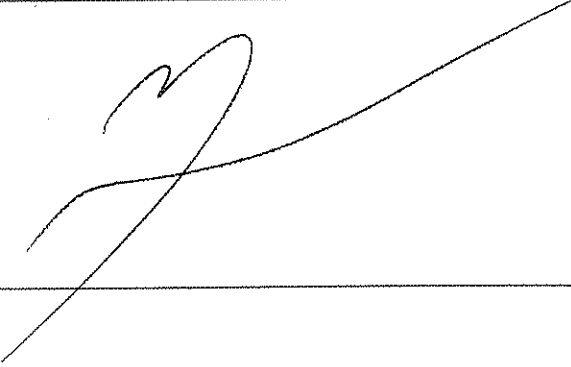


REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Final

19 de agosto de 2013

837

870

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Marcos Aguilar Vega	Querétaro 03 Distrito PAN	
 Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos	Chiapas 6° Distrito PRI	
 Dip. Brenda María Alvarado Sánchez	Estado de México 11 Distrito PRI	
 Dip. Amira Gricelda Gómez Tueme	Tamaulipas 2ª. Circunscripción PRI	



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS




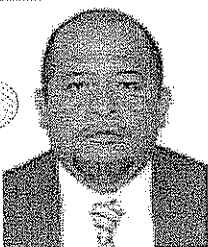

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Final

19 de agosto de 2013

840
871

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Alberto Díaz Trujillo	Estado de México 15 Distrito PAN	
 Dip. Ricardo Monreal Ávila	Distrito Federal 4ª Circunscripción Movimiento Ciudadano	
 Dip. Roberto López Suárez	Zacatecas 2ª. Circunscripción PRD	
 Dip. Rubén Camarillo Ortega	Aguascalientes 2ª. Circunscripción PAN	



LXI LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

*Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias*


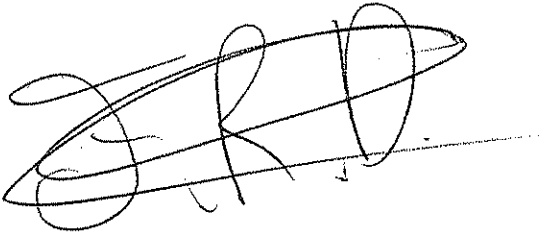



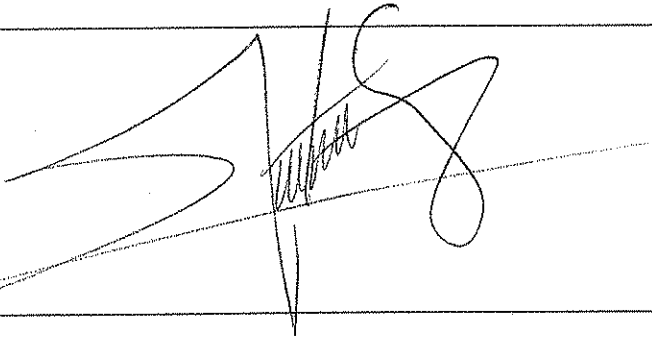

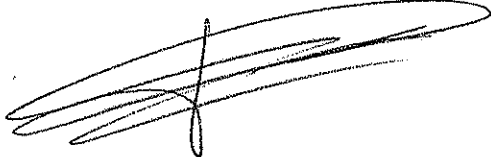
REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Final

19 de agosto de 2013

841

872

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Fernando Rodríguez Doval	Distrito Federal 4ª. Circunscripción PAN	
 Dip. María del Rocío Corona Nakamura	Jalisco 1º Distrito PRI	
 Dip. Cristina González Cruz	Estado de México 39º Distrito PRI	
 Dip. Norma Ponce Orozco	Estado de México 16º Distrito PRI	



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS


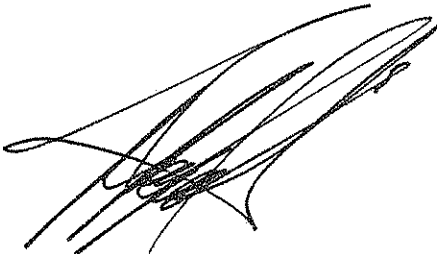

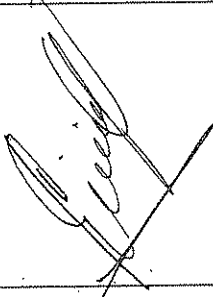
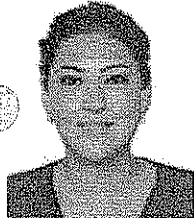
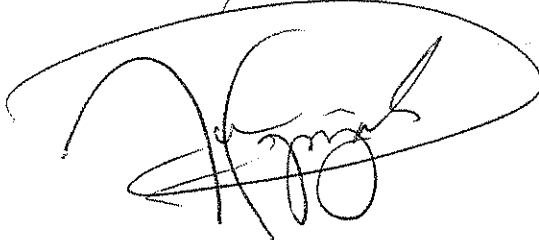

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias

REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Final

19 de agosto de 2013

842
843

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Miguel Samano Peralta	Estado de México 1er. Distrito PRI	
 Dip. Eduardo Román Quian Alcocer	Quintana Roo 1er. Distrito PRI	
 Dip. Alfa Eliana González Magallanes	Coahuila 2ª. Circunscripción PRD	
 Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana	Tabasco 5º Distrito PRD	



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

Comisión de Régimen, Régimen
Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias


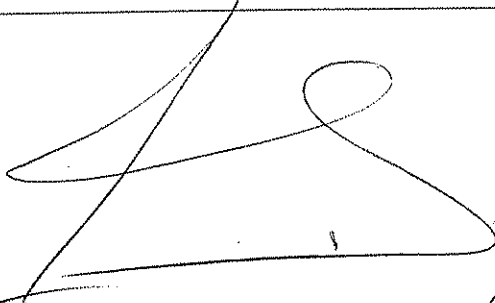

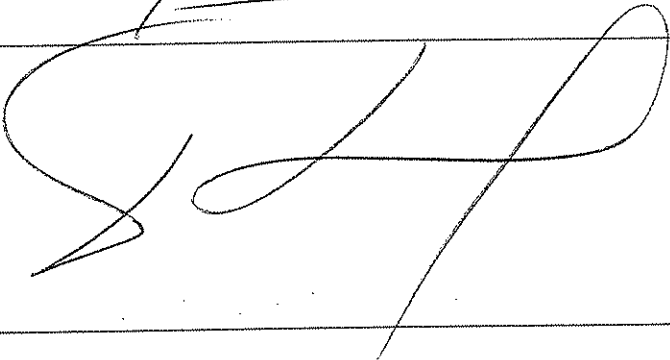
REUNIÓN COMISIONES UNIDAS
PUNTOS CONSTITUCIONALES,
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

Lista de Asistencia Final

19 de agosto de 2013

843

874

NOMBRE	ESTADO	FIRMAS
 Dip. Jorge Salgado Parra	Guerrero 6° Distrito PRD	
 Dip. Felipe Arturo Camarena García	Guanajuato 12 Distrito PVEM	



LXII LEGISLATURA
CAMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

844

875

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

Diputado(a)	Nombre	Inicio	Final
	Dip. Areli Madrid Tovilla Presidenta PRI A FAVOR		
	Dip. Lizbeth Loy Gamboa Song Secretaria de la Comisión PRI A FAVOR		
	Dip. María del Rocío García Olmedo Secretaria de la Comisión PRI A FAVOR		
	Dip. Flor Ayala Robles Linares Secretaria de la Comisión PRI A FAVOR		
	Dip. Juan Isidro Del Bosque Márquez Secretario de la Comisión PRI A FAVOR		



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

875
876

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

	Dip. Enrique Alejandro Flores Flores Secretario de la Comisión PAN EN CONTRA		
	Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos Secretaria de la Comisión PAN EN CONTRA		
	Dip. Laura Ximena Martel Cantú Secretaria de la Comisión PVEM A FAVOR		
	Dip. Roberto Carlos Reyes Gámiz Secretario de la Comisión PRD A FAVOR		
	Dip. Verónica García Reyes Secretaria de la Comisión PRD A FAVOR		



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

846

877

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

	Dip. Omar Antonio Borboa Becerra Integrante PAN		
	Dip. Alberto Coronado Quintanilla Integrante PAN		
	Dip. Martha Leticia Sosa Govea Integrante PAN		
	Dip. Elizabeth Oswelia Yáñez Robles Integrante PAN ED CONTRA		
	Dip. Lisandro Aristides Campos Córdova Integrante PRI A FAVOR		




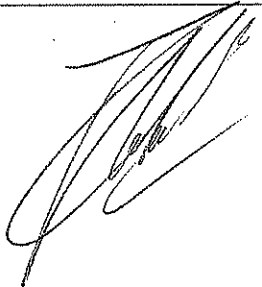
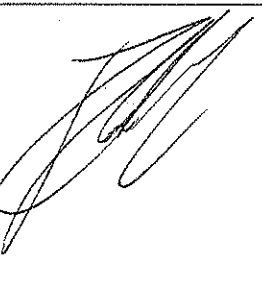
LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

847

878

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

	Dip. Alfonso Inzunza Montoya Integrante PRI A FAVOR		
	Dip. Rodimiro Barrera Estrada Integrante PRI A FAVOR		
	Dip. José Antonio Hurtado Gallegos Integrante MC		
	Dip. Rubén Acosta Montoya Integrante PVEM A FAVOR		
	Dip. Benjamín Castillo Valdez Integrante PRI NO SE HA RECIBIDO EN LA COMISIÓN. COMUNICADO DE SU REINCORPORACIÓN A LA COMISIÓN		



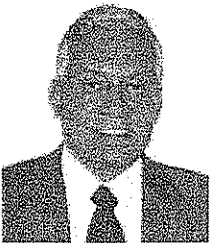
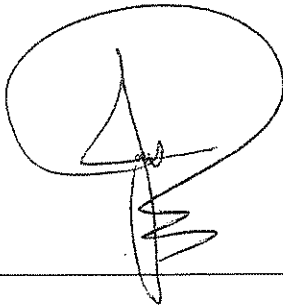
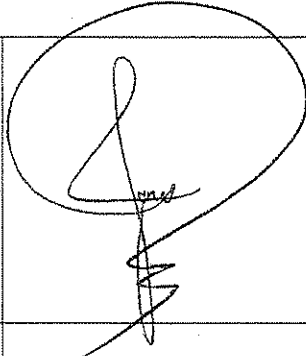
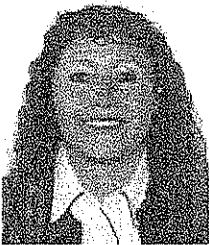






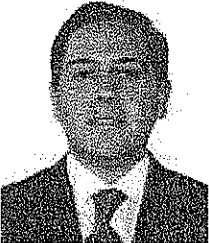


LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

348

879

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

	Dip. Jorge Terán Juárez Integrante PRI A FAVOR		
	Dip. Joaquina Navarrete Contreras Integrante PRD A FAVOR		
	Dip. Fernando Belaunzarán Méndez Integrante PRD A FAVOR		
	Dip. Javier Salinas Narváez Integrante PRD		
	Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal Integrante PRI A FAVOR		




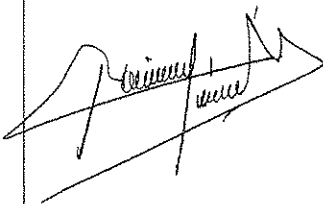
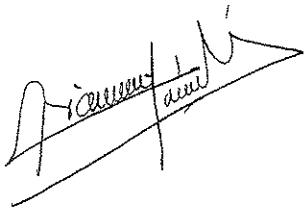
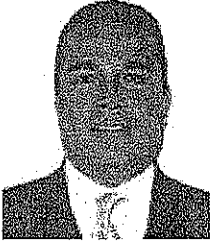
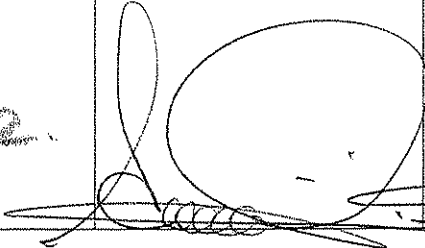
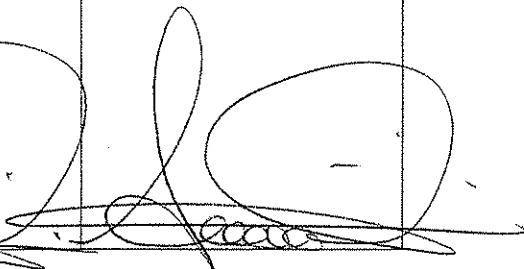
LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN

849

830

LISTA DE ASISTENCIA REANUDACIÓN REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS 19 de agosto de 2013, 17:00 horas Mezzanine edif. "A"

	<p>Dip. Juan Manuel Carbajal Hernández Integrante PRI</p> <p>A FAVOR</p>		
	<p>Dip. Alejandro Carbajal González Integrante PRD</p> <p>A FAVOR.</p>		

881
Sin que motive debate, en votación económica, se
aceptan las propuestas de la Comisión y se incorporan al
dictamen para su discusión. En votación nominal, se emiten:
(cuatrocientos dieciocho votos en pro, veinticinco votos en contra y una abstención).
Aprobado en lo general y en lo particular México D.F. a 22 de agosto de 2013. Los artículos
no reservados por cuatrocientos ochocientos y dos votos en pro, cuarenta y dos votos en contra y tres abstenciones. Aprobados los artículos sexto y séptimo por
tercio por trescientos noventa y dos votos. Agosto 22 de 2013.

Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente de la Mesa Directiva
Presente

Los suscritos diputados con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitamos a usted se registre y sometan a consideración del Pleno las siguientes modificaciones al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S del artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 78; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se reforma el inciso fi) y se recorren los incisos o) y p), adicionándose un inciso q) de la fracción V, de la base primera del apartado C del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6. (...)

...
...
...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. ...

III. ...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. ...

VII. ...

VIII. La Federación, contará con un organismo autónomo, especializado, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la

protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se **regirá** por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. **El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.**

El organismo garante se integra por siete comisionados. **Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa** realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la **ley orgánica**. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de

Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

B. (...)

Artículo 73. (...)

I.- a XXI-Q. ...

XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX.- ...

Artículo 76.- ...

I. a XI. ...

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley; y

XIII.- Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 78. ...

...

I. a VII. ...

VIII. ...

Artículo 89. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;

XX.- ...

Artículo 105. (...)

I. (...)

a) a k). (...)

l). (...)

...

...

II. (...)

(...)

a) a g) (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)
 (...)
 (...)
 III. (...)
 (...)
 (...)
 IV. ...

Artículo 108. ...

...
 Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...

...

...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito

Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6° constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...
...
...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

...
...
...
...
...

Artículo 116.- ...

...

I a VII.- ...

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información que garantizarán el derecho a la información y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia, **la cual se deberá ajustar a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.**

Artículo 122.- ...

...
...
...
...
...

A. ...

B. ...

C. ...

BASE PRIMERA ...

I a IV ...

V. ...

a) a n) ...

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, **para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.** El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

- o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;
- p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y
- q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA.- ...
D a H (...)

TRANSITORIOS

Primero.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6° de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1° de noviembre de 2017.
- b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.

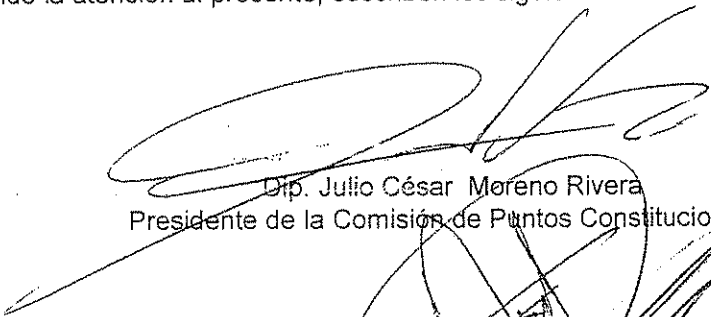
Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas en materia de transparencia el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental vigente.

Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.

Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

En ese sentido, solicitamos que de ser aprobados y aceptados y aceptadas por la Asamblea las modificaciones propuestas, la Presidencia instruya la aplicación del artículo 93 del citado Reglamento, para que las comisiones dictaminadoras realicen las correcciones y ajustes que se requieran para procurar la certeza y claridad jurídica del decreto.

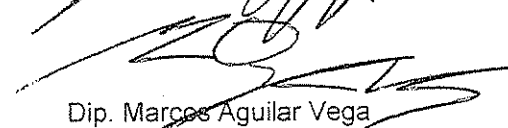
Agradeciendo la atención al presente, suscriben los siguientes:



Dip. Julio César Moreno Rivera
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales



Dip. Areli Madrid Tovilla
Presidenta de la Comisión de Transparencia
y Anticorrupción



Dip. Marcos Aguilar Vega
Presidente de la Comisión de Régimen Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

23 AGOSTO 2013.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos -- MESA DIRECTIVA
Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, LXII LEGISLATURA
de Gobernación y de Estudios -- OFICIO No. D.G.P.L. 62-II-7-
Legislativos, Primera. EXP.

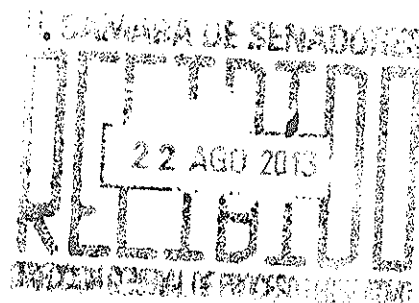
CC. Secretarios de la
Cámara de Senadores
P r e s e n t e s

[Firma manuscrita]

Tenemos el honor de remitir a Ustedes, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia, aprobada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 22 de agosto de 2013

[Firma manuscrita]
Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario



9:37 PM

X



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA
PROYECTO
DE
DECRETO

3

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Artículo Único. Se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6o.; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S al artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

...

...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:



I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. ...

III. ...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. ...



VII. ...

VIII. La Federación, contará con un organismo autónomo, especializado, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, **responsable** de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, **en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.**

En su funcionamiento se **regirá** por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un Comité integrado por tres



ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. **El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.**

El organismo garante se integra por siete comisionados. **Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa** realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la **ley orgánica**. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.



En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la Ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán



substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

La Ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público, estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

B. ...

Artículo 73. ...

I. a XXIX-Q. ...

XXIX-R. Para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. ...

Artículo 76. ...

I. a XI. ...

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la Ley; y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 89. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la Ley;

XX. ...

Artículo 105. ...

I. ...



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

10

II. ...

...

a) a g) ...

h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...

...

...

III. ...

...

...

Artículo 108. ...

...

X



Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6º constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

12

manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...

...

...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

...

...

...



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

...

...

...

...

...

Artículo 116.- ...

...

I. a VII. ...

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos en materia de transparencia y acceso a la información que garantizarán el derecho a la información y la protección de datos personales en posesión de



14

LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia, **la cual se deberá ajustar a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.**

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. y B. ...

C. ...

BASE PRIMERA ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a n) ...

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión,



para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA. ...

D. a H. ...

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.



Tercero.- Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa de su petición.

Cuarto.- La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1o. de noviembre de 2017.
- b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.

f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre del 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

Quinto.- Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Sexto.- El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo.- En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.

Octavo.- En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Leyes respectivas en materia de transparencia el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental vigente.

Noveno.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto, se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.

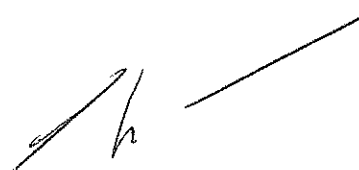



LXII LEGISLATURA
CÁMARA DE DIPUTADOS

18

Décimo.- Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en su derechos laborales y de seguridad social.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 22 de agosto de 2013.



Dip. Francisco Arroyo Vieyra
Presidente

Dip. Javier Orozco Gómez
Secretario

Se devuelve a la Cámara de Senadores
para los efectos de la fracción E del Artículo 72 Constitucional
México, D.F., a 22 de agosto de 2013



Mtro. Mauricio Farán Gebara
Secretario General de la Cámara de Diputados

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión



Año PRIMERO PRIMER Período ORDINARIO

Comisión ES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
16 OCTUBRE 2012.- LA MESA DIRECTIVA ACORDO RECTIFICAR EL TURNO:
PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCION Y PARTICIPACION
CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.
6 SEPTIEMBRE Año 20 12.

Num. 171

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA VARIOS
 ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
 MEXICANOS.

SEN. ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRIGUEZ, A NOMBRE DEL GRUPO
 PARLAMENTARIO DEL PRD.

23 AGOSTO 2013.- DEVUELTO POR LA COLEGISLADORA PARA LOS EFECTOS DE LA
 FRACCION E DEL ARTICULO 72 CONSTITUCIONAL.

*tns.

Fojas 1038



14 NOV 2013
20 NOV 2013

2
QUEDÓ DE PRIMERA LECTURA
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

HONORABLE ASAMBLEA:

LA MESA DIRECTIVA RECORDÓ A LA ASAMBLEA DE LA FE DE ERRATAS ENTREGADA POR LAS COMISIONES DICTAMINADORAS Y DE LA CUAL SE DIO CUENTA AL INICIO DE LA SESIÓN; INFORMÓ QUE LA CORRECCIÓN QUE CONTIENE NO AFECTA EL TEXTO DEL ARTICULADO DEL PROYECTO DE DECRETO. LA ASAMBLEA AUTORIZÓ INCORPORAR LAS MODIFICACIONES AL DICTAMEN ... (SIGUE ATRÁS)

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta de la Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de información pública y transparencia.

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir su dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a); 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190, 220 y 221 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

- I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del proceso legislativo, y de la recepción y turno para la elaboración del dictamen de la referida Minuta.
- II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO", se sintetiza la propuesta de la reforma en estudio.
- III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que sustentan la valoración de la propuesta de reforma constitucional, en materia de transparencia.
- IV. En el capítulo de "MODIFICACIONES A LA MINUTA", se expresan en un cuadro comparativo los cambios en la redacción que proponen estas Comisiones Dictaminadoras, con justificación en las consideraciones del presente Dictamen.
- V. En la sección relativa al "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se plantea el Decreto por el que se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6º; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S al

PARA PRESENTAR EL DICTAMEN, INTERVINIERON LOS SENADORES: ENRIQUE BURZOS GARCÍA POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, QUIEN PRESENTÓ ADEMÁS UNA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 105 DEL PROYECTO.

PABLO ESCUDERO MORALES, POR LA COMISIÓN DE ANTICORUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; CRISTINA DÍAZ SALAZAR POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN; PAUL GRACIA GUZMÁN POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGIS-

LATIVOS, PRIMERA. LA ASAMBLEA APROBÓ LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL SEN. ENRIQUE BURZOS AL ARTÍCULO 105. LOS POSICIONAMIENTOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FUERON PRESENTADOS POR LOS SENADORES MANUEL BARTLETT DÍAZ, PT, LUIS ARMANDO MELGAR BRANO, PVEM, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍ- GUEZ, PRD, FERNANDO TORRES GRACIANO, PAN, ARLEY GÓMEZ GONZÁLEZ, PRI. PARA LA DISCUSIÓN EN LO GENERAL, INTERVINIERON LOS SENADORES DAVID MONREAL ÁVILA, PT, MÓNICA ARIOLA GORDILLO, NA,

ZOE ROBLEDO ABUETO, PRD, MARÍA DEL PILAR CRTEGA MARTÍNEZ, PAN, JAVIER CORTAL SUJADO, PAN, ROBERTO AIL ZUAETH, PAN. LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE POR TRATARSE DE UN PROYECTO DEVUELTO CON MODIFI-

CACIONES POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ÚNICAMENTE PODRÍAN DISCUTIR LOS ARTÍCULOS QUE NO TIENEN AUN LA APROBACIÓN DE LAS DOS CÁMARAS Y QUE SON: 6, 105, 111, 116 Y 122 Y LOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO. SE INFORMÓ LA RESERVA AL ARTÍCULO 6 DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA. EL PROYECTO DE DECRETO FUE APROBADO EN LO GENERAL Y LOS ARTÍCULOS NO RESERVADOS. LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ

QUE EL SEN. MONREAL RETIRÓ SUS RESERVAS AL ARTÍCULO 6. DICHO ARTÍCULO FUE APROBADO EN LOS TÉRMINOS DEL DICTAMEN. SE DECLARÓ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL PRO-

YECTO DE DECRETO. SE DEVOLVIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN 2) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL. LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS COMISIONES DICTA- MINADORAS PROPONEN AL PLENO UN ACUERDO CON RELACIÓN A ESTA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL APAR-

TADO DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL, REMITIR A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS EL PROYECTO DE DECRETO SOLO CON LOS ARTÍCULOS APROBADOS POR AMBAS CÁMARAS, EL CUAL FUE ACP- TADO POR LA ASAMBLEA. SE REMITIÓ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adiciona un párrafo al inciso l) de la fracción I y el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ANTECEDENTES

1. El 6 de septiembre de 2012, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el segundo párrafo, reforma y adiciona la fracción IV y adiciona el numeral 8 del artículo 6º; adiciona el segundo párrafo del artículo 16; adiciona el segundo párrafo del artículo 29; adiciona las fracciones XXIX-R y XXIX-S y se recorre la subsecuente del artículo 73; adiciona una fracción XII y se recorre la subsecuente del artículo 76; reforma la fracción I del inciso g) y se recorren las subsecuentes del artículo 105; adiciona el primer párrafo del artículo 110; adiciona una fracción VIII del artículo 116; se adicionan los incisos p) y q) y se recorre el subsecuente de la Base Primera y se adiciona una Base Sexta del artículo 122, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

2. Con fecha 16 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó rectificar el turno de dicha iniciativa, para quedar a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
3. El 13 de septiembre de 2012, la Senadora Arely Gómez González, en representación de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

4. Con fecha 9 octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores acordó rectificar el turno de dicha iniciativa para quedar a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y dictamen correspondiente.
5. El 4 de octubre de 2012, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, a nombre propio y en representación de los Senadores Fernando Torres Graciano, Víctor Hermosillo y Celada y Martín Orozco Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 6, 16, 73, 76, 78, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

6. Con fecha 30 de octubre de 2012, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, comunicó la rectificación de turno de las iniciativas de reformas constitucionales en materia de transparencia e información pública descritas con anterioridad, a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.
7. El 19 de diciembre de 2012, en reunión de Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, se discutió y aprobó el proyecto de dictamen.
8. El 20 de diciembre de 2012, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 73, 76, 78, 89, 105, 108, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándola a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

9. El 21 de diciembre de 2012, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados el expediente relativo al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública.
10. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta antes mencionada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Transparencia y Anticorrupción, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen correspondiente.
11. Con fecha 23 de agosto de 2013, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 418 votos en pro, 25 en contra y 1 abstención, el dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública, y fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional.
12. El 27 de agosto de 2013 se recibió en el Senado de la República la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública. La Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que la Minuta se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a señalar puntualmente el objeto y la descripción de la Minuta.

CONTENIDO DEL PROYECTO DE DECRETO

El proyecto de Decreto tiene el propósito de reformar el apartado A del artículo 6º; el párrafo tercero del artículo 108; los párrafos primero y segundo del artículo 110; los párrafos primero y quinto del artículo 111; y adicionar las fracciones XXIX-R y XXIX-S al artículo 73; una fracción XII, recorriéndose la actual para ser la fracción XIII del artículo 76; una fracción VIII, recorriéndose la actual para ser la fracción IX del artículo 78; una fracción XX, recorriéndose la actual para ser la fracción XXI del artículo 89; una fracción IV al artículo 105; una fracción



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

VIII al artículo 116; el inciso ñ), recorriéndose los subsecuentes en su orden de la fracción V de la BASE PRIMERA, del apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Lo anterior, con el objeto de:

- 1) Definir a los sujetos obligados al principio de máxima publicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal;
- 2) Incorporar a los órganos de transparencia de manera expresa en la Constitución General de la República y para que ocurra lo propio en las Constituciones particulares de los Estados;
- 3) Fortalecer los órganos encargados de tutelar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales;
- 4) Crear un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, el cual coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica; y
- 5) Determinar la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley general del artículo 6° constitucional.

Establecido el objeto y la descripción del Decreto, las Comisiones Unidas realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Las Comisiones dictaminadoras estimamos de utilidad la elaboración de un cuadro comparativo entre la Minuta enviada por el Senado de la República el día 21 de diciembre de 2012 y la Minuta recibida de la Cámara de Diputados aprobada por el Pleno de la misma el día 23 de agosto de 2013, con objeto de identificar cuáles son los cambios realizados por la Cámara revisora.



8

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.</p> <p>A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos</p>	<p>Artículo 6o. ...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:</p> <p>I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.	específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
II. (...)	II. (...)
III. (...)	III. (...)
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.	IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.	V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
VI. y VII. (...)	VI. y VII. (...)
VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en los términos que establezca la ley. Contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de	VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, colegiado , con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>gestión, para proponer su proyecto de presupuesto y determinar su organización interna.</p> <p>Este organismo se regirá por la ley federal en materia de transparencia y acceso a la información, la cual deberá ajustarse a lo previsto en la ley general en materia de acceso a la información pública que emita el Congreso de la Unión.</p> <p>En su funcionamiento se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.</p> <p>El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo</p>	<p>información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.</p> <p>El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.</p> <p>En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.</p> <p>El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.</p> <p>El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.</p> <p>La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.</p> <p>El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, la Comisión</p>	<p>caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.</p> <p>El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.</p> <p>La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.</p> <p>Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.</p> <p>El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Permanente del Congreso de la Unión, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.</p> <p>En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.</p> <p>Los comisionados durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el tiempo que dure su nombramiento no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia,</p>	<p>a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos tercera partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley orgánica. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.</p> <p>En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.</p> <p>Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I,II, IV, V, y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución.</p> <p>En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.</p> <p>El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.</p> <p>El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.</p> <p>La ley establecerá las medidas de apremio que podrá</p>	<p>o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.</p> <p>En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.</p> <p>El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.</p> <p>El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.</p> <p>La ley establecerá las medidas de apremio que podrá</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p>	<p>imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.</p>
<p>Artículo 73. (...)</p> <p>I. a XXIX-Q. (...)</p> <p>XXIX-R. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.</p> <p>XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de</p>	<p>Artículo 73. (...)</p> <p>I. a XXIX-Q. (...)</p> <p>XXIX-R. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.</p> <p>XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal y determine las bases de</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. XXX. (...)	organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. XXX. (...)
Artículo 76. (...) I. a XI. (...) XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.	Artículo 76. (...) I. a XI. (...) XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
Artículo 78. (...) (...) I. a VII. (...) VIII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; IX. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por los legisladores.	NO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 89. (...) I. a XVIII. (...) XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley; XX. (...)	Artículo 89. (...) I. a XVIII. (...) XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley; XX. (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:</p> <p>I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre</p> <p>a) a k). (...)</p> <p>l) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el Ejecutivo federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;</p> <p>m) El organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información y el organismo autónomo denominado Banco de México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación;</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>II. De las acciones de inconstitucionalidad...</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en</p>	<p>Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:</p> <p>I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre</p> <p>a) a k). (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>II. ...</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en</p>

NO APROBADOS POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>III. (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>	<p>los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>III. (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 108. (...)</p> <p>(...)</p> <p>Los gobernadores de los estados, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito</p>	<p>Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.</p>	<p>Federal, el procurador general de la República, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.</p> <p>Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, en su caso, los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y</p>	<p>Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el jefe del gobierno del Distrito Federal, el procurador general de la República y el procurador general de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>	<p>miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>
<p>Artículo 116. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión y</p>	<p>Artículo 116. (...)</p> <p>(...)</p> <p>I. a VII. (...)</p> <p>VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia; la cual se deberá ajustar a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización del estado, y con la entidad especializada en materia de archivos, con objeto de fortalecer la rendición de cuentas.</p>	<p>NO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS</p>
<p>Artículo 122. (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>A. a C. (...)</p> <p>Base Primera (...)</p> <p>I. a IV. (...)</p> <p>V. (...)</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órganos u organismos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Distrito Federal. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de</p>	<p>Artículo 122. (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>A. a C. (...)</p> <p>Base Primera (...)</p> <p>I. a IV. (...)</p> <p>V. (...)</p> <p>a) a n) (...)</p> <p>ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>protección de datos personales, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización del Distrito Federal, y con la entidad especializada en materia de archivos, con objeto de fortalecer la rendición de cuentas;</p> <p>o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;</p> <p>p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia asamblea; y</p> <p>q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p> <p>Base Segunda a Base Quinta (...) D a H (...)</p>	<p>sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.</p> <p>NO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS</p> <p>o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;</p> <p>p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia asamblea; y</p> <p>q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p> <p>Base Segunda a Base Quinta (...) D a H (...)</p>
TRANSITORIOS	TRANSITORIOS
<p>Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p>Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal</p>	<p>Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p>Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CAMARA DE SENADORES	MINUTA CAMARA DE DIPUTADOS
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.	de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Tercero. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente decreto.	Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.
Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto.	Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.
Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el	Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Senado de la República o la Comisión Permanente especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p> <p>d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.</p> <p>e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.</p> <p>Quinto. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido</p>	<p>Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p> <p>d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.</p> <p>e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.</p> <p>Quinto. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
en el presente decreto.	en el presente decreto.
Sexto. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el honorable Congreso de la Unión.	Sexto. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el honorable Congreso de la Unión.
Séptimo. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.	Séptimo. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.
Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.	Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.
Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, creado en los términos del presente decreto.	Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, creado en los términos del presente decreto.
Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo	Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.	público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

SEGUNDA. Las Comisiones Unidas concordamos con el ánimo que motivó a la Cámara de Diputados a realizar cambios a la Minuta enviada por el Senado de la República, en virtud de que sin duda las aportaciones realizadas por la Cámara Revisora abonan a la consolidación de la transparencia y acceso a la información pública en posesión de los sujetos obligados y la rendición de cuentas, lo que se traduce en la firme convicción del Estado mexicano de abatir cualquier acto de corrupción y su voluntad de hacer transparente el quehacer de los poderes públicos.

No obstante lo anterior, consideramos necesario realizar modificaciones a algunos preceptos normativos del proyecto de Decreto, con el único propósito de dotar a los textos de claridad en el uso de lenguaje y así evitar eventuales interpretaciones equívocas.

TERCERA. Del cuadro comparativo realizado por estas Comisiones, se observa que se eliminó en la Minuta recibida por la H. Colegisladora, en el texto propuesto para la fracción VIII del artículo 6º y para el inciso ñ) de la fracción V de la Base Primera del apartado C del artículo 122 constitucionales, el vocablo "imparcial". En opinión de las Comisiones dictaminadoras, consideramos pertinente proponer, de nueva cuenta, que se incorpore ese calificativo en ambos preceptos, ya que ésta es una característica importante que debe tener el órgano garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

CUARTA. Se observa también, en el cuadro comparativo realizado, que se eliminó del proyecto de Decreto la duración en el encargo de los consejeros del órgano garante, lo que en opinión de estas Comisiones Unidas es necesario retomar en la propuesta de texto constitucional, en virtud de la importancia que merece el hecho de que la duración de los nombramientos se encuentre dispuesta en la Ley Fundamental y no dejarlo a la legislación



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

secundaria. Por ello, en el apartado de Modificaciones a la Minuta se plantean los cambios que se estiman necesarios.

QUINTA. Se propone también hacer una modificación al párrafo noveno de la fracción VIII del artículo 6o, en virtud de que se hace alusión a una ley orgánica, a la que no se ha hecho referencia en el texto del Decreto que se propone. En el proyecto se hace mención a “leyes generales reglamentarias”. Por tanto, para no crear confusión sobre la naturaleza jurídica de la ley que es menester emitir, se propone quitar el calificativo de “orgánica”, y dejar en el párrafo aludido solo el término genérico de “ley”.

De lo contrario, podría interpretarse que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá contener el procedimiento de nombramiento de los integrantes del órgano garante, lo cual no ha sido el espíritu ni el objetivo de los trabajos realizados con respecto a las iniciativas relacionadas en el capítulo de Antecedentes de este dictamen.

Las Comisiones Unidas estimamos de utilidad hacer referencia a lo que se entiende por diversos tipos de leyes, a saber: la ley federal, que regula actividades que son de competencia exclusiva de la federación; la ley general, que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno respecto de alguna materia concurrente por mandato constitucional; y la ley orgánica, que –como su nombre lo señala– establece la estructuración, funcionamiento y desarrollo de atribuciones de algún órgano público.

Por lo anterior, cabe señalar que el Congreso de la Unión, de conformidad con el proyecto de Decreto que se dictamina por estas Comisiones Unidas, tendrá la facultad –de conformidad con lo que establece el artículo 73 y el artículo segundo transitorio– de expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Por tanto, como se argumenta en la presente consideración, las Comisiones Unidas estimamos pertinente regresar a la redacción de la Minuta enviada por este Senado a la H. Colegisladora.

También proponemos cambios, al texto de la fracción VIII del artículo 116 contenido en la Minuta proveniente de la Cámara de Diputados, con el único propósito de dar claridad en el uso del lenguaje. Esta modificación que se propone se establece en el capítulo de modificaciones a la Minuta.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

SEXTA. Asimismo, en la minuta de la H. Colegisladora se eliminan los incisos l) y m) de la fracción I del artículo 105, que otorgaban al organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información la legitimidad para intervenir en controversias constitucionales que se llegaran a suscitar entre ese organismo y el Ejecutivo Federal o el Banco Central sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales o violación a sus principios de actuación. A este respecto, la H. Colegisladora señala en su minuta que, derivado de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se reconoció la facultad de los órganos autónomos constitucionales para promover controversias constitucionales, con lo que, a decir de la H. Colegisladora, se garantiza la inclusión de este tipo de organismos como entes legitimados para ejercitar este tipo de mecanismos de control constitucional.

Sin perjuicio de las consideraciones de la H. Colegisladora, estas Comisiones Unidas consideran que, para asegurar que el organismo garante en materia de transparencia y acceso a la información cuente con una amplia defensa del ámbito de competencia que la Constitución le otorgaría, así como para proveer a un mejor entorno para el ejercicio de sus atribuciones, se hace necesario que dicho órgano garante tenga a su disposición la facultad explícita de recurrir a este mecanismo de control constitucional en casos de violación a principios de actuación, como es el de legalidad, además de los supuestos de constitucionalidad de actos o disposiciones generales. Por otra parte, estas Comisiones Unidas coinciden en que el Constituyente Permanente está obligado a salvaguardar el equilibrio entre los distintos órganos del Estado, de tal forma que no se vulnere el correcto ejercicio de las funciones que a cada uno de ellos le corresponde en términos de la Constitución y de las leyes que de ella emanen. En tal virtud, en el espíritu de mantener un orden constitucional consistente, estas Comisiones Unidas consideran necesario insertar un párrafo en el inciso l) de la fracción I del artículo 105 para atender la situación antes planteada.

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE TEXTO
<p>Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:</p> <p>I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se</p>	<p>Artículo 105. ...</p> <p>I. ...</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

refieran a la materia electoral, se susciten entre:

a) a k) ...

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

a) a k) ...

l) ...

También conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por la violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución.

SÉPTIMA. En cuanto al régimen transitorio, las Comisiones dictaminadoras que suscriben consideran conveniente realizar una adecuación al artículo tercero, únicamente para cambiar el término "abroga" por el de "extingue", por ser este el vocablo adecuado. Al igual que las demás modificaciones referidas, se propone lo correspondiente en el Capítulo respectivo de este documento.

OCTAVA. Ahora bien, como se habrá observado en el estudio comparativo de las propuestas de adecuación hechas en la Minuta de la H. Cámara de Diputados, se plantean modificaciones relevantes al artículo tercero transitorio originalmente propuesto. De origen, este H Senado la República planteó que los comisionados que actualmente forman parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, continuaran en sus cargos hasta cumplir el mandato para el cual fueron designados, ya como integrantes del nuevo organismo garante con rango de autonomía constitucional. Sobre esta cuestión, la Cámara revisora plantea que la posibilidad de que los actuales comisionados formen parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, requiera un procedimiento particular de solicitud



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

del interesado y aprobación por las dos terceras partes de los senadores presentes, con una previsión de negativa ficta si en un plazo de 10 días contados a partir de la solicitud, el Senado no resuelve sobre la misma.

Conforme a la propuesta original hecha para el artículo tercero transitorio, el artículo cuarto transitorio se dedicó a desarrollar las consecuencias derivadas de la premisa inicial: la permanencia en sus cargos hasta la conclusión de su período de desempeño, de los comisionados en funciones; es decir, la designación de dos nuevos comisionados, al considerar la integración del nuevo organismo garante por siete miembros, en vez de los cinco que actualmente desempeñan el cargo de comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, y los períodos correspondientes a las designaciones de aquellos comisionados que culminan sus encargos el 9 de enero de 2014, el 13 de abril de 2019, el 17 de junio de 2016 y el 11 de septiembre de 2016, en este último caso dos integrantes del Instituto.

Al modificarse el texto del artículo tercero transitorio y contemplarse tres vertientes de factible determinación: a) la posibilidad de que los actuales comisionados continúen en sus cargos hasta la culminación del mandato que se les confirió de origen, con base en el nuevo procedimiento ya aludido; b) la posibilidad de que alguno, algunas, algunos o algunas de los actuales integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y conforme al procedimiento establecido, pasaran a formar parte del nuevo organismo garante hasta el término del nombramiento que originariamente recibieron; o c) la designación de la totalidad de los integrantes del nuevo organismo garante que se crea.

Esta circunstancia hace necesario adecuar el texto del artículo tercero transitorio, a fin de prever la renovación escalonada de los comisionados en las tres hipótesis planteadas: que ninguno de los actuales integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicitaran al Senado la factibilidad de continuar en sus funciones con motivo del nuevo organismo garante, o que el Senado no aprobara la solicitud; que alguno o algunos de los actuales comisionados del Instituto formularan solicitud al Senado en los términos del artículo tercero transitorio referido y la misma resultara aprobada por la mayoría de las dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión correspondiente, y mediante el procedimiento respectivo formarían parte del nuevo organismo garante, o que surgiera la hipótesis de realizar las designaciones de los integrantes del nuevo organismo garante con personas no vinculadas a un mandato vigente en el citado Instituto Federal



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

como comisionados. En todos estos supuestos, se busca asegurar las designaciones con el principio de la renovación escalonada de los integrantes del nuevo organismo garante.

Adicionalmente y también sobre la base de que con el texto propuesto para el artículo tercero transitorio no sería indubitable que los actuales comisionados continuaran como integrantes del nuevo organismo garante, es necesario establecer que hasta en tanto no se lleve a cabo el procedimiento de integración del citado nuevo organismo, continuarían en el desempeño de sus cargos los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, de tal suerte que no exista un vacío institucional en el cumplimiento de las funciones previstas en materia de transparencia y ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Como se ha referido, al modificarse el artículo tercero transitorio y no ocurrir una circunstancia consecuente con el artículo cuarto transitorio, la redacción de éste corresponde estricta y exclusivamente a la hipótesis original planteada por el Senado, es decir, que los actuales comisionados se mantendrían en sus encargos hasta el término del período para el que fueron designados. En ese sentido, estas Comisiones Unidas consideran que hace falta desarrollar las consecuencias del resultado de la determinación de los comisionados –solicitar o no formar parte del nuevo organismo garante– o del Senado –autorizar o no que los actuales comisionados puedan formar parte del nuevo organismo garante–.

La sistemática del artículo 72 constitucional para el tránsito en las Cámaras del Congreso de la Unión de las iniciativas y minutas con proyecto de Decreto, conduce a la conclusión de que si la Cámara revisora aprueba disposiciones en los términos remitidos por la Cámara de origen, en la eventualidad de que algunos preceptos no resulten aprobados en forma integral, sean rechazados o sean objeto de modificaciones, la Cámara de origen sólo podrá analizar, discutir y votar nuevamente los preceptos o disposiciones en los cuales no ha habido acuerdo con la Cámara revisora y, aún más, sólo en torno a lo desechado, reformado o adicionado.

Estas previsiones entrañan que si la Cámara de Diputados modificó el artículo tercero transitorio del Decreto que nos ocupa, pero aceptó en sus términos el artículo cuarto transitorio (salvo suprimir a la Comisión Permanente del proceso de designación de los integrantes del nuevo organismo), la Cámara de Senadores –en el conocimiento de lo que ha remitido la Cámara revisora– sólo tiene sustento constitucional para introducir



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

adecuaciones o modificaciones al artículo tercero transitorio, o para reponer, en su caso y en el artículo cuarto transitorio, a la Comisión Permanente en el proceso de designaciones.

A continuación se presentan los textos aprobados en las respectivas minutas de la H. Cámara de Diputados y del Senado de la República:

MINUTA CÁMARA DE SENADORES	MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS
<p>Tercero. Los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales seguirán en su cargo hasta concluir el mandato para el cual fueron nombrados y pasarán a formar parte del organismo garante que se crea con el presente decreto.</p>	<p>Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.</p>
<p>Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto.</p> <p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República <u>o la Comisión Permanente</u> especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p>	<p>Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.</p> <p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.	d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019 concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.
e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.	e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016 concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.
f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.	f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

De la lectura de la transcripción de los textos anteriores, puede desprenderse que con la hipótesis aprobada por la H. Cámara de Diputados, no existiría previsión en la Norma Suprema en torno al órgano encargado en el ámbito federal del derecho de acceso a la información pública, en tanto se llevan a cabo los procedimientos necesarios a la designación de los integrantes del nuevo organismo garante con autonomía constitucional y la instalación formal e inicios de funciones de dicho ente público.

También se colige que las únicas hipótesis previstas para la designación de los integrantes del nuevo organismo garante, son las correspondientes a la designación de dos nuevos comisionados y a la sustitución de los actuales comisionados en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Datos Personales, cuando lleguen a su término los nombramientos hechos a favor de cada uno de ellos.

Ante la disposición del párrafo E del artículo 72 constitucional y el hecho de que no surge la posibilidad de realizar adecuaciones al artículo cuarto transitorio, más allá del comentario hecho sobre la supresión de la Comisión Permanente en el procedimiento de designación de los comisionados, así y éste resulte incongruente con el texto del artículo tercero transitorio, se deben contemplar las hipótesis de:

- a) rechazar el texto del artículo tercero transitorio aprobado por la H. Cámara de Diputados e insistir en lo planteado originalmente por el Senado la República, lo cual volvería a hacer consistente con su texto la redacción del artículo cuarto transitorio, o



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- b) realizar en el artículo tercero transitorio las adecuaciones necesarias para cubrir el procedimiento de designación de las tres hipótesis que se han abierto con el texto propuesto por la Cámara revisora

En el ánimo de mantener el acuerdo entre las Cámaras del Congreso de la Unión en torno a la forma en la cual los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales, podría formar parte del nuevo organismo garante, es pertinente revisar el texto del artículo tercero transitorio para incluir las hipótesis que se abren con la redacción aprobada en la Cámara revisora, e incluir en esa adecuación la correlación funcional factible para el texto del artículo cuarto transitorio, que no podría ser alterado y que no se propondría modificar.

Como el artículo tercero transitorio fue modificado por la H. Cámara de Diputados, el Senado la República tiene sustento constitucional para hacerle adecuaciones:

- a) una primera ya planteada en la Consideración precedente -de técnica jurídica y estilo- es la de cambiar la voz "abroga" por la palabra "extingue", toda vez que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos no es una ley u ordenamiento jurídico y no quedaría abrogado, sino que es una persona jurídica de carácter público que se extinguiría; y
- b) otra tendiente a desarrollar las tres hipótesis que pueden desprenderse en torno a la eventual actuación de los actuales comisionados del Instituto Federal referido en el organismo que se crea, a que sólo algunas o algunos de ellos sean aprobados para formar parte del nuevo organismo, o a que éste se integre por personas que no formen parte del citado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

A continuación se presenta el cuadro comparativo de los artículos tercero y cuarto transitorios aprobados en la minuta de la H. Cámara de Diputados, y la propuesta de adecuación exclusivamente del artículo tercero transitorio, pero buscando que la nueva redacción resulte congruente con el texto del artículo cuarto transitorio.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE CÁMARA DE DIPUTADOS

Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se **abroga**, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.

PROPUESTA DICTAMEN SENADO

Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se **extingue**, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.

En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del artículo 6° constitucional materia del presente Decreto, será realizada más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:

I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

	<p>Decreto, hasta l</p> <p>II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.</p> <p>En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguientes:</p> <p>a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;</p> <p>b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.</p> <p>c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.</p> <p>d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha.</p> <p>III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte</p>
--	--

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguientes:

a) si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;

b) si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha;

c) si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha;

d) si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha.

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

<p>Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.</p> <p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p> <p>d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.</p> <p>e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan</p>	<p>especificará el período de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.</p> <p>b) Nombrará a dos comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y</p> <p>d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.</p> <p>Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.</p> <p>Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:</p> <p>a) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.</p> <p>b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.</p> <p>d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.</p> <p>e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.</p> <p>f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan</p>
---	---



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023

su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

En la parte dispositiva y de régimen transitorio de este documento se incorpora la redacción propuesta conforme a lo anterior para el artículo tercero transitorio del Decreto.

NOVENA. En cuanto a las demás modificaciones realizadas por la H. Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas las estimamos congruentes con el propósito de consolidar la transparencia y derecho de acceso a la información pública en nuestro país. Por ello, hacemos nuestras sus consideraciones y concordamos con los razonamientos expuestos en la Minuta por las Comisiones de la Cámara de Diputados con los que justifican razonadamente los cambios realizados a la Minuta enviada por el Senado de la República.

DÉCIMA. Ahora bien, resulta de primera importancia referir al proceso legislativo que dispone el artículo 72, inciso E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se transcribe a continuación:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

A. a D. ...

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

F. a J. ...

Del precepto constitucional transcrito, se colige que la presente discusión en esta Cámara de origen del proyecto de Decreto que nos ocupa, sólo ha de versar sobre los textos en los cuales la Cámara revisora ha adoptado una decisión que difiere de la propuesta que les fue remitida; a su vez, el precepto transcrito implica que de devolverse el proyecto de Decreto a la H. Cámara de Diputados con textos que refrendan el criterio de la mayoría calificada del Senado, en dicha Cámara revisora la nueva discusión y votación únicamente versará sobre las modificaciones hechas por la Cámara de Senadores, mismas que se encuentran debidamente argumentadas en las presentes consideraciones y que se realizaron con el único propósito de enriquecer el proyecto de Decreto que se dictamina.

UNDECIMA. En términos del proceso legislativo de la presente propuesta de reformas y adiciones a la Constitución General de la República, se plantea la adición de sendas fracciones XXIX-R y XXIX-S al artículo 73 de la Ley Fundamental.

En este sentido, cabe señalar que actualmente existen diversas minutas con proyecto de decreto que al plantear adiciones a las facultades legislativas del H. Congreso de la Unión, han contemplado la continuación del uso de las literales en la fracción XXIX del citado artículo 73 constitucional. Es el caso de la minuta relativa a diversas reformas y adiciones en materia de disciplina financiera de Estados y Municipios, en la que se propone adicionar una fracción XXIX-S en torno a las atribuciones para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en los tres órdenes de gobierno. También es el caso de la minuta de decreto de reformas y adiciones constitucionales en materia de pensión para adultos mayores de 65 años y de seguro de desempleo, en la que se propone adicionar el artículo 73 constitucional una fracción XXIX-R, a fin de otorgar facultades para legislar en torno al derecho de los adultos mayores de 65 años a una pensión.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Por otro lado, cabe señalar que en su oportunidad y dentro del proceso legislativo de introducción de reformas y adiciones a la Constitución General de la República a que se refiere el artículo 135 de la Ley Suprema, el 22 de agosto próximo pasado se remitió a las HH. Legislaturas de los Estados la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 constitucional para otorgar atribuciones legislativas al H. Congreso de la Unión en materia de registro público inmobiliario y catastros. Conforme a la información recabada por estas Comisiones Unidas ante la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, pudo establecerse que al día 29 de octubre del año en curso se cuenta ya con la comunicación de 17 Congresos Estatales (Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas) al proyecto de decreto en cuestión; en tal virtud, estaría próxima a realizarse la declaratoria de adición de una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con lo antes referido, estas Comisiones Unidas estimamos que sin demérito del señalamiento de adicionar entre las facultades del H. Congreso de la Unión, las de “expedir leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno” y de “expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos”, y que en términos del orden de dicho precepto se hayan planteado y aprobado en el presente proceso legislativo por este H. Senado de la República y por la H. Cámara de Diputados como fracciones XXIX-R y XXIX-S del artículo 73 constitucional, debe corresponder a las propias Cámaras del H. Congreso de la Unión o, en su caso, a la Comisión Permanente al efectuar la declaratoria de que ha sido adicionada o reformada la Constitución General de la República, la tarea de precisar las literales que deban corresponderles de la fracción XXIX de este precepto, conforme al tránsito y, en su caso, aprobación de otras minutas con proyecto de reformas constitucionales que propongan adiciones a las facultades legislativas del H. Congreso de la Unión en el seguimiento natural de dicha fracción.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

En suma, las modificaciones que estas Comisiones Unidas proponemos al proyecto de Decreto contenido en la Minuta proveniente de la H. Cámara de Diputados son ocho; cuatro de ellas son de redacción, estilo y congruencia con el resto del texto. En cuanto a las otras cuatro, una es para incluir nuevamente la duración del encargo de los comisionados del órgano garante y no dejarlo al criterio de la legislación secundaria; otra es con el propósito de establecer la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer y resolver en el procedimiento de controversia constitucional, sobre las resoluciones del organismo garante que dispongan el acceso a información en poder del Banco de México, y que a juicio de éste sean violatorias de los principios de actuación del organismo garante; una más para precisar la característica de la ley en la que se incluirá el procedimiento de nombramiento de los integrantes del organismo garante que se propone crear, y la restante para establecer precisiones en torno a los períodos de duración de los miembros de dicho órgano, distinguiéndose las hipótesis que se desprenden del texto propuesto por la H. Cámara de Diputados para el artículo tercero transitorio.

Con base en las consideraciones de las Comisiones Unidas, elaboramos las siguientes:

MODIFICACIONES A LA MINUTA

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
Artículo 6o. A. (...)	Artículo 6o. A. (...)
VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el	VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial , colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
<p>ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.</p>	<p>sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.</p>
<p>El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que mita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.</p>	<p>...</p>
<p>En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.</p>	<p>...</p>
<p>El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.</p>	<p>...</p>
<p>El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal podrá conocer de los</p>	<p>...</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PROPUESTA DE LAS COMISIONES
DICTAMINADORAS

recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. **El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.**

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley **orgánica**. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados del organismo autónomo, especializado e imparcial en el ámbito federal deberán cumplir con los requisitos previstos en

...

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

...

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
<p>las fracciones I,II, IV, V, y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.</p> <p>En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.</p> <p>El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.</p> <p>El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.</p> <p>La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.</p> <p>Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.</p> <p>El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el</p>	<p>Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano.	
<p>Artículo 105. ...</p> <p>I. (...)</p> <p>a) a l)...</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>II. (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>	<p>Artículo 105. ...</p> <p>I. (...)</p> <p>a) a l) (...)</p> <p>También conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p> <p>II. (...)</p> <p>(...)</p> <p>a) a g) (...)</p> <p>h) (...)</p> <p>(...)</p> <p>(...)</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
(...)	(...)
III. (...)	III. (...)
Artículo 116. (...)	Artículo 116. (...)
(...)	(...)
I. a VII. (...)	I. a VII. (...)
VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general en la materia; la cual se deberá ajustar a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.	VIII. Las Constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
Artículo 122. (...)	Artículo 122. (...)
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
(...)	(...)
A a C (...)	A a C (...)
Base Primera (...)	Base Primera (...)
I a IV. (...)	I a IV. (...)
V. (...)	V. (...)
a) a n) (...)	a) a n) (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
<p>ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;</p> <p>o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;</p> <p>p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y</p> <p>q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p> <p>Base Segunda a Base Quinta (...)</p> <p>D a H (...)</p>	<p>ñ) Legislar en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;</p> <p>o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;</p> <p>p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea, y</p> <p>q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.</p> <p>Base Segunda a Base Quinta (...)</p> <p>D a H (...)</p>
TRANSITORIOS	TRANSITORIOS
<p>Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se abroga, siempre y cuando</p>	<p>Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
<p>su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.</p>	<p>cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.</p> <p>En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.</p> <p>La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del artículo 6° constitucional materia del presente Decreto, será realizada más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:</p> <p>I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del periodo para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.</p> <p>II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
	<p>comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.</p> <p>En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguientes:</p> <p>a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;</p> <p>b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.</p> <p>c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.</p> <p>d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha.</p> <p>III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República especificará el periodo de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente:</p>



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

MINUTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS	PROPUESTA DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS
	<p>a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.</p> <p>b) Nombrará a dos comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.</p> <p>c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y</p> <p>d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.</p>

En términos de lo expuesto y sobre la base de la función constitucional que en el caso específico corresponde a estas Comisiones Unidas y en su oportunidad al Pleno Senatorial, se propone la aprobación del proyecto de dictamen que se ha puesto a la consideración.

TEXTO NORMATIVO Y REGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, conforme a las facultades que le confieren los artículos 85, párrafo 2, inciso a); 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190, 220 y 221 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública:

ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6º.; se adicionan las fracciones XXIX-R y XXIX-S al artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se adicionan un párrafo al inciso l) de la fracción I y el inciso h) a la fracción II del artículo



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

(...)

(...)

(...)

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. (...)

III. (...)

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. (...)

VII. (...)

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V, y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

B. (...)

Artículo 73. (...)

I. a XXIX-Q. (...)

XXIX-R. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-S. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Artículo 76. (...)

I. a XI. (...)

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 89. (...)

I. a XVIII. (...)

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX. (...)

Artículo 105. ...

I. (...)

a) a I) ...

También conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.

(...)

(...)

II. (...)

(...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

a) a g) (...)

h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

(...)

(...)

(...)

III. (...)

(...)

(...)

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

(...)

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.

(...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

(...)

(...)

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 116. (...)

(...)

I. a VII. (...)

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Artículo 122. (...)



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A. y B. (...)

C. (...)

BASE PRIMERA (...)

I. a IV. (...)

V. (...)

a) a n) (...)

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA (...)

D a H (...)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

Tercero. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.

En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del artículo 6° constitucional materia del presente Decreto, será realizada más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:



62

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.

II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguientes:

a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;

b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.

c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.

d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha.

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente:



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

- a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.
- b) Nombrará a dos comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.
- c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y
- d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.

Cuarto. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.
- b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Sexto. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

Séptimo. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.

Octavo. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.

Noveno. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.

Décimo. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

Salas de Reunión números 5 y 6 del Hemiciclo de la H. Cámara de Senadores a los catorce días del mes de noviembre de dos mil trece.



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Sen. Enrique Burgos García
Presidente

Sen. José María Martínez Martínez
Secretario

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Secretario

Sen. Daniel Amador Gaxiola
Integrante

Sen. Arely Gómez González
Integrante

Sen. Diva Hadamira Gastélum
Bajo Integrante

Sen. Ricardo Barroso Agramont
Integrante

Sen. David Penchyna Grub
Integrante

Sen. Raúl Gracia Guzmán
Integrante

Sen. Sonia Mendoza Díaz
Integrante

Sen. Fernando Torres Graciano
Integrante

Sen. Benjamín Robles Montoya
Integrante

Sen. Adán Augusto López
Hernández
Integrante


Sen. Pablo Escudero Morales
Integrante

Sen. Manuel Bartlett Díaz
Integrante



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

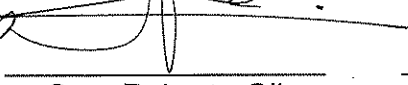
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Sen. Pablo Escudero Morales
Presidente

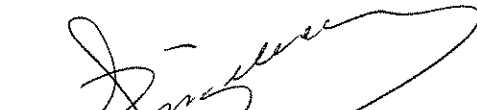

Sen. María Marcela Torres Peimbert
Secretario


Sen. Daniel Amador Gaxiola
Integrante


Sen. María del Rocío Pineda
Gochi
Integrante


Sen. Roberto Gil
Zuarth
Integrante



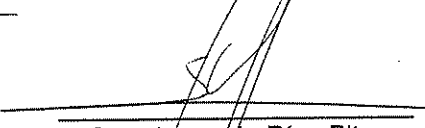
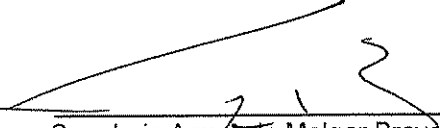
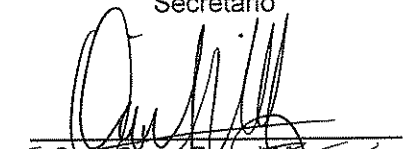
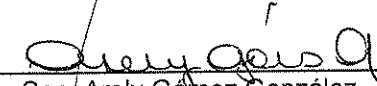
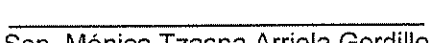
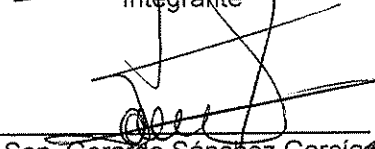

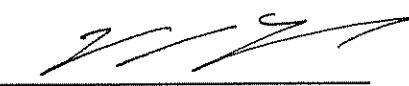
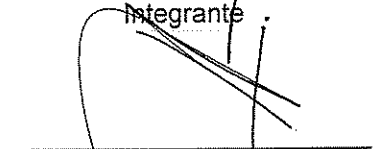
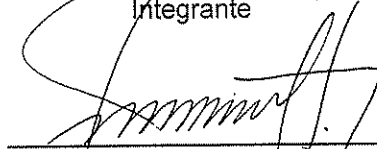
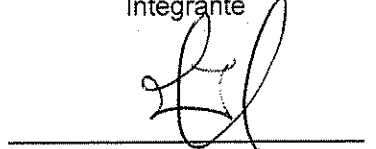
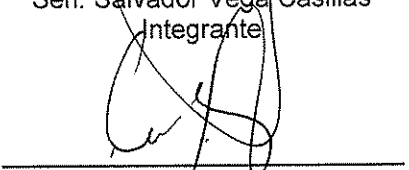
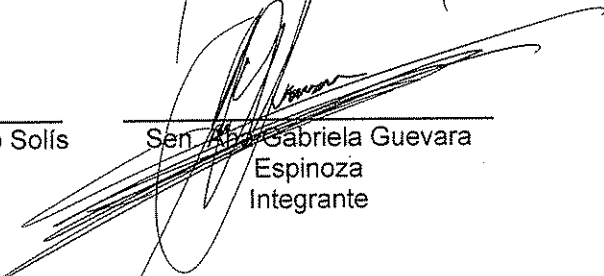

Sen. Laura Angélica Rojas
Hernández
Integrante


Sen. Angélica de la
Peña Gómez
Integrante



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

		
Sen. María Cristina Díaz Salazar Presidencia		
		
Sen. Héctor Larios Córdova Secretario	Sen. Armando Ríos Piter Secretario	Sen. Luis Armando Melgar Bravo Secretario
		
Sen. Omar Fayad Meneses Integrante	Sen. Arely Gómez González Integrante	Sen. Mónica Tzasna Arriola Gordillo Integrante
		
Sen. Gerardo Sánchez García Integrante	Sen. Graciela Ortiz González Integrante	Sen. Fernando Yunes Márquez Integrante
		
Sen. Salvador Vega Casillas Integrante	Sen. Javier Corral Jurado Integrante	Sen. Raúl Morón Orozco Integrante
		
Sen. Víctor Manuel Camacho Solís Integrante	Sen. Gabriela Guevara Espinoza Integrante	



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE GOBERNACIÓN, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA

Sen. Raúl Gracia Guzmán

Presidente

Sen. Miguel Ángel Chico Herrera

Secretario

Sen. Zoé Robledo Aburto

Secretario

Sen. Sonia Mendoza Díaz

Integrante

Sen. Enrique Burgos García


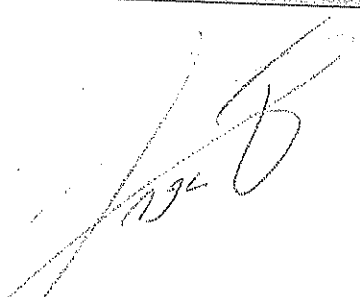

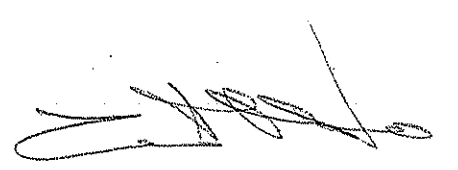

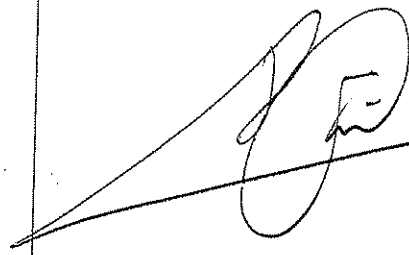
Integrante



REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.


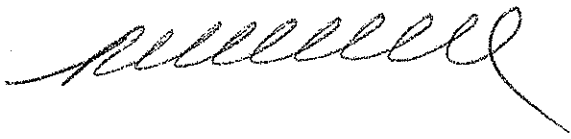

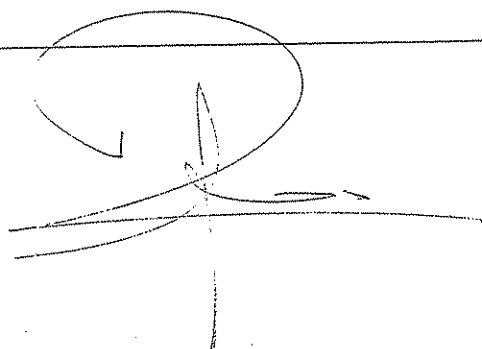


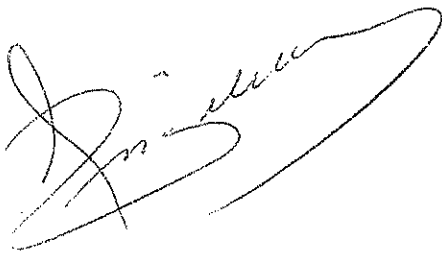
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Nombre	Firma
 Sen. Pablo Escudero Morales Presidente	
Secretaria	
 Sen. Marcela Torres Peimbert Secretaria	
 Sen. Daniel Amador Gaxiola Integrante	



REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


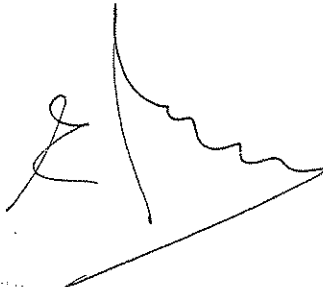

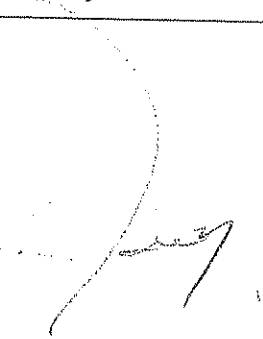


14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
Nombre	Firma
 Sen. Ma. del Rocio Pineda Gochi Integrante	
 Sen. Roberto Gil Zuarth Integrante	
 Sen. Laura Angélica Rojas Hernández Integrante	
 Sen. Angélica de la Peña Gómez Integrante	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.
Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo




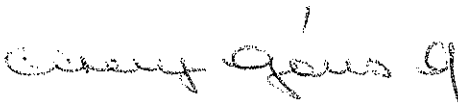

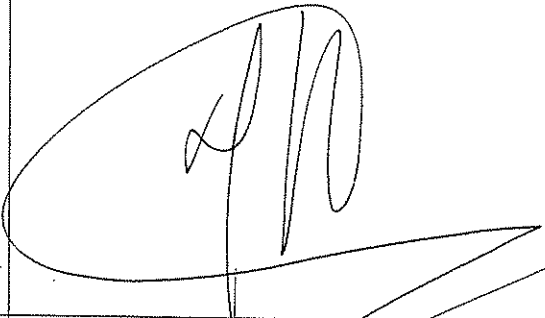


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	
Nombre	Firma
 Sen. Enrique Burgos García. Presidente	
 Sen. José María Martínez Martínez Secretario	
 Sen. Alejandro Encinas Rodríguez Secretario	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo


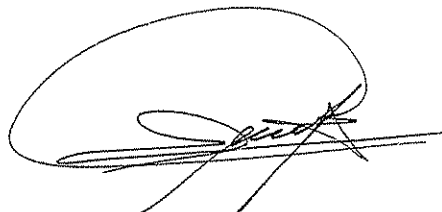

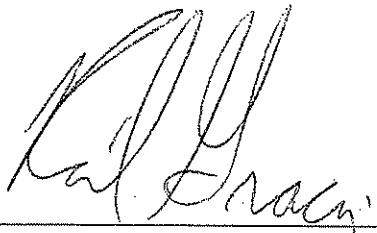

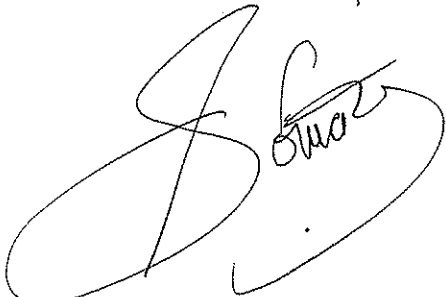


COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	
Nombre	Firma
 Sen. Daniel Amador Gaxiola Integrante	
 Sen. Arely Gómez González Integrante	
 Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo Integrante	
 Sen. Ricardo Barroso Agramont Integrante	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo


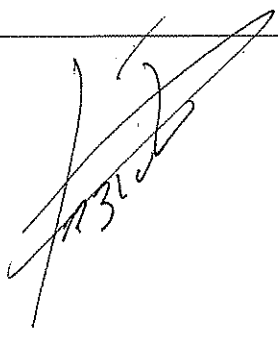

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	
Nombre	Firma
 Sen. David Penchyna Grub. Integrante	
 Sen. Raúl García Guzmán Integrante	
 Sen. Sonia Mendoza Díaz Integrante	
 Sen. Fernando Torres Graciano. Integrante	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Homicidio




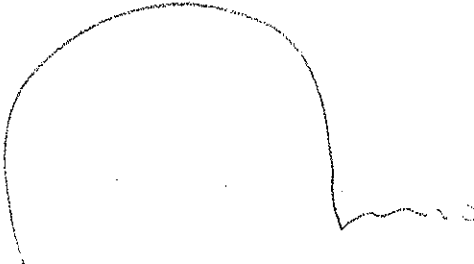

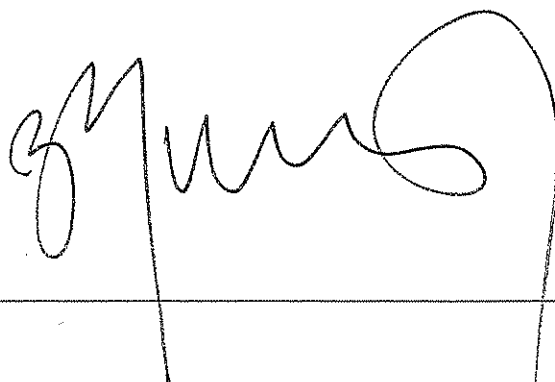
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES	
Nombre	Firma
 Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya Integrante	
 Sen. Adán Augusto López Hernández. Integrante	
 Sen. Pablo Escudero Morales INTEGRANTE	
 Sen. Manuel Bartlett Díaz INTEGRANTE	



REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


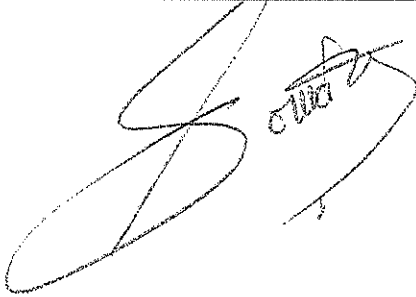

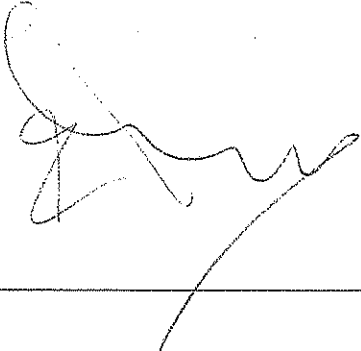
14 de noviembre de 2013 // 10 horas.
Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA	
Nombre	Firma
 Sen. Raúl Gracia Guzmán Presidente	
 Sen. Miguel Angel Chico Herrera Secretario	
 Sen. Zoé Robledo Aburto Secretario	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.
Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA	
Nombre	Firma
 Sen. Sonia Mendoza Díaz Integrante	
 Sen. Enrique Burgos García Integrante	



77


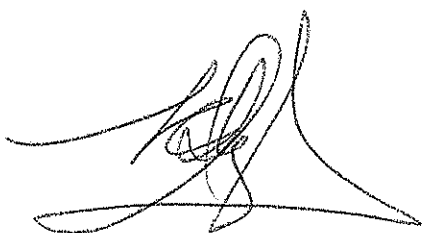

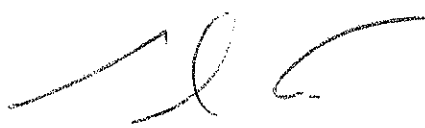

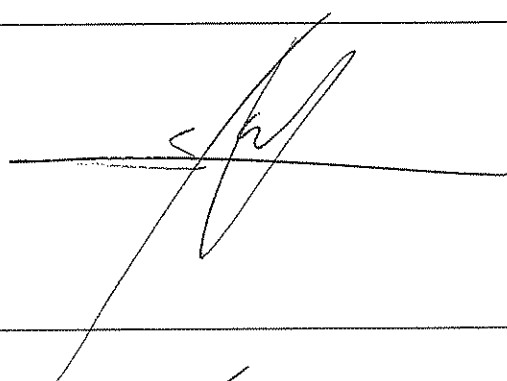


REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN


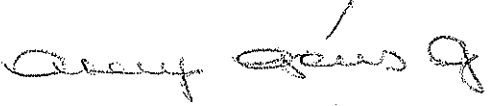

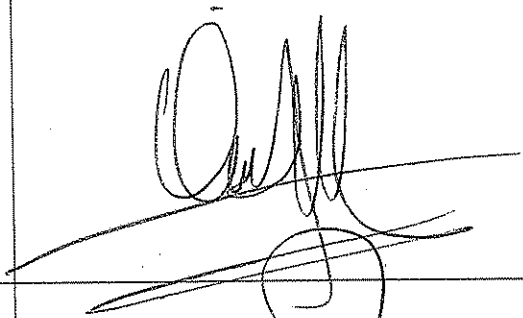

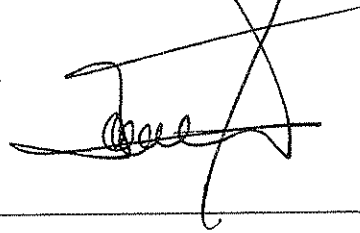

Nombre	Firma
 Sen. Cristina Díaz Salazar Presidenta	
 Sen. Héctor Larios Córdova Secretario	
 Sen. Armando Rios Piter Secretario	
 Sen. Luis Armando Melgar Bravo Secretario	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

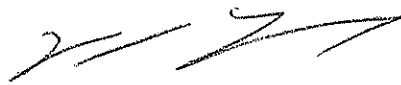

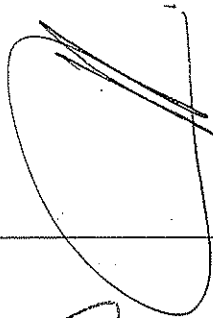

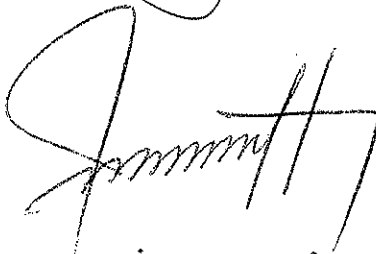

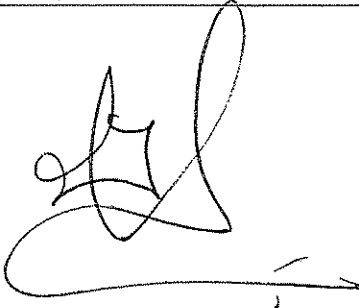
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN	
Nombre	Firma
 Sen. Arely Gómez González Integrante	
 Sen. Omar Fayad Meneses Integrante	
 Sen. Gerardo Sánchez García Integrante	
 Sen. Graciela Ortiz González Integrante	

REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES;
ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN	
Nombre	Firma
 Sen. Fernando Yunes Márquez. Integrante	
 Sen. Salvador Vega Casillas Integrante	
 Sen. Javier Corral Jurado Integrante	
 Sen. Raúl Morón Orozco Integrante	




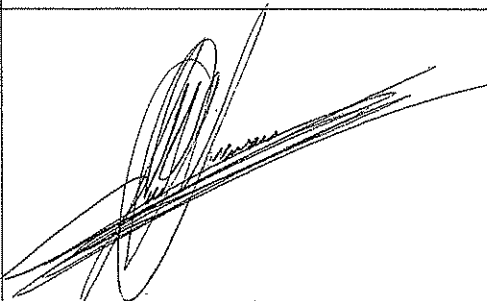



REGISTRO DE ASISTENCIA

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; GOBERNACIÓN; Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

14 de noviembre de 2013 // 10 horas.

Sala 5 y 6. Planta Baja. Hemiciclo

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN	
Nombre	Firma
 Sen. Manuel Camacho Solís Integrante	
 Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza Integrante	
 Sen. Mónica Arreola Gordillo Integrante	



20 NOV 2013 se ACEPTÓ POR LA ASAMBLEA

México, Distrito Federal, a 19 de noviembre de 2013.

Sen. Raúl Cervantes Andrade,
Presidente de la Mesa Directiva
del H. Senado de la República,
Presente.

Distinguido señor Presidente de la Mesa Directiva:

Con fecha 14 de los corrientes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobamos por unanimidad el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto remitida por la H. Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el apartado E del artículo 72 constitucional, en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia.

Ese documento fue remitido a esa Mesa Directiva en esa misma fecha, habiéndose solicitado la dispensa de publicación en la Gaceta Parlamentaria y su inclusión en el orden del día del propio 14 del mes en curso, para los efectos de la primera lectura a que se refieren las disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República.

En el texto de las disposiciones que se propone reformar, se encuentra la adición de un segundo párrafo al inciso I) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que con relación a las controversias constitucionales se señaló lo siguiente en torno a la competencia de la Suprema Corte de Justicia la Nación para resolver las que se interpongan entre:

Texto vigente:

"Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad sus actos o disposiciones generales."

Adición propuesta:

"También conocerá de las controversias a que se refiere el presente inciso sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales o por violación a los principios de actuación del organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución."



En nombre de las Comisiones Unidas antes mencionadas, quienes suscribimos hemos estimado pertinente realizar una modificación al anterior texto propuesto, a fin de evitar una repetición innecesaria del texto vigente del inciso l) de la fracción I del artículo 105 constitucional y prever expresamente como organismo constitucional autónomo con plena legitimación activa para interponer una controversia constitucional, al nuevo organismo garante que se crea mediante la propuesta de reformas al artículo 6° constitucional. Lo anterior, sin demérito de colocarlo en la misma situación que todos los organismos constitucionales autónomos en cuanto a la legitimación pasiva en materia de controversias constitucionales.

En tal virtud, se propone el siguiente texto de reforma al inciso l) de la fracción I del precepto en cuestión:

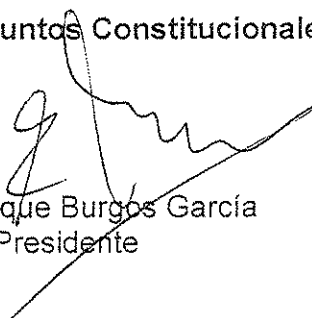
“l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución.”

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 91 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 87 párrafo 4, 193 párrafo 4 y 194 párrafo 1 del Reglamento Interior del Senado la República, solicitamos a Usted que la presente modificación se incorpore al dictamen presentado en su oportunidad, a fin de que la deliberación y votación del mismo se realice con relación al texto ahora planteado.

Sin otro particular, renovamos a Usted las seguridades de nuestra consideración más distinguida.

Muy atentamente,

Comisión de Puntos Constitucionales.

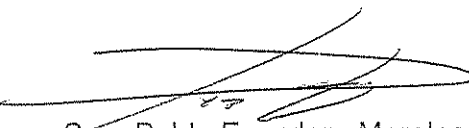

Sen. Enrique Burgos García
Presidente

Sen. José María Martínez Martínez
Secretario

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez
Secretario



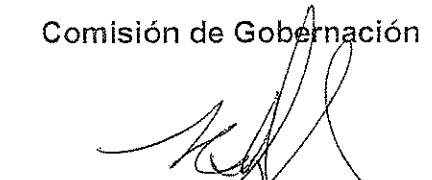
Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.


Sen. Pablo Escudero Morales
Presidente

Sen. Arely Gómez González
Secretario

Sen. Marcela Torres Peimbert
Secretario

Comisión de Gobernación



Sen. Cristina Díaz Salazar
Presidenta

Sen. Héctor Larios Córdova
Secretario

Sen. Armando Rios Piter
Secretario

Sen. Luis Armando
Melgar Bravo
Secretario

Comisión de Estudios Legislativos, Primera


Sen. Raúl Gracia Guzmán
Presidente

Sen. Miguel Angel Chico Herrera
Secretario

Sen. Zoé Robledo Rincón
Secretario



5

84

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P2A.-4701

México, D. F., a 20 de noviembre de 2013.

CC. SECRETARIOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E S

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente que contiene **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.**



Atentamente

SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO
Vicepresidenta

SECRETARIA DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS

2013 NOV 20 12 24



PODER LEGISLATIVO
FEDERAL
H. CÁMARA DE DIPUTADOS

013801



PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV y V al apartado A, y se adiciona una fracción VIII al artículo 6º.; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se adiciona una fracción XII al artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se reforma el inciso l) de la fracción I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

...

...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen





las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. a III. ...

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. a VII. ...

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.



El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.



En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de los estados y el Distrito Federal que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.



Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El Consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia.



El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V, y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.



El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley.

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la



presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones.

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones.

El organismo garante coordinará sus acciones con la entidad de fiscalización superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de los estados y el Distrito Federal, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano.

B. ...

Artículo 73. ...

I. a XXIX-R. ...

XXIX-S. Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

XXIX-T. Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, que determine las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

XXX. ...

Artículo 76. ...





I. a XI. ...

XII. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y

XIII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 89. ...

I. a XVIII. ...

XIX. Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en esta Constitución y en la ley;

XX ...

Artículo 105. ...

I. ...

a) a k) ...

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución.





...

...

II. ...

...

a) a g)...

h) El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en los estados de la república, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y el órgano garante del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

...

...

...

III. ...

...

...

Artículo 108. ...

...

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los





miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

...

Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

...





...

...

...

Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los comisionados del organismo garante establecido en el artículo 6o. constitucional por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculcado.

...

...

...

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comuniquen a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.





...

...

...

...

...

Artículo 116. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A. y B. ...



1



C. ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) a n) ...

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA A BASE QUINTA ...

D. a H. ...





TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición.

En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución, continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del artículo 6o. constitucional materia del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:





I. En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.

II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos.

En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los periodos de desempeño siguientes:

- a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018;
- b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha.
- c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha.
- d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de





una o de ambas comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el o los mismos se harán hasta esa fecha.

III. En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado, tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018.
- b) Nombrará a dos comisionados cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020.
- c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y
- d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023.

CUARTO. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el artículo 6º de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este Decreto.

Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en consideración lo siguiente:

- a) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017.





- b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020.
- c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2018.
- d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su mandato el 31 de marzo de 2026.
- e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2021.
- f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2023.

QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.

SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución podrá ejercer las facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión.

SÉPTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes.

OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de transparencia, el organismo garante que establece el artículo 60. de esta Constitución ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente.





NOVENO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, creado en los términos del presente Decreto.

DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.- México, D.F., a 20 de noviembre de 2013.



SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO
Vicepresidenta

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA
Secretaria

Se devuelve a la Honorable Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional.- México, D. F., a 20 de noviembre de 2013.

DR. ARTURO GARITA
Secretario General de Servicios Parlamentarios



LA QUE SUSCRIBE, SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 220.4 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, HACE CONSTAR QUE ESTE ES EL EXPEDIENTE ORIGINAL DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN E) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL SENADO PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL.



MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
Secretaria



*La Presidencia informa que
se ha recibido de la Cámara de
Senadores, fe de erratas, en
Noviembre 27 del 2013, vuelta*

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-1P2A.-5027.

México, D. F., a 26 de noviembre de 2013.

**CC. SECRETARIOS DE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS
P R E S E N T E S**

Hago de su conocimiento que en la sesión de este día el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en votación nominal una fe de erratas al párrafo décimo tercero de la fracción VIII del apartado A del artículo 6° del PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Para los efectos correspondientes se anexa el texto de dicha fe de erratas y asimismo la comunicación suscrita por el Senador Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara.

Atentamente



SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO
Vicepresidenta



*La Presidencia informa que
se ha recibido de la Cámara de
Noviembre 27 del 2013*

FE DE ERRATAS

AL PÁRRAFO DÉCIMO TERCERO DE LA FRACCIÓN VIII DEL APARTADO A
DEL ARTÍCULO 6° DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE TRANSPARENCIA.

Dice	Debe decir
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.	El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.

SALÓN DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES.-
México, D.F., a 26 de noviembre de 2013.



SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO
Vicepresidenta

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA
Secretaria

Se remite a la Cámara de Diputados.- México,
D. F., a 26 de noviembre de 2013.

DR. ARTURO GARITA

Secretario General de Servicios Parlamentarios



26 NOV 2013

SE APROBO EN VOTACION NOMINAL

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 2013

Senador Raúl Cervantes Andrade
Presidente de la Mesa Directiva del
Senado de la República
Presente

B

Con fecha 14 de noviembre del presente año, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, aprobamos por unanimidad el dictamen sobre la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de acceso a la información pública y transparencia, mismo que fue discutido y aprobado por el Pleno del Senado de la República en la sesión ordinaria del día 20 de noviembre de 2013.

Sin embargo, en el texto correspondiente al **párrafo décimo tercero de la fracción VIII del Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, subsistió un error de técnica legislativa resultado de las modificaciones realizadas por las propias comisiones dictaminadoras.

Para efecto de subsanar debidamente el texto constitucional, le solicito que sea sometida al Pleno, para su discusión y aprobación, la presente Fe de Erratas, en los siguientes términos:

Dice:

*El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, **con la misma votación calificada**. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.*



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

Debe decir:

El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.

Atentamente

Sen. Enrique Burgos García
Presidente